Indice 0000297

CORTE I.D.H.
05 MAY 2003
RECIBIDO

I. Representación del Estado mexicano ante la Honorable Corte Interamericana en el caso 12.228. 1

II. Objeciones y aclaraciones preliminares del Gobierno de México a la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al documento de los peticionarios. 5

a) Objeciones y precisiones sobre la demanda de la CIDH. 6

b) Objeciones y precisiones sobre el documentos presentados por los peticionarios. 8

III. Cronología de hechos sucedidos desde el 29 de mayo de 1992 en el caso 12.228 10

Hechos acaecidos a partir del 29 de mayo de 1992. 10

Diligencias de investigación del 30 de mayo de 1992 17

Diligencias de investigación del día 31 de mayo de 1992. 25

Diligencias de investigación y puesta a disposición del Juez Penal el 1 de junio de 1992. 26

Ejercicio de la acción penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd. 28

Primera etapa de la instrucción en el proceso penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd. 30

La primera instancia del proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd. 33

La tramitación y decisión de la segunda instancia del proceso seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd. 38

El procedimiento administrativo tramitado ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 45

El inicio de la investigación por tortura y otros delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 49

La demanda de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia en el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd. 52

La queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 55

La decisión de las comisiones de derechos humanos acerca de la inexistencia de tortura y de violaciones a los derechos humanos de Alfonso Martín del Campo Dodd. 57

La interposición, trámite y decisión del reconocimiento de inocencia planteado por la defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd. 61

La notificación tardía al Gobierno Mexicano de la queja ante la CIDH. 66

La interposición, trámite y decisión del amparo interpuesto contra la determinación de no ejercicio de la acción penal en la investigación por tortura y otros delitos. 66

El desistimiento de los peticionarios al amparo interpuesto el 30 de junio de 2000. 67

La impugnación extemporánea de la decisión unánime que declaró infundado el incidente de reconocimiento de inocencia del inculpado. 68

IV. Excepciones preliminares (motivos manifiestos de incompetencia y de inadmisibilidad). 71

Primera excepción. Falta de competencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de los hechos y actos anteriores al 16 de diciembre de 1998 en el caso 12.228. 71

Segunda excepción: La inobservancia de la CIDH a las reglas básicas de tramitación de peticiones individuales previstas en la Convención Americana y en los Reglamentos aplicables; la falta de objetividad y neutralidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la tramitación, admisibilidad, decisión de fondo y presentación de la petición ante la honorable Corte; la afectación por parte de la CIDH al equilibrio procesal que derivó en la situación de indefensión que afectó al Estado mexicano durante la tramitación de la queja. 75

Audiencia de admisibilidad celebrada el 11 de octubre de 2000 ante la CIDH, sobre el caso 12.228. 88

Consideraciones respecto del Informe de fondo 63/03 de 22 de octubre de 2002. 123

V. La inexistencia de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la compatibilidad de la actuación de las autoridades nacionales con los estándares internacionales de respeto y protección de los derechos humanos en el caso 12.228. 128

a) La detención de Alfonso Martín del Campo Dodd se llevó a cabo dentro del marco constitucional y legal de actuación de una autoridad competente, respetando y cumpliendo con los derechos humanos previstos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 128

b) No existió violación alguna a los artículos 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni a los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el caso 12.228. 152

1) Hechos y actuaciones oficiales comprendidas entre las 6:40 y las 13:30 horas del día 30 de mayo de 1992. 160

2) Hechos y actuaciones oficiales comprendidos entre las 13:30 horas y la declaración ministerial de Alfonso Martín del Campo Dodd el día sábado 30 de mayo de 1992. 162

3) Hechos y actuaciones oficiales comprendidos entre las 19:30 horas del día 30 de mayo de 1992 y el 1º de junio de 1992. 163

4) Pruebas fehacientes de la inexistencia de tortura en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd. 165

A. La determinación de inexistencia de violaciones a los derechos humanos por parte de los órganos no jurisdiccionales de protección de tales derechos. 165

B. La confirmación judicial incólume del no ejercicio de la acción penal sobre la supuesta tortura y otros delitos supuestamente cometidos en agravio de Alfonso Martín del Campo Dodd. 167

C. La falta oportuna de denuncia ante los órganos de investigación del delito. 170

D. La comprobación y calificación jurídica de los hechos. 171

E. Las alegaciones de confesión coaccionada y el proceso penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd. 172

c) No existió violación alguna a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en el caso 12.228. 187

VI. Argumentos del Gobierno de México con relación a las pretensiones de reparación. 208

1. Por lo que se refiere a la inclusión de personas distintas a Alfonso Martín del Campo Dodd. 210

2. La calidad de presunta víctima de Alfonso Martín del Campo Dodd y los parámetros sobre los cuáles, en su caso, debe emanar la reparación. 214

VII. Objeciones del Gobierno de México sobre las pruebas ofrecidas por la Comisión y por los peticionarios. 216

VIII. Conclusión. 221

IX. Puntos petitorios. 222

X. Relación de anexos y pruebas ofrecidas por el Gobierno Mexicano. 223

0000300

Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Contestación de los Estados Unidos Mexicanos a la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al escrito de los peticionarios, ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.228 Alfonso Martín del Campo Dodd.

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos será representado en este caso por las siguientes personas:

Agente:

Lic. Juan José Gómez Camacho,
Director General de Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Agentes alternos:

Emb. Juan Manuel Gómez Robledo,
Consultor Jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

Dra. María del Refugio González,
Coodinadora General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asesores:

Emb. Ricardo García Cervantes,
Embajador de México en Costa Rica.

Mtro. Jorge Ulises Carmona Tinoco,
Asesor jurídico externo de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

0000301

Lic. José Ignacio Martín del Campo Covarrubias,
Director de Casos Individuales ante Organismos
Internacionales en Materia de Derechos Humanos,
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Javier Raúl Ayala Casillas,
Magistrado de la Séptima Sala Penal,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Lic. Juan Carlos Solís Martínez,
Director General de Derechos Humanos,
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Lic. Manuel E. Ventura Robles,
Secretario de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos,

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos tiene el honor de dirigirse a usted con el objeto de dar contestación a la demanda presentada el 30 de enero de 2003, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.228 (Alfonso Martín del Campo Dodd).

La demanda de la CIDH fue notificada al Gobierno mexicano mediante nota CDH-12.228/001 del 17 de febrero de 2003. Los anexos a dicha demanda, fueron recibidos por el Gobierno mexicano el día 21 de febrero del mismo año.

Los peticionarios en el caso 12.228 presentaron por separado ante la honorable Corte sus respectivos argumentos y pretensiones el día 31 de marzo de 2003. Dicho documento fue transmitido al Gobierno de México el 4 de abril del mismo año.

La Honorable Corte fijó al Gobierno de México como término para la presentación de la contestación al demanda de la CIDH y al escrito de los peticionarios el día 5 de mayo de 2003, por lo que la presente contestación se encuentra dentro del término concedido por la Honorable Corte Interamericana, con fundamento en el artículo 37.1 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en vigor (en adelante el "Reglamento").

De conformidad con lo señalado por la Honorable Corte, la tramitación del presente asunto se regirá por las disposiciones del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en vigor a partir del 1° de junio de 2002.

A efecto de dar contestación a la demanda de la CIDH y a todos y cada uno de los diversos apartados que la integran, al igual que al escrito de los peticionarios, así como satisfacer los requisitos previstos en los artículos 36 y 37 del Reglamento, el Estado procederá de la siguiente forma[1]:

a) En el apartado número I se identificará a los agentes, asesores y asistentes que actuarán en el proceso ante la Honorable Corte Interamericana por parte del Estado mexicano.

b) En el apartado número II se presentarán las objeciones y aclaraciones preliminares del Gobierno de México a la demanda de la Comisión y al documento de los peticionarios.

c) En el apartado número III se expondrá la cronología de hechos sucedidos desde el 29 de mayo de 1992 en el caso 12.228, a efecto de rebatir, aclarar, corregir o, en lo que resulte procedente, complementar la narración expuesta por la CIDH en su documento de demanda y

[1] La contestación del Estado es dividida en apartados únicamente para efectos de claridad, orden y sistematización en la exposición de sus argumentos, por lo que dicha división no excluye la incidencia de otros motivos de incompetencia o de inadmisibilidad tácita que a juicio de la honorable Corte se deduzcan de la contestación del Estado o de los anexos que la acompañan, así como de la propia demanda y anexos presentados por la CIDH, o de los argumentos y documentos ofrecidos por las presuntas víctimas de conformidad con el artículo 23 del Reglamento. Lo anterior con base en el principio *iura novit curia* a que ha aludido la honorable Corte, entre otros, en el Caso Castillo Petruzzi. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr.84.

por los peticionarios en su escrito presentado con posterioridad. Dicho apartado no representa en modo alguno reconocimiento expreso o tácito de la competencia de la honorable Corte para conocer del presente asunto, lo cual es acreditado de manera fehaciente en el apartado correspondiente a los motivos fundados de incompetencia y de inadmisibilidad que en forma de excepciones preliminares presenta el Estado.

d)En el apartado IV se señalarán los motivos manifiestos de incompetencia y también de inadmisibilidad evidente que se actualizan en el presente caso, de conformidad con lo que establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la jurisprudencia aplicable en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y los respectivos reglamentos en vigor de la Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.

e)En el apartado V se demostrará la compatibilidad de la actuación de las autoridades nacionales en el presente caso con los estándares internacionales de respeto y protección de los derechos humanos aplicables y, con esto, la inexistencia de las violaciones a los derechos humanos imputadas al Gobierno mexicano.

f) En el apartado VI se presentarán las consideraciones del Estado respecto de la improcedencia y falta de fundamento de las pretensiones de reparación expuestas en el documento de demanda.

g)En el apartado VII se precisarán las objeciones del Gobierno de México con relación a las pruebas ofrecidas por la Comisión y por los peticionarios.

h)En el apartado VIII se expondrá a la Honorable Corte la conclusión derivada de los elementos y evidencias presentadas por el Gobierno de México.

i) En el apartado IX se señalan los puntos petitorios que dirige el Gobierno a la Honorable Corte.

j) En el apartado X se ofrece la enumeración detallada de las pruebas ofrecidas por el Gobierno de México, que sustentan su posición y prueban sus argumentos en el caso 12.228.

I. Representación del Estado mexicano ante la Honorable Corte Interamericana en el caso 12.228.

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos estará representado en el caso 12.228 por las siguientes personas:

Agente:

Lic. Juan José Gómez Camacho,
Director General de Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Agentes alternos:

Emb. Juan Manuel Gómez Robledo,
Consultor Jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

Dra. María del Refugio González,
Coodinadora General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asesores:

Emb. Ricardo García Cervantes,
Embajador de México en Costa Rica.

Mtro. Jorge Ulises Carmona Tinoco,
Asesor jurídico externo de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

Lic. José Ignacio Martín del Campo Covarrubias,
Director de Casos Individuales ante Organismos
Internacionales en Materia de Derechos Humanos,
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Javier Raúl Ayala Casillas,
Magistrado de la Séptima Sala Penal,
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Lic. Juan Carlos Solís Martínez,
Director General de Derechos Humanos,
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

II. Objeciones y aclaraciones preliminares del Gobierno de México a la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al documento de los peticionarios.

En el presente apartado el Gobierno de México llamará la atención de la Corte sobre diversas imprecisiones y omisiones manifiestas en que incurren la CIDH y los peticionarios en sus respectivos documentos que contiene sus pretensiones sobre el caso 12.228. Las aclaraciones y objeciones del Gobierno de México no significan por ningún motivo reconocimiento expreso o tácito de la competencia que habrá de decidir la honorable Corte, en el momento procesal oportuno. Por otra parte, las aclaraciones y objeciones que presenta el Gobierno mexicano tienen por objeto que la Honorable Corte cuente desde el inicio con elementos precisos y fiables, sobre los cuales emitirá las determinaciones que corresponda; paralelamente, se verán desvirtuados diversos hechos y afirmaciones que no tienen sustento alguno y que podrían inducir al error.

El presente apartado está estrechamente vinculado con el correspondiente al de hechos presentado por el propio Estado.

a) Objeciones y precisiones sobre la demanda de la CIDH.

- El preámbulo del documento de demanda de la CIDH inicia con diversas peticiones de principio, en las que asevera como reales y actualizadas diversas cuestiones que podrían ser resueltas, de así considerarlo procedente la Honorable Corte.[2] El Gobierno se permite manifestar que en el caso 12.228 no ha sido probado en modo alguno que existiera privación arbitraria de la libertad y detención ilegal, denegación de justicia o una confesión arrancada por tortura, y mucho menos que ésta haya servido de sustentó único para la condena impuesta a Alfonso Martín del Campo Dodd.

- No es exacto que la víctima haya planteado la "ilegalidad" de su detención ante los tribunales mexicanos, dentro del periodo de vigencia de la jurisdicción contenciosa de la honorable Corte, puesto que lo que intentó plantear fue su total y completa inocencia, a través de un recurso excepcional que tiene por objeto impugnar las bases mismas del proceso penal. Un incidente de reconocimiento de inocencia no tiene por objeto revisar la legalidad de una detención.

- Las supuestas pruebas a que hace alusión la CIDH, distan mucho de ser contundentes y siquiera atendibles, tal como se demostrará más adelante en la presente contestación. Es completamente falso que el Estado mexicano haya comprobado y documentado violaciones a los derechos humanos en el presente caso.

- En México existe y se cumple en la práctica el principio de división de poderes, por lo que la investigación de hechos delictivos es competencia exclusiva del Ministerio Público, por lo tanto, el Poder Judicial no está facultado para llevar a cabo investigaciones.

- En el proceso seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, no existió confesión coaccionada alguna rendida ante el Ministerio Público o ante los órganos jurisdiccionales que conocieron del caso.

- Alfonso Martín del Campo Dodd no se encuentra privado arbitrariamente de su libertad, sino que está compurgando una condena impuesta por un tribunal imparcial e independiente, que lo sentenció por los delitos de homicidio que cometió.

- El Estado se permite llamar la atención de la Honorable Corte, para todos los efectos legales y procesales, sobre el hecho de que la Comisión en el apartado relativo a jurisdicción, sólo menciona los artículos 8, 25, 7 (1) y (3), y 1.2 de la Convención Americana, más no el artículo 5° de ésta.[3]

- En el apartado correspondiente al trámite ante la Comisión Interamericana,[4] esta omite siquiera hacer referencia al documento presentado por los peticionarios el 8 de octubre de 1999, en el

---

[2] Párrafos 1 a 6 de la demanda de la CIDH.

[3] Párrafos 10 al 12 de la demanda de la CIDH.

[4] Párrafos 13 al 27 de la demanda de la CIDH.

que Alfonso Martín del Campo Dodd cumple supuestamente con la prevención que le hiciera la CIDH hace más de un año y cuatro meses.

- El Estado mexicano ofreció a la CIDH información sobre posibles medidas que adoptaría de buena fe sobre temas generales, pero dejó en claro su posición con respecto a la situación jurídica de Alfonso Martín del Campo Dodd.

- La Comisión admite que en efecto existió una investigación para determinar si hubo o no tortura en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd.

- En el apartado de hechos de la demanda,[5] se menciona una nueva imprecisión, puesto que el incidente de reconocimiento de inocencia del sentenciado fue declarado infundado y no así improcedente, como lo asevera erróneamente la Comisión.

- La demanda de amparo presentada por la defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd, no fue interpuesta ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, mismo que declaró el sobreseimiento del juicio, basado en la actualización de una de las causales de improcedencia, que se refiere a la extemporaneidad manifiesta del recurso interpuesto. El Tribunal Colegiado conoció de la revisión (apelación) interpuesta contra la determinación del Juez de Distrito, y decidió confirmarla.

- No existieron elementos de prueba que acreditaran la existencia de tortura, tal como lo manifiesta la CIDH, por lo que los órganos jurisdiccionales que conocieron del caso, decidieron sobre esta base.

- La Comisión Interamericana no debe ni está facultada para subsumirse en la figura del *juez natural* y valorar o calificar los elementos de convicción presentados por las partes, puesto que su función no es revisar la legalidad o la constitucionalidad de la actuación de los órganos de jurisdicción internos.

- Los supuestos hechos que la CIDH toma como punto de referencia en su demanda, fueron extraídos de un documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitido el 26 de diciembre de 2002, esto es, con posterioridad inclusive a la emisión del informe de fondo de la CIDH en el presente asunto, más no de la petición inicial que sirvió de fundamento al procedimiento de queja.

- La denuncia por tortura presentada por los peticionarios tres años después de ocurridos los hechos, y a dos años de haber sido decidido por sentencia firme el proceso contra Alfonso Martín del Campo Dodd, no fue *archivada* como afirma la Comisión y se encuentra actualmente en integración.

- El proceso penal instaurado contra Alfonso Martín del Campo Dodd fue tramitado conforme a los estándares previstos por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y en éste así como en varias de los recursos intentados, el ahora sentenciado contó con asistencia legal privada (al menos 10 Licenciados en Derecho).

---

[5] Párrafos 28 al 38 de la demanda de la CIDH.

b) Objeciones y precisiones sobre el documentos presentados por los peticionarios.

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos legitima únicamente a la Comisión Interamericana para demandar a un Estado ante la Corte, en casos de peticiones individuales. Por lo tanto, la tramitación de éstas no puede ir más allá que lo estrictamente dispuesto en dicho tratado internacional.

- El Reglamento vigente de la honorable Corte, admite que las presuntas víctimas presenten sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso. Sin embargo, esta permisión no debe ir más allá del alcance de las propias pretensiones planteadas por la CIDH en la demanda.

- Si las presuntas víctimas rebasaran los límites de lo solicitado por la Comisión, se estaría contraviniendo la propia Convención Americana, así como los principios básicos sobre los que descansa el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. A mayor abundamiento, los peticionarios pueden hacer los planteamientos jurídicos que consideren apropiados, pero dentro del margen de las pretensiones de la propia Comisión.

- La Comisión Interamericana en su demanda solicita a la honorable Corte que ordene reparar las violaciones contra Alfonso Martín del Campo Dodd y que sea indemnizado éste y se cubran los gastos y costas en que hayan incurrido tanto Alfonso en calidad de víctima, como sus familiares, respecto a los gastos y costas en que hubieren incurrido por sus actuaciones en la tramitación del caso en México y ante la CIDH, así como las que se originen ante la honorable Corte.[6] Es evidente que la Comisión no consideró que las organizaciones y las personas ajenos a los ya señalados, que figuraron en la tramitación del caso ante las instancias internas e internacionales, debieran ser resarcidos en los gastos y costas en que hubieran incurrido y menos aún indemnizados, por lo que deberá estarse a esta clara limitación, en caso de que proceda decisión judicial alguna sobre el particular.

- Los peticionarios, rebasan los límites ya expresados, al pretender que la honorable Corte tenga como víctimas a Alfonso Martín del Campo de la Peña, Bessie Dodd Burke y Yaneth (sic) Martínez Cruz. Queda claro y es evidente, que no obstante ser improcedente este planteamiento, no incluyeron en su pretensión al menor Diego Martín del Campo Martínez, por lo que no puede ser tenido como víctima o sujeto de reparación alguna.

- Con relación a la imputación que hacen los peticionarios respecto a la supuesta violación al artículo 2 de la Convención Americana por parte del Estado,[7] dicho planteamiento es improcedente, puesto que el ordenamiento jurídico mexicano cuenta con abundantes disposiciones sobre el tema, integradas por normas constitucionales, tratados internacionales ratificados, leyes específicas, disposiciones reglamentarias y criterios jurisprudenciales, que configuran un marco normativo eficaz de prevención, investigación y sanción de la tortura. Inclusive, el Gobierno mexicano es uno de los pocos países que ha otorgado por vía judicial a los tratados internacionales de derechos humanos una jerarquía normativa tal, que los sitúa no

---

[6] Párrafo 8.b de la demanda de la CIDH.

[7] Página tres del documento de los peticionarios.

sólo como normas vigentes, exigibles y aplicables, sino a un escaño de las disposiciones de rango constitucional y prevalecientes sobre el resto de las normas jurídicas del ordenamiento.[8]

- El Gobierno mexicano se permite señalar a la honorable Corte su desacuerdo con los planteamientos generales sobre el tema de la incidencia de la tortura en México, y su indebida aplicación en el presente caso, puesto que se trata de afirmaciones genéricas derivadas la mayor parte de ellas de organismos internacionales, en ejercicio de una facultad distinta a la tramitación de peticiones individuales. Por otra parte, cabe señalar que el Gobierno de México ha dado respuesta oportuna a los informes a que se hace referencia en el documento de los peticionarios, tanto los provenientes de la CIDH, los elaborados por los órganos, convencionales y no convencionales, del sistema de Naciones Unidas y a algunos provenientes de organizaciones no gubernamentales.

- Desde la perspectiva del Estado, el caso 12.228 no es representativo ni ejemplifica una situación general de la procuración e impartición de justicia en México, por el contrario, si el caso posee algo de característico, es su falta absoluta de méritos para ser siquiera considerado por la honorable Corte como un asunto paradigmático.

- Por lo que se refiere al apartado de antecedentes (supuestos hechos) del documento de los peticionarios,[9] es evidente la existencia de imprecisiones que pueden llevar al error, así como de vacíos y omisiones deliberados. En virtud de lo anterior, con el fin de que la Honorable Corte esté en aptitud de contar con un panorama completo y detallado de la evolución fáctica y jurídica del caso 12.228, el Estado dedicará un apartado específico a dicho tema, por lo que solicita atentamente que éste sea confrontado con las narraciones ofrecidas por la CIDH y los peticionarios.

- Un ejemplo palpable de lo anterior, es que en el apartado que intitulan los peticionarios como "hechos sucedidos posteriores al 16 de diciembre de 1998" inician con la mención a una denuncia penal que expresamente está fechada el 9 de diciembre de 1998 y, por lo tanto, se trata de un hecho evidentemente anterior y fuera de la competencia *ratione temporis* de la Honorable Corte.

- En el apartado II del documento de los peticionarios, éstos contradicen frontalmente lo solicitado por la Comisión Interamericana que limitó su demanda única y exclusivamente a supuestos hechos sucedidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1998, fecha en la que el Gobierno de México aceptó la competencia contenciosa de la Honorable Corte. Además de que esto por sí mismo haría improcedente el planteamiento de los peticionarios, estos incurren en notorias vaguedades e imprecisiones respecto de qué violaciones específicas tendrían un carácter continuado y los motivos razonables para ello. El Estado niega de manera tajante que

---

[8] En la actualidad, el criterio más reciente señala que los tratados en el orden jurídico mexicano están situados jerárquicamente sobre la legislación federal, de acuerdo con el criterio más reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmado en la Tesis 192,867 bajo el rubro "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Esto significa, por una parte, que en caso de contradicción con la legislación federal, prevalecen lo dispuesto por los tratados en aplicación del criterio jerárquico en de la solución de conflictos normativos y, por la otra, que ante la existencia de vacíos normativos en la legislación federal, las normas contenidas en los tratados sirven como pautas o principios útiles para interpretación e integración del ordenamiento.

[9] Páginas 8 a 13 del documento de los peticionarios.

las violaciones que se imputan tengan, ya sea de forma aislada o en su conjunto, el carácter de violaciones continuadas, puesto que se trataría en todo caso de eventos que cronológicamente y en sus efectos se habrían dado y agota en momentos específicos.

- Otorgar al tipo de violaciones que señalan los peticionarios el carácter de violaciones continuadas, llevaría al absurdo de considerar por ese sólo hecho, que todas las posibles violaciones a los derechos humanos, así hayan sucedido décadas atrás, tuvieran este carácter. Todas las violaciones a los derechos humanos tienen en mayor o menor medida efectos, así sea de diversa naturaleza e intensidad, pero esto no significa que el hecho generador de la afectación a la libertad y dignidad humanas se repita o se multiplique de forma incesante.

III. Cronología de hechos sucedidos desde el 29 de mayo de 1992 en el caso 12.228.

En el presente apartado el Gobierno de México se permite presentar a la honorable Corte, la narración de los hechos más sobresalientes ocurridos respecto del caso 12.228, desde el día 29 de mayo de 1992 a la presentación de esta contestación.

Tal como se señaló párrafos arriba, el presente apartado de hechos tiene por efecto rebatir, aclarar, corregir o, en lo que resulte procedente, complementar la narración expuesta por la CIDH en su documento de demanda y por los peticionarios en su escrito presentado con posterioridad. Asimismo, los hechos se ofrecen de conformidad con el criterio de la Honorable Corte, en el sentido de que el procedimiento ante sí reviste carácter contradictorio; por lo que "*... falla según lo alegado y probado por cada parte. Por ello, la circunstancia de que la parte demandante haya omitido la mención de determinados hechos no impide que la parte demandada los alegue y presente las pruebas correspondientes.*"[10]

- **Hechos acaecidos a partir del 29 de mayo de 1992.**

1. El joven matrimonio formado por Juana Patricia Martín del Campo Dodd (33 años) y Gerardo Zamudio Aldaba (32 años), vivía junto con sus tres pequeñas hijas, de nombres Brenda (seis años), María Fernanda (4 años) y Tamara (2 años), en su hogar ubicado en la calle Amores, número 1523, interior seis, Colonia Del Valle, en la Ciudad de México.[11]

2. En 1991, habían permitido a Alfonso Martín del Campo Dodd (26 años), hermano menor de Juana Patricia, que se mudara a vivir con ellos a su domicilio, ya que éste trabajaba para Gerardo Zamudio Aldaba ocasionalmente en un negocio de alfombras y principalmente

---

[10] Caso Las Palmeras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 27.

[11] El domicilio de la familia Zamudio Martín del Campo, era de los conocidos como "condominios horizontales", integrados por otros cinco inmuebles idénticos en su arquitectura, construidos uno después de otro y unidos por un largo corredor iluminado al que tienen acceso cada uno y que es visible gracias a los grandes ventanales con que cuentan, cada inmueble tiene un espacio para estacionamiento con su respectiva puerta individual al interior de la casa y un cuarto de servicio para la servidumbre. Las seis casas tienen un único acceso común desde el exterior (la vía pública), que es una construcción de concreto de más de tres metros de alto, sobre la cual existe una malla electrificada, con un portal de accionamiento eléctrico y alarma, por donde accesan los vehículos y las personas.

Para arribar a la casa marcada con el número 6, por ser la que se encuentra al final del corredor, no sólo hay que entrar por el acceso exterior común a todas las demás, sino también pasar frente a las cinco primeras casas que desde sus ventanas tienen amplia visibilidad a dicho corredor.

cobrando las cuentas que dejaban algunos microbuses dedicados al servicio público de transporte que poseía éste último.[12]

3. El día viernes 29 de mayo de 1992, fue el preludio de los acontecimientos en los que las pequeñas Brenda, María Fernanda y Tamara, verían por última vez con vida a sus padres.

4. Ese día, siendo aproximadamente las 13:30 horas, Juana Patricia y sus pequeñas hijas, salieron de su domicilio en el automóvil Thunderbird[13] a visitar a su amiga de nombre Nora María Violeta Garibay Martínez, reuniéndose en la casa de ésta (que está a unas cuantas calles del domicilio de Amores), a la cual arribaron en diversos momentos Martha García Gudiño, María Luisa Calcanio y Claudia Zamudio (hermana de Gerardo Zamudio). Una vez reunidas, aproximadamente a las 18:00 horas, acudieron a un Centro Comercial ubicado al sur de la ciudad, denominado "Perisur".[14]

5. Por lo que hace a Gerardo Zamudio Aldaba, en esa misma fecha, salió de la casa siendo aproximadamente las 13:30 horas y se sabe que alrededor de las 14:00 horas, acudió en su automóvil Corvette azul[15] al centro de trabajo de Claudia Rosales Pamanes, su prima y amiga de la familia, a la que invitó a comer en un restaurante-bar conocido como la "Barraca Orraca"; Alfonso Martín del Campo Dodd (vestía una camisa color roja) se les unió a las 15:30 horas en dicho lugar por invitación de Gerardo,[16] en el que permanecieron aproximadamente hasta las 21:00 horas.[17] Las tres personas charlaron, mientras comían e ingerían bebidas embriagantes. Claudia recuerda que Gerardo Zamudio ingirió cuatro "cubas" (ron con refresco de cola), y Alfonso Martín del Campo comió muy poco, y éste ingirió también tres cubas.[18] En algún momento de la comida Gerardo le comentó a Claudia cierta molestia sobre la falta de disposición para el trabajo de Alfonso, ya que éste no había cumplido con lo que le había pedido acerca de anunciar en venta alguno de sus microbuses.[19] Claudia dejó el restaurante aproximadamente a las 17:30 horas,[20] trasladándose Gerardo y Alfonso a la zona de Bar del restaurante,[21] de lo cual se infiere que continuaron bebiendo.

6. El grupo de amigas que había acudido al Centro Comercial regresó al domicilio de Nora María Violeta Garibay.[22] En dicho lugar, pasados algunos minutos de las 21:00 horas arribó Alfonso Martín del Campo y cerca de 30 minutos después llegó Gerardo Zamudio quien conducía su

---

[12] Ver declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992, en la que también refiere que en una ocasión el señor Gerardo discutió con Alfonso por que éste había extraído unas botellas de vino y llegó alcoholizado a la casa.

[13] Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[14] Declaración ministerial de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[15] Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[16] Testimonio rendido por Claudia Rosales Pamanes, en la causa penal 57/92.

[17] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.

[18] Testimonio rendido por Claudia Rosales Pamanes, en la causa penal 57/92.

[19] Testimonio rendido por Claudia Rosales Pamanes, en la causa penal 57/92.

[20] Testimonio rendido por Claudia Rosales Pamanes, en la causa penal 57/92.

[21] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.

[22] Declaración ministerial de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992.

motocicleta.[23] Los presentes en la reunión convivieron, y por lo que hace a Gerardo y Alfonso, continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas en un lapso de una hora y media aproximadamente.[24]

7. Siendo alrededor de las 23:10 horas, Alfonso procedió a retirarse utilizando la motocicleta propiedad de su cuñado, mientras que permanecieron en el domicilio ya mencionado el joven matrimonio y sus tres hijas.[25]

8. Alfonso Martín del Campo arribó al domicilio ubicado en la calle de Amores, recogió un casco protector y unos guantes,[26] salió nuevamente para abastecer de gasolina la motocicleta de su cuñado y, finalmente, regresó al domicilio de su hermana y cuñado, cerca de las 23:30 horas[27]; ya en el domicilio se dirigió a su recámara, donde se desvistió para disponerse a dormir, empujando la puerta de acceso a su recámara para cerrarla, tal como supuestamente lo acostumbraba. Alfonso señala que se quedó dormido, sin percatarse de la hora en que arribó su hermana, junto con su cuñado y las niñas.[28]

9. Inés Guzmán Sánchez, quien vivía en el cuarto de servicio del inmueble y estaba a cargo de las labores domésticas, refiere que se percató que la familia (el matrimonio y sus menores hijas), llegaron cerca de las 00:20 horas del día sábado 30 de mayo de 1992,[29] a bordo del automóvil Thunderbird negro.[30] Asimismo, dicha persona declaró que después de haber llegado la familia les abrió la puerta y luego le dijeron que se fuera a descansar por lo que se dispuso a dormir y que estando acostada, escuchó voces de dos personas del sexo masculino, quienes al parecer discutían, luego de lo cual todo quedó en calma.[31]

10. Ya entrada la noche, estando dormidas en su habitación Brenda, María Fernanda y Tamara, así como en su propio lecho matrimonial Juana Patricia y Gerardo, se suscitaron los hechos. Esa noche el joven matrimonio, mientras dormía y se hallaba completamente indefenso, fue cruelmente masacrado, Juana Patricia murió por las lesiones mortales que le causaron algunas de las 29 heridas de arma punzo cortante que le asestaron,[32] y su esposo Gerardo fue objeto de 35 cuchilladas.[33] Esto no fue un homicidio producido por un supuesto atraco;[34] la saña con que

---

[23] Siendo aproximadamente las 21:30 horas, Gerardo Zamudio regresó a su domicilio, dejó el automóvil Corvette azul y salió en su motocicleta con rumbo al domicilio de Nora María Violeta Garibay Martínez; Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez y de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[24] Declaración ministerial de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992; Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.

[25] Declaración ministerial de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[26] Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992; Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.

[27] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.

[28] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.

[29] Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[30] Declaración ministerial de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[31] Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992.

[32] Dictamen de necropsia elaborado el 31 de mayo de 1992.

[33] Dictamen de necropsia elaborado el 31 de mayo de 1992.

el matrimonio fue atacado y privado de la vida mientras dormía, indica un motivo dirigido a dañar, a producir sufrimiento deliberado, aprovechando la imposibilidad de las víctimas de repeler la agresión o siguiera resguardarse de ella.

11. Una de las pequeñas niñas, Maria Fernanda, que entonces contaba con tan sólo cuatro años de edad, refiere haber presenciado impávida la sangrienta escena por unos minutos: la noche de los acontecimientos estaba durmiendo en su recámara junto con sus dos hermanitas, la despertó una grito, escuchó que su mamá gritaba pidiendo ayuda y diciendo ¡NO!, ¡NO!, ¡QUÉ ESTAS HACIENDO!, ¡POR QUE LO HACES!, ¡NO!, ¡NO LO HAGAS!, y a Gerardo su mamá le suplicaba ¡AYUDAME!.[35] Maria Fernanda se puso de pie y se dirigió a una esquina de su cuarto desde donde se aprecia la recámara de sus papás, en el momento en que se asomó vio una persona que vestía una playera con rayas rojas, descubriendo que era "Chacho", su tío, quien tenía un cuchillo y estaba sobre su mamá, mientras que su papá estaba como viendo por la ventana dándole la espalda a Juana Patricia.[36] La niña se aterroriza y regresa donde está su hermana Brenda acostada, la trata de despertar y al ver que no respondía regresó al lugar desde donde observaba, tan sólo para alcanzar a presenciar como su tío aventaba a su mamá y se retiraba, éste bajó por las escaleras, por lo que María Fernanda aprovechó para correr a su cama y se tapó con las cobijas, como quien pretende esconderse. Después de un rato, escuchó que encendieron un vehículo y todo quedó en silencio, hasta que cayó dormida.[37]

Lo que observó María Fernanda a los cuatro años, le marcaría el resto de sus días, fue tal el impacto emocional que la niña a partir de entonces, ahora una jovencita, sufre de trastornos psicológicos que han requerido la intervención de ayuda profesional para superar el trauma, es una niña con notable timidez, reprime sus emociones y en situaciones de tensión suele estarse tapando la boca como si quisiera callarse algo; cuando escucha el nombre de su tío "Chacho" experimenta sentimientos de rechazo. Dada su corta edad y el impacto de lo que vivió María Fernanda la tornó en una niña que *no hablaba, se escondía en los closets, detrás de las puertas, reflejando una tipología autista.*[38]

No obstante el trauma experimentado por la menor, durante el tratamiento psicológico que recibió a temprana edad a partir del impacto del suceso, María Fernanda daba muestras de lo que vivió, inclusive afirmó que quien había matado a sus padres era su tío "Chacho". En algunas sesiones de tratamiento, *al estar en un juego terapéutico en donde manipulaba muñecos, decia* ¡NO!, ¡NO!, ¡NO LO HAGAS! *al tiempo que aventaba un muñeco contra otro;* en otras ocasiones se expresaba a través de dibujos, en los que representaba *manchones de sangre* y *un cuchillo.* María Fernanda en ese entonces *desviaba su mirada, presentaba*

---

[34] Auto de Formal Prisión dictado por el Juez 55° Penal en el Distrito Federal, de 4 de junio de 1992.

[35] Declaración Ministerial de María Fernanda Zamudio Martín del Campo, de 13 de marzo de 2003.

[36] De acuerdo con la descripción y fotografías de la escena de los hechos, el cuerpo de Gerardo Zamudio habria caído sobre costado, frente la ventana que da al patio exterior de la casa, quedando parte del cuerpo sobre la cama misma. Esto coincide plenamente con el relato de la menor María Fernanda.

[37] Declaración Ministerial de Maria Fernanda Zamudio Martín del Campo, de 13 de marzo de 2003.

[38] Declaración ministerial de la Mtra. en Psicología Leticia Graciela Rivera García, de 13 de marzo de 2003.

mutismo, conductas persistentes, repetitivas, desafección emocional y falta de expresión verbal.[39]

Por lo que se refiere a Brenda y a Tamara, la primera se mostraba *confundida, triste y hablaba mucho*, decía que estaba enojada y podía expresar lo que pasaba, en cambio Tamara, la más pequeña, *no dejaba que la tocaran, lloraba mucho e incluso no permitía que se le acercaran, pateaba y se lanzaba al suelo.*[40] De las tres niñas, María Fernanda era la más perturbada, pues había presenciado los asesinatos de sus padres.[41] Así, de los acontecimientos de las primera horas del día 30 de mayo de 1992, sólo sobrevivieron las menores hijas del matrimonio: Brenda, María Fernanda y Tamara.

Alfonso Martín del Campo Dodd, "Chacho", nunca esperó que había quedado un testigo de sus actos, incluso durante el proceso penal que posteriormente le fue instaurado, afirmó categórico en su defensa: "QUE NADIE SE DIO CUENTA DE LOS HECHOS".[42]

Afortunadamente, los motivos que impulsaron a Alfonso Martín del Campo a tomar la decisión de atentar contra la vida de sus propios familiares, no fueron de tal magnitud que lo llevaran a cometer lo mismo en sus tres pequeñas sobrinas. No obstante, el temor a ser castigado por lo que hizo, y tal vez la falsa creencia de no haber sido visto, lo habrían impulsado a preferir buscar una salida, a partir de una historia plagada de incongruencias, que difícilmente, una a una o en conjunto, aceptan el más mínimo escrutinio racional y de sentido común. Esa conducta falaz, se ha repetido y se sigue produciendo sumando desafortunadamente algunos adeptos que se resisten a aceptar lo evidente, incluyendo personas cercanas a él.

Alfonso Martín del Campo ha producido innumerables versiones sobre lo que ocurrió durante la madrugada del día 30 de octubre de 1992, y en diversos momentos posteriores; cada vez que ha producido un nuevo relato agrega datos o detalles que había omitido en la versión previa, pero que resultan evidentemente contradictorios, los ajusta a las circunstancias, ha ido afinando su propia historia, enfatizando aspectos, obscureciendo u omitiendo otros, lo mismo ante periodistas, que ante autoridades u organismos internacionales.

En los próximos párrafos quedarán evidenciadas las inconsistencias del propio sentenciado, que lo hicieron caer en contradicciones manifiestas ante las autoridades, y que lo llevaron finalmente a narrar la verdad histórica de lo ocurrido, cuando tal vez su propia conciencia lo traicionó y no halló detalles en ese instante que cubrieran las debilidades de su relato inicial. Estos mismos elementos, hacen de la retractación posterior de Alfonso, algo menos que verosímil, salvo algunas de las ubicaciones en tiempo y lugar, que han logrado ser reconstruidas racionalmente, a partir de algunos de los testimonios de quienes aparecen en distintos momentos del caso.

El día 30 de mayo de 1992, siendo las 6:40 horas de la mañana, Alfonso Martín del Campo se presentó en la Oficina de la Policía Federal de Caminos ante el Oficial de Guardia de dicha

---

[39] Declaración ministerial de la Mtra. en Psicología Leticia Graciela Rivera García, de 13 de marzo de 2003.

[40] Declaración ministerial de la Mtra. en Psicología Leticia Graciela Rivera García, de 13 de marzo de 2003.

[41] Declaración ministerial de la Mtra. en Psicología Leticia Graciela Rivera García, de 13 de marzo de 2003.

[42] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55° Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

corporación, Manuel Guillermo Hernández Ortega,[43] quien es la primer persona a quien Alfonso ofrece partes aisladas de su deficiente coartada. En efecto, a dicho oficial le refiere:

> "que horas antes había sido asaltado, secuestrado y metido en la cajuela del vehículo descrito (marca Thunderbird) por dos personas con el rostro cubierto con medias de mujer en el interior de la casa del domicilio citado (Casa de Amores 1523) y que después de darse cuenta que se accidentaba el vehículo y percatándose posteriormente que no escuchaba ningún ruido, optó por abrir desde el interior la cajuela, saliendo de ella, llegando a las instalaciones del destacamento a solicitar ayuda"[44]

De acuerdo con la narración del propio Alfonso Martín del Campo, el automóvil en el que alega fue secuestrado, habría sido conducido rumbo a Cuernavaca pero después de la caseta de cobro habría hecho una maniobra de retorno a la Ciudad de México, y se accidentó[45] (el lugar del percance está situado a cerca de 9 nueve kilómetros de la caseta de cobro y de la Oficina de la Policía Federal de Caminos).[46]

12. Según Alfonso Martín del Campo iba dentro de la cajuela trasera del vehículo cuando sucedió el accidente, instantes después de éste hubo una total quietud, por lo que procedió con la llave de metal para birlos "llave L", que sirve para desatornillar los birlos de los neumáticos, a romper una de las "calaveras" traseras del auto; al hacer un hueco mira y se percata de que se encontraba en una autopista y "como pudo" abrió la cajuela desde dentro y salió por fin del automóvil[47] (esto le llevó hora y media, lo cual significa que el percance ocurrió posiblemente alrededor de las 3:30 horas).

13. Una vez fuera del vehículo, Alfonso Martín del Campo no tuvo problema en abrir una de las portezuelas que dejaron los supuestos tripulantes sin seguro. Al abrirlo, se percató de que atrás del asiento del lado del acompañante se encontraba la bolsa de su hermana, dentro de la cual refiere Alfonso que había una cartera con dinero,[48] y las llaves del vehículo marca Corvette azul, propiedad de Gerardo. Luego de esto, no obstante la "pesadilla" que había pasado, con el fin de evitar ser objeto de un robo procedió a encender las luces del automóvil, luego procedió a quitarle al automóvil el aparato de sonido (estéreo) y lo colocó en la cajuela donde venía él encerrado, luego de lo cual cerró el vehículo y comenzó a caminar aproximadamente 4 kilómetros (no refiere expresamente haber tomado algún transporte), hasta que llegó a la Oficina de la Policía Federal de Caminos,[49] donde narró por vez primera esta parte de su coartada.

---

[43] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[44] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[45] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55° Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

[46] Comparecencia del oficial Víctor Ramón Cetina Vargas a declarar en la causa penal 57/92, el 24 de agosto de 1992.

[47] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55° Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

[48] En el documento de puesta a disposición de Alfonso Martín del Campo ante el Agente del Ministerio Público se señalan entre los objetos que portaba consigo una cartera, misma que contenía algunas tarjetas de crédito a nombre del propio Alfonso, de lo cual se infiere que la cartera a que hace vagamente referencia en su relato es en realidad la suya.

[49] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55° Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

14. A Alfonso Martín del Campo al parecer no le preocupaba lo que hubiera sucedido a su familia y mucho menos a sus sobrinas, ya que una vez en las Oficinas de la Policía Federal de Caminos, en lugar de dirigirse personalmente y de inmediato a la casa de Amores, optó por acudir con dos oficiales federales de caminos al lugar donde había quedado el automóvil accidentado, y sólo pidió a los oficiales federales de caminos que se comunicaran a su casa.[50] La Oficina carecía de teléfono, pero por radio se enlazaron con la central de comunicaciones, desde la cual llamaron primero a la Casa de Amores, donde no contestaron[51] y luego a Raúl García Chavarría (pariente de Gerardo Zamudio), quien refiere haber recibido una llamada telefónica, aproximadamente a las 6:30 horas del día 30 de mayo de 1992, proveniente de la Policía Federal de Caminos, en la que le refirieron que Alfonso había sido secuestrado, que se encontraba bien, pero su casa había sido asaltada por la noche y quería éste saber si sus familiares se encontraban bien, además que le informaron que ya venía para el Distrito Federal.[52]

15. En el lugar del supuesto accidente automovilístico, a pocos metros de donde se encontraba el vehículo Thunderbird, uno de los policías de caminos de nombre Carlos Alberto García Urquiza halló en una cerca colgado un guante de látex rojo, perfectamente visible,[53] pero que Alfonso por alguna razón inexplicable no vio, y además hallaron un cuchillo tirado en el pasto, mojado por la lluvia que había caído durante la noche previa,[54] a pregunta expresa del oficial mencionado, Alfonso aseguró categórico que fue precisamente ese el cuchillo con el que lo habían amagado.[55]

16. Como resultado de la llamada que recibió Raúl García Chavarría por parte de la Policía Federal de Caminos, de inmediato varios familiares fueron enterados y acudieron a la Casa de la Calle de Amores 1523, en las afueras del inmueble (alrededor de las 7:00 horas) se encontraron Raúl García Chavarría, Gerardo García Chavarría, Claudia Zamudio, Carmen Zamudio y su esposo Alejandro, tocan insistentemente en el timbre de la casa número 6, nadie contesta, así que tocan otros timbres y es la vecina de la casa número 1, la que finalmente abre.[56]

17. Una vez en el pasillo común al inmueble acuden a tocar la puerta, sin obtener en principio respuesta alguna, hasta que Inés Guzmán Sánchez, la trabajadora doméstica, sale del cuarto de servicio y les abre la puerta indicándoles que sus patrones posiblemente estaban dormidos.[57] La primera en subir y hacer el macabro hallazgo es Claudia Zamudio, seguida de Gerardo García,

---

[50] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[51] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[52] Declaración ministerial de Raúl García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.

[53] Testimonio vertido por Carlos Alberto García Urquiza durante el proceso 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992.

[54] Testimonio vertido por Carlos Alberto García Urquiza durante el proceso 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992.

[55] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55° Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

[56] Declaración ministerial de Raúl García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.

[57] Declaración ministerial de Raúl García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.

ella grita al ver la escena y a la pequeña Tamara abrazada al cadáver de su padre, misma que es retirada por Gerardo, y se llevan en brazos, al igual que a Brenda y a María Fernanda.[58]

Quienes entraron al mencionado lugar relatan la escena:

> Juana Patricia Martín del Campo yacía al pie de la cama, tirada sobre el suelo, con las piernas abiertas, y recargada en la propia cama, se encontraba asimismo envuelta en un sobrecama y sangrante; en la cama, del lado derecho, se encontraba Gerardo Zamudio Aldaba semidesnudo y en una gran mancha de sangre, a su costado se encontraba la niña más pequeña de nombre Tamara, quien abrazaba a su padre y que fue retirada del cuerpo inerte por Gerardo García Chavarría.[59]

La experiencia traumática de Tamara, cuando contaba tan sólo con dos años de edad, explicaría porqué esta en lo sucesivo mostraba una conducta atípica, *no dejaba que la tocaran, lloraba mucho e incluso no permitía que se le acercaran, pateaba y se lanzaba al suelo*, por lo que también ha requerido tratamiento psicológico.[60]

18. Uno de los hermanos de Gerardo Zamudio, quien se encontraba presente en el lugar de los hechos, sube y observa que los cuerpos ya no se movían, 10 minutos después, hacen su arribo dos ambulancias y los paramédicos suben a la recámara, están algunos momentos ahí y bajan para informar que ya están muertos, proceden a retirarse, a los pocos minutos llegaron patrullas de policía preventiva y de policía judicial,[61] y posteriormente, también personal del Ministerio Público (Lic. Juan Marcos Badillo).[62]

- **Diligencias de investigación del 30 de mayo de 1992.**

19. A las 7:35 horas del día 30 de mayo de 1992, acude a la 10ª Agencia del Ministerio Público el policía preventivo Miguel Ángel Gutiérrez Lara, quien refiere haber recibido por radio un llamado para acudir al domicilio ubicado en Amores 1523, número 6, y tomar conocimiento de los hechos. Al llegar, dicho policía refiere que se encuentra con Inés Guzmán, y que ya estaban actuando algunos elementos de la policía judicial, que inclusive ya había llegado una ambulancia; el policía Miguel Ángel Gutiérrez subió a la escena misma de los hechos, verifica que la pareja en efecto está sin vida, y decide acudir a la Agencia del Ministerio Público a dar parte de lo ocurrido.[63]

---

[58] Declaración ministerial de Raúl García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.

[59] Declaración ministerial de Gerardo García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.

[60] Declaración ministerial de la Mtra. en Psicología Leticia Graciela Rivera García, de 13 de marzo de 2003.

[61] Coincide con declaración ministerial del policía preventivo Miguel Angel Gutiérrez Lara, rendida a las 8:00 del 30 de mayo de 1992, quien refiere que aproximadamente a las 7:35 horas por radio les fue indicado pasar a tomar conocimiento del incidente ocurrido en la Calle de Amores 1523, lugar al que acudieron y se entrevistaron con la empleada doméstica de nombre Inés, quien refirió que ya se había presentado una ambulancia de la Cruz Roja y que la policía judicial ya se encontraba conociendo de los hechos. Esta declaración motivo el inicio formal de la Averiguación Previa Directa 10/2160/92-05.

[62] Declaración ministerial de Gerardo Garcia Chavarría, de 30 de mayo de 1992.

[63] Ver comparecencia del oficial Miguel Angel Gutiérrez ante la 10ª Agencia del Ministerio Público, el 30 de mayo de 1992.

20. No obstante que algunos elementos de la Policía Judicial ya se encontraban avocados al conocimiento de los hechos, el Ministerio Público dio formal inicio a la Averiguación previa 10ª/2160/992-05, siendo las 8:00 horas.

21. Siendo aproximadamente las 8:20 horas, el Ministerio Público solicita intervención de servicios periciales en materia de criminalística y fotografía, después, ordena a la Policía Judicial llevar a cabo labores de investigación.

22. A las 8:25 horas, se traslada el personal ministerial a realizar la inspección ocular del lugar de los hechos, se aprecian chapas intactas, sin huellas visibles de forzamiento; con apoyo de Inés Guzmán se hace notar la ausencia de por lo menos un cuchillo de cocina y de unos guantes de látex de color rojo, que habrían estado guardados en un gabinete de cocina; se encuentra la línea del teléfono desprendida, se halla un pantalón negro sobre una de las camas manchado al parecer con sangre humana, así como restos de una figura de yeso en forma de alcancía; se halla en la recámara tirado un cuchillo y se da fe de los cadáveres y de la posición y características con las que fueron encontrados, se encuentran algunos cabellos sobre el cuerpo de Juana Patricia y el dedo cortado de un guante de látex rojo; se da fe de las lesiones que se les apreciaron y de diversas salpicaduras al parecer de sangre, y se dispone el levantamiento y traslado de éstos.

23. Siendo las 08:40 de la mañana, el Policía Judicial Sotero Galván Gutiérrez, quien había recibido instrucciones para abocarse a la investigación exhaustiva de los hechos, llegó al domicilio sito en Amores 1523, número 6, se percató que en efecto se encontraban dos personas muertas, y procedió a entrevistarse con Inés Guzmán Sánchez (testigo), quien entre otras cosas, le refirió el nombre de Alfonso Martín del Campo Dodd, como una persona que también vivía en el domicilio de la pareja asesinada.[64]

24. Alrededor de las 9:00 horas, arriba a la calle de Amores 1523 Alfonso Martín del Campo Dodd, acompañado del oficial de la Policía Federal de Caminos Carlos Alberto García Urquiza,[65] quien lo condujo al sitio desde la oficina en la caseta de Cuernavaca en su vehículo particular.[66]

25. A su arribo, Alfonso Martín del Campo fue observado por diversas personas, quienes refieren haberlo visto usando una camisa roja,[67] la cual estaba manchada al parecer de sangre,[68] despeinado,[69] y que se observaba golpeado o hinchado en varias partes del rostro[70] y del

---

[64] Cfr. Informe rendido por el agente de la Policía Judicial del Distrito Federal, párrafo primero.

[65] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[66] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[67] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[68] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[69] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[70] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

labio,[71] que tenía un descalabro en la cabeza[72] y que se le apreciaba también manchas al parecer hemáticas en el rostro.[73]

26. La actitud de Alfonso al recibir la noticia de lo acontecido fue simplemente la de bajar la cabeza,[74] llevarse la mano a la cara y aparentemente sollozar,[75] no se aprecia que haya mostrado una actitud que por sentido común habría manifestado quien además de ser víctima de los hechos, es impactado por la impotencia de no haber podido hacer nada para impedirlo. Nadie refiere que Alfonso haya preguntado siquiera por asomo qué fue de Brenda, María Fernanda y Tamara, sus pequeñas sobrinas.

27. El propio Gerardo García, quien halló los cuerpos sin vida de la joven pareja, platicó con Alfonso Martín del Campo, quien le refirió que lo habían asaltado (aunque no dijo cómo) y golpeado;[76] Gerardo inclusive entró nuevamente al lugar de los hechos para traerle a éste una chamarra[77] y el juego de llaves del automóvil Thunderbird, a efecto de entregarlas al oficial de la Policía Federal de Caminos Carlos Alberto García Urquiza,[78] con el fin de que pudieran abrir y en todo caso mover el vehículo accidentado.

28. En virtud de que Alfonso Martín del Campo había referido a varias personas e incluso a la Policía Judicial que fue golpeado, subido a la cajuela del automóvil Thunderbird en el que supuestamente fue secuestrado,[79] fue trasladado a presentar su declaración sobre lo ocurrido a la Agencia Décima Investigadora de la Delegación Benito Juárez de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, después de las 9:00 de la mañana.

29. En tanto, el Ministerio Público ordena examen ginecológico y proctológico al cuerpo de Juana Patricia y andrológico a Gerardo Zamudio. Encontrándose Alfonso Martín del Campo en la Agencia Décima Investigadora, permaneció en la sala de espera aguardando a ser llamado para relatar lo sucedido ante el agente del Ministerio Público, mismo que solicitó los servicios de Peritos en química para examen de Grupo Sanguíneo, de cabellos, toxicológico, antidoping, muestreo de sangre de ropa y cuerpo de Alfonso Martín del Campo.

30. Posteriormente, y después de que el agente del Ministerio Público solicitara a las 10:00 horas, vía telefónica, colaboración a personal de la Agencia 23 del Ministerio Público, con el

---

[71] Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992; Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[72] Ampliación de Declaración de Gerardo García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992; Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992; Declaración de Carlos Alberto García Urquiza, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992; Declaración de Víctor Ramón Cetina Vargas, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992;

[73] Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992. Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[74] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[75] Declaración de Carlos Alberto García Urquiza, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992.

[76] Ampliación de Declaración de Gerardo García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992.

[77] Ampliación de Declaración de Gerardo García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992.

[78] Declaración de Carlos Alberto García Urquiza, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992.

[79] Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992.

propósito de dar fe del automóvil utilizado en la noche del homicidio,[80] Alfonso Martín del Campo realizó una llamada telefónica para comunicarse con su padre, el Sr. Alfonso Martín del Campo de la Peña, a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a quien mintió diciéndole que Patricia y Gerardo habían sufrido un accidente automovilístico (10:30 horas).[81] En ese lapso se recaba la declaración ministerial de Gerardo García Chavarría.

31. Habiéndose trasladado al lugar de los hechos y una vez concluida la investigación por parte del agente Sotero Galván en dicho sitio, éste servidor público retornó a la Agencia Investigadora ya señalada, donde se halló a Alfonso Martín del Campo aún en calidad de víctima, a quien se practicaba en esos momentos un examen coprológico que concluyó a las 12:10 horas, cuando se emitió el dictamen médico solicitado por la autoridad investigadora.[82]

32. Siendo alrededor de las 12:30 horas del mismo día sábado, el policía Sotero Galván se entrevistó con Alfonso Martín del Campo Dodd, en instalaciones de la Delegación de Benito Juárez, a fin de completar su informe sobre los hechos y la parte que le correspondió de la investigación. Es en el transcurso de dicha entrevista donde Alfonso Martín del Campo Dodd en principio repite la misma historia del supuesto atraco y secuestro que sufrió hasta que arribó a la Calle de Amores; el policía le solicita que narre otra vez la historia que contó y Alfonso comenzó a cambiar su versión original y caer en contradicciones, manifestando que se encontraba en estado de ebriedad y que por ello no recordaba lo que había sucedido; ésta es la primera vez en que Alfonso, agobiado por sus propias contradicciones manifiestas, expresa por primera vez haber sido quien atacó y dio muerte a su propia hermana y cuñado,[83] por lo que el policía Sotero Galván procedió a ponerlo de inmediato a disposición de la Ministerio Público (13:30 horas), en calidad de principal involucrado en la autoría material del crimen.[84]

33. Es importante hacer notar que entre las pertenencias de Alfonso Martín del Campo que se enlistan en documento de puesta a disposición, se encuentra su cartera que contenía, entre otras cosas, dos tarjetas de crédito a su nombre. En su relato inicial Alfonso señala que en el asiento trasero del vehículo en que lo secuestraron, se encontraba la bolsa de su hermana y una cartera con dinero, pero no refiere en ningún momento que esa cartera era precisamente la suya.

34. En dicho lapso, se da fe de los documentos expedidos por la Policía Federal de Caminos, relativos al lugar donde fue hallado el vehículo Thunderbird, del reporte de accidente y del inventario de éste último (en el que no aparece por ningún lado el trozo de media negra de mujer).

35. Por otra parte, el Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez adscrito a las Agencias Décima y Trigésima Primera Investigación, fue enterado de que se encontraba detenido el Sr. Alfonso

---

[80] Cfr. Foja 5 de la averiguación previa 10/2160/92-05, razón de llamada telefónica. El oficial Carlos García Urquiza refiere al personal en el lugar de los hechos, que el vehículo Thunderbird fue abandonado en la autopista México Cuernavaca.

[81] Crf. Foja 18 de la averiguación previa 10/2160/92-05, declaración de Alfonso Martín del Campo de la Peña.

[82] Cfr. Dictamen Médico- Coprológico, del doctor Jesús López Sánchez, Médico Legista adscrito a la Décima Agencia Investigadora en Benito Juárez.

[83] Ver, puesta a disposición del probable responsable ante el agente del Ministerio Público de la Décima Agencia Investigadora, foja 7 de la averiguación previa10/2160/92-05.

[84] *Idem.*

Martín del Campo Dodd por el delito de homicidio, acudiendo a la primera de las Agencias mencionadas para entrevistarse con él. En la entrevista se identificó con Alfonso Martín del Campo, a quien le señaló que si era su deseo lo asistiría; que mientras estuviera sujeto a investigación podía nombrar a una persona de su confianza o a un abogado particular, indicándole además que tenía el derecho de no declarar en su contra o abstenerse de declarar. Alfonso Martín del Campo le señaló que deseaba declarar en su presencia, por lo que el defensor procedió a tomar la aceptación y protesta del cargo conferido.[85]

36. Estando Alfonso Martín del Campo en calidad de presentado como probable responsable de los hechos ante el Ministerio Público, éste le hizo saber que podía nombrar defensor o persona de su confianza que lo asistiera en su declaración, el derecho de conocer los términos de la imputación que obraba en su contra, el nombre de los denunciantes, el de comunicarse inmediatamente con quien estimara conveniente, el de no declarar en su contra sí así lo deseaba, asimismo, se le hizo saber el contenido del artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el sentido de que tenía derecho a nombrar un facultativo (médico) particular a efecto de que lo examinara, manifestando el presentado que era su deseo que le fuera nombrado el defensor de oficio adscrito a la Agencia Investigadora.

37. En la Averiguación Previa se da constancia de dicha diligencia, en los siguientes términos: "Nombramiento, aceptación y protesta del cargo. Se toma protesta a Rolando Torres Martínez, defensor de oficio, quien acepta el nombramiento que hiciera en su favor Alfonso Martín del Campo, y promete cumplirlo fielmente mientras dure el cargo".

38. Cabe mencionar que el Defensor de Oficio es un servidor público que no depende del Ministerio Público,[86] ni se encuentra vinculado administrativa ni jerárquicamente con éste, así que su labor de asistencia es independiente. El defensor de oficio en la etapa de Averiguación Previa tiene sobre todo la función de estar presente en las diligencias, hacer notar alguna irregularidad en su desarrollo y evitar cualquier acto que atente contra la integridad del indiciado.[87]

39. El Ministerio Público ordenó la práctica del examen de integridad física correspondiente al indiciado, previo a su declaración. Las lesiones que presentaba Alfonso Martín del Campo, eran de las que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida; [88] el certificado

---

[85] Declaración de el Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez, de fecha 10 de julio de 1995, en la Averiguación Previa por delitos diversos, incluyendo tortura SC/3839/95-03.

[86] La actuación de dichos servidores estaba regulada por la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 1987.

[87] La entonces vigente Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, disponía en su artículo 18, entre otras cosas, que los Defensores de Oficio en el área de Averiguaciones Previas tendrían entre sus funciones: "I.- Atender las solicitudes de Defensoría de Oficio, que le sean requeridas por el indiciado o infractor, Agente del Ministerio Público o Juez Calificador; II.- Estar presente en el momento en que su defendido rinda su declaración ante la autoridad correspondiente; III.- Entrevistarse con el indiciado o infractor para conocer de viva voz la versión personal de los hechos y los argumentos que pueda ofrecer a su favor, para hacerlos valer ante la autoridad del conocimiento; IV.- Asesorar y auxiliar a su defenso en cualquier otra diligencia que sea requerido por la autoridad correspondiente; VII.- Vigilar que se respeten las garantías individuales de su representación".

[88] Certificado de estado físico de Alfonso Martín del Campo Dodd, expedido en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 29 de mayo de 1992 (sic), a las 14:00 horas,

médico lo suscribe el médico forense Jesús López Sánchez, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

40. En su declaración ministerial, Alfonso Martín del Campo Dodd no refiere poseer una nacionalidad distinta a la mexicana, y declara estar debidamente enterado de los hechos que se investigan, así como del delito de homicidio que se le imputa y la penalidad para el mismo, así como también que acepta los hechos, mismos que son coincidentes en tiempo, lugar, forma y circunstancia con lo declarado por diversos testigos, así como por la declaración de María Fernanda Zamudio. Alfonso Martín del Campo hizo referencia al móvil, los instrumentos del delito (guantes y cuchillos) y la mecánica de los hechos, relata que vestía pantalón color negro, de vestir, con una camisa cuyo color no recuerda, así como zapatos negros; luego de cometidos los hechos refirió que se cambio de ropa usando un pantalón de mezclilla azul, una camisa roja y unos tenis negros; se quita los guantes que había usado y narra que después de lo sucedido planea la forma de simular un robo y un secuestro con la idea de aparentar que no participó en los hechos, quebró tres figuras de cerámica, rompió el cable del teléfono con el cuchillo, se llevó uno de los guantes y un cuchillo, y tomó el automóvil Thunderbird, deposita en el suelo del asiento trasero el cuchillo y el guante. Alfonso señaló que huyó por la carretera a Cuernavaca, pasó la caseta y algunos kilómetros más adelante retornó, con la intención de dejar abandonado en la dirección de regreso el automóvil. Por el exceso de velocidad accidenta el vehículo, camina unos 15 minutos y luego refiere que tomó un camión que lo lleva a la caseta de cobro, donde finalmente arriba a la oficina de la Policía de Caminos.

41. Alfonso narra a los elementos de la Policía Federal de Caminos su versión falsa de lo sucedido (de que fue secuestrado por dos sujetos en su domicilio), refiere que los policías se comunicaron por radio a otro lugar desde donde hablaron por teléfono a Raúl García, y que éste se dirigió al lugar de los hechos y la policía de caminos se comunicó con una corporación policíaca para que verificaran lo sucedido. El indiciado señala que a Gerardo y Raúl García, a Juan Carlos Miranda, y al portero de la casa de nombre Sergio les cuenta la misma historia del secuestro. Refiere que al entrevistado en el lugar de los hechos lo narra todo a un policía judicial, y terminó por informarles como habían sucedido en realidad éstos.

42. Respecto del móvil del homicidio, refiere que era por el maltrato que recibía de su cuñado y porque éste le reclamó que le había robado dinero en su propia casa.

43. Por otro lado, Alfonso señala que al momento del ataque su hermana había tratado de defenderse y no así su cuñado Gerardo, que fue el primero al que apuñaló, mismo que se encontraba en estado de intoxicación alcohólica severa,[89] lo que generó su total indefensión. Que las lesiones que presentaba (Alfonso) se las ocasionó probablemente al chocar en la carretera, dice también que se golpeó intencionalmente la nariz y que el resto de las lesiones fueron producidas cuando victimó a la pareja; Alfonso ratifica su declaración, la firma en presencia de su defensor, y estampa su huella digital.

---

suscrito por el doctor Jesús López Sánchez. En él se registran dos golpes contusos en la parte posterior de ambos parietales; una escoriación dermoepidérmica en la región paraexiliar del ojo izquierdo; una escoriación del lado izquierdo de la nariz; un golpe contuso en la parte en que nace el vello de la frente; una escoriación en la rodilla derecha; máculas de color rojo en la parte media de la cara, y una escoriación dermoepidérmica en el dorso de la mano derecha.

[89] 180 mg/cm3 de alcohol en la sangre, de acuerdo con el dictamen químico realizado.

44. Ese mismo día, 30 de mayo de 1992, a las 16:00 horas, comparece a declarar Nora María Violeta Garibay, quien refiere las actividades que realizó con la occisa y sus hijas durante ese día, y lo que ocurrió en la reunión celebrada en su domicilio en la que estuvo presente la familia Zamudio Martín del Campo y el propio Alfonso Martín del Campo Dodd.

45. Con posterioridad a su declaración, siendo las 19:00 horas, se lleva a cabo una diligencia de reconocimiento de ropas, en la que Alfonso acepta como de su propiedad la camisa color rojo, que presentó dos manchas al parecer hemáticas, la playera blanca sin marca en el cuello y letras anaranjadas y rojas, con un escudo cuadrado a rectángulos en la parte superior, también con líquido hemático, y el pantalón de color negro con manchas al parecer de líquido hemático. Alfonso refiere que la camisa y la playera blanca las usaba cuando se dio a la fuga y que, por lo que hace al pantalón negro se lo puso cuando victimó a su hermana y a su cuñado; con respecto a la playera que usó, la tiró en la carretera, por otra parte, reconoce como objetos del delito cuchillos, un guante rojo y un dedo de otro guante, y también refirió haber tomado uno de los cuchillos y un guante, mismos que lanzó fuera del automóvil luego de que se estrelló. Estas declaraciones también fueron hechas en presencia del Defensor de Oficio.

46. Inmediatamente después, se le practica un nuevo examen de estado físico, en el que se refiere que presenta las mismas lesiones halladas antes de iniciar su declaración. Dicho examen fue realizado por el médico forense Jesús López Sánchez, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

47. Mientras tanto, Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral se encontraban identificando los cadáveres de la pareja asesinada, María del Carmen denuncia los hechos, contra quien o quienes resulten responsables. Posteriormente, el Ministerio Público da Fe de cadáveres, lesiones, medias filiaciones y actas médicas y nuevo reconocimiento de los mismos, con compañía de un médico forense.

48. Se produce la declaración de Raúl García Chavarría y también declara como testigo de identidad de los muertos Alfonso Martín del Campo de la Peña, originario de Pachuca, Hidalgo, quien refiere que recibió una llamada telefónica a las 10:30 horas en la que su hijo Alfonso le refirió que se trasladara a la Agencia 10ª del MP; el padre de Alfonso también presenta formal denuncia por los hechos y solicita la entrega de los cadáveres para la realización de la ceremonia luctuosa.

49. En el lapso señalado se presenta también como testigo de identidad Oscar Moreno Espinoza, tío político de Juana Patricia Martín del Campo, quien refiere haber recibido una llamada de Alfonso Martín del Campo a las 14:00 horas y que denuncia también el homicidio y robo ocurridos.

50. El Misterio Público da fe de dos cuchillos supercut con mango de plástico, con hojas de cuatro y dos punto cinco centímetros de ancho. En ambas hojas se aprecian manchas al parecer hemáticas.

51. El Ministerio Público solicita intervención del perito médico forense para examen andrológico a Alfonso Martín del Campo (llamado BJ- 5935); asimismo, se solicitó intervención de peritos en fotografía y dactiloscópica para identificación del presunto responsable Alfonso Martín del Campo Dodd; de igual forma, se solicita servicio pericial en medicina forense para que

corrobore la integridad física del presunto responsable, en criminalista y en fotografía para reconstrucción de hechos, así como perito en psiquiatría.

52. Aproximadamente a las 20:00 horas, se solicita la presencia de peritos en criminalística y fotografía para intervención en diligencia de reconstrucción de hechos.

53. El día 30 de mayo, siendo las 21:20 horas, arribaron al lugar de los hechos peritos en criminalística y fotógrafo para realizar la diligencia de reconstrucción de lo ocurrido. Para ello, se da intervención a la Policía Judicial para que en compañía de la trabajadora doméstica Inés Guzmán Sánchez y Alfonso Martín del Campo se trasladen al lugar de los hechos: el Ministerio Público en funciones y Miguel Ángel Camarillo, Guillermo Medina Aguilar, Isaac Contreras y Víctor Cano Ojeda, éste último tomará el lugar del occiso, la perito en criminalística Beatriz A. Minor Morales, el fotógrafo Antonio Várgas Lagunes, y Gabriela Rivera Nieto, quien toma el lugar de la occisa. La reconstrucción de los hechos tuvo lugar alrededor de las 22:15 del día 30 de mayo de 1992 y el acta correspondiente está suscrita por el indiciado y el defensor de oficio.

54. Los peticionarios han manifestado su inconformidad con la mencionada diligencia, en especial porque a su leal saber y entender, dicha reconstrucción es llevada a cabo sin apego a derecho, las personas, salvo el indiciado y quienes representan a alguien que participó en los hechos verdaderos, tienen una marca que los distingue de éstos. Sobre este punto las afirmaciones de los peticionarios merecen una explicación más detallada: en primer lugar los nombres de los participantes en dicha diligencia sí estaban expresados claramente en el expediente de averiguación previa; en segundo, la práctica de una *reconstrucción de hechos* debe ser de tal manera clara, que no produzca confusión en su apreciación, de esta manera, es obvio que lo importante es que se pueda distinguir a los personajes que tuvieron participación real en los hechos que son reconstruidos; así, si todos los que aparecen en las fotografías no tuvieran la marca que los distingue del indiciado la diligencia no cumpliría su finalidad de confrontar las declaraciones de éste con el estudio criminalístico de los hechos.

55. En efecto, si todas las personas aparecieran en la fotografía, sin distinguir meros participantes de los sujetos involucrados en los hechos que se reproducen, sería una diligencia no válida jurídicamente pues llevaría a confusión, e incluso atentaría contra los derechos del indiciado. Por otra parte, si fueran personas distintas del indiciado y de la testigo los que participaran únicamente, podría objetarse que se trata de una representación ficticia, que obraría en perjuicio de la defensa y los intereses del involucrado.

56. Otro aspecto es el relativo a que en algunas de las fotografías se aprecia que Alfonso Martín del Campo es tomado del brazo o las muñecas durante la diligencia; los peticionarios refieren a este respecto dos cuestiones: 1) que las posiciones y movimientos de Alfonso son dirigidos externamente, y 2) que los guantes rojos de látex y los cuchillos no son las evidencias reales que se habían recabado. Esto también merece un comentario sobre algo que escapa a la atención de los peticionarios, en una diligencia de reconstrucción de hechos no se deben utilizar todos los objetos originales que como evidencias fueron encontradas, se trata de una reconstrucción de la mecánica de los hechos, de cómo fueron sucediéndose éstos en el tiempo y espacio, no se trata de utilizar evidencia que puede resultar contaminada, dañada, destruida o alterada. Es por ello que se utilizaron unos guantes rojos de látex similares a los usados en los hechos realmente ocurridos, de igual forma que con los cuchillos que se muestran.

57. Por cuanto a la manera en que se toma a Alfonso Martín del Campo, ello obedece a la necesidad de aseguramiento del indiciado a efecto de evitar su fuga y también a que los cuchillos utilizados eran reales; sería muy poco inteligente y precavido quien pusiera en las manos libres de un indiciado por un doble homicidio, con arma punzo cortante, un cuchillo para que lo manipule a su antojo, con el consiguiente riesgo que se lastime a sí mismo o que dañe a alguno de los presentes. Así, sólo se toma a Alfonso Martín del campo con fines de salvaguardar su integridad y la de los presentes, para permitir el desarrollo de la diligencia de manera normal, pero no como una forma de manipular sus movimientos.

58. Es de suma importancia destacar otro aspecto, si Alfonso Martín del Campo hubiera sido en efecto tratado brutalmente durante cinco horas, como según refirió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

> "Fueron entre 10 y 12 agentes los que lo presionaban, asimismo fue severamente golpeado en el estomago con franelas mojadas, así como en la cabeza. Recibió también golpes con la mano abierta en la cara, dándole también patadas en los testículos, los policías judiciales se turnaban para golpearlo, obligándolo a firmar una declaración auto inculpatoria y a colocar su huella dactilar."[90]

59. En las fotografías en las que se documentó gráficamente la reconstrucción de los hechos, no se observa a Alfonso Martín del Campo aterrorizado, siquiera amedrentado o retraído, tal como se podría esperar que estaría una persona que habría sido sometida al trato que refieren los peticionarios. Por el contrario, es de llamar la atención acerca de lo oportunas que son las fotografías, pues en ellas se muestra un Alfonso Martín del Campo adusto, con una mirada severa y tranquilo. En tal sentido, una persona que recibió una paliza como la que describe Alfonso, no se mostraría con la integridad y entereza con que aparece en las fotos éste último. Es más, ni siquiera podría haberse mantenido en pie, por lo que esta es una prueba irrefutable que hace caer por tierra la historia de la supuesta tortura que narra Alfonso y los peticionarios, y que es retomada por la Comisión, no obstante haber tenido a su alcance dichas fotografías y diligencias. Otro aspecto, si hubiera en efecto sido golpeado como afirman los peticionarios, es lógico pensar que los policías judiciales habrían tratado de ocultar lo que habían llevado a cabo, y no se prestarían a realizar una diligencia de ese tipo, en la que se habría apreciado gráficamente el resultado de su brutalidad en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd; esto confirma que la diligencia fue llevada a cabo sin presión ni coacción alguna.

60. Siguiendo la integración de la indagatoria, el Ministerio Público recibe los dictámenes de examen ginecológico practicado al cadáver de Juana Patricia y del estudio coprológico a Gerardo Zamudio; así como del realizado al indiciado Alfonso Martín del Campo. Se realiza un estudio hematológico respecto del vehículo Thunderbird, y resulto positivo, se trata de sangre humana en llaves españolas, bolsa de herramientas de color negro, en rollo de papel cartulina, en bote de spray blanco con rojo y en bolsa de plástico transparente.

- **Diligencias de investigación del día 31 de mayo de 1992.**

61. El día 31 de mayo, domingo, las diligencias de investigación continúan a partir de las 8:00 horas, en que el nuevo turno del Ministerio Público cambia; una hora después se solicita

---

[90] Queja presentada ante la CIDH de 13 de julio de 1998.

servicio del perito médico forense, para certificar si las lesiones que presentaba Alfonso Martín del Campo corresponden a las de un conductor de un vehículo que haya tenido un percance, asimismo, a las 10:00 se gira oficio para solicitar peritos en criminalística a fin de determinar si las lesiones que presenta el detenido corresponden a mecanismo de defensa.

62. Siendo las 11:00, el Ministerio Público solicita el apoyo de peritos en tránsito de vehículos.

63. A las 14:50 horas se recibe valuación del vehículo Thunderbird accidentado y se agrega el dictamen en psiquiatría practicado a Alfonso Martín del Campo, en el que se establece:

"A la entrevista directa se encuentra ansioso, inquieto, con orientación en las tres esferas adecuadas, su atención y comprensión son normales, su discurso es emitido en tono de voz normal, con curso coherente, dentro de su contenido no se aprecian alteraciones de ningún tipo, su afecto es apropiado modulando correctamente, niega alteraciones de la percepción, sus memorias se encuentran conservadas, juicios dentro de la realidad, síntesis y abstracción término medio lo que lo ubica con un coeficiente intelectual dentro de la normalidad. No se aprecian actitudes o conductas de alucinado. Su proyección hacia el futuro es aceptable.... Conclusión: Alfonso Martín del Campo Dodd, no presenta en este momento ningún trastorno mental, tiene capacidad de querer y entender".[91]

64. Alrededor de las 17:30 horas del Domingo, se recibe la comparecencia de Bessie Dodd Burke, originaria de Etzatlán, Jalisco, quien refiere haber sido avisada el 30 de mayo a las 14:30 horas de lo sucedido y que se enteró el mismo 30 de mayo por la noche que su hijo estaba detenido, asimismo, denuncia el posible robo del vehículo en que éste fue supuestamente secuestrado su hijo. Aproximadamente dos horas después, a las 18:05 José María Lozano Moreno, testifica que el vehículo Thunderbird que se encontraba en las instalaciones de la 10ª Agencia Investigadora era propiedad de los occisos; asimismo, refiere que conoce a Alfonso Martín del Campo y que se encuentra en dichas oficinas, minutos después, siendo las 18:30 Roberto Chávez Resendiz ofrece su testimonio también sobre la propiedad del vehículo mencionado.

65. Peritos en química forense concluyen que no se localizaron fragmentos dactilares en guante de látex, caras interna y externa. A las 18:40 horas se recibe avalúo para daños en vehículo, por perito en materia de tránsito terrestre y a las 18:55, se reciben dictámenes de tránsito; aproximadamente a las 20:34 horas, se agrega a lo actuado las necropsias, los occisos murieron por las lesiones recibidas. Luego, a las 20:40 se da fe de tener a la vista la llave "espátula" de 45 cm. Punta de espátula en un extremo y afloja tuercas en el otro.

66. Siendo las 23:30 se agregan a la investigación, entre otros, los dictámenes químicos, de rastreo hemático, fotografía.

- **Diligencias de investigación y puesta a disposición del Juez Penal el 1 de junio de 1992.**

67. A las 01:00 del 1 de junio, lunes, se recibe el dictamen de que los cuchillos hallados, uno cerca del automóvil y otro en el lugar de los homicidios, están en el rango de los que podrían haber originado las lesiones.

---

[91] Dictamen psicológico, suscrito por el Dr. Guillermo León González, perito psiquiatra adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

68. Con los elementos recabados, a las 02:00 se notifica a la oficina de consignaciones para su conocimiento, se confirma que se trata de un caso de notoria urgencia, toda vez que al momento de la detención no funcionaban los juzgados correspondientes por ser días inhábiles, que se trataba además de un delito perseguible de oficio y que el inculpado estaba consciente del delito, a lo que se agrega que existían serios temores de que se sustrajera a la acción de la justicia, con tendencia a darse a la fuga.

69. Siendo la misma hora, se reciben y agregan a lo actuado los siguientes dictámenes: químico de sangre, drogas, alcohol que únicamente se encuentra en Gerardo Zamudio.

70. En la misma fecha y hora se dicta un acuerdo en el que se señala que el Ministerio Público a su juicio encuentra reunidos los requisitos exigidos por los artículos 14, 16 y 21 constitucionales, para proceder contra Alfonso Martín del Campo Dood como presunto responsable de homicidio calificado (premeditación, ventaja y traición) previsto en los artículos 302, 303, 315, 316, fracción IV, 317, 319 en relación al 7, fracción II y 18 parte segunda y sancionado con el artículo 320 en concordancia con el 64, párrafo segundo, del Código Penal vigente para el Distrito Federal, con apoyo en el Código de Procedimientos Penales, artículos: 1, 2, 3, 5, 10, y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del D.F. y de su Reglamento, ejercita acción penal en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd.

De conformidad con lo anterior, se envía lo actuado a la Oficina de consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que por su conducto ejercite acción penal. Alfonso Martín del Campo es remitido en calidad de detenido al Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, donde queda a disposición del Juez Penal. No obstante, la investigación quedó abierta por la posible comisión de otros delitos.

Ante los diversos indicios recabados y habiendo confirmado jurídicamente la calidad de la presencia de Alfonso Martín del Campo Dodd en la Agencia Investigadora, el agente del Ministerio Público corrobora la detención administrativa, fundada en la satisfacción de dos hipótesis jurídicas previstas por la legislación vigente en 1992:[92] 1) que se trataba de un caso urgente (calificado de esa manera por la Constitución y la legislación penal), en virtud de que se estaba ante a un doble homicidio y existía una imposibilidad material de recabar una orden judicial en ese instante, y 2) la manipulación de la versión de lo realmente ocurrido por parte de Alfonso Martín del Campo Dodd, dejaba ver fundadamente que desde el inicio pretendía evadir la acción de la justicia haciéndose pasar por una simple víctima de lo ocurrido.

---

[92] El texto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba en su parte conducente: "Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial."

Por otra parte, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente al momento de sucedidos los hechos señalaba textualmente:

Artículo 266. El Ministerio Público y la Policía Judicial a su mando, están obligados a detener al responsable, *sin esperar a tener orden judicial, en el caso de delito flagrante* o de notoria urgencia, cuando no haya en el lugar autoridad judicial.

Artículo 268. Se entiende que no hay autoridad judicial en el lugar y existe notoria urgencia para la aprehensión del delincuente: cuando por la hora o por la distancia del lugar en que se practica la detención, no hay ninguna autoridad judicial que pueda expedir la orden correspondiente y existan serios temores de que el responsable se substraiga a la acción de la justicia."

Una vez determinada la procedencia del ejercicio de la acción penal, se dispuso el traslado del indiciado al Reclusorio Preventivo Oriente en el Distrito Federal, para lo cual se procedió a realizar las gestiones administrativas propias de estos casos.

71. Encontrándose Alfonso Martín del Campo en el Reclusorio, a las 10:48 horas del día 1° de junio, lunes, le fue practicado un nuevo examen médico, lo que confirma que el Ministerio Público había ejercitado acción penal por la mañana del día ya mencionado, quedando el inculpado a disposición de la autoridad jurisdiccional. En dicho examen, el Médico Cirujano Dr. Héctor Arturo Guzmán Aguirre, señaló que se apreciaba lo siguiente: "lesiones caracterizadas por laceración del labio superior, lado derecho. Herida no suturada de 2 centímetros con costra hemática en región parietal, lado derecho. Escoriación en pirámide nasal y región zigomática y mejilla del lado izquierdo. Equimosis del tercio superior en cara externa del brazo derecho de color verde amarillento."

72. La presentación formal del entonces inculpado ante el juez ocurrió el 1° de junio de 1992, mediante su consignación ante el órgano jurisdiccional penal a las 11:30 de la mañana,[93] hora que coincide plenamente con su ingreso al interior del reclusorio o centro de prisión preventiva, a disposición del Juez penal competente.

- **Ejercicio de la acción penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd.**

73. En el documento de consignación se remite al Juez la Averiguación Previa constante en 165 fojas, en la que se aprecia que el cuerpo del delito de homicidio calificado fue comprobado de conformidad con las reglas del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, a través de los siguientes elementos:

- Con las denuncias formuladas por los testigos de identidad Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral.
- Con la inspección ocular, fe ministerial de cadáveres, lesiones, levantamiento y traslado y fe de ropas.
- Con el protocolo de necropsia.
- Con los dictámenes de criminalística, fotografía y químicos.
- Con la fe ministerial del vehículo Ford Thunderbird.
- Con el Guante y fragmento del mismo.
- Con los dos cuchillos de los que se dio fe.
- Con la ampliación de inspección ocular y diligencia de reconstrucción de hechos.
- Con el parte de Policía Federal de Caminos.
- Con el informe de Policía Judicial.

[9393] Ver. Pliego de Consignación de la Averiguación Previa 10/2160/92-05.

- Con la fe ministerial de actas médicas.
- Con la declaración de Gerardo García Chavarría.
- Con la declaración de Inés Guzmán Sánchez.
- Con la declaración confesoria del indiciado Alfonso Martín del Campo Dodd.

Por lo que se refiere a la presunta responsabilidad de Alfonso Martín del Campo, ésta quedó acreditada con los siguientes elementos:

- La declaración de Inés Guzmán Sánchez.
- Con la diligencia de reconstrucción de hechos realizada por el personal Ministerial en compañía de peritos en materia de criminalística y fotografía.
- La fe ministerial de objetos, en el caso de cuchillos y guantes utilizados por el activo.
- La declaración confesoria del ahora inculpado Alfonso Martín del Campo Dodd, quien al rendir declaración ante el Ministerio Público narró en forma detallada como privó de la vida a su hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd así como a su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, mencionando que utilizó guantes de látex, color rojo, para evitar dejar huellas al momento de cometer los ilícitos, así también señaló cómo pretendió fingir haber sido víctima de robo y secuestro, lo anterior, tendiente a ser descubierto como autor de los delitos a estudio.
- Los anteriores elementos, debidamente concatenados con las demás constancias que obran en actuaciones, tienen valor probatorio de conformidad con el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, reflejando en su actuar una alta peligrosidad al haber atentado contra el bien jurídico de mayor valía tutelado por la Ley Penal, en este caso: la vida humana.
- En otra parte del documento de consignación, se señala textualmente: "toda vez que en el presente caso existe notoria urgencia, pues se trata de un delito que se persigue de oficio y no había autoridad judicial en el lugar para que emitiera la orden de aprehensión correspondiente, dado que al momento en que el órgano investigador obtuvo la aceptación del inculpado como autor de los eventos delictivos ya no eran horas de funcionamiento de los juzgados, por ello procedió a cumplir con su obligación que le impone el artículo 166 del Código Adjetivo de la materia ya que existieron serios temores de que el presunto responsable se sustrajera a la acción de la justicia, toda vez que debido a la gravedad del ilícito cometido tiene señaladas las más severas penas privativas de libertad y por haber dañado bienes jurídicos de la mayor entidad social y humana, no sería lógico suponer que en caso de encontrarse en posibilidad de fugarse no lo hiciera. Además, el sujeto activo al cometer dichos ilícitos en todo momento trató de evitar dejar huellas en el lugar de los hechos y por otra parte haber fingido ser víctima de los supuestos delitos de robo y secuestro, procediendo a su detención en términos de lo dispuesto por los artículos 16 constitucional, 132, 266 y 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal."

74. Como puede apreciarse, el desarrollo mismo de las investigaciones no se detuvo, ni siquiera después de que el indiciado declaró haber cometido los homicidios, las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos no se terminaron por dicha circunstancia, por lo que la actividad desplegada por la autoridad investigadora fue continua, sería y objetiva, lo cual es un elemento más que desvirtúa la presunta detención ilegal del ahora sentenciado. La autoridad investigadora hizo su mejor esfuerzo para allegarse de los elementos objetivos y de convicción pertinentes en un plazo razonable.

75. Por lo que se refiere a la declaración autoinculpatoria del indiciado además de haber sido producida ante el Agente del Ministerio Público en presencia del defensor de oficio, no figura desde la consignación como el único o más relevante elemento de convicción, se trata de un conjunto de elementos, que concatenados unos con otros, hacen arribar a la convicción de que en los hechos violentos tuvo participación Alfonso Martín del Campo, como autor de los mismos.

- **Primera etapa de la instrucción en el proceso penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd.**

76. El Juez 55 Penal formalizó la recepción del inculpado puesto a su disposición y en esa misma fecha, siendo las 16:00 horas, procedió a recabar su declaración preparatoria. Cabe señalar que el Juez debe, por mandato constitucional y legal, determinar la situación jurídica del inculpado en el término de 72 horas, esto es, declarar o no comprobado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de aquel a quien se imputa su comisión;[94] para lo cual debe recabar la declaración preparatoria del inculpado dentro las primeras 48 horas de dicho término, de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 20 constitucional.[95]

77. Al inicio mismo de la primera diligencia ante el Juez 55 Penal, el inculpado señaló como su defensor particular al Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, quien aceptó dicho cargo asumiendo desde ese momento la defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd en el proceso penal que se le siguió por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado (agravado) cometido contra su propia hermana, Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba.

78. El Juez 55 Penal determinó el día 4 de junio de 1992, dentro del plazo señalado por la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, la situación jurídica del inculpado, fecha en que dictó el proveído conocido como auto de plazo constitucional o, en este caso, auto de formal prisión.

---

[94] El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba en su parte conducente: "Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la presunta responsabilidad del acusado..."

[95] La fracción III del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba: En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías: "III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria".

79. El Juez 55 Penal, en el auto de término constitucional, consideró que el cuerpo del delito de homicidio tipificado por las leyes, estaba comprobado con los siguientes elementos:

a) Con la fe que dio el Ministerio Público de cadáveres, lesiones y media filiación de Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba.

b) Con las actas médicas suscritas por médicos cirujanos adscritos a la Décima Delegación del Ministerio Público, en las que se hace constar que Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba presentaron signos de muerte real y reciente.

c) Con lo declarado por los testigos de identidad de nombres Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral, quienes reconocieron sin temor a equivocarse que los cadáveres correspondían a quienes llevaron en vida los nombre de Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba.

d) Con el dictamen de criminalística determinaron la hora en que aproximadamente perdieron la vida Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba, que coincide con la hora de sucedidos los hechos. Asimismo se señalan el número y tipo de las lesiones que presentaron éstos y la "ausencia de la huella de violencia en las puertas de acceso, ventanas, chapas de seguridad y cilindro de las mismas, tales como fricciones, hundimiento, descarapeladuras, rebabas, etcétera es de determinar que el victimario contaba con las llaves del lugar o bien con libre acceso al mismo. La presencia de objetos, aparatos, alhajas, etcétera de diferentes valores y distribuidos en todo el inmueble determinó que en dicho lugar no se presenta la modalidad de robo..."

e) Con los dictámenes suscritos por peritos médicos forenses relativo a la necropsia de los cadáveres de Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba, en los que concluye que fallecieron por las lesiones vicerales y tisulares causadas por instrumento punzo cortante.

80. Por lo que se refiere a la presunta responsabilidad de Alfonso Martín del Campo en la comisión de los homicidios por los que el Ministerio Público ejercitó acción penal, se encontraba demostrada, dentro del auto de término constitucional, por lo siguientes elementos:

a) Con lo declarado por Miguel Angel Gutiérrez Lara.

b) Con lo declarado por Inés Guzmán Sánchez.

c) Con lo declarado por Gerardo García Chavarría.

d) Con lo declarado por Raúl García Chavarría.

e) Con lo declarado por Nora María Violeta Garibay Martínez.

f) Con el informe y puesta a disposición suscrito por el Agente Sotero Galván Gutiérrez.

g) Con el dictamen de química forense de fecha 3 de mayo de 1992.

h) Con la fe ministerial dada por la autoridad investigadora sobre instrumentos del delito (cuchillos).

i) Con la inspección ocular practicada por la autoridad investigadora en la que se aprecia la ausencia de huellas de violencia en la entrada del domicilio.

j) Con la fe de ropas dada por la autoridad investigadora, en el sentido de que se tuvo a la vista diversas ropas, que presentaban manchas hemáticas, entre ellas un pantalón negro, una camisa de algodón, y una playera blanca, éstas últimas que vestía el inculpado.

k) Dictamen realizado por perito médico psiquiatra oficial, de fecha 31 de mayo de 1992, en el que se concluye que Alfonso Martín del Campo no presenta trastorno mental alguno, que tiene capacidad de querer y entender.

l) Con las diversas fotografías que corren agregadas en actuaciones, así como con la diligencia de reconstrucción de hechos practicadas por la autoridad investigadora. Asimismo, con la declaración del inculpado ante el Ministerio Público y su posterior retractación en la diligencia de declaración preparatoria.

81. El Juez 55° penal determinó que las probanzas presentadas adminiculadas recíprocamente arrojan hasta el momento indicios suficientes para establecer la probable responsabilidad del indiciado Alfonso Martín del Campo Dodd. El Juez reconoció que Alfonso Martín del Campo se había retractado de su declaración ante el Ministerio Público, y que había señalado haber sido presionado, golpeado y amenazado por los agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que así había sido como aceptó declarar, y que posteriormente lo llevaron al lugar de los hechos, donde le preguntaron cómo había hecho las cosas y que lo estuvieron fotografiando; asimismo, el Juez da cuenta de la narración Alfonso Martín del Campo acerca del supuesto ataque y secuestro que sufrió por parte de dos sujetos, hasta su llegada a la Oficina de la Policía Federal de Caminos luego de haberse accidentado el automóvil Thunderbird donde lo transportaban.

82. Con relación a este último relato sostenido por el indiciado, el Juez señaló "... que hasta ese momento de la presente resolución no aporta elemento alguno que acredite lo antes señalado, y sí por el contrario de sus propias declaraciones del inculpado, se desprende que se sitúa en circunstancias de modo y tiempo, lugar en que se dice sucedieron los hechos...", a mayor abundamiento el juez destacó que la chapa de la cajuela de donde supuestamente habría salido Alfonso Martín del Campo no presentaba huella alguna por manipulación de cuerpo duro, encontrándose en estado normal de funcionamiento, en tal sentido, no hay prueba alguna que desvirtúe las existentes en su contra.

83. Como resultado del análisis realizado por el Juzgador, éste determinó resolver:

a) Que Alfonso Martín del Campo Dodd quedaba formalmente preso como presunto responsable en la comisión del delito de homicidio, por el que había ejercitado acción penal el Ministerio Público.

b) Que por lo que hacía a las calificativas del delito (agravantes), éstas serían materia de estudio en el momento procesal oportuno.

c) Que se declaraba abierto el proceso penal ordinario, para lo cual se otorgaban a las partes 15 días a efecto de ofrecer pruebas, mismas que serían desahogadas en la audiencia fijada para el 14 de julio de 1992.

d) Que se hiciera del conocimiento del procesado y de su defensor el derecho y término para interponer apelación contra el auto de formal prisión.[96]

- **La primera instancia del proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd.**

84. Con el auto de formal prisión quedó agotada la etapa de preinstrucción y se dio inicio formal al proceso penal ordinario contra Alfonso Martín del Campo Dodd, inculpado de haber dado muerte a Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba la noche que transcurrió entre los días 29 y 30 de mayo de 1992.

85. Es importante resaltar un aspecto, en el ordenamiento jurídico mexicano dos tipos de procedimiento penal: el ordinario y el sumario. La diferencia entre la tramitación de ambos radica en que éste último procede sólo en casos muy precisos, cuyas características permiten que los plazos y términos de tramitación sean menores con respecto a los que contempla el de carácter ordinario.

86. Algunas de las hipótesis de procedencia de la tramitación del proceso penal sumario son: a) cuando se trate de delito flagrante, b) cuando exista confesión ante la autoridad judicial, o c) cuando sea ratificada la que se hubiere rendido con anterioridad. El hecho de que se haya ordenado la tramitación del asunto por la vía ordinaria, significa que a la declaración autoinculpatoria del presunto responsable no fue considerada más que un simple indicio, en virtud de existir una retractación de su confesión original.

87. El 10 de junio de 1992, el agente del Ministerio Público solicitó que se agregara al expediente del proceso, diversos dictámenes químicos y de fotografía, así como la Averiguación Previa 10ª/2160/992/05.

88. El defensor particular de Alfonso Martín del Campo Dodd, el Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, mediante escrito de fecha 25 de junio de 1992 ofreció como elementos de prueba, los siguientes: La ampliación de declaración de su cliente Alfonso Martín del Campo;[97] la ampliación de la declaración de los siguientes testigos: Inés Guzmán Sánchez, Nora María Violeta Garibay Martínez, Gerardo García Chavarría, Raúl García Chavarría, Miguel Angel Gutiérrez Lara; la ampliación del informes presentados por Sotero Galván Gutiérrez y por Víctor Ramón Zetina Vargas y Carlos Alberto García Urquiza; la pericial en materia criminalística a cargo de Juventino Montiel Sosa; la pericial en materia de mecánica automotriz a cargo de Mauro Zaragoza Vázquez; los careos que se llegaren a practicar; la presunción legal y humana que derive de las anteriores.

---

[96] El artículo 79 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece: "Artículo 79. Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando, notificada la parte, conteste expresamente de conformidad o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda".

[97] La declaración que sería ampliada es la que fue rendida ante el juez el 1° de junio de 1999.

89. El agente del Ministerio Público a cargo de sostener la acusación en el proceso, mediante escrito de fecha 25 de junio de 1992, ofreció como evidencias y medios de convicción los siguientes: ampliación de declaración del procesado Alfonso Martín del Campo Dodd; ratificación de informe y ampliación de declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara; ratificación de informe y ampliación de declaración de Sotero Galván Gutiérrez; ratificación de informe y ampliación de declaración de Víctor Ramón Zetina Vargas, Manuel Guillermo Hernández Ortega y Carlos García Urquiza; ampliación de declaración de Gerardo García Chavarría, Raúl García Chavarría, Nora María Violeta Garibay Martínez, Inés Guzmán Sánchez; testimonial de Claudia Rosales Pamani, Sergio Sierra Fuentes, Antonio Arreola Díez y peritaje a cargo de Genaro García Guerrero.

90. El juez, mediante proveído de esa misma fecha, certifica el ofrecimiento de pruebas de las partes en el proceso, haciendo las precisiones legales correspondientes respecto de ellas, y fija el día 14 de julio de 1992 para la celebración de la Audiencia inicial de desahogo o de práctica de dichas pruebas.

91. El 1° de julio de 1992, el agente del Ministerio Público solicitó que la Averiguación Previa número 10ª/2160/992/05, se tuviera debidamente agregada en la causa penal, habiendo sido ofrecida el 10 de junio de 1992.

92. Con motivo del desahogo de todas la pruebas ofrecidas por las partes, fueron celebradas un total de 7 audiencias en las siguientes fechas: 14 de julio, 20 de agosto, 24 de agosto, 9 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre, siendo la última de ellas la del 14 de diciembre de 1992.

93. Por lo que se refiere a la diligencia de careo judicial entre el Sr. Sotero Galván Gutiérrez y Alfonso Martín del Campo Dodd, celebrada el 9 de septiembre de 1992, la misma reviste especial relevancia en el presente caso, por lo que se transcribe a continuación (para la mejor comprensión de dicha diligencia lo escrito en cursivas corresponde a lo manifestado por Alfonso Martín del Campo Dodd y las mayúsculas a lo declarado por Sotero Galván Gutiérrez):

> CAREO ENTRE EL PROCESADO Y EL AGENTE DE LA POLICIA JUDICIAL, Enseguida se exhortó al primero y protesto al segundo para que se conduzca con verdad en la diligencia en que van a intervenir, se dio lectura sus respectivas declaraciones rendidas en autos, y se les hizo ver los puntos de contradicción, y puestos en formal careo del debate resultó:
>
> *Que el procesado le sostiene a su careado que miente, ya que lo llevaron a una oficina esta abajo de la delegación en la cual estaban como 12 agentes de la Policía Judicial lugar en donde lo golpearon y le decían que dijera cómo había matado a los hoy occisos*; A LO QUE LE RESPONDE SU CAREADO QUE NO ES CIERTO Y QUE INCLUSIVE LE MANIFESTARA A SU CAREADO QUE LE MANIFESTARA SI ESTABA AMENAZADO O NO A LO QUE SU CAREADO LE CONTESTABA QUE NO, QUE ÉL LOS HABÍA MATADO; *a lo que su careado le contesta que si estuvo tanto tiempo arriba como lo señala, cómo es que sus familiares nunca los vió en la delegación ni a ningún abogado y por lo que dice del café miente*, A LO QUE SU CAREADO LE CONTESTA QUE NO Y QUE INCLUSIVE ÉL LE DIO EL AGUA, Y LE SOSTIENE AL PROCESADO QUE

MIENTE YA QUE EL MANIFESTÓ QUE ÉL HABÍA SIDO, Y QUE INCLUSIVE MANIFESTABA QUE NO TENÍA QUE HECHARLE LA CULPA A OTRAS PERSONAS; *a lo que su careado procesado le contesta que no; que inclusive lo encueraron y le dijeron que con una lana iba a salir; y como el de la voz no decía que él había sido, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon en todo el cuerpo; que inclusive se iban turnando de dos en dos para golpearlo*, POR LO QUE CAREADO LE VUELVE A CONTESTAR QUE SI, *contestando en ese acto el procesado que hasta que le pusieron la bolsa tuvo que decir que sí firmaría su declaración*, VOLVIERON (SIC) A REITERAR SU CAREADO QUE EL PROCESADO MIENTE EN LO QUE DICE SU CAREADO y en lo demás cada quien se sostiene en lo que ya tienen declarado."

94. Por otra parte, el 6 de enero de 1993, es interpuesta una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se alega a favor de Alfonso Martín del Campo que había sido objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos en la etapa de Averiguación Previa, que en la declaración ministerial su firma había sido falsificada y que el automóvil en que había sido secuestrado no aparecía. Cabe señalar que en dicha queja, se omite informar a la Comisión referida, el estado del proceso a que estaba siendo sujeto Alfonso Martín del Campo, e inclusive sin haber siquiera esperado a que el Juez de la causa cerrara la instrucción, ya afirmaban categóricamente que "*en el proceso no existe nada que culpe al hoy procesado*". Dicha Comisión inicia el trámite de la queja y determina tiempo después darla por concluida durante el procedimiento, lo cual significa que las autoridades competentes tomarían conocimiento del asunto y, de hallarse elementos, procederían de acuerdo con sus atribuciones.

95. En uso de sus facultades legales, el Juez 55° Penal, solicitó para mejor proveer (ilustrar su criterio y hallar la verdad histórica de los hechos), la realización de dos diligencias probatorias adicionales. Con fecha 29 de enero de 1993 llevó a cabo personalmente la prueba de inspección judicial en el lugar de los hechos (el hogar del joven matrimonio masacrado) y el día 26 de marzo del mismo año, también en persona, la prueba de inspección judicial respecto del vehículo Thunderbird, en el que Alfonso Martín del Campo refiere haber sido "secuestrado". De ellas se probó dos cosas fundamentales, la imposibilidad de que dos sujetos hayan penetrado al domicilio de la familia Zamudio Martín del Campo, al existir diversos dispositivos de seguridad operantes y no encontrarse forzamiento alguno de entradas o cerraduras y, por otro lado, la imposibilidad de que una persona pudiera haber salido de la cajuela del vehículo de la manera en que describió el procesado.

96. En todas y cada una de las audiencias de desahogo de prueba, las partes estuvieron presentes y se les dio la debida oportunidad de intervenir en ellas, observándose además las disposiciones procesales del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y la garantía de audiencia (debido proceso legal).[98] El día 1° de abril de 1993, el Juez 55° Penal declaró cerrada la etapa de instrucción.

97. Posteriormente, una vez cerrada la instrucción por parte del juzgador, esto es, habiendo sido desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, así como las practicadas por el propio juez para mejor proveer, tanto el Ministerio Público (acusatorias), como el

---

[98] Ver informe del Juez 55° Penal rendido ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 1° de abril de 1993.

defensor particular de Alfonso Martín del Campo Dodd (exculpatorias), presentaron sus respectivos pliegos de conclusiones, el 15 y 16 de abril de 1993, respectivamente.

98. El 30 de abril de 1993, fue celebrada la Audiencia de Vista con relación a las conclusiones presentadas por las partes; en dicha ocasión tanto el Ministerio Público como el defensor particular de Alfonso Martín del Campo, ratificaron lo que había expresado en sus respectivos pliegos de conclusiones.

99. El 28 de mayo de 1993, el Juez 55° Penal emitió la sentencia de fondo de primera instancia en la causa penal 57/92, instruida contra Alfonso Martín del Campo Dodd por el delito de homicidio contra quienes en vida llevaran los nombre de Juana Patricia Martín del Campo y su esposo Gerardo Zamudio Aldaba. La sentencia consta de 41 fojas tamaño oficio, escritas por ambos caras (82 cuartillas) en las que el Juez analiza con detalle en los apartados relativos a Resultandos (cuestiones fácticas), Considerandos (aspectos de derecho aplicables) y Puntos resolutivos (decisión), el expediente penal del proceso contra Alfonso Martín del Campo, los respectivos argumentos tanto del Ministerio Público, como de éste último y de su defensor particular, las pruebas ofrecidas y desahogadas, el valor que con fundamento en derecho corresponde a las mismas, los elementos que demuestran la existencia del delito, así como la responsabilidad que corresponde al acusado en su comisión y el grado de culpabilidad de éste para la debida individualización de la sanción penal correspondiente.

100. Por lo que se refiere a la responsabilidad del procesado, el juez señaló en su sentencia que los elementos de prueba presentados, estudiados y valorados llevaban a tener por demostrada plenamente la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito cometido contra Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba, "... hechos probados y elementos de convicción a los que se hizo alusión y que generan indicios suficientes los que analizados en su conjunto en forma natural y lógica conducen de la verdad conocida a la que se busca hasta integrar la prueba presuncional o circunstancial con valor convictivo pleno".[99] (foja 29 anverso) Asimismo, en otra parte de la resolución se señala "... sin que sea atendible lo declarado por el procesado en su declaración preparatoria rendida ante éste Juzgado al señalar que les platicó a los judiciales la historia verdadera de los hechos y que le cambiaron todo, que lo estuvieron golpeando varias veces y le pusieron una bolsa en la cabeza, que los judiciales sacaron un pantalón de la casa y le decían que éste era de él, lo que no es cierto... " (foja 34 anverso).

101. El Juez dio cuenta de la versión de Alfonso Martín del Campo, tanto en la retractación de su declaración ante el Ministerio Público, como en la ampliación de declaración rendida en la etapa de desahogo de pruebas en el proceso. En la sentencia se señala sobre esto que ".... no

---

[99] En el orden jurídico mexicano existe una clara distinción entre el indicio y la presunción, el *indicio* es un hecho conocido susceptible de llevar racionalmente al conocimiento de otro hecho desconocido en virtud de la relación existente entre ambos. *La presunción* es la consecuencia obtenida por inferencia inductiva o deductiva del hecho conocido. El proceso racional que conduce al conocimiento de un hecho desconocido tiene como fuente un hecho conocido y probado plenamente por cualquier medio formal de prueba y una relación causal entre ambos es decir, entre el hecho conocido y el que se pretende conocer, es por lo que en derecho nacional la presunción *no constituye la suposición* de un hecho desconocido sino más bien *la consecuencia inducida o reducida del hecho conocido que conduce al conocimiento del hecho por conocer*. Este silogismo es en el que descansa la prueba iniciaría o circunstancial a que se refiere el numeral 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Por esta razón, este medio de prueba conduce a un mínimo de error para llegar a la certeza, pues en el caso en que los indicios no son suficientes para producir convicción, surge la denominada *duda razonable*, que en nuestro derecho nacional conduce por mandato legal y constitucional a la *necesaria absolución, del inculpado*.

obra prueba alguna que acredite plenamente que efectivamente dos sujetos entraron a su domicilio y son los que llevaron a cabo la comisión de los delitos que nos ocupan y por el contrario su manifestación de haber sido el procesado quien privó de la vida a los hoy occisos, y que después tomó el vehículo Ford Thunderbird color negro fraguando la forma de evadir su responsabilidad y simulando un secuestro, sí se encuentra corroborada con las pruebas antes especificadas y toda vez que dichas manifestaciones fueron rendidas por el acusado en su primera declaración, sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas, y por consiguiente deben prevalecer sobre las posteriores, y si bien señala el acusado que su confesión fue obtenida a base de golpes, amenazas y torturas, lo anterior no se encuentra corroborado ya que sí obra la fe judicial de las lesiones que presentó al rendir su declaración preparatoria, como se mencionó no obra prueba alguna que demuestre plenamente que dichas lesiones le fueron inferidas por elementos de la Policía Judicial para aceptar los hechos que se le imputan, sin que sea óbice para llegar a tal conclusión el careo celebrado entre el procesado y el policía judicial Sotero Galván Gutiérrez en el que el procesado le sostiene a su careado que lo golpearon, y éste le contestó que no es cierto e incluso le preguntó si estaba amenazado, contestándole el procesado que no y que el los había matado, a lo que el procesado le contestó que miente, que incluso lo encueraron colocándole una bolsa en la cabeza y golpeándolo en todo el cuerpo y lo hacían de dos en dos, a lo que su careado le vuelve a contestar que sí y vuelve a manifestar el policía judicial que su careado miente y por lo demás cada uno de los protagonistas de dicho careo se sostienen en lo que tienen declarado, y por otra parte existe lo manifestado por el acusado en el sentido de que las lesiones se las provocó al momento del choque del vehículo, otras el mismo se las infirió; situaciones éstas que manifiesta el defensor en su escrito de conclusiones y las que no son de tomarse en consideración por los motivos señalados..... Por otra parte, si bien es cierto que de la inspección ocular y judicial se desprende que se encontró un trozo al parecer de media de mujer en el interior de la cajuela del vehículo Ford Thunderbird, también lo es que como ya se dijo no se acreditó la existencia de los supuestos secuestradores, ni mucho menos aún que éstos se hayan quitado las medias que dice el procesado les cubría la cara o las hayan dejado en la cajuela, pues ni siquiera el mismo procesado hace manifestación alguna en este sentido ya que únicamente dice en su declaración exculpatoria, que los sujetos lo subieron a la cajuela y la cerraron... Asimismo, por lo que hace al dictamen oficial de cabellos en el que se concluye: Que los cabellos encontrados en el lugar de los hechos, así como en diferentes partes del cuerpo de la hoy occisa, son diferentes a los del procesado, es pertinente señalar que dicho a dicho sitio habían entrado varias personas después de los hechos, pudiendo pertenecer a cualquiera de dichas personas" (fojas 37 anverso y reverso y foja 39 anverso, énfasis agregado)

102. Por otra parte, en la foja número 40 de la sentencia, se señala textualmente:

"Para efectos de la individualización de la pena, éste Juzgado acata lo dispuesto por los artículos 320, en relación con el 51 y 52 del Código Penal, por lo que tomando en consideración la naturaleza dolosa de las acciones y la ferocidad empleada para ejecutarla; la extensión del daño causado y de que el acusado no corrió peligro alguno, que al momento de suceder los hechos, dicho acusado contaba con 26 años de edad, soltero, católico, comerciante, con instrucción de 2° semestre de administración de empresas, originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que no es afecto a las bebidas embriagantes, ni a ningún tipo de estimulantes, que no ha padecido ningún tipo de enfermedad, con un ingreso de tres millones de pesos mensuales, que no depende de él ninguna persona, que no cuenta con anteriores

ingresos a prisión, que entre el procesado y los ofendidos existían relaciones familiares, que el motivo que lo llevó a delinquir fue el hecho de que sintió coraje hacia el occiso porque éste le había reclamado la pérdida de un dinero, y que privó de la vida a la occisa a efecto de que no denunciara los hechos, que los hechos sucedieron en el domicilio que habitaban los ofendidos así como el procesado, todo lo cual revela una peligrosidad entre la media y la máxima, exactamente entre ambos extremos y toda vez que nos encontramos ante la presencia de un concurso real o concurso material de delito, será de imponerse la sanción del delito mayor que en el presente caso lo es cualquiera de los homicidios calificados, por lo que se estima justo y equitativo imponerle al acusado por el delito de homicidio en agravio de Gerardo Zamudio Aldaba una punición de 42 cuarenta y dos años 6 seis meses de prisión, y en uso de la facultad que le concede a este órgano jurisdiccional el artículo 64 del Código Penal, se le aumenta en 42 cuarenta y dos años 6 seis meses más por el diverso delito de homicidio en agravio de Juana Patricia Martín del Campo de Zamudio, ambas que sumadas nos dan un total de 85 ochenta y cinco años de prisión, pero en acatamiento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 64 antes mencionado y 25, del Código Penal, en el que se señala que el límite máximo de la pena será de 50 cincuenta años, por lo que en forma total y definitiva se le imponen a Alfonso Martín del Campo Dodd la pena de 50 cincuenta años de prisión, privativa de la libertad que deberá compurgar dicho sentenciado en el lugar que al efecto designe la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, computándose a partir de la fecha de su detención por motivo de la presente causa, que lo fue el día 30 treinta de mayo de 1992."

- **La tramitación y decisión de la segunda instancia del proceso seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd.**

103. En el punto resolutivo quinto de la sentencia condenatoria, el Juez ordena se le informe al sentenciado el derecho y término que conforme a la Ley tenía para interponer el recurso de apelación contra la misma, en caso de no estar conforme con ella, el cual fue de cinco días. El sentenciado y su defensor particular, el Lic. en Derecho José Faustino Mejía Hernández, fue debidamente notificado de la sentencia el mismo día de su emisión, el 28 de mayo de 1993, y en esa misma fecha y oportunidad Alfonso Martín del Campo plasmó de puño y letra su deseo de apelar la sentencia. (foja 41, reverso).

104. La presentación de los argumentos que sustentaron la apelación del sentenciado estuvo a cargo de una abogada defensora de Oficio, misma que presentó por escrito, el día 13 de julio de 1993, los agravios en contra de la sentencia de primera instancia. Dichos agravios consistieron en la supuesta violación a diversos preceptos del Código Penal, con respecto específicamente a al responsabilidad del sentenciado.

Entre los argumentos mencionados se hallan los siguientes:

> "... si bien se puede dar por acreditado el cuerpo del delito, no así responsabilidad de mi defenso"

"... esta Defensa Social considera que el Juez *a quo* sólo conjetura la participación de mi defenso en los hechos delictuosos, sin que los elementos allegados a la investigación sean suficientes para acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinado".

La defensa solicita que el órgano de apelación reste o, en su caso, anule el valor de las siguientes pruebas que obran en el proceso:

a) Las declaraciones de Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral.

b) La declaraciones de Gerardo García Chavarría y Raúl García Chavarría.

c) La declaración de Inés Guzmán Sánchez.

d) La declaración de María Violeta Garibay Martínez.

e) Las declaraciones de Bessie Dodd de Martín del Campo, José María Rosano Moreno, Roberto Chávez Reséndiz, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Oscar Moreno Espinosa.

f) La declaración de Sergio Sierra Fuentes

g) La declaración de Antonio Arreola Díez

h) La declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara.

i) La declaración de Víctor Ramón Zetina Vargas.

j) La declaración de Carlos Alberto García Urquiza y Claudia Rosales Pamanes.

k) La declaración de Sotero Galván Gutiérrez.

"Por lo que respecta a lo declarado por el agente de la Policía Judicial Sotero Galván Gutiérrez resulta inverosímil y poco creíble lo que manifiesta en cuanto a que mi defenso le señaló en forma espontánea y sin coacción alguna que el había causado la muerte de los hoy occisos ...."

"... resulta increíble que si como sostienen las autoridades ya mencionadas fraguó (Alfonso) la forma de cubrirse para que no se le inculpara por la muerte de los occisos, declara de buenas a primeras que él era el culpable, declaración rendida ante la policía judicial y que según menciona el Instructor es la misma que vierte en su declaración ministerial, pero que no ratifica en preparatoria, ya que manifiesta que fue coaccionado físicamente para que se inculpara él mismo, situación que se robustece con el certificado de lesiones que consta en autos y con lo manifestado con lo ya manifestado por el Federal de Caminos Víctor Ramos Zetina Vargas en cuanto a que mi defenso presentaba un golpe en la frente sin mencionar las escoriaciones que éste presentaba en el cuerpo, las cuales bien pudieron ser causadas como menciona mi defenso por los Agentes Judiciales; por lo que es de considerarse que su declaración inculpatoria rendida ante la Policía Judicial y que

ratifica en la ministerial carece de valor probatorio, toda vez que fue obtenida mediante coacción".

Por otra parte, menciona que a favor de la inocencia de su defendido operan, el dictamen pericial que señala que la cajuela del automóvil en donde se supone que lo secuestraron, sí puede ser abierta desde el interior y que había manchas de sangre humana en dicha cajuela. Además refiere que cabellos encontrados en el interior del auto y en un zapato tenis encontrado en la escena del crimen, no pertenecían ni a los occisos, ni al sentenciado, "lo que pone de manifiesto que bien puede ser cierto lo manifestado por mi representado en su declaración preparatoria en cuanto a que la muerte de los hoy occisos fue ocasionada por los individuos que penetraron a la casa y que posteriormente lo secuestraron."

105. Además del escrito de agravios presentado por la Defensoría de Oficio, Alfonso contó con la asesoría privada del Despacho Jurídico del Lic. Elías Cruz Delgadillo, según se aprecia en el escrito que por su propio derecho presentó en su favor ante el tribunal de apelación. Dicho escrito fue presentado de manera extemporánea el 15 de julio de 1993, pero se aprecia que el sentenciado se dice inocente y argumenta únicamente aplicación de diversos preceptos Constitucionales, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales.

106. En sus argumentos, el sentenciado afirma que el cuerpo del delito no se encuentra legalmente comprobado, "en virtud de que los vestigios o pruebas materiales de su perpetración fueron preparadas y dejadas en el lugar de los hechos por terceras personas con el propósito de hundirme, ya que los mismos objetos, no presentan ni huellas del exponente, ni huellas hemáticas que correspondieran a los hoy occisos ni al suscrito".

- "El juzgador no valoró ni tomo en cuenta el certificado de integridad física las lesiones que me causaron las personas que me secuestraron, y luego mis aprehensores como son dos golpes contusos en parte posterior de ambos parietales escoriaciones dermo epidérmicas en región paraexiliar del ojo izquierdo, escoriaciones en el lado izquierdo de la nariz, golpe contuso en la parte en que nace el bello de la frente, escoriaciones en rodilla derecha, máculas color rojo en la parte media de la cara, escoriaciones dermoepidérmicas en codo, y en dorso mano derecha".

- "El juzgador no valoró en mi beneficio dicho certificado de integridad física, sino todo lo contrario, ya que con el mismo acreditó que al secuestrarme y detenerme ejercieron violencia física en mi contra". "El certificado de estado físico ... no lo valoró en mi beneficio sino en mi perjuicio ya que con el mismo demuestro que fui objeto de secuestro ejerciendo actos de violencia en mi perjuicio".

- El juez no valoró: El informe de Policía Judicial que corre agregado en autos; el parte de accidente rendido por la Policía Federal de Caminos, con el cual dice demostrar el sentenciado que iba en la cajuela posterior; la reconstrucción de hechos no tiene ninguna validez jurídica; la primera declaración no tiene ninguna validez jurídica; la declaración de Inés Guzmán Sánchez, no fue valorada, las declaraciones de Gerardo García Chavarría, Raúl García Cavarría y Nora Violeta Garibay Martínez, no tienen tampoco validez jurídica.

- En la parte final del escrito de Alfonso Martín del Campo se señala "nombro como mi defensor en segunda instancia al señor Lic. Elías Cruz Delgadillo, a quien solicito se le haga saber su nombramiento para los efectos de la aceptación y protesta del cargo".

107. El día 15 de julio de 1993, a las 10:15 horas, los Magistrados dieron cuenta de las constancias y escritos de la defensa de oficio del sentenciado y del pedimento del Ministerio Público.

108. La resolución definitiva y de fondo fue emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993. La Sala mencionada asentó expresamente que de conformidad con la ley, supliría la deficiencia u omisiones que presentaren sus escritos de agravios.

109. De conformidad con la resolución de apelación, plasmada en 40 fojas escritas por ambas caras (80 cuartillas tamaño oficio), el cuerpo del delito de homicidio quedó comprobado con los siguientes elementos de convicción que tienen valor probatorio:

1. Con la declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara.

2. Con la inspección ocular, fe ministerial de cadáveres, lesiones, levantamiento y traslado de los mismos.

3. Media filiación y actas médicas, así como nuevo reconocimiento de los cadáveres.

4. Acta médica número 35, de fecha 30 de mayo de 1992.

5. Certificado de necropcia de fecha 31 de mayo de 1992, realizado al cadáver de Juana Patricia Martín del Campo.

6. Declaración de Alfonso Martín del Campo de la Peña.

7. Declaración de Oscar Moreno Espinoza.

8. Acta médica número 36, de fecha 30 de mayo de 1992.

9. Certificado de necropcia de fecha 31 de mayo de 1992, realizado al cadáver de Gerardo Zamudio Aldaba.

10. Declaración de Roberto Zamudio Aldaba.

11. Declaración de María del Carmen Aldaba Corral.

12. Fe ministerial de necropsias.

110. La responsabilidad penal de Alfonso Martín del Campo Dodd, en la comisión de los delitos de homicidio en agravio de su hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd, y su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, por los que lo acusó formalmente el Agente del Ministerio Público, *quedó plenamente comprobado de actuaciones, tomando en consideración el contenido de*

todos y cada uno de los elementos de prueba que quedaron transcritos en el considerando cuatro (la lista transcrita) y, además, por *el material probatorio siguiente*[100]:

- La declaración de Alfonso Martín del Campo Dodd, de 30 de mayo de 1992, en comparecencia ante el agente del Ministerio Público.

- La diligencia de reconocimiento de ropas e instrumentos del delito.

- Fe ministerial de cuchillos.

- Declaración de Inés Guzmán Sánchez.

- Dictamen de criminalística de campo 30 de mayo de 1992.

- Diligencia de reconstrucción de hechos de 30 de mayo de 1992, a las 22:15 horas.

- Dictamen criminalístico de cuchillos.

- Dictamen de criminialística emitido por el Perito tercero en discordia, Gregorio A. Ávila Olguín.

- Informe del área de criminalística de campo de la Procuraduría General de Justicia del D.F. de 30 de mayo de 1992.

111. En otras partes de la sentencia de primera instancia se aprecian los siguientes elementos relevantes:

- Alfonso Martín del Campo Dodd, en comparecencia ante el Ministerio Público, fue enterado de los hechos que se investigan, así como del delito de homicidio que se le imputa y la penalidad para el mismo, aceptando los hechos. (foja 24, reverso)

- La historia de enfrentamiento con dos agresores, supuestos homicidas, y de su posterior secuestro y escape, *lo inventó para evadir su responsabilidad en el homicidio*. (foja 27 reverso).

- Que no participó además de el sentenciado, otra persona en la comisión del delito. (foja 28 anverso).

- Que las lesiones que mostraba ante el Ministerio Público, fueron resultado del percance que tuvo en su huída y algunas de ellas auto infligidas. (foja 28 reverso).

- El Tribunal Superior de Justicia otorgó a la declaración ministerial de Alfonso Martín del Campo, más no a la que supuestamente realizó ante la Policía Judicial, valor probatorio ya que *fue producida de manera espontánea, no inducida, de hechos propios y en su contra y además, conforme al principio de inmediatez procedimental, pues la misma fue vertida por su producente con una marcada cercanía a los hechos que se*

[100] Sentencia de primera instancia.

realizan, sin el tiempo necesario para un aleccionamiento o reflexión acerca de establecer elementos de descargo a su favor (como en un momento determinado intentó hacerlo valer), tal como se evidencia con la puesta a disposición del encausado de mérito ante el Agente el Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en la Décima Agencia Investigadora, por parte del Agente de la Policía Judicial que dijo llamarse Sotero Galván Gutiérrez.... En donde se establecen las 13:30 horas, del día 30 de mayo de 1992, en que se efectúa dicha puesta a disposición, así como también la comparecencia de dicho servidor público ante el propio órgano investigador, circunstancias que hacen creíble lo declarado por el ahora procesado ante el representante social (foja 29 anverso).

- Alfonso Martín del Campo Dodd cambió su versión original y cayó en contradicciones, manifestando incluso que se encontraba en avanzado estado de ebriedad, por lo que no recordaba que había sucedido. (foja 29 reverso).

- La declaración ministerial de Alfonso Martín del Campo, no la supuesta declaración ante la Policía Judicial, misma en la que confesó y detalló su coartada, fue valorada por el órgano jurisdiccional como el único *indicio de prueba*, no señala que sea la única prueba, sino un mero *indicio*, que resultaba relevante *en cuanto al esclarecimiento de los hechos*, esto es, la verdad histórica de lo sucedido, así, *es el único que establece un panorama respecto de la forma en que acaecieron y los restantes elementos probatorios son indicios que la corroboran y la tornan verosímil, ya que como se ha anticipado, se aprecia de manera fehaciente, que la declaración del encauzado ofrece una secuencia causal, lógica, coherente y congruente de la que es posible vincular directamente la acción desarrollada por él y el resultado material conocido.* (foja 30 anverso)

- En la reconstrucción de hechos intervinieron el indiciado e Inés Guzmán Sánchez, quien hacia las labores del hogar para la familia, por lo que Alfonso Martín del Campo no fue el único que colaboró en dicha diligencia. Además a esta se suma el informe de área de criminalística de campo, suscrito por peritos en la materia, que evidencia *de manera por demás elocuente, la consistencia y verosimilitud de la mecánica relatada por el encausado, ya que, pormenorizadamente confirma todos y cada uno de los momentos relevantes derivados de su confesión* rendida ante el Ministerio Público.

- A mayor abundamiento, *las ropas que refiere el propio acusado uso al momento de llevar a cabo su conducta delictiva, consistiendo estas en una camisa color rojo*, presenta dos manchas, al parecer hemáticas; una playera blanca que también contiene manchas y embarraduras de líquido hemático; un pantalón color negro, que presenta manchas de líquido hemático, una al final de la bragueta y al lado izquierdo de la pierna del pantalón, todas ellas prendas que el inculpado reconoce de su exclusiva propiedad, sin temor a equivocarse, y son las mismas que llevaba puestas el día de los hechos. (foja 30 reverso).

- Otro elemento de cargo que corrobora la declaración del sentenciado son la mecánica de lesiones, plasmada en las necropsias realizadas a los cuerpos de los occisos. Foja 31 reverso. De tal manera, *que en base al conjunto de los elementos probatorios indicados con antelación entre los que destaca, como se ha anticipado y se reitera, la declaración confesoria del encauzado* (se refiere únicamente a la declaración Ministerial), *es factible*

formular un panorama coherente y verosímil acerca del modo en que ocurrieron los hechos, que motivaron la presente y sin que esta Sala revisora no pase inadvertida, la retracción que respecto a su declaración confesoria en la comisión de los hechos delictuosos que se le imputan, efectúa el ahora procesado ante el órgano jurisdiccional en vía de preparatoria en la que retoma el argumento con el que intentaba fallidamente, establecer elementos de descargo en su favor a propósito de evadir su responsabilidad penal en los mismos. (foja 32 reverso)

- Respecto de la retractación de la declaración ministerial ante el Juez de Primera Instancia, y de la ampliación de declaración del procesado, la Sala señaló que tales *argumentos no tienen valor probatorio alguno, en virtud de que se contraponen a la realidad de los hechos, así como se ven desvirtuados con el acervo probatorio contundente ya valorado que obra en su contra, resultando ser un elemento singular y aislado que durante la secuela procedimental no fue corroborado, ni apoyado con algún elemento convictivo de indubitable valor probatorio.* (foja 34 reverso).

- Con relación al dictamen sobre los cabellos encontrados y que no correspondían ni al procesado, ni a los occisos, si bien esto no se discute, es cierto *por una parte, de que dicho documento técnico científico también se desprende que cinco pelos de origen humano, de la región de la cabeza tomados de la mano izquierda de la occisa Patricia Martín del Campo, así como que un pelo único de origen humano de la región de la cabeza, tomados del pelo* (sic, dedo) *del guante proporcionado por el criminalista y, además, que cinco pelos de origen humano de la región de la cabeza tomados del piso del lado izquierdo, por debajo del asiento anterior izquierdo, a cinco centímetros del estribo del Ford Thunderbird color negro.... resultaron ser semejantes a los cabellos de la occisa, Patricia Martín del Campo* (foja 35 anverso).

- Otro punto importante es que la cajuela del automóvil, donde supuestamente estuvo maniobrando por espacio de más de una hora Alfonso Martín del Campo, de acuerdo con el perito en la materia <u>la chapa de dicha cajuela no mostraba huellas o indicios de manipulación</u> (foja 35 reverso). No obstante que según el procesado, había utilizado una llave de birlos en forma de "L".

- Las muestras de líquido hemático en diversos objetos (guante, cajuela, ropas, entre otros), presentados como evidencia, corresponden al tipo de sangre "o". Ambos occisos, comparten el mismo tipo de sangre con el sentenciado. Esto lo hizo evidente el perito Sr. Juventino Montiel Sosa, ofrecido por Alfonso Martín del Campo Dodd y su abogado el Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández.

112. Los anteriores elementos que pueden ser corroborados y ampliados con la lectura completa de la sentencia que se comenta, determinaron que la Sala del Tribunal Superior de Justicia decidiera en apelación y en definitiva, la responsabilidad de Alfonso Martín del Campo Dodd por la comisión de los delitos de homicidio calificado (premeditación, alevosía, ventaja y traición) en contra de sus propios familiares (hermana y cuñado), apoyada en elementos probatorios contundentes.

113. Por lo que se refiere al escrito de agravios presentado supuestamente por Alfonso Martín del Campo, por su propio derecho, este fue considerado extemporáneo y, además, carecía de un

elemento fundamental que es la propia firma del supuesto recurrente, por lo que fundadamente fue demeritado.

114. Con relación a la solicitud de la defensa, en el sentido de anular el valor probatorio de numerosos testimonios que obran en la causa penal, la Sala expresó *que no son los únicos elementos de convicción que obran en autos, ni en la presente resolución se les otorgó valor probatorio en contra del inculpado de mérito.*

115. En los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, se establece:

"Primera.- Se confirma la sentencia apelada en sus puntos resolutivos primero, tercero y cuarto, por ser acordes a la ley y a las constancias procesales.

Segundo.- Quedan intocados los puntos resolutivos segundo y quinto de la resolución impugnada, el primero por no ser materia de la Alzada y no irrogar agravios al inculpado recurrente y, el último por ser de carácter administrativo.

.....

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los CC. Magistrados de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."

116. El 19 de agosto de 1993, Alfonso Martín del Campo nombra como nuevo defensor particular al Licenciado en Derecho, Raúl Gil Letechipia, quien aceptó y protestó legalmente el cargo que se le confirió.

117. El 7 de septiembre de 1993, se interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja contra las autoridades del Reclusorio Preventivo Oriente en el Distrito Federal. Este expediente fue concluido por la CNDH el 22 de octubre de 1993, por haber sido resuelto durante el proceso, sin haberse determinado violación alguna a derechos humanos.

118. El 15 de noviembre de 1993, se interpuso una nueva queja ante la CNDH, en la que Alfonso Martín del Campo solicitaba su traslado a otro centro penitenciario, señalando la negativa de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación para satisfacer su solicitud. El expediente fue concluido por orientación al quejoso, el 25 de enero de 1944, toda vez que por no ser un asunto de la competencia de la CNDH, se hizo el trámite correspondiente ante la autoridad competente y se informó al quejoso sobre dicha gestión.

- **El procedimiento administrativo tramitado ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.**

119. El 4 de febrero de 1994, derivado de un procedimiento conciliatorio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, respecto de la queja presentada el 6 de enero de 1993 ante la primera, Dirección General de Asunto Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó al Contralor Interno de ésta última, procediera a realizar una investigación sobre las imputaciones hechas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera que, de encontrarse

elementos, independientemente de fincar la responsabilidad administrativa correspondiente, se diera vista al Ministerio Público para integrar la averiguación previa respectiva.

120. En consecuencia, el 14 de febrero de 1994, la Contraloría Interna de ésta última dicta acuerdo de incoación de procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Juan Carlos Badillo Sarabia, Delfino Javier Zamora Cortés (agentes del Ministerio Público) y Sotero Galván Gutiérrez (Policía Judicial), por presuntas infracciones al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fracciones I, V, XXII y XXIV, las cuales se transcriben a continuación.

Artículo 47:

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, y

XXIV.- La demás que le impongan las leyes y reglamentos.

121. El procedimiento tiene una finalidad administrativo-disciplinaria, esto es, se busca determinar únicamente, la existencia de una infracción a las disposiciones que rigen el servicio público, como las transcritas, a efecto, en su caso, imponer una sanción de tipo administrativo al servidor público que se encuentre responsable. Cabe aclarar que se trata de un procedimiento administrativo, no tiene el rigor, ni el carácter propio de un proceso jurisdiccional.

122. Apoya lo anterior, el hecho de que contra la imposición de este tipo de sanciones procede ante los órganos de justicia administrativa (órganos materialmente jurisdiccionales) el juicio de nulidad, y contra la decisión que se adopte en éste, es posible interponer el juicio de amparo ante los tribunales federales.

123. Como parte del procedimiento seguido ante la Contraloría Interna, se procedió a notificar y citar a los inculpados a la celebración de una audiencia, que se efectuó en tres fechas: 4 de marzo, 21 de abril y 4 de octubre, todas de 1994. En las audiencias se recabó la declaración a los servidores públicos sobre las conductas que les imputaban, mismas que fueron extraídas del escrito de queja interpuesto el 6 de enero de 1993, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (detención sin orden de aprehensión, incomunicación y tortura).

- Juan Carlos Badillo Sarabia negó rotundamente lo hechos que se le imputaban, por ser éstos falsos.

- Delfino Javier Zamora Cortés, que no había una imputación directa en su contra, y que Alfonso Martín del Campo nunca estuvo incomunicado, ni fue torturado y que, en cambio, siempre tuvo comunicación con sus familiares.

- Sotero Galván Gutiérrez, declaró que no detuvo a Alfonso Martín del Campo, en virtud de que éste estuvo en calidad de víctima, y que lo único que hizo fue ponerlo en su momento a disposición ante el Ministerio Público y, por lo tanto, Sotero negó todas las imputaciones que se le formulaban, señalando que no detuvo al quejoso, que jamás lo golpeó y que sólo hizo la debida puesta a disposición. Es importante llamar la atención, que la diligencia para recabar la declaración sobre las imputaciones contra dicho servidor público, se llevó a cabo estando este privado de su libertad por hechos diversos y ajenos al caso que nos ocupa.

124. Ninguno de los señalados acudió con asesoría jurídica, ni optó por aportar otros elementos que no fueran las propias actuaciones ministeriales en la Averiguación Previa, que dio origen al proceso por homicidio calificado, del que había sido encontrado responsable en segunda instancia Alfonso Martín del Campo. Lo anterior en virtud de que los hechos habían ocurrido alrededor de dos años, seis meses antes.

125. El 14 de octubre de 1994, la Contraloría emite una resolución en la que se aprecia lo siguiente:

a) Del considerando número I, se deduce claramente que el ordenamiento jurídico que la Contraloría únicamente debe y puede aplicar es solo la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

b) Del considerando número II, queda claro que las meras imputaciones (no hechos probados) contra los servidores públicos (detención arbitraria, incomunicación y tortura), serían confrontadas únicamente con las disposiciones de la Ley ya señalada. La Contraloría no es un órgano investido de facultades de investigación sobre posibles delitos, ni juzga sobre la probable responsabilidad penal o civil de los sujetos a procedimiento administrativo.

c) Del considerando III.3, se deriva que la Contraloría utilizó en efecto las actuaciones de la averiguación previa que originó la causa penal, respecto de la cual Alfonso Martín del Campo fue encontrado judicialmente culpable en primera y segunda instancias. Asimismo, se señala que las lesiones que presentaba éste último, eran exactamente las mismas antes y después de su declaración ministerial.

d) En el considerando III.6, la Contraloría refiere contar con la diligencia de careo entre el sentenciado y Sotero Galván Gutiérrez.

e) En el considerando V, la Contraloría cita la declaración de Juan Marcos Badillo Sarabia, quien afirma que una vez que Alfonso Martín del Campo fue puesto a disposición, "…. se le hicieron saber sus derechos y se le hizo de su conocimiento los hechos que se imputaban, asimismo, se le pasó al servicio médico y se le preguntó sobre las lesiones que presentaba, habiendo manifestado que se las originó al estrellarse en el

vehículo que tripulaba, que se autogolpeó para fraguar una coartada de un supuesto secuestro; que esto lo hizo libre de cualquier coacción y en presencia del defensor de oficio; en todo momento se le permitió hablar con sus familiares, quienes llegaron momentos después de que fue puesto a disposición, ya que incluso estuvieron presentes para declarar como testigos de identidad de los cadáveres y posteriormente a su declaración, fue pasado al área de seguridad, tomando en consideración su grado de peligrosidad....que el declarante en ningún momento se percató de que se le haya torturado e incomunicado...".

f) En el considerando VII.1 y VII.2, se afirma que los agentes del Ministerio Público "practicaron las diligencias pertinentes, por lo que ha dicha documental (la averiguación previa por homicidio en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd), se le otorga pleno valor probatorio". Asimismo, los mencionados agentes a cargo de la investigación, no detuvieron, ni incomunicaron, ni torturaron al sentenciado, lo cual significa que la declaración ministerial de este último fue válida y sin coacción alguna.

g) Por lo que se refiere a la responsabilidad de Sotero Galván Gutiérrez, se toma como elemento de convicción una única frase del careo sostenido entre éste y Alfonso Martín del Campo Dodd, pero se omite señalar que inmediatamente después de que aparentemente acepta haber golpeado a éste último, afirma de manera contundente en dicho careo que el procesado miente.

La Contraloría basa su determinación contra el Servidor Público referido, no en el hecho de que en efecto se haya comprobado que éste llevó a cabo las conductas que se le imputan, sino en que simplemente a juicio del órgano administrativo, *se concreto a negar los hechos.* En efecto, el servidor público negó los hechos pero ofreció la Averiguación Previa como prueba de su dicho, y la propia Contraloría dio a las actuaciones contenidas en la misma un valor probatorio pleno, esto significa que las lesiones que en efecto presentaba el entonces indiciado (Alfonso Martín del Campo), fueron aquellas que se produjo con motivo de los acontecimientos previos a su regreso al lugar de los hechos, la mañana del 30 de mayo de 1992.

126. El documento de la Contraloría resuelve:

"Primero. Los servidores públicos Juan Marcos Badillo Sarabia y Delfino Javier Zamora Cortes, no son administrativamente responsables de las faltas que se les imputaron, en términos del Considerando VII que informa este resolutivo.

"Segundo.- El servidor público Sotero Galván Gutiérrez es administrativamente responsable de las infracciones atribuidas en los términos de los considerandos VIII y IX, de esta resolución.

"Tercero.- Se inhabilita a Sotero Galván Gutiérrez por tres años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, a partir del día hábil siguiente al en que se le notifique esta resolución como quedó analizado en el considerando X".

El servidor público no tuvo más remedio que acatar la sanción que se le impuso, por verse imposibilitado para rebatir su legalidad y constitucionalidad estando en prisión preventiva, y careciendo de posibilidades para impugnarla jurídicamente, como procedía.

127. La Contraloría, sin salvar objeciones como las ya señaladas, declaró la responsabilidad administrativa de Sotero Galván por violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por simplemente haber negado lo que se le imputaba, esto es, no por haberlo en efecto cometido. Esta es la adecuada dimensión, alcances e interpretación razonables que debe darse al documento de dicho órgano administrativo.

128. No escapará a la honorable Corte que dicha sanción administrativa no constituye prueba alguna para los fines que pretendieron darle la Comisión y los propios peticionarios, quienes han intentado desde entonces dejar sin efecto un proceso penal y la totalidad de los numerosos elementos probatorios en que estuvo apoyado éste. Desde el punto de vista jurídico, la pretensión de los peticionarios sería tanto como permitir que un fallo definitivo emitido por la honorable Corte condenado a un Estado, se pudiera ver cuestionado y superado en jerarquía normativa y autoridad, por un informe de inadmisibilidad de la CIDH en el mismo caso, sobre los mismos puntos de hecho y de derecho, dictado además años después de que fue decidido en definitiva el asunto.

129. A mediados de 1994, Alfonso Martín del Campo solicita inexplicablemente a la CNDH, mediante una cuarta queja, su preliberación. El expediente fue concluido el 29 de junio de 1994, por orientación al quejoso, al tratarse de un asunto que de manera ostensible no corresponde a la competencia de la CNDH, habiéndose realizado el trámite correspondiente ante la autoridad competente y se informó al quejoso sobre dicha gestión.

130. El 21 de julio de 1994, la CNDH inició el expediente CNDH/121/94/DF/P05170.000 por motivo de una quinta queja presentada por el señor Martín del Campo en la que señala irregularidades en el traslado penitenciario que le fue concedido por la Secretaría de Gobernación, del Reclusorio Preventivo Oriente en el D.F. al Centro de Readaptación Social de Pachuca, Hidalgo. La CNDH emitió el 21 de junio de 1996 la recomendación 54/96, dirigida al Gobernador del Estado de Hidalgo, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y al Subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Esta recomendación se encuentra totalmente cumplida por las tres autoridades, habiéndose ingresado al señor Martín del Campo Dodd al CERESO de Tula de Allende, Hidalgo, el 23 de julio de 1996, donde ha continuado la compurgación de la pena que le fue impuesta por el brutal asesinato de su hermana y el esposo de ésta.

- **El inicio de la investigación por tortura y otros delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.**

131. El 13 de marzo de 1995, derivado de la resolución administrativa de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal emitida el 14 de octubre de 1994, se solicita el inicio de una investigación penal por la probable responsabilidad servidores públicos en la integración de la Averiguación Previa 10/2160/92-05, respecto de los homicidios de Juana Patricia Martín del Campo y de su esposo Gerardo Zamudio Aldaba. La Averiguación Previa solicitada fue iniciada y radicada con el número SC3839/95-03 el 23 de marzo de 1995 en la Dirección General de Investigación de Delitos contra la Seguridad de las Personas, las Instituciones y la Administración de Justicia, contra Juan Carlos Velázquez Manzanita, Juez 55° Penal; Arturo Vázquez Ortíz, Secretario de Acuerdos del Juzgado 55° Penal; Rolando Torres Martínez, Defensor de Oficio; Juan Marcos Badillo Sarabia, Agente del Ministerio Público; Sotero Galván Gutiérrez, Policía Judicial; Roberto Valero Chávez, Fiscal Especial;

Beatriz Araceli Minor Morales, Perito en Criminalística; Jesús López Sánchez, Perito Médico Forense; Manuel García Rebollo, Fiscal Especial; Ernesto Hernández Ramírez, Agente del Ministerio Público.

132. El 29 de marzo de 1995, los peticionarios presentan ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal un escrito en el que solicitan se investigue a Miguel García Rebollo, Roberto Balero (sic), Rolando Torres Martínez, Beatriz Minor Morales, Juan Carlos Velázquez Manzanita y Arturo Vázquez Ortíz, por *abuso de autoridad, conjunsión (sic) de funcionario, delitos que incurren los administradores de justicia (sic) etcétera.*

133. La Averiguación Previa fue tramitada e integrada con numerosas diligencias y declaraciones de los indiciados, a efecto de encontrar la verdad histórica de los hechos y determinar la responsabilidad que, en su momento, correspondiera a los servidores públicos enlistados. Debe señalarse que como parte de los documentos tomados en consideración, entre muchos otros, se encontraban los siguientes:

a) La resolución administrativa de la Contraloría emitida el 14 de octubre de 1994.

b) La ratificación del escrito de denuncia de Alfonso Martín del Campo de 6 de abril de 1995.

c) La declaración del propio Alfonso Martín del Campo, emitida el 11 de mayo de 1995.

d) Las comparecencias y declaraciones de los servidores públicos señalados en la denuncia de Alfonso Martín del Campo.

e) La causa penal 57/92 por la cual en primera instancia, Alfonso Martín del Campo fue declarado penalmente responsable del homicidio calificado cometido en agravio de su propia hermana Juana Patricia Martín del Campo y del esposo de ésta Gerardo Zamudio Aldaba.

134. Luego del análisis y estudio de las diligencias practicadas para integrar la investigación, el 1° de agosto de 1997 se concluyó que los hechos imputados a los servidores públicos ya mencionados no eran constitutivos de delito. En efecto, se arribó a la conclusión de que:

- No se acreditaron los elementos de los tipos penales sobre delitos contra la administración de justicia.

- No existen elementos que indiquen que en algún momento haya sido infringida la Ley, ni tampoco que haya existido abuso de autoridad y mucho menos la tortura física y psicológica que alega Alfonso Martín del Campo; tampoco se acreditó la privación ilegal de la libertad de éste último.

- No se actuó contra derecho en la elaboración de los dictámenes médicos ni periciales.

- El defensor de oficio asignado al sentenciado sí lo asistió y estuvo presente en la diligencias.

• Que Alfonso Martín del Campo y su defensor particular, no hicieron valer los recursos legales disponibles para inconformarse con las determinaciones que les fueron adversas.

• Que de la diligencia de careo entre Alfonso Martín del Campo y Sotero Galván, no se desprende que éste haya aceptado la imputación que se hizo, atendiendo a la última de las frases de dicho careo, en donde el último de los señalados desmiente lo que le atribuye su careado procesado.

• Que no existieron actos u omisiones indebidos que hubieran afectado al entonces indiciado.

135. Como consecuencia de lo anterior, el mismo 1° de agosto de 1997, fue elaborado un acuerdo fundado y motivado de no ejercicio de la acción penal. Dicha determinación fue notificada como procedía a los interesados, quienes en diciembre de 1997 manifestaron estar inconformes con lo resuelto.

136. No obstante que en su inconformidad los interesados no aportaron elementos novedosos, se determinó el 4 de marzo de 1998 la realización de diligencias complementarias para integrar debidamente la averiguación previa SC3839/95-03, dejando insubsistente la determinación de 1° de agosto de 1997.

137. Una vez reunidos elementos y consideraciones sobre la investigación, se fundó y motivo una nueva resolución de no ejercicio de la acción penal el 25 de mayo de 1998, misma que nuevamente fue notificada a los peticionarios, quienes el 2 de junio de 1998 aseveraron estar inconformes sin señalar los motivos y fundamentos adecuados de su negativa.

138. El 2 de julio de 1998 se confirma la procedencia de la decisión de no ejercicio de la acción penal de 25 de mayo de 1998. Con el fin de salvaguardar la certeza jurídica que debe regir en asuntos como éste, se remitió a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador todo lo actuado, determinándose el perfeccionamiento de algunas diligencias, incluyendo la resolución de la investigación sobre las imputaciones de cohecho hechas por Bessie Dodd.

139. El 26 de julio de 1999, por así resultar de lo actuado, se propone y confirma el no ejercicio de la acción penal por los ilícitos de abuso de autoridad, cohecho, tortura, concusión, encubrimiento y peculado, lo cual fue notificado nuevamente a los peticionarios. El 26 de enero de 2000, la Sra. Bessie Dodd se inconformó, pero no lo hizo ante el área institucional correspondiente, lo que impidió que la investigación fuera remitida al archivo.

140. Una vez que se corroboró la presentación de la inconformidad de los peticionarios, se determinó la continuación del trámite a efecto de estudiar lo planteado en ésta. Así, del análisis realizado se determinó la no comprobación de tortura, ni de elementos que la pudieran hacer presumir, así como la falta de elementos para acreditar el resto de las imputaciones contra servidores públicos, por lo que la denuncia presentada fue considerada improcedente e infundada, al igual que la inconformidad planteada. Asimismo, se da cuenta de que la denuncia misma de los hechos que dieron origen a la Averiguación Previa SC3839/95-03, fue llevada a cabo con posterioridad a que había sido dictada la sentencia de segunda instancia en el proceso

penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, esto es, habiéndose confirmado su responsabilidad por los homicidios.

En tal sentido, el 6 de junio de 2000 se resuelve en definitiva confirmar el no ejercicio de la acción penal planteado, lo cual de nueva cuenta es hecho del conocimiento de los peticionarios, con lo cual estos estarían en aptitud de agotar las instancias judiciales a su alcance. En efecto, el 30 de junio de 2000, Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo interpusieron una demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F.

El 14 de febrero de 2002, fue dictada la sentencia definitiva en dicho Amparo, en la que se resuelve en definitiva sobreseerlo, por actualizarse causales de improcedencia constitucional y legal en el mismo. De conformidad con el artículo 83, fracción IV de la Ley de Amparo, los promoventes del amparo tenían la posibilidad de interponer el recurso de revisión (apelación), contra la sentencia del Juez de Distrito, con motivo del cual podían también impugnar los acuerdos pronunciados en la misma. La sentencia no fue impugnada y adquirió el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales.

- **La demanda de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia en el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd.**

141. El 18 de junio de 1997, Alfonso Martín del Campo Dodd nombró a otros dos abogados particulares para hacerse cargo de la interposición del juicio de amparo directo (casación federal), contra la sentencia definitiva de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993. En esta ocasión el sentenciado nombró los Licenciados en Derecho Joel Amparo Lara y Alberto Díaz Munguieta.

La demanda de amparo expresó únicamente cuatro conceptos de violación, que se reseñan a continuación:

a) El primero de ellos consistió en que durante la causa penal, fueron emitidos dos dictámenes, uno oficial y otro ofrecido por la defensa, respecto al estado de la chapa de la cajuela del automóvil, del cual habría salido después de más de una hora de maniobrar con una Llave de birlos en forma de "L", Alfonso Martín del Campo Dodd, y también sobre la mecánica de apertura de dicha cajuela. La chapa de la cajuela estaba intacta, no presentaba, ni por dentro, ni por fuera, rasgos de manipulación, forzadura u otros. El perito oficial señaló que dicha cajuela podría ser abierta directamente con la llave o estando el "swicht" del auto encendido, por ser éste eléctrico. El perito de la defensa, agregó una tercera opción, que era la apertura desde dentro, accionando un mecanismo de la propia chapa, lo cual sólo agrega como hipótesis que puede en efecto abrirse desde dentro, pero no prueba en modo alguno toda la fantástica historia del sentenciado.

b) El segundo, consiste en que se omitió supuestamente valorar pruebas que pudieran beneficiar al quejoso, algunas de las cuales no fueron precisadas ni siquiera como agravio en la interposición de la apelación correspondiente. La defensa de Alfonso Martín del Campo establece como parámetro para su análisis, preceptos que no estaban en vigor en la fecha de ocurridos y decididos los hechos.

c) El tercero, consistió en una solicitud de que le fueran aplicadas al quejoso, reformas Constitucionales realizadas después de haber sido decidida en segunda instancia y, por lo tanto, en el fondo, la responsabilidad penal del sentenciado. Incluso los criterios judiciales que citan los abogados, no obstante su inaplicabilidad manifiesta, son incluso de años posteriores a la resolución definitiva del caso.

d) El cuarto, se traduce en una petición, dejando de lado por completo sus afirmaciones sobre la injusticia del proceso penal, en el sentido de que le debió haber sido aplicada a su cliente una pena de prisión menor, con base en una revaloración de la culpabilidad de éste. Al parecer los abogados no tomaron en cuenta que en realidad Alfonso Martín del Campo fue sentenciado por cada uno de los homicidios a 42 años de prisión, con seis meses, que en conjunto daban una pena de 85 años de prisión, la cual fue reducida al margen mínimo siguiente permitido por el orden jurídico mexicano, esto es, no obstante haber sido condenado por la comisión de dos homicidios calificados, se le impuso una pena de 50 años de prisión.

142. El 13 de agosto de 1997 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, admitió y radicó la demanda con el número 2004/97-475, para cuyo trámite le fue remitido el expediente del toca penal 454/93, y las constancias que lo integraron. El Tribunal Colegiado de Circuito emitió su resolución el 2 de diciembre de 1997, en la que aprecia el estudio completo que realizó a las constancias ofrecidas, a efecto de decidir sobre los planteamientos jurídicos de los abogados particulares de Alfonso Martín del Campo.

143. Los planteamientos fueron atendidos uno a uno, confrontándolos y valorándolos a la luz de las constancias ofrecidas, de la actuación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de conformidad con la Constitución y las leyes aplicables.[101]

144. De la parte de análisis y estudio que lleva a cabo el Tribunal Colegiado de Circiuto se puede deducir lo siguiente:

1. Que no habiendo contradicción entre los peritajes de mecánica, pues uno de ellos contempla tan sólo como hipótesis una tercera vía de apertura de la cajuela, no había razón legal para citar a un perito en discordia.

2. Que el Tribunal Superior de Justicia si tomó en consideración la retractación del reo, pero éste no aportó pruebas que justificaran jurídicamente la misma o la hicieran siquiera verosímil. Que también valoró los dictámenes periciales, y no se apartó del derecho por haber concedido valor a la confesión ministerial del sentenciado, la cual no se acreditó que hubiera sido arrancada por coacción.

3. Los dictámenes periciales no son una prueba en sí mismos, sólo son opiniones técnicas cuya utilidad es orientar el arbitrio judicial, pero no le resultan imperativos a éste, para emitir su determinación en un sentido u otro, a la luz de los elementos de convicción disponibles.

---

[101] Ver fojas 3 a 81 de la sentencia de Amparo Directo.

4. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue adecuadamente fundada y motivada, incluso en las partes que resto valor probatorio a algún elemento o fortaleció a otro.

5. Por lo que hace a los cabellos encontrados en la escena del crimen y en el automóvil involucrado, en el caso de los últimos se asemejan a los de Juana Patricia Martín del Campo y en el caso de los primeros se acepta que la presencia de un número amplio de personas en la escena, lo que podría explicar su hallazgo.

6. Sobre la sangre hallada en diversos objetos, ropas, etcétera, se confirma que era del tipo "O", que comparten los occisos y el propio sentenciado, como lo señalaron los dictámenes respectivos.

7. No resulta aplicable de manera retroactiva el artículo 19 constitucional reformado en 1993, relacionado con las calificativas del delito, puesto que el propio Juez no las contemplo en el auto de formal prisión, sino que traslado su decisión sobre las mismas en la etapa procesal pertinente.

8. El grado de culpabilidad del sentenciado fue adecuadamente valorado.

145. En virtud de que no se apreció deficiencia en la expresión de los conceptos de violación (recuérdese que fueron abogados particulares quienes representaron al sentenciado en esta etapa), no había lugar a la suplencia de la queja deficiente, por lo que tomando en cuenta el estudio de los considerandos y resultandos, el Tribunal Colegiado de Circuito decidió el 2 de diciembre de 1997 que no era procedente amparar al quejoso, por lo que implícitamente la determinación que se impugna fue apegada a la Constitución Federal y a las leyes y, por lo tanto, se le negaba el amparo (esto es, fueron declaradas infundadas las pretensiones de la defensa en el recurso extraordinario de nulidad -casación-, con lo cual se fortaleció el carácter de cosa juzgada de la decisión definitiva del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 17 de agosto de 1993).

146. Por disposición de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las determinaciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, que deciden en única instancia los juicios de amparo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio, son inatacables. Sólo en casos de verdadera excepción, cuando dichos Tribunales Colegiados en su sentencia hubieren declarado inconstitucional una ley federal o local, un tratado internacional, o un reglamento federal o local o bien, hayan realizado la interpretación directa de un precepto de la propia Constitución, resulta procedente el recurso de revisión (apelación), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 107 Constitucional, fracción IX y 83, fracción V de la Ley de Amparo).

147. No obstante la limitación precisa y expresa de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo, y de resultar notoriamente improcedente, los peticionarios interpusieron infructuosamente un recurso de revisión (apelación), el 14 de enero de 1998, mismo que en efecto fue conocido y resuelto como improcedente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de febrero de 1998, de manera que quedaba más que confirmada la decisión de dicho Tribunal Colegiado y, por lo tanto, de manera implícita, también el carácter inalterado de la cosa juzgada de la decisión definitiva del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 17 de agosto de 1993.

- **La queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.**

148. El 13 de julio de 1998, más de siete meses después que el Tribunal Colegiado de Circuito emitiera la decisión de fondo en el juicio de amparo interpuesto por los peticionarios, éstos acudieron a plantear una queja ante la CIDH, esto es, más de seis años después de ocurridos los supuestos hechos de tortura y pasados cinco años luego de que fue dictada la sentencia de segunda instancia que decidió en definitiva el proceso, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993. Cabe enfatizar que con ésta última, los recursos ordinarios disponibles estaban agotados, aún cuando fueran desfavorables a las pretensiones del sentenciado y de su defensa.

149. En la queja remitida vía fax a la CIDH, se señala que Alfonso Martín del Campo Dodd es de nacionalidad estadounidense. Se hace referencia a la sentencia del Juez 55° de lo Penal dictada en la causa penal 57/92, pero se omite precisar la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de 17 de agosto de 1993.

Sobre el punto particular acerca de la nacionalidad del sentenciado, es pertinente señalar lo siguiente:

Alfonso Martín del Campo es hijo de Bessie Dodd Burke (de nacionalidad mexicana, originaria de Etzatlán, Estado de Jalisco) y de Alfonso Martín del Campo de la Peña (de nacionalidad mexicana, originario de Pachuca, Estado de Hidalgo). Por tal motivo, Alfonso Martín del Campo es mexicano de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala textualmente:

"Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A).- Son mexicanos por nacimiento:

I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional"

Si bien los peticionarios exhiben una fotocopia de un documento al parecer emitido por autoridades de los Estados Unidos de América, en el que se señala que Alfonso Martín del Campo nació en Chicago, Estados Unidos de América, también lo es que en todos los procesos y trámites ante las instancias mexicanas ha manifestado ser originario del Estado de Hidalgo, México.

Inclusive en el acta civil que exhiben los peticionarios de la unión matrimonial entre Alfonso Martín del Campo y Janeth Martínez Cruz, tanto ésta y sus padres, como Alfonso y sus padres manifestaron ser de nacionalidad mexicana. Existen documentos públicos en los que se señala que Alfonso Martín del Campo Dodd fue registrado ante las autoridades nacionales y nació en México el 11 de enero de 1966.

La propia Embajada de los Estados Unidos de América en México se ha dado por enterada del asunto por lo menos desde 1994 y ha limitado su actuación a dirigir comunicaciones a las autoridades mexicanas a cargo del caso y ha solicitado información, misma que le ha sido brindada de manera oportuna. Los siguientes, son sólo algunos ejemplos que confirman lo anterior:

- El 25 de marzo de 1994, la Embajada Americana dirigió un escrito al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que refiere que la Sra. Bessie Dodd Burke, proporcionó a dicha misión una copia del oficio SGDH/949/94 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y solicitaba información sobre los alegatos de presuntas violaciones a los derechos humanos contra Alfonso Martín del Campo. A esta comunicación se dio respuesta el 5 de abril de 1994 por parte de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

- El 19 de septiembre de 1997, la Embajada Americana dirigió una comunicación al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitándole que el amparo interpuesto el 19 de junio de 1997, fuera una resolución justa y apegada a derecho. Dicho documento fue remitido y puesto en conocimiento de la CIDH por los peticionarios el 13 de julio de 1998.

- El 7 de enero de 1998, se remite otra comunicación de la Embajada Americana, en la que solicita los resultados de la investigación ordenada por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. A esta comunicación se le da respuesta el 30 de mayo de 1998, en la que se informa sobre el resultado del procedimiento de responsabilidad administrativa incoado a diversos servidores públicos de dicha Procuraduría.

- El 26 de julio de 2002, el propio Embajador de los Estados Unidos de América en México remitió un escrito al Procurador General de la República en el que manifiesta su preocupación sobre el asunto y manifiesta que sabe que el caso está siendo tramitado ante la CIDH.

- El 15 de agosto de 2002, el Cónsul de la Embajada Americana solicitó directamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal información relativa al caso y sobre la reapertura de la averiguación previa SC/3839/95-3. A dicha comunicación se dio respuesta en agosto de 2002, invitándolo a hacer su solicitud de información a las autoridades diplomáticas mexicanas.

150. En la queja interpuesta ante la CIDH el 13 de julio de 1998, por cuanto a las supuestas violaciones que se denuncian, se señala:

"El 30 de mayo de 1992, mi hermana y mi cuñado fueron asesinados por individuos desconocidos en nuestro domicilio de la ciudad de México. Al mismo tiempo fui secuestrado y posteriormente detenido arbitrariamente y torturado para hacerme firmar una confesión ministerial que me inculpaba. Después fui consignado legalmente y fue sentenciado a cumplir una condena de 50 años de prisión por un Secretario de Acuerdo y no por un Juez.

Todas las pruebas están a mi favor, como por ejemplo: cabellos, no hay huellas, no hay testigos, no hay sangre mía en la escena de los hechos, incineraron las ropas, etc. No hay nada que me involucre en los hechos o que se presuma que estuve en la escena de los hechos, y las que hay me benefician, sin embargo, no se tomaron en cuenta las pruebas que me benefician. Únicamente se tomó en cuenta la inverosímil, ilegal e incongruente confesión ministerial para establecer mi presunta responsabilidad. No tuve abogado, no tuve representante consular de mi país (líneas ilegibles)"

151. La Comisión Interamericana, en una nota de fecha 10 de agosto de 1998, informa al quejoso:

"…. que esta Secretaría no puede, por el momento, dar trámite a su comunicación debido a que la información contenida en ella no satisface los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial, en los artículos 32, 33, 34 y 37, copia de los cuales acompañamos a la presente.

En consideración a ello, para los efectos correspondientes, le rogamos nos envíe, en el momento oportuno, la siguiente información:

a) Relación específica de los hechos que considera violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enumerando los artículos respectivos:

b) Sentencia definitiva de la jurisdicción interna respecto a los hechos denunciados".

- **La decisión de las comisiones de derechos humanos acerca de la inexistencia de tortura y de violaciones a los derechos humanos de Alfonso Martín del Campo Dodd.**

152. El 3 de noviembre de 1998, habiéndoles sido adversa la sentencia de amparo directo al sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd, y más de cinco años después de dictada la sentencia definitiva de fondo, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Bessie Dodd Burke de Martín del Campo, padres del sentenciado, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que fue remitida por incompetencia a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la que solicitaron:

a) Se forme una comisión especial e inicie una nueva línea de investigación, ya que consideran que el móvil del homicidio (presuntamente cometido por familiares de Gerardo Zamudio Aldaba) es el cobro de un seguro de vida por la cantidad de $2'950,000.00 dólares estadounidenses, y

b) Se declare nula la confesión de su hijo Alfonso Martín del Campo Dodd, ya que presuntamente fue obtenida por medio de tortura, infligida por un agente de la Policía Judicial del Distrito Federal. Además, refieren que su hijo fue asistido en su declaración por un supuesto defensor de oficio que no contaba con cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho.

153. Al respecto, la CDHDF inició el expediente número CDHDF/121/98/BJ/N4489.000 realizando las siguientes acciones:

El 10 de noviembre de 1998 dos visitadoras de la Comisión efectuaron una entrevista con el sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd, en el Centro de Readaptación Social de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.

En esa misma fecha, el Director del Centro de Readaptación Social proporcionó copia simple del certificado del estado físico de ingreso del señor Alfonso Martín del Campo Dodd al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en la Ciudad de México, elaborado el 1 de junio de 1992.

El 24 de noviembre de 1998 la CDHDF solicitó al Juez Quincuagésimo Quinto Penal del Distrito Federal copia del expediente de la causa penal 57/92. En dicho expediente constaban diversos certificados de integridad física del presunto agraviado y su declaración ministerial del 30 de mayo de 1992, en el sentido de que él mismo se causó las lesiones que presentaba, algunas intencionalmente para reforzar su coartada, y otras al cometer los homicidios y al chocar, posteriormente, el vehículo en que viajaba.

154. Al emitir su opinión, la médica legista de dicha Comisión analizó los siguientes documentos:

a) Estudio coprológico realizado en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de fecha 29 de mayo de 1992 (sic), a las 12:10 horas, con los siguientes datos: forma de nalgas masculinas, sin lesiones anales ni perianales; mucosa normal sin secreción; esfínter elástico; ano infundibuliforme; pliegues normales; no hay incontinencia fecal; no hay erosión en la mucosa, y no hay síntomas ni signos que indiquen en el momento del examen la presencia de enfermedades venéreas.

b) Certificado de estado físico de Alfonso Martín del Campo Dodd, expedido en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 29 de mayo de 1992 (sic), a las 14:00 horas, suscrito por el doctor Jesús López Sánchez. En él se registran dos golpes contusos en la parte posterior de ambos parietales; una escoriación dermoepidérmica en la región paraexiliar del ojo izquierdo; una escoriación del lado izquierdo de la nariz; un golpe contuso en la parte en que nace el vello de la frente; una escoriación en la rodilla derecha; máculas de color rojo en la parte media de la cara, y una escoriación dermoepidérmica en el dorso de la mano derecha.

c) Dictamen de psiquiatría forense realizado por el doctor Guillermo León González, de la Dirección General de Servicios Periciales, de fecha 31 de mayo de 1992, en el que concluyó que el examinado no presenta en ese momento ningún trastorno mental, y tiene capacidad de querer y entender.

d) Certificado de estado físico, expedido en el Servicio Médico del Reclusorio Oriente, de fecha 19 de enero de 1994, a las 10:48 horas, suscrito por el doctor Héctor Arturo Guzmán Aguirre, que es una copia fiel de la certificación de fecha 1° de junio de 1992. En él se registra que Alfonso Martín del Campo presentó una laceración en el labio superior del lado derecho, una herida no suturada de 2 centímetros con costra serohemática en la región parietal del lado derecho; escoriación en la pirámide nasal, en la región cigomática y en la mejilla del lado izquierdo, y una equimosis del tercio superior en la cara externa del brazo derecho, de color verde amarillento. Lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días.

155. La médico legista concluyó que:

"a) No es posible determinar las características de los agentes lesionantes, en virtud de que no se describen las dimensiones y forma de la lesiones.

b) No se puede determinar la mecánica de las lesiones que presentó en la cabeza, pero con base en la versión del presunto agraviado (los sujetos que entraron a su domicilio lo golpearon con unas figuras de porcelana en la cabeza y en la cara, y le rompieron 5 o 6 figuras de porcelana en la cabeza), existe un alto grado de posibilidad y de probabilidad que las lesiones que presentó -en el primer certificado- a nivel de los parietales, la frente, el ojo izquierdo, la nariz, y en la parte media de la cara, correspondan con ésta versión ya que se encuentran distribuidas anatómicamente en las regiones que él señaló.

c) En la segunda certificación, apareció una lesión nueva, la herida en la región parietal derecha, la cual correspondería con uno de los tres golpes contusos en la cabeza certificados en la primera revisión, es altamente probable que esta lesión se la ocasionaran al romperle una figura de porcelana, ya que el también manifestó que: al subirlo a la cajuela ya presentaba varias lesiones, por lo que la cajuela tenía huellas de sangre.

d) De haber sido lesionado totalmente como el refirió, debió de haber presentado múltiples equimosis a nivel del muslo izquierdo, las piernas y los costados.

e) Refirió que en cuatro ocasiones le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza con la finalidad de asfixiarlo para que se declarara culpable; sin embargo, la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza no deja huella de lesión".

Con relación al pedimento de la quejosa en el sentido de la CDHDF intercediera para que la misma fuera atendida por el delegado de la PGJDF en Benito Juárez, se solicitó a éste último por escrito que atendiera a dicha persona.

156. En otro punto de dicha determinación se señaló expresamente: "Respecto de la solicitud de que se declarara nula la declaración que rindió su hijo, este organismo aún cuando hubiese comprobado violación a derechos humanos en ese aspecto y emitir una Recomendación, carece de competencia para anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia...Aunado a lo anterior, la confesión que refiere la quejosa, fue materia de valoración por parte de la autoridad judicial, en primera y segunda instancia, así como en el juicio de amparo, por lo que, al tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional, tampoco se surte nuestra competencia".

157. El expediente de queja CDHDF/121/98/BJ/N4489.000 se concluyó el 29 de enero de 1999 por orientación al remitir a la quejosa ante la PGJDF para que fuera atendida, y por no haberse comprobado violación a derechos humanos por lo que se refiere al resto de las pretensiones que motivaron la queja.

158. Los quejosos se inconformaron con la determinación de la CDHDF y acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a interponer un Recurso de Impugnación previsto en la Ley de esta última, el cual fue radicado con el número de expediente CNDH/121/99/DF/I00051.000.

Dentro de la investigación realizada por la CNDH, la médico legista de la CDHDF ratificó su opinión médica el 26 de marzo de 1999, y determinó como conclusión final, que no hay evidencia médico legal de que Alfonso Martín del Campo Dodd haya sido objeto de actos de tortura por parte de servidores públicos.

En consecuencia, el expediente CNDH/121/99/DF/I00051.000 fue concluido el 31 de agosto de 1999, por carecer de sustento jurídico los agravios que hicieron valer los recurrentes.

159. Las determinaciones de ambas Comisiones de Derechos Humanos, basadas en elementos de prueba y análisis minuciosos, incluyendo las propias declaraciones y manifestaciones de Alfonso Martín del Campo, contradicen de manera sustantiva y frontal el sentido y alcance que han pretendido dar los peticionarios a la decisión administrativa de la Contraloría contra el agente Sotero Galván Gutiérrez.

160. Los peticionarios, atento a lo que indicó la prevención de la CIDH de 10 de agosto de 1998, debieron haber remitido a esta última, además de la narración de los hechos considerados como violatorios de la Convención, la sentencia definitiva de la jurisdicción interna, esto es, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993.

No obstante lo anterior, en lugar de cumplir la prevención ya señalada, deciden para efectos de evitar la caducidad de los seis meses, previstos en el artículo 46 de la Convención Americana, interponer casi un año más tarde, el 6 de abril de 1999, el recurso excepcional de reconocimiento de inocencia del inculpado ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es decir, cerca de seis años después de que el asunto adquirió el carácter de cosa juzgada.

Una vez alcanzado a cubrir, supuestamente, el requisito de temporalidad, la decisión de los peticionarios de agotar el reconocimiento de inocencia tenía otro objetivo, evitar que la Comisión Interamericana, como en efecto procedía, determinara la falta de agotamiento de recursos internos.

161. El 14 de diciembre de 1998, la Sra. Bessie Dodd Burke, compareció ante la Agencia del Ministerio Público No. 10 a efecto de presentar una denuncia en su nombre, en el de Alfonso Martín del Campo de la Peña y en representación de las menores Brenda, María Fernanda y Tamara de apellidos Zamudio Martín del Campo por diversos delitos contra la vida, la libertad personal y de carácter patrimonial, que imputaba a José Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral, Enrique Said Saab Aldaba, Bernardino Girón Ríos, Claudia Zamudio Aldaba, Nora Violeta Gariba, Jorge Rivera Merino, María Luisa Calcagne, Carmen Tayde Zamudio Aldaba, Gerardo García Chavarría, Roberto Zamudio Trejo y a Inés Guzmán Sánchez;

Entre 1998 y 2000 se agregan al expediente constancias de diversas averiguaciones previas en que se mencionaba como indiciado a José Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral, así como la averiguación previa y proceso seguido en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd.

El 27 de marzo de 2000, se dictó un acuerdo mediante el cual se hizo constar que la averiguación previa 10/6269/98-12 fue remitida y radicada en la Fiscalía de Abatimiento al Rezago, a fin de practicar las diligencias que conforme a derecho procedan.

El 26 de mayo de 2000, se citó a comparecer a la Sra. Bessie Dodd Burke, quien entregó al Ministerio Público lo que denominó nueva evidencia para la investigación, consistente en copias simples de la averiguación previa SC/6135/95-05, copia simple del informe elaborado por la Policía Judicial del Distrito Federal, en el cual se hace mención de todos los lugares donde se ha intentado ubicar a José Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral, y copias simples de diversas publicaciones del periódico Excelsior.

El 18 de julio de 2000 el Ministerio Público encargado de la investigación giró orden de localización presentación a efecto de que comparecieran José Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral. El 21 de julio de 2000, la Dirección General de la Policía Judicial del DF informó que no había sido posible localizar a las personas referidas.

El 25 de mayo de 2001, el Ministerio Público acordó proponer el no ejercicio de acción penal de la averiguación previa 10/6269/98-12, por evidenciarse que las imputaciones no se encontraban corroboradas por elementos de convicción alguno, que acreditaran el cuerpo de los delitos que se imputaban. Los peticionarios se inconformaron contra dicha determinación.

El 12 de agosto de 2002, la Averiguación Previa 10/6269/98-12 fue radicada en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, a efecto de perfeccionar su integración.

El 29 de noviembre de 2002, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas informó que una vez efectuada una búsqueda exhaustiva en los archivos de las compañías aseguradoras, las mismas han manifestado que no fue se localizo seguro alguno a nombre de los occisos Juana Patricia y Gerardo Zamudio. Asimismo, señalaron que únicamente faltaban por responder 3 compañías aseguradoras.

El 4 de diciembre de 2002, Roberto Zamudio Aldaba presentó por escrito su declaración como probable responsable.

El 13 de marzo de 2003, el Ministerio Público recibe la declaración de la menor María Fernanda Zamudio Martín del Campo, sobre los hechos ocurridos el 30 de mayo de 1992.

- **La interposición, trámite y decisión del reconocimiento de inocencia planteado por la defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd.**

162. Por lo que se refiere al reconocimiento de inocencia interpuesto por los peticionarios el 6 de abril de 1999 ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cabe hacer los siguientes comentarios:

a) Alfonso Martín del Campo, nuevamente cambia de abogados particulares para que se encarguen de su defensa, en esta ocasión nombra cuatro Licenciados en Derecho: Raúl Marroquín Rosales, Juan Antonio Vega Báez, Arturo Requesens Galnares y Patricia Marín Fagoada.

b) En el escrito de interposición del reconocimiento de inocencia, la defensa colegiada de Alfonso Martín del Campo, reproduce en los puntos I a VIII lo que esencialmente había planteado ya en otras etapas en los órganos de impartición de justicia, mismos que ya se habían pronunciado sobre tales aspectos y decidido en definitiva sobre los mismos.

c) En el punto número IX del escrito, en el capítulo de hechos, se señala: "... el proceso en primera instancia se siguió en el Juzgado 55° de lo Penal del Distrito Federal, correspondiéndole el número de expediente el citado al rubro del presente expediente (sic). Se emitió sentencia el 28 de mayo de 1993, encontrándome penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio en agravio de Gerardo Zamudio Aldaba y Juana Patricia Martín del Campo de Zamudio, imponiéndome una pena de 50 años de prisión."

d) En el punto número X del mismo escrito, en el capítulo de hechos, se señala: "La sentencia fue apelada por mi abogado, radicándose en la octava sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondiéndole el Toca número 454/93, resolviendo el recurso interpuesto al confirmar la sentencia de 1ª instancia el día 17 de agosto de 1993"

e) En el punto número XI del citado escrito, en el capítulo también de hechos, se menciona "En junio de 1997 presenté demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva emitida por la Octava Sala, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el Distrito Federal, correspondiéndole el número 2004/97-475. Con fecha 2 de diciembre de 1997, el Tribunal de Amparo resolvió que la justicia de la unión no me amparaba ni protegía contra la resolución emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."

163. El planteamiento de la supuesta inocencia del sentenciado, lo pretendieron acreditar con los siguientes elementos:

1) La negación de haber contado con asistencia jurídica de su predilección, en la etapa de Averiguación Previa, en la que emitió su confesión ministerial. Refiere que el defensor de oficio que le fue asignado, no era un abogado profesional. Por tal motivo, señala que su confesión carece de toda validez.

2) La resolución administrativa por la cual se sanciona a Sotero Galván Gutiérrez por infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así como la diligencia judicial de careo, como único elemento en que se apoyó dicha resolución.

3) Que tanto la información sobre el defensor de oficio, como la responsabilidad administrativa fincada a Sotero Galván el 14 de octubre de 1994, esto es, cerca de 5 años atrás, no las conocían. No obstante que los peticionarios manifestaron esto bajo protesta de decir verdad, el 26 de abril de 1996 Alfonso Martín del Campo expresó en una diligencia ante el Ministerio Público que estaba enterado de ello, incluso tiempo atrás.

Con relación a este mismo punto, cabe destacar que el 25 de marzo de 1994, la Embajada Americana dirigió un escrito al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que refirió que la Sra. Bessie Dodd Burke, proporcionó a dicha misión diplomática una copia del oficio SGDH/949/94 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y solicitaba información sobre los alegatos de presuntas violaciones a los derechos humanos contra Alfonso Martín del Campo. A esta comunicación se dio respuesta el 5 de abril de 1994 por parte de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esto confirma de manera indubitable que los peticionarios sí estaban al tanto del procedimiento administrativo

seguido ante la Contraloría, pero no lo hicieron valer ante los tribunales de amparo de manera oportuna.

164. A partir de esto, la defensa colegiada de Alfonso Martín del Campo señaló: "Por lo que, considero que estos elementos probatorios, invalidan la prueba confesional en que se sustenta la sentencia pronunciada en mi contra".

165. Como fundamento jurídico los peticionarios invocaron la parte primera de la fracción II, del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala que el reconocimiento de inocencia procede: "Cuando después de la sentencia aparecieren documentos que invaliden la prueba en que descanse aquella o las presentadas al jurado y que sirvieron de base a la acusación y al veredicto".

166. Los solicitantes extrañamente omitieron señalar las determinaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 29 de enero de 1999, que basada en elementos de prueba y análisis minuciosos, incluyendo las propias declaraciones y manifestaciones de Alfonso Martín del Campo, contradicen de manera sustantiva y frontal el sentido y alcance que han pretendido dar los peticionarios a la decisión administrativa de la Contraloría contra el agente Sotero Galván Gutiérrez, además de que desvirtúa la mecánica y el supuesto origen de las lesiones del sentenciado.

167. Luego de allegarse las constancias ofrecidas por los solicitantes, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió su decisión el 29 de abril de 1999. De la cual se puede deducir los razonamientos y fundamentos de derecho siguientes:

a) Tanto la defensa particular, como el agente del Ministerio Público expusieron por escrito sus respectivos alegatos, opinando éste último que los planteamientos de la defensa eran infundados.

b) El 22 de abril se efectuó la audiencia de vista, en los que la defensa y el Ministerio Público ratificaron sus manifestaciones.

c) La resolución administrativa por la cual se sanciona a Sotero Galván Gutiérrez por infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no acredita que dicho agente haya aceptado la imputación que se le hacía, pues no sólo la negó, sino que en careo al que fue enfrentado con el sentenciado, después de la frase en que éste afirma que el policía aceptó haberlo golpeado, Sotero Galván le reitera a su careado procesado que miente. Dicho documento no invalida las pruebas en que descansa la sentencia condenatoria.

d) Dicha resolución, según los abogados de Alfonso Martín del Campo, invalida la prueba confesional en que se sustentó la sentencia dictada en su contra, sin embargo el Tribunal manifiesta que esto es incorrecto, porque dicha resolución no se sustentó únicamente en la declaración ministerial del sentenciado, sino en el resto de las pruebas que adminiculadas llevaron a la convicción plena de los magistrados, con fundamento en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Los elementos de prueba corroboraron la declaración del entonces indiciado y la tornaron verosímil.

e) Las lesiones que presentó el indiciado, son congruentes con las que refirió se habría auto infligido para encubrir su responsabilidad, con las que sufrió al victimar los occisos y aquellas producidas al estrellarse el vehículo en que viajaba.

f) El dictamen del perito criminalista tercero en discordia, Gregorio Ávila Olguín confirma la participación de un único agresor.

g) El nombramiento de Rolando Torres Martínez como defensor de oficio no invalida las pruebas en que se sustentó la sentencia, puesto que éste fue quien aceptó el cargo que le confirió en su favor el indiciado, el cual manifestó su deseo que le fuera nombrado como tal el defensor de oficio adscrito a la agencia del Ministerio Público. Esto tampoco invalida las pruebas en que se sustentó la sentencia.

h) Lo descrito en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, no invalida tampoco las pruebas que sirvieron de base a la sentencia dictada contra Alfonso Martín del Campo Dodd. Tampoco lo hacen las notas periodísticas y recortes ofrecidos por la defensa colegiada del sentenciado.

i) Las documentales que ofrece la defensa del sentenciado, ni individual, ni conjuntamente invalidan o demeritan de manera alguna el conjunto de elementos de prueba que sirvieron para sustentar la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada contra Alfonso Martín del Campo Dodd.

Tal como se señaló, los Magistrados de la Décima Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resolvieron el 29 de abril de 1999, por unanimidad, declarar infundada la solicitud de reconocimiento de inocencia del sentenciado.

168. Cabe señalar que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, los peticionarios tenían 15 días hábiles, luego de que les fue notificada la sentencia recaída al reconocimiento de inocencia, para interponer un Juicio de Amparo indirecto a efecto de combatir las violaciones constitucionales y legales que dicha resolución *per se* les producía en su opinión. Por último, contra la resolución que recayera al amparo interpuesto, además, cabía la interposición de un recurso de revisión (apelación), ante los Tribunales Colegiados de Circuito o ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

169. Los peticionarios dejaron pasar la oportunidad de impugnar la decisión del reconocimiento de inocencia, al no interponer en tiempo el amparo señalado. De haber interpuesto en tiempo y forma dicho amparo, podrían haber hecho valer sus argumentos y, si le hubiera sido favorable la decisión de éste, podría haber sido revocada la sentencia que declaró infundados los planteamientos de la defensa colectiva de Alfonso Martín del Campo; se hubiera ordenado al Tribunal Superior de Justicia emitir una nueva resolución subsanando las infracciones que se hubieren cometido o, en su caso, reponer el procedimiento, atento a lo cual existían posibilidades de que dicha resolución fuera favorable a los intereses de los peticionarios.

170. Estando en trámite la queja ante la CIDH y el reconocimiento de inocencia interpuesto por la defensa colegiada del sentenciado, el 13 de abril de 1999, la Organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura dirigió una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Dirección General de Derechos Humanos, mediante la cual expresaban:

"... hemos enviado información sobre el caso del C. Alfonso Martín del Campo Dodd, ciudadano de 33 años de edad que se encuentra interno en la Penitenciaría de Pachuca, Hidalgo, debido a que fue sentenciado a 50 años de prisión por el Juez 55° de lo Penal de los Tribunales del Distrito Federal, haciendo caso omiso la autoridad jurisdiccional a elementos probatorios que demuestran que la confesión emitida por el procesado fue obtenida mediante tortura.....

De esta manera, la sentencia de Alfonso Martín del Campo se fundó en una confesión que le fue arrancada bajo tortura, y a pesar de que en el proceso consta la confesión de un agente de la policía judicial que le favorece, cuando declara que *si lo torturó;* además de algunos otros elementos probatorios que vuelven inverosímil la pretendida confesión ministerial del agraviado. Estas constancias, las hemos exhibido ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y expuesto en la copia del escrito de Reconocimiento de Inocencia que le hemos enviado a usted por fax.

Por lo anterior, le pedimos a usted que la dependencia a su cargo envíe una carta al C. Presidente del TSJDF, para exponerle los comentarios sobre el caso que nos ocupa, dentro del expediente de Reconocimiento de inocencia número LD/205/99 que se encuentra radicado en la Décima Séptima Sala de dicho tribunal, a cargo del C. Magistrado Lic. Maurilio Domínguez Cruz...."

171. En la comunicación mencionada se omite hacer señalamiento alguno de que había sido presentada una queja ante la Comisión Interamericana el 13 de julio de 1998, y que había sido interpuesto un juicio de amparo directo, mismo que había sido desfavorable a la defensa del sentenciado. Tampoco se señaló que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal había conocido de una queja y que determinó la inexistencia de violaciones a los derechos humanos.

172. El 10 de mayo de 1999, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio respuesta a la petición señalando lo siguiente:

" La naturaleza del presente asunto es estrictamente jurisdiccional, razón por la cual corresponde exclusivamente al órgano judicial competente, en este caso el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, decidir sobre la procedencia del reconocimiento de inocencia que ha formulado el Sr. Alfonso Martín del Campo Dodd.

Para estar en posibilidad de conocer en detalle el presente caso, tendría que realizarse un examen exhaustivo de las constancias que integran la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos, las actuaciones y diligencias procesales del juicio penal seguido contra el Sr. Alfonso Martín del Campo Dodd, las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, la tramitación y resolución del juicio de amparo seguido ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y las constancias del procedimiento administrativo tramitado contra Sotero Galván Gutiérrez. A esto se suma la falta de legitimación procesal de esta Secretaría para actuar en el presente caso, y el respeto absoluto a la independencia de los órganos jurisdiccionales.

No omito manifestarle que en el orden jurídico mexicano la confesión coaccionada carece de valor probatorio, y que corresponde a los órganos jurisdiccionales valorar y decidir si se encuentra acreditada la misma. Lo anterior sin prejuzgar sobre la procedencia y resultado del medio de impugnación interpuesto en el presente caso".

173. Como puede observarse, la conducta de los peticionarios puede calificarse como de mala fe, pues mientras ante la CIDH hacían pasar a Alfonso Martín del Campo como nacional estadounidense, al Gobierno de México le referían que éste era un ciudadano mexicano. Por otra parte, ya habiendo sido presentada la queja ante la CIDH acudieron a agotar uno de los recursos disponibles, pero no el último, además, trataban de sorprender al propio Gobierno mexicano y a la propia Comisión, omitiéndoles información sobre la situación jurídica real del asunto, abusando de la buena fe de éstos.

174. La respuesta de las autoridades mexicanas no pudo ser más clara y contundente, para conocer y estar en posibilidad de opinar con relación al caso había que conocer en detalle los procesos y los expedientes relativos.

175. El 8 de octubre de 1999,[102] la Comisión Interamericana recibe un documento por parte del peticionario a través de cuyo contenido pretende satisfacer la solicitud de la CIDH de 10 de agosto de 1998, sin embargo, en dicho documento el peticionario hace referencia como un elemento nuevo la interposición de un recurso de reconocimiento de inocencia el 6 de abril de 1999, mismo que fue decidido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 29 de abril de 1999. Cabe señalar que el peticionario no informó a la CIDH haber impugnado la decisión señalada que le fue desfavorable.

- **La notificación tardía al Gobierno Mexicano de la queja ante la CIDH.**

176. El 4 de noviembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifica al Gobierno de México la queja 12.228 (Alfonso Martín del Campo Dodd).

- **La interposición, trámite y decisión del amparo interpuesto contra la determinación de no ejercicio de la acción penal en la investigación por tortura y otros delitos.**

177. El 30 de junio de 2000, Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo interpusieron una demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F., contra la decisión y confirmación del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, y señalaron como responsables a las siguientes autoridades:

- Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
- Coordinación de asesores de la PGJDF.
- Dirección de Unidad de Agentes del Ministerio Público de la PGJDF
- Auxiliares del Procurador General de Justicia del D.F.
- Auxiliares del Ministerio Público titular de la mesa Dos.

---

[102] El 29 de octubre de 1999, diversas organizaciones no gubernamentales presentaron un documento que reproduce esencialmente el del peticionario original y que se encuentran vinculado con el documento de éste último, pues el propio peticionario hace referencia al mismo en su comunicación.

- Auxiliar de la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Procurador General de Justicia del D.F.

178. El acto que reclamaban era la resolución de fecha 6 de junio de 2000, relativa a la inconformidad propuesta ante la autorización de no-ejercicio de la acción penal en el expediente 025/2000, derivado de la Averiguación Previa SC/3839/95-03, la que confirma la autorización por no ejercicio de la acción penal propuesta por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador en la Averiguación Previa anteriormente citada, la misma que se pretende impugnar por no estar aparentemente dictada conforme a derecho.

179. En virtud de que la demanda no cumplía los requisitos legales mínimos, el Juez de Distrito mandó prevenir a los promoventes, a efecto de que en un plazo perentorio subsanaran las omisiones detectadas, en especial proporcionar datos omitidos de: Sotero Galván, Manuel García Rebollo, Roberto Valero Delgado, Juan Marcos Badillo Sarabia, Arturo Vázquez Ortiz, Juan Carlos Velásquez Manzanita, Jesús López Sánchez, Beatriz Menor Leyva y Ernesto Hernández Ramírez, contra quienes había iniciado una investigación penal.

180. El 11 de julio de 2000, fueron subsanadas las irregularidades y se admitió a trámite la demanda.

181. Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo, proporcionaron a la autoridad judicial datos inexactos para notificar la demanda a todos los involucrados; la autoridad judicial llevó a cabo numerosos y documentados esfuerzos por cumplir con dicho requisitos indispensable, a la vez que previno, en varias ocasiones, a los quejosos acerca de su carga procesal de impulso del asunto.

- **El desistimiento de los peticionarios al amparo interpuesto el 30 de junio de 2000.**

182. El 11 de diciembre de 2001, Bessie Dodd de Martín del Campo presentó un escrito por el cual se desistía de la demanda de amparo interpuesta; el Juez procedió a solicitarle que aclarara el carácter y la legitimidad de su desistimiento, puesto que se tenía como colitigante a Alfonso Martín del Campo.

183. Con el objeto de hacerle saber dicho requerimiento judicial, el Juez ordenó se le notificara en el domicilio legal que había señalado en la demanda de amparo para oír notificaciones y recibir documentos, mismo que resultó falso en razón de que las personas que lo habitaban no conocían a Bessie Dodd de Martín del Campo. Ante tal circunstancia el Juez de Distrito hizo las siguientes notificaciones por lista en las instalaciones del propio Juzgado.

184. El 14 de febrero de 2002, fue celebrada la audiencia constitucional (de fondo) en el juicio de amparo interpuesto por Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo. Como parte de la tramitación de dicha audiencia, se procedió al desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas, a partir de lo cual se determinó a manera de sentencia que se tenía a Bessie Dodd de Martín del Campo por *desinteresada* en la continuación del proceso, debido a que omitió cumplir con requerimientos judiciales que se le formularon. No obstante lo anterior, como se señaló, la tramitación del proceso continúo con las pruebas ofrecidas en la demanda de amparo y las respuestas de las autoridades consideradas como responsables.

Cabe aclarar que en este tipo de procesos, los requerimientos judiciales no van en ningún caso acompañados de apercibimientos que traigan aparejadas amenaza alguna contra la libertad o la integridad personal de los quejosos, puesto que sólo tienen efectos procesales.

En esa misma fecha se dictó la sentencia definitiva, en la que se resuelve sobreseer el juicio de amparo, por actualizarse causales de improcedencia constitucional y legal en el mismo.

185. De conformidad con el artículo 83, fracción IV de la Ley de Amparo, los promoventes del amparo tenían la posibilidad de interponer el recurso de revisión (apelación), contra la sentencia del Juez de Distrito, con motivo del cual podían también impugnar los acuerdos pronunciados en la misma. La sentencia no fue impugnada y adquirió el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales.

186. El 11 de octubre de 2000, fue celebrada una Audiencia de Admisibilidad en el caso 12.228 en la sede de la CIDH en Washington, D.C., Estados Unidos de América, en la cual el Gobierno de México fijo su postura sobre la inadmisibilidad ostensible del caso, por la falta de agotamiento de recursos internos.

En la audiencia de admisibilidad mencionada, los peticionarios sólo señalaron la denuncia presentada por tortura, pero no la interposición y admisión de la demanda de amparo contra la determinación de no ejercicio de acción penal, lo cual es un motivo indubitable y contundente más para que la CIDH hubiera decidido la inadmisibilidad de la petición, ante la falta de agotamiento de los recursos internos por causas imputables a los propios peticionarios.

- **La impugnación extemporánea de la decisión unánime que declaró infundado el incidente de reconocimiento de inocencia del inculpado.**

187. El 19 de marzo de 2001, con cerca de dos años de extemporaneidad imputable a los peticionarios, se presentó ante el Juez de Distrito en Turno un amparo directo (sic) contra la resolución del reconocimiento de inocencia dictada por los Magistrados de la Décima Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 29 de abril de 1999. El juicio de amparo se tramitó ante el Sexto Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal, correspondiéndole el número de expediente 484/2001 y siendo resuelto el 16 de abril de 2001, en el sentido de sobreseer el juicio de amparo al considerar que éste fue presentado de manera extemporánea.

188. El 3 de mayo de 2001 los peticionarios interpusieron un recurso de revisión en contra de la sentencia de sobreseimiento del Juzgado de Distrito. La revisión fue tramitada ante el 5° Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en el Distrito Federal bajo el expediente 945/2001. El órgano jurisdiccional que conoció y resolvió el recurso interpuesto, decidió confirmar la decisión impugnada el 3 de septiembre de 2001, por haber sido tramitado extemporáneamente el juicio de amparo ya comentado.

189. El 10 de octubre de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó al Gobierno de México el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, mediante el cual la CIDH decide, entre otras cosas, declarar admisible el caso 12.228, señalar que el Estado renunció a la excepción de no agotamiento de recursos internos y decide continuar con el análisis de fondo de la cuestión y publicar dicho informe en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

190. El 14 de febrero de 2002, fue celebrada la audiencia constitucional (de fondo) en el juicio de amparo interpuesto por Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo, contra la resolución de fecha 6 de junio de 2000, relativa a la inconformidad propuesta ante la autorización de no-ejercicio de la acción penal en el expediente 025/2000, derivado de la Averiguación Previa SC/3839/95-03, la que confirma la autorización por no ejercicio de la acción penal propuesta por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador en la Averiguación Previa anteriormente citada. En la sentencia de amparo se tuvo a Bessie Dodd de Martín del Campo por desinteresada en la continuación del proceso, debido a que omitió cumplir con requerimientos judiciales que se le formularon. No obstante lo anterior, la tramitación del proceso continúo con las pruebas ofrecidas en la demanda de amparo y las respuestas de las autoridades consideradas como responsables.

En esa misma fecha, luego de culminada la tramitación de la audiencia, se dictó la sentencia de fondo, en la que se resuelve en definitiva sobreseer el juicio de amparo, por actualizarse causales de improcedencia constitucional y legal en el mismo; los peticionarios no hacen valer los recursos que la ley prevé para la impugnación de ese tipo de determinaciones, por lo que la sentencia causó estado.

191. El 20 de febrero de 2002, la Comisión de Derechos Humano del Distrito Federal, recibió una solicitud de reapertura del expediente CDHDF/121/98/BJ/N4489.000 iniciado el 3 de noviembre de 1998 y resuelto el 29 de enero de 1999 por orientación al remitir a la quejosa ante la PGJDF para que fuera atendida, y por no haberse comprobado violación a derechos humanos por lo que se refiere al resto de las pretensiones que motivaron la queja.

Cabe recordar que los quejosos se inconformaron con la determinación de la CDHDF y acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a interponer un Recurso de Impugnación previsto en la Ley de esta última, el cual fue radicado con el número de expediente CNDH/121/99/DF/I00051.000, dentro del cual se decidió el 31 de agosto de 1999, que los agravios que se había hecho valer en el recurso carecían de sustento jurídico.

La quejosa alegó poseer nuevos elementos a considerar, consistentes en *un dictamen pericial médico-psicológico que sería elaborado por un médico particular.*

La CDHDF acordó el 12 de marzo de 2002 la reapertura del expediente, porque en su concepto, la ley que sigue su actuación no se lo prohibía y porque los expedientes de queja archivados podían ser reabiertos. No obstante, se debe señalar que el expediente estaba resuelto en 1999, sin ninguna actuación pendiente por realizar y que, por lo menos, resulta cuestionable declarar la reapertura de un expediente, conocido, investigado y decidido, a expensas de la promesa futura e incierta de presentar un documento privado que avale la petición.

A la fecha en que el expediente fue reabierto, ya habían sido decididas judicialmente y en definitiva las pretensiones de los peticionarios.

Fue hasta el 19 de agosto de 2002, cuando la CDHDF recibió el *"dictamen pericial médico-psicológico" elaborado por un médico particular*. Dicho organismo señala expresamente que para efectos de "su convicción" de que se violaron derechos humanos, tomaría únicamente en cuenta partes de la causa penal 57/92 y de la sentencia definitiva dictada el 17 de agosto de 1993, así como el procedimiento de responsabilidad administrativa decidido en 1994. Esto es, no se esforzó por allegarse de todos los elementos existentes y limitó su actuación a las dos

decisiones señaladas, sin tomar en cuenta el resto de las decisiones, procedimientos, recursos y juicios ya decididos en definitiva, lo cual puede calificarse, por decir lo menos, como parcial e inexplicable en un órgano de esa naturaleza.

192. El 18 de octubre de 2002, fue celebrada una Audiencia ante la CIDH, durante la cual el Estado ofreció a la Comisión un panorama claro y amplio de la evolución del asunto, desde la etapa de investigación hasta la determinación última que recayó al amparo interpuesto contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sobre el incidente de reconocimiento de inocencia planteado por los peticionarios.

El Estado informó a la Comisión acerca de las acciones que había emprendido de buena fe, para satisfacer las inquietudes de los peticionarios acerca de la presunta tortura cometida contra Alfonso Martín del Campo Dodd y sobre los posibles vínculos de otras personas con el homicidio del matrimonio formado por Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba.

193. El 22 de octubre de 2002, la CIDH emitió el Informe de fondo 63/02 aprobado en esa misma fecha.

194. Por otro lado, luego de un somero recorrido por el supuesto derecho en vigor al momento de ocurridos los hechos en 1992, la CDHDF recomendó el 26 de diciembre de 2002, en síntesis, la reapertura de la Averiguación Previa SC/3839/95-03, indicando que quien se hiciera cargo de ella, a diferencia de lo que hizo la propia CDHDF, examine todas las diligencias practicadas en la misma y las realizadas en otras investigaciones relacionadas con el caso. Por otra parte, no obstante estar fuera de su competencia, dirigió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la siguiente recomendación "Que en caso de que Alfonso Martín del Campo Dodd promueva el incidente de reconocimiento de inocencia, se consideren las observaciones realizadas... respecto de la detención arbitraria y la tortura de que fue objeto".

Tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, luego de exponer de manera razonada a la CDHDF sus consideraciones sobre el caso, decidieron rechazar las recomendaciones emitidas por ésta.

195. El 26 de diciembre de 2002, fue emitido un acuerdo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa, mediante el cual se efectuaba la reapertura de la averiguación previa SC/3839/95-03, mismo que fue comunicado a la CIDH.

196. El 30 de diciembre de 2002, el Gobierno dio respuesta al Informe de la Comisión y señaló diversas acciones emprendidas con el fin de dar solución definitiva al asunto, así como informó de la situación jurídica de Alfonso Martín del Campo Dodd.

197. El 17 de febrero de 2003, el Gobierno de México fue notificado de la demanda interpuesta en su contra por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la honorable Corte Interamericana en el caso 12.228, Alfonso Martín del Campo Dodd.

198. El 4 de abril de 2003, se dio traslado al Estado del documento presentado por parte de los peticionarios en el presente caso.

IV. Excepciones preliminares (motivos manifiestos de incompetencia y de inadmisibilidad).

El Gobierno de México expone a continuación los hechos y consideraciones que originan diversos motivos manifiestos de incompetencia y de inadmisibilidad del presente asunto, que impiden jurídicamente a la Honorable Corte conocer del mismo, de conformidad con el artículo 36 de su Reglamento.

Si no obstante los elementos presentados por el Estado, la Honorable Corte decidiera por economía procesal, tal como lo dispone el artículo 36.6 de su reglamento, reservar su decisión sobre alguna o algunas de las excepciones preliminares presentadas para una eventual determinación de fondo en el presente caso, el Gobierno solicita atentamente que los argumentos aquí presentados se tengan por reproducidos en la etapa procesal pertinente, para efecto de ser adecuadamente considerados y valorados por la Honorable Corte.

El Gobierno de México solicita respetuosamente a la Honorable Corte que considere en este apartado cada una de las excepciones preliminares que se ofrecen en el orden sucesivo estricto en que se presentan, con el objeto de evitar pronunciamientos y objeciones sobre aparentes contradicciones entre algunas de ellas.

Primera excepción. Falta de competencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de los hechos y actos anteriores al 16 de diciembre de 1998 en el caso 12.228.

La presente excepción preliminar encuentra su fundamento en el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los términos y el alcance con que el Gobierno de México aceptó la competencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mediante nota diplomática depositada en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 16 de diciembre de 1998, el Gobierno mexicano declaró su aceptación a la competencia contenciosa de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes términos:

"1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado."

En el párrafo 2 de la declaración de aceptación por parte del Gobierno mexicano se aprecia claramente que la competencia contenciosa de la Honorable Corte está condicionada

temporalmente a los "hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos".

Dicha condición es compatible con lo dispuesto por el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo texto se reproduce a continuación:

> "Artículo 62
>
> 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
>
> 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. (énfasis agregado)
>
> 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial".

La Honorable Corte ha reiterado a través de su jurisprudencia que los Estados pueden válidamente al momento de aceptar su competencia establecer condiciones a la misma, siempre y cuando éstas sean compatibles con las modalidades que derivan de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, una de las cuales es precisamente la limitación temporal y *ergo* la no retroactividad.[103]

La interpretación *bona fide* de la condición interpuesta por el Estado y el sentido común indican que la expresión "2. La aceptación de la competencia contenciosa … solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos", se refiere a tales hechos o actos jurídicos como elementos generadores *per se* de presuntas violaciones a los derechos humanos.

En efecto, la condición temporal que los Estados pueden fijar a la competencia de un órgano jurisdiccional internacional, tiene entre sus finalidades principales la de fijar un punto en el tiempo en aras de la certeza y seguridad jurídica que deben regir e inspirar a todo proceso judicial para la realización de la justicia.[104] Esto permite a las personas, a los órganos internacionales y a los Estados actuar dentro de un sistema de protección de los derechos humanos que admite prever con un importante grado de certidumbre los derechos y las obligaciones derivados de sus respectivos actos u omisiones. Lo anterior se ve confirmado por el hecho de que la Convención Americana

---

[103] Ver Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 36; Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 35.

[104] La honorable Corte ha señalado que ".... La seguridad jurídica exige, sin embargo, que los Estados sepan a qué atenerse y no puede dejarse a la Comisión hacer uso arbitrario de los plazos y menos aún si son de aquellos contemplados en la Convención misma". Caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 38.

sobre Derechos Humanos, tal como lo ha declarado la propia Corte, acepta este tipo de condiciones por parte de los Estados.

La aceptación de la competencia de un órgano supranacional, máxime cuando se trata de un órgano jurisdiccional internacional como la Honorable Corte, es una decisión importante de carácter voluntario y positivo por parte de los Estados, a efecto de que el sistema de protección primario a cargo de los órganos internos se vea fortalecido con la posibilidad de plantear quejas ante la Comisión Interamericana y casos ante la Corte Interamericana. Sin embargo, igual de importante es contar con reglas claras y precisas sobre los alcances del sometimiento del Estado a dichos procedimientos.

La Comisión en su demanda "solicita que la honorable Corte se pronuncie respecto a la detención ilegal que afecta a Alfonso Martín del Campo Dodd desde el 16 de diciembre de 1998, fecha en que el Estado mexicano aceptó su jurisdicción contenciosa"[105] y más adelante refiere que "solicita que la honorable corte establezca la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la detención arbitraria de Alfonso Martín del Campo Dodd desde la fecha en que dicho Estado aceptó su jurisdicción contenciosa. Igualmente, que determine su responsabilidad por los hechos ocurridos desde el 16 de diciembre de 1998 …. "[106]

Esto se ve confirmado por las afirmaciones de la propia Comisión en el sentido de que "Los hechos objeto de la presente demanda tuvieron lugar desde el 16 de diciembre de 1998, … La Comisión Interamericana no pretende que la Honorable Corte conozca de hechos ocurridos con anterioridad al 16 de diciembre de 1998… No se pide que la Honorable Corte establezca las violaciones por los hechos ocurridos entre el 30 de mayo de 1992 y el 16 de diciembre de 1998,…". [107]

El Gobierno solicita a la honorable Corte que en la tramitación del presente caso, se limite únicamente al objeto de la demanda presentada por la Comisión, dentro del margen de los términos temporales señalados, ya que "…no podría hacerlo fuera de él so pena de incurrir en decisión *ultra petita*".[108]

El Gobierno no disputa su aceptación a la competencia contenciosa de la Honorable Corte Interamericana a partir del 16 de diciembre de 1998, ni tampoco que la Corte pueda desplegar dicha competencia sobre los hechos y actos posteriores a tal fecha de conformidad con los términos en que la aceptó; del tal manera, la honorable Corte es competente únicamente para conocer, de conformidad con lo solicitado expresamente por la CIDH, sobre la compatibilidad *per se* de los hechos y actos posteriores al 16 de diciembre de 1998 con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, claro está, previa comprobación del exacto cumplimiento de los extremos señalados en los artículos 44 a 51 de la Convención Americana.

Apoya lo anterior el criterio establecido por la Honorable Corte con motivo del caso Cantos, en el que señaló:

---

[105] Documento de demanda interpuesta por la CIDH, párrafo 2.

[106] Documento de demanda interpuesta por la CIDH, párrafo 4.

[107] Documento de demanda interpuesta por la CIDH, párrafo 11.

[108] Caso Genie Lacayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 25.

> "La Comisión alega que algunos de los hechos por los que se acusa al Estado serían actos ilícitos continuados, esto es, que los ilícitos seguirían existiendo hasta hoy. La Corte no considera necesario examinar aquí la teoría jurídica de los actos ilícitos continuados y le resulta suficiente verificar que, si alguno de los hechos imputados al Estado tuviere este carácter, no sería un "hecho acaecido después del 5 de septiembre de 1984", única categoría de actos en relación con la cual la Argentina aceptó la competencia de esta Corte"[109]

Esto significa que, en el presente caso, la única categoría de hechos o actos, sobre los cuales puede la Corte ejercer su competencia contenciosa son los ocurridos después del 16 de diciembre de 1998 y únicamente si *se alegare que dichas actuaciones pueden constituir per se infracciones a la Convención Americana.*[110]

También resulta aplicable el criterio sostenido por la Honorable Corte en el sentido de que carece de competencia respecto de hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de la aceptación de ésta por parte de un Estado, máxime cuando no existe desacuerdo entre el Gobierno y la Comisión en el presente caso sobre el punto de referencia.[111] Asimismo, posee también relevancia y plena aplicación respecto de la presente excepción preliminar el criterio sobre el carácter no continuado que posee *per se* la privación de la libertad.[112]

Confirma lo anterior lo señalado por la propia Comisión en el párrafo 11 de su documento de demanda, en el sentido de que los hechos ocurridos en abril de 1992 "... se plantean como antecedentes" (énfasis agregado). En tal sentido, de la propia demanda de la CIDH se aprecia que ésta reconoce y plantea por sí misma la incompetencia de la Honorable Corte Interamericana para conocer y, por lo tanto, hacer cualquier pronunciamiento sobre la responsabilidad del Estado con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, respecto de los hechos anteriores al 16 de diciembre de 1998.

No obstante el reconocimiento expreso de la CIDH, en el sentido de que todo lo ocurrido antes del 16 de diciembre de 1998 son meros *antecedentes* fuera de la competencia de la Honorable Corte, el Gobierno de México presentará también con tal carácter (*ad cautelam*), los argumentos y evidencias que sustentan su posición y que desvirtúan de manera clara las consideraciones de hecho y de derecho en que supuestamente se encuentran apoyadas las afirmaciones de la Comisión, así como lo actuado en las primeras etapas de tramitación de la queja ante la misma, la decisión de admisibilidad, el informe de fondo emitido con motivo del presente asunto y la decisión de presentar el asunto a la consideración de la Honorable Corte, todo esto a la luz de los requisitos exigidos por la Convención Americana sobre la presentación de peticiones individuales.

El único acto de que se duele expresamente la CIDH de los que han tenido lugar después del 16 de diciembre de 1998 es el recurso extraordinario de nulidad, denominado "reconocimiento de la inocencia del inculpado", interpuesto artificiosamente por los peticionarios el 6 de abril de 1999,[113]

---

[109] Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 39.

[110] Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 40.

[111] Véase *Caso Blake. Excepciones Preliminares.* Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 30; Caso Genie Lacayo, *Excepciones Preliminares.* Sentencia del 27 de enero de 1997, Serie C No. 21, párr. 21, 22 y 25.

[112] Véase *Caso Blake. Excepciones Preliminares.* Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 33.

[113] Documento de demanda interpuesta por la CIDH, párrafo 3.

cerca de un año después de haber sido presentada la queja ante la CIDH. El análisis de tal acto *per se* a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los hechos y actos posteriores, será objeto de algunas de las subsecuentes excepciones preliminares que presenta el Gobierno mexicano.

En conclusión, de conformidad con lo expresa y estrictamente solicitado por la Comisión, la Corte sólo podrá ejercer su competencia contenciosa con respecto a hechos y actos posteriores al 16 de diciembre de 1998, fecha en que el Gobierno mexicano aceptó dicha competencia de manera irretroactiva, a efecto de analizar si *per se* y de manera aislada dichos actos cumplen con lo exigido por los artículos 44 a 51 de la Convención Americana y son compatibles con ésta. La aplicación en el presente caso de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, queda fuera de la competencia de la Honorable Corte Interamericana en razón de que ha quedado fundada la excepción de incompetencia *ratione temporis* interpuesta por el Estado mexicano.

Segunda excepción: La inobservancia de la CIDH a las reglas básicas de tramitación de peticiones individuales previstas en la Convención Americana y en los Reglamentos aplicables; la falta de objetividad y neutralidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la tramitación, admisibilidad, decisión de fondo y presentación de la petición ante la honorable Corte; la afectación por parte de la CIDH al equilibrio procesal que derivó en la situación de indefensión que afectó al Estado mexicano durante la tramitación de la queja.

- **La actuación indebida de la CIDH desde la presentación de la queja hasta el informe de admisibilidad 81/01 de 10 de octubre de 2001.**

El Gobierno mexicano pone de manifiesto diversas violaciones sustanciales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos imputables a la Comisión Interamericana y a los peticionarios, al procedimiento de tramitación de quejas, así como la aplicación inadecuada que hizo la Comisión de criterios establecidos por la Honorable Corte, que redundaron en la afectación grave de la objetividad con la que deben decidir los asuntos sometidos a su consideración, así como al derecho de defensa del Gobierno mexicano en la etapa de tramitación del asunto ante la misma. Asimismo, en este punto se destaca la inobservancia de los requisitos previstos en su Reglamento en vigor para el sometimiento de casos a la consideración de la honorable Corte Interamericana.

Cabe tener presente que la Corte en ejercicio de su jurisdicción plena es competente "...para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para verificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que esté envuelta la "interpretación o aplicación de (la) Convención". En el ejercicio de esas atribuciones la Corte no está vinculada con lo que previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciación.... En este sentido, al tiempo que se asegura una más completa protección judicial de los derechos humanos reconocidos por la Convención, se garantiza a los Estados Partes que han aceptado la competencia de la Corte, el estricto respeto de sus normas."[114]

[114] Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 34.

Los peticionarios presentaron su queja ante la CIDH el 13 de julio de 1998, esto es, más de seis años después de ocurridos los supuestos hechos de tortura y pasados cinco años luego de que fue dictada la sentencia de segunda instancia que decidió en definitiva el proceso, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993. Con dicha sentencia los recursos ordinarios disponibles estaban agotados, aún cuando fueran desfavorables a las pretensiones del sentenciado y de su defensa.

La propia Comisión ha sostenido ante la Honorable Corte que la decisión de un tribunal de segunda instancia es *final y tiene el carácter de cosa juzgada,*[115] por lo que a partir de ese momento el asunto adquiere tal carácter en el ámbito interno, misma que sólo es susceptible de ser combatida, de satisfacerse los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación prevén, a través de la interposición alternativa, simultánea o sucesiva de dos medios de impugnación, de satisfacer sus requisitos de procedencia y sustanciación, que son específicamente recursos extraordinarios y excepcionales de nulidad, respectivamente, previstos por el orden jurídico mexicano para estos casos:

1) El juicio de amparo directo o de una sola instancia ante los tribunales federales y, en específico, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, cuya naturaleza jurídica es precisamente la de un recurso extraordinario de nulidad que puede calificarse como casación, y

2) El reconocimiento de la inocencia del inculpado, conocido en varios países como *revisión*, que también en su naturaleza jurídica es un medio de impugnación diseñado para combatir la cosa juzgada en situaciones excepcionales, en las que se prueba de manera indubitable, a través de elementos supervenientes, la inexistencia misma del delito, la imposibilidad real de que el sentenciado lo hubiere cometido o la anulación del material probatorio *in toto* sobre el cual se apoyó el proceso y la sentencia condenatoria; de comprobarse alguna o varias de las tres hipótesis señaladas se demuestra fundadamente, en efecto, la inocencia del sentenciado. En estos casos, el amparo y el reconocimiento de inocencia del sentenciado, por su propia naturaleza no están sujetos a plazo preclusivo alguno, sin embargo, la oportunidad procesal para su interposición se inicia a partir de que causó estado la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993, en la causa penal instruida contra Alfonso Martín del Campo Dodd.

El juicio de amparo directo fue interpuesto por la defensa del sentenciado el 18 de junio de 1997, esto es, cerca de cuatro años después de pronunciada la sentencia definitiva que ya poseía el carácter de cosa juzgada. El Tribunal Colegiado de Circuito, que es un órgano jurisdiccional federal, emitió su sentencia el 2 de diciembre de 1997, misma que fue desfavorable a los planteamientos de forma y fondo del sentenciado y de su defensor, de tal manera que el carácter de cosa juzgada representada por la sentencia dictada en 1993 simplemente permaneció inalterado.

Con el fin de impugnar la decisión del Tribunal Colegiado de Circuito, los peticionarios interpusieron infructuosamente un recurso de revisión (apelación), el 14 de enero de 1998, mismo que fue conocido y resuelto como improcedente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de febrero de 1998, de manera que quedaba confirmada la decisión de dicho tribunal colegiado y, por lo tanto, de manera implícita no se alteraba el carácter de cosa juzgada ya señalado.

---

[115] Ver Caso Castillo Páez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, párr. 17.

Por otra parte, el 6 de abril de 1999 la defensa del sentenciado interpuso el recurso excepcional de reconocimiento de inocencia del inculpado ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es decir, cerca de seis años después de que el asunto adquirió el carácter de cosa juzgada. Dicho recurso fue declarado infundado por decisión del Tribunal de referencia de fecha 29 de abril de 1999, con lo cual el carácter de cosa juzgada del presente caso permaneció inalterada.

Cabe aclarar que en virtud de la naturaleza del recurso de reconocimiento de inocencia del inculpado o *revisión* y de las hipótesis de procedencia del mismo, esto es, elementos que en efecto permitan de manera indubitable reconocer que el inculpado es completamente inocente de los cargos que se formularon en su contra, tal recurso, como se señaló párrafos atrás, es susceptible de ser interpuesto en cualquier momento y no está sujeto a plazo preclusivo. Sin embargo, en el presente caso esta circunstancia fue utilizada por la defensa del sentenciado, con el único fin de evitar artificiosamente la actualización de motivos manifiestos de inadmisibilidad de la petición en el sistema interamericano, como lo es la preclusión del término de seis meses para la interposición de la misma, pero también respecto del no agotamiento de los recursos internos.

En efecto, con relación a la extemporaneidad de la petición, si se toma en cuenta que la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue dictada el 17 de agosto de 1993, el plazo de seis meses para presentar la queja respectiva en el sistema interamericano habría vencido inevitablemente el 17 de febrero de 1994.

En el caso hipotético que fuera el juicio de amparo directo el último recurso de jurisdicción interna por agotar, éste fue decidido por el Tribunal Colegiado de Circuito el 2 de diciembre de 1997,[116] por lo que la petición habría sido extemporánea para el sistema interamericano el 2 de junio de 1998, esto es, cerca de mes y medio antes de la presentación real de la queja el 13 de julio de 1998, misma que no fue comunicada al Estado sino hasta el 4 de noviembre de 1999, esto es, cerca de AÑO Y MEDIO DESPUÉS DE HABER SIDO RECIBIDA INICIALMENTE POR LA CIDH.

En el caso también hipotético, pero de cualquier forma infundado, que se considere el recurso excepcional de reconocimiento de la inocencia del inculpado como el último recurso de jurisdicción interna por agotar, la decisión sobre éste fue emitida el 29 de abril de 1999, por lo que el derecho para presentar la queja en el sistema interamericano habría precluído el 29 de octubre de 1999. La queja en el presente caso fue transmitida al Gobierno de México hasta el 4 de noviembre de 1999.

Estas consideraciones sirven de apoyo para ilustrar a la Honorable Corte acerca del manejo arbitrario que dio la CIDH a la queja de los peticionarios, rebasando las funciones que la propia Convención y su Reglamento le atribuyen en la tramitación de peticiones individuales, en perjuicio del Estado mexicano. Esto se agrava si se toma en consideración que la Comisión Interamericana ocultó al Estado información relevante para la defensa de éste, pues en la nota de la CIDH de fecha 4 de noviembre, sólo hace referencia al envío del documento de los peticionarios de 29 de octubre de 1999, sin hacer una sola mención a que más de un año antes había recibido la queja original (el 13 de julio de 1998).

---

[116] Como ya se señaló contra dicha resolución se interpuso el recurso de revisión el 14 de enero de 1998, mismo que fue conocido y resuelto como improcedente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9 de febrero de 1998, por lo que es la decisión del tribunal colegiado de circuito y no ésta la que debe considerarse como la última resolución dictada en el ámbito interno que agotó válidamente un recurso de jurisdicción interna.

Esta omisión deliberada de la CIDH privó al Estado de la oportunidad de plantear objeciones manifiestas al cumplimento del artículo 46.1.b. de la Convención Americana, puesto que si se hubiera transmitido al Estado la queja de 13 de julio de 1998 o se le hubiera dado noticia de ella en la comunicación inicial de los peticionarios, notificada el 4 de noviembre de 1999, el Estado habría notado la caducidad de la queja y podría haberla hecho valer, tomando en consideración que la decisión definitiva en el presente caso fue emitida el 17 de agosto de 1993 y seis meses después de dicha fecha ya habría sido extemporánea la petición.

No fue sino hasta el Informe de Admisibilidad 81/01 de 10 de octubre de 2001, en que se menciona el hecho de que la Comisión recibió la petición inicial el 13 de julio de 1998. Habiendo sido admitida formalmente la petición, se dejó al Estado en situación de indefensión, pues se le hizo creer que la petición inicial era la notificada el 4 de noviembre de 1999, luego de haber acudido a interponer el reconocimiento de inocencia del inculpado. El Gobierno de México solicita a la honorable Corte se pronuncie sobre este aspecto que hasta ahora tiene oportunidad de hacer valer, gracias a que en esta ocasión la CIDH se vio forzada a ser clara en la tramitación indebida que dio a la queja en el presente caso.

En efecto, en los documentos que aparecen en el tomo II de los anexos a la demanda de la CIDH, se aprecia la queja original de Alfonso Martín del Campo Dodd recibida en la sede de la Comisión el 13 de julio de 1998 y una comunicación posterior del 17 del mismo mes y año. A dichos documentos se refirió la CIDH en una nota de fecha 10 de agosto de 1998, mediante la cual informa al quejoso:

> "…. que esta Secretaría no puede, por el momento, dar trámite a su comunicación debido a que la información contenida en ella no satisface los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial, en los artículos 32, 33, 34 y 37, copia de los cuales acompañamos a la presente.
>
> En consideración a ello, para los efectos correspondientes, le rogamos nos envíe, en el momento oportuno, la siguiente información:
>
> c) Relación específica de los hechos que considera violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enumerando los artículos respectivos:
>
> d) Sentencia definitiva de la jurisdicción interna respecto a los hechos denunciados".

Los artículos del Reglamento entonces en vigor a que alude la CIDH en su nota, hacen referencia a los requisitos de forma y fondo que deben satisfacer las peticiones que le sean dirigidas, la manera precisa en como debe actuar la Comisión ante la omisión de tales requisitos, la tramitación inicial de peticiones admisibles y el requisito del previo agotamiento de los recursos internos.

De conformidad con el artículo 33, ante la <u>omisión</u> de requisitos (no ante la FALTA de ellos), la Comisión debe notificar tal hecho al peticionario, *solicitándole que complete los requisitos omitidos en la petición.*

La interpretación más razonable del precepto señalado es que la omisión a que se refiere el mismo es la de alguno de los requisitos que enumera el artículo 32 del mismo Reglamento, esto es:

" a. el nombre, nacionalidad, profesión u ocupación, dirección postal o domicilio y la firma de la persona o personas denunciantes; o en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, su domicilio o dirección postal, el nombre y la firma de su representante o representantes legales.

b. una relación del hecho o situación que se denuncia, especificando el lugar y fecha de las violaciones alegadas, y si es posible, el nombre de las víctimas de las mismas, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada.

c. la indicación del Estado aludido que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de los Estados partes en ella, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado.

d. una información sobre la circunstancia de haber hecho uso o no de los recursos de jurisdicción interna o sobre la imposibilidad de hacerlo." (énfasis agregados)

De conformidad con la nota de la CIDH de 10 de agosto de 1998 se pide a los peticionarios el envío de información sobre dos requisitos, que debieron haber acompañado a la petición original: la relación de hechos que estiman violatorios de la Convención y la *sentencia definitiva de la jurisdicción interna respecto a los hechos denunciados* (hay que señalar que la sentencia definitiva en el proceso penal del que desprenden supuestas violaciones a los derechos humanos es de fecha 17 de agosto de 1993). En atención a los criterios anteriormente señalados, el simple envío de tal información debía haber sido satisfecha por los peticionarios en un plazo razonable, de lo contrario, la Comisión debía haber declarado la inadmisibilidad de la petición o su archivo definitivo.

El 8 de octubre de 1999,[117] esto es, UN AÑO Y DOS MESES DESPUÉS de emitida la nota de la CIDH en la que solicita el envío de la información omitida, la Comisión recibe un documento por parte del peticionario a través de cuyo contenido pretende satisfacer la solicitud de la CIDH, sin embargo, en dicho documento el peticionario hace referencia como un elemento nuevo la interposición de un recurso de reconocimiento de inocencia el 6 de abril de 1999, mismo que fue decidido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 29 de abril de 1999. Cabe señalar que el peticionario no informa haber impugnado la decisión señalada que le fue desfavorable.

Es importante llamar la atención de la Honorable Corte respecto de lo sucedido durante los más de CATORCE MESES que transcurrieron entre el 10 de agosto de 1998 y el 4 de noviembre de 1999, fecha esta última en la que finalmente fue notificada formalmente al Gobierno de México la queja 12.228.

1) El peticionario interpuso un medio de impugnación excepcional denominado "recurso de reconocimiento de inocencia" el 6 de abril de 1999, esto es, cerca de 10 meses después de haber presentado su queja original del 13 de julio de 1998, y alrededor de

[117] El 29 de octubre de 1999, diversas organizaciones no gubernamentales presentaron un documento que reproduce esencialmente el del peticionario original y que se encuentran vinculado con el documento de éste último, pues el propio peticionario hace referencia al mismo en su comunicación.

seis años después de haber sido dictada la sentencia definitiva de fondo en el presente caso.

2) El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por resolución de fecha 29 de abril de 1999, declaró procedente pero infundada la pretensión del peticionario. Cabe señalar que el peticionario no informa a la Comisión haber impugnado la decisión señalada, ni da noticia de imposibilidad alguna de su parte para haberlo hacerlo.

3) Otro punto que ocultaron los peticionarios a la atención de la CIDH y del Gobierno en la comunicación de 4 de noviembre de 1999, fue que años antes, el 13 de marzo de 1995, derivado de la resolución administrativa de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal emitida el 14 de octubre de 1994, se solicita el inicio de una investigación penal por la probable responsabilidad servidores públicos en la integración de la Averiguación Previa 10/2160/92-05, respecto de los homicidios de Juana Patricia Martín del Campo y de su esposo Gerardo Zamudio Aldaba. La Averiguación Previa solicitada fue iniciada y radicada con el número SC/3839/95-03 el 23 de marzo de 1995 en la Dirección General de Investigación de Delitos contra la Seguridad de las Personas, las Instituciones y la Administración de Justicia, contra Juan Carlos Velázquez Manzanita, Juez 55° Penal; Arturo Vázquez Ortíz, Secretario de Acuerdos del Juzgado 55° Penal; Rolando Torres Martínez, Defensor de Oficio; Juan Marcos Badillo Sarabia, Agente del Ministerio Público; Sotero Galván Gutiérrez, Policía Judicial; Roberto Valero Chávez, Fiscal Especial; Beatriz Araceli Minor Morales, Perito en Criminalística; Jesús López Sánchez, Perito Médico Forense; Manuel García Rebollo, Fiscal Especial; Ernesto Hernández Ramírez, Agente del Ministerio Público.

El 29 de marzo de 1995, los peticionarios presentan ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal un escrito en el que solicitan se investigue a Miguel García Rebollo, Roberto Balero (sic), Rolando Torres Martínez, Beatriz Minor Morales, Juan Carlos Velázquez Manzanita y Arturo Vázquez Ortíz, por *abuso de autoridad, conjunsión (sic) de funcionario, delitos que incurren los administradores de justicia (sic) etcétera.*

A la fecha de notificación al Estado de la petición ante la CIDH, por así proceder conforme a las investigaciones y los hallazgos realizados, ya se había determinado en varias ocasiones el no ejercicio de la acción penal. El 26 de julio de 1999, por así resultar de lo actuado, se propone y confirma el no ejercicio de la acción penal por los ilícitos de abuso de autoridad, cohecho, tortura, concusión, encubrimiento y peculado, lo cual fue notificado nuevamente a los peticionarios.

En su comunicación notificada el 4 de noviembre de 1999 al Estado, los peticionarios afirman tajantemente que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no inició investigación sobre los hechos, lo cual es completamente falso.

Por otra parte, también afirman que el Juez 55° Penal no hizo nada al advertir la "aceptación" de la tortura del Policía Sotero Galván Gutiérrez, en la diligencia de careo llevada a cabo durante la tramitación de la causa penal 52/97. Esto también es falso, y lo ocultaron deliberadamente pues el Juez al dictar sentencia en la causa citada señaló

> expresamente por lo que hace a este punto: "... que el procesado le contestó que miente, que incluso lo encueraron colocándole una bolsa en la cabeza y golpeándolo en todo el cuerpo y lo hacían de dos en dos, a lo que su careado le vuelve a contestar que sí y vuelve a manifestar el policía judicial que su careado miente y por lo demás cada uno de los protagonistas de dicho careo se sostienen en lo que tienen declarado." (fojas 37 anverso y reverso y foja 39 anverso) Como puede observarse el Juez entendió perfectamente el alcance del careo practicado, habiéndolo revisado íntegramente.

Para evaluar correctamente los puntos anteriores, se debe tener presente lo que la honorable Corte ha señalado de manera enfática y reiterada, en el sentido de que[118]:

> [e]s un principio comúnmente aceptado que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia de los procedimientos pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica (*Caso Cayara, Excepciones Preliminares*, *supra* 27, párr. 42; *Caso Paniagua Morales y otros, Excepciones Preliminares*, Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, párr. 38)

El parámetro a los señalados límites de temporalidad y razonabilidad han sido algunos días, más no meses y mucho menos años, por tal motivo el Estado considera que en el presente caso han sido quebrantados en su perjuicio los límites de temporalidad y razonabilidad, avasallando el mínimo equilibrio que debe existir entre la justicia y la seguridad jurídica en el sistema interamericano, con base en la incidencia de al menos uno de los siguientes hechos probados:

a) La Comisión Interamericana violó las disposiciones de la Convención Americana sobre admisibilidad de peticiones, del Reglamento que rigen su actuación en perjuicio de la defensa del Estado, entre otros los artículos 32 a 37, dejando de lado la objetividad con que debe conducirse y convirtiéndose virtualmente en parte activa de la defensa del peticionario desde las primeras etapas de tramitación del asunto, al percatarse de las irregularidades manifiestas que presentaba inicialmente su petición y simplemente esperando de manera paciente a que los peticionarios intentaran impugnar, cuando su voluntad así lo dispusiera, la cosa juzgada representada por la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue dictada el 17 de agosto de 1993, no obstante que ya les había sido desfavorable el amparo directo interpuesto en 1997.

b) La Comisión no observó las exigencias del plazo razonable en las diligencias previas a la notificación de la supuesta queja al Estado el 4 de noviembre de 1999, puesto que retuvo la queja inicial por más de un año tres meses hasta que la comunicó formalmente al Estado, y no sólo esto, sino que omitió precisar que la queja inicial la había recibido el 13 de julio de 1998, con lo cual también incurrió en actos arbitrarios y contrarios a la certeza y seguridad jurídicas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

---

[118] Caso Castillo Páez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, párr. 34

c) La CIDH omitió informar en su momento debidamente al Estado y remitirle los elementos que ahora presenta como anexos a su demanda, por lo que es hasta ahora que el propio Estado conoce el manejo parcial que la dio la CIDH a una queja improcedente.

d) La actuación arbitraria de la CIDH se suma a la desplegada indebidamente por los peticionarios originales, quienes esperaron cerca de seis años para plantear un recurso extraordinario y, con esto, intentar de manera artificiosa e infundada que el presente asunto alcanzara al menos el ámbito de competencia temporal de la honorable Corte Interamericana, lo cual también ha sido combatido por el Estado.

- **La indefensión del Estado mexicano derivada de la indebida emisión del informe de admisibilidad 81/01 de 10 de octubre de 2001**

La conducta parcial y falta de objetividad de la CIDH se siguió manifestando en diversas etapas de la tramitación del asunto ante la misma y en forma patente se reflejó en el informe de admisibilidad número 81/01 de fecha 10 de octubre de 2001, en el que dejó materialmente en situación de indefensión al Estado mexicano al declarar por sí y ante sí la supuesta renuncia tácita de éste a la excepción de no agotamiento de recursos internos, aplicando de manera inexacta la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana.

Lo anterior, no obstante que la propia Comisión ha reconocido ante la honorable Corte que "... la protección del equilibrio procesal y especialmente del derecho de defensa de los estados, es el requisito fundamental del procedimiento..."[119]. Con motivo de la tramitación del caso Cayara, la CIDH manifestó que "... hizo todo lo necesario —incluyendo la reapertura del trámite a pedido del gobierno peruano— para garantizar el ejercicio más irrestricto de ese derecho".[120]

En el caso que nos ocupa la CIDH deberá demostrar a la Honorable Corte, en abono a la igualdad de trato que debe dispensar a los Estados, máxime aquellos que han colaborado y se han conducido ante ella de *buena fe,* cuáles fueron sus esfuerzos y la eficacia de éstos, para garantizar el ejercicio más estricto del derecho de defensa del Gobierno de México, sobre todo frente a su decisión unilateral y contraria a los jurisprudencia interamericana de admitir una petición contrariamente a las reglas previstas en la Convención Americana, y desestimar el planteamiento oportuno del no agotamiento de recursos internos.

Las siguientes consideraciones deberán ser analizadas a la luz de los criterios de la Honorable Corte Interamericana sobre la finalidad y naturaleza de la etapa previa al Informe de admisibilidad que puede emitir la CIDH y sobre la oportunidad que tiene el Estado para ofrecer argumentos en dicha etapa.

La CIDH sintetiza en su informe de admisibilidad de la petición, la posición del Estado previa a la admisibilidad de la petición a través de tres argumentos principales compatibles entre sí:

---

[119] Caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 39.

[120] Caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 39.

1) **El primero de ellos es el carácter de cosa juzgada del asunto ante las autoridades jurisdiccionales.**

Al señalar este punto el Estado no incurrió en ninguna imprecisión ni de hecho, ni tampoco jurídica, puesto que al momento de la presentación de la queja, y aún con posterioridad, permaneció inalterada la cosa juzgada representada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictada en segunda instancia el 17 de agosto de 1993, mediante la cual resolvió el fondo de la causa penal instruida contra Alfonso Martín del Campo Dodd. Así lo ha sostenido la honorable Corte en el caso Suárez Rosero.[121]

Como ya se señaló párrafos arriba, la propia Comisión ha sostenido ante la honorable Corte que la decisión de un tribunal de segunda instancia es *final y tiene el carácter de cosa juzgada.*[122] Una determinación que adquiere el estatus de cosa juzgada, no es susceptible de impugnarse a través de recursos ordinarios, pero si de medios de impugnación con carácter extraordinario o de tipo excepcional, éstos últimos deben su existencia al reconocimiento de que en casos remotos pueden sobrevenir elementos que demuestren la comisión de un indudable error judicial.

Tan es esto cierto, que cerca de cuatro años después de pronunciada la sentencia definitiva fue intentado el juicio de amparo directo para combatir la constitucionalidad y la legalidad de los aspectos procesales y de fondo de la sentencia del 17 de agosto de 1993. Los peticionarios o la propia Comisión Interamericana habrán de explicar a la honorable Corte por qué teniendo derecho a la interposición de juicio de amparo directo desde agosto de 1993, lo hicieron hasta el 18 de junio de 1997, antes de que México aceptara la competencia de la honorable Corte Interamericana el 16 diciembre de 1998.

En un segundo momento, fue interpuesto por los peticionarios, aunque mal planteado y fundamentado, así como carente de méritos jurídicos y de hecho, el reconocimiento de inocencia del inculpado, con el que pretendían anular la sentencia definitiva del 17 de agosto de 1993 y con ello la excarcelación del sentenciado. Se insiste que la *res iudicata* representada por la sentencia de 1993 ha permanecido inalterada. De igual forma, los peticionarios y la Comisión deberán explicar a la honorable Corte los motivos por los que teniendo derecho a la interposición del reconocimiento de inocencia del inculpado desde agosto de 1993, lo hicieron hasta el el 6 de abril de 1999, con posterioridad a la presentación de la queja inicial ante la propia CIDH, ya habiendo el Gobierno de México aceptado la competencia de la honorable Corte Interamericana el 16 diciembre de 1998.

2) **El segundo consiste en que la CIDH no debe fungir como una cuarta instancia adicional a los mecanismos jurisdiccionales de los Estados.**

La posición del Estado en este punto es perfectamente procedente y compatible con su afirmación del carácter de cosa juzgada del asunto, los peticionarios pretenden hacer uso del

---

[121] "71. Considera la Corte que el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (cf. *Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984. série A n° 81*, párr. 29) y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse". Ver Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, serie c no. 35, párrafo 71.

[122] Ver Caso Castillo Páez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, párr. 17.

sistema interamericano de protección de los derechos humanos para cuestionar la actuación y las decisiones de los órganos de procuración e impartición de justicia mexicanos, a efecto de intentar como fin último, sin importar los subterfugios que utilicen, la excarcelación de una persona declarada por un tribunal independiente e imparcial como plenamente responsable del dantesco homicidio del joven matrimonio formado por su propia hermana, Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba en 1992, a quienes atacó arteramente en su propia casa mientras dormían, quitándoles la vida al inferirles 35 y 29 heridas algunas de ellas mortales, respectivamente, producidas por apuñalamiento y que dejó en la orfandad y con un destino incierto a tres pequeñas niñas entonces de tan sólo 2, 5 y 6 años de edad, todas hijas del joven matrimonio formado por la pareja asesinada por el propio Alfonso Martín del Campo Dodd.

Las decisiones adoptadas por un órgano jurisdiccional en el orden interno que han adquirido el carácter de cosa juzgada, no pueden ser alteradas o modificadas más que por las vías y los medios jurídicos previstos para tal efecto. Dichas decisiones son emitidas de conformidad con los márgenes de valoración que el ordenamiento ha considerado como válidos, de conformidad con los elementos presentados y probados legalmente por las partes en un proceso.

Es precisamente el proceso el cauce para que las partes fundamente sus respectivas pretensiones y el marco en el cual el órgano jurisdiccional rinde su decisión. Con el fin de preservar la regularidad del proceso en sus diversas etapas, se prevén en la ley diversos medios de impugnación ordinarios que permiten a la parte afectada combatir los actos o decisiones judiciales emitidas en el curso de un proceso que por lo regular son conocidos y decididos por un superior jerárquico del órgano que emitió la decisión o acto, es por ello que los procesos por lo regular constan de dos instancias, la última de las cuales es la que decide de manera definitiva el litigio.

La existencia de recursos extraordinarios está apoyada sobre bases diversas, en primer lugar porque su objeto no es el reexamen de todas las cuestiones debatidas en un proceso, sino únicamente los aspectos estrictamente jurídicos reflejados en la sentencia, quedando firmes e inalterables los hechos tal cual fueron probados durante la primera y segunda instancia del proceso. Las violaciones que pueden alegarse en estos casos son de dos tipos, los errores judiciales en el procedimiento (*in procedendo*) y los errores cometidos con motivo de la decisión de fondo (*in iudicando*).

Estos son los tipos de cuestiones que son analizadas a través de la casación, misma que tiene por objeto anular una decisión *contra legem* teniendo como parámetro el expediente mismo formado durante el proceso y no cuestiones ajenas a éste.

Por lo que se refiere a los recursos excepcionales, son aquellos que siendo también extraordinarios, se dirigen a probar con elementos novedosos que no hayan sido ya planteados, analizados, valorados y decididos durante el transcurso del proceso, la existencia de un error judicial. El ejemplo clásico del error judicial es aquel en donde una persona fue procesada y encontrada culpable de la comisión del delito de homicidio y con posterioridad a que fue decidido el proceso en el fondo, se presenta la persona a quien supuestamente habría dado muerte.

Existe una categoría adicional de medios de impugnación que son los juicios o procesos impugnativos, esto es, que pueden tener también incidencia en un proceso en el que alguna de las partes considera que las violaciones procesales son de tal magnitud, que sus derechos de defensa y el debido proceso se han visto trastocados. Este tipo de juicios trae como resultado la anulación de ciertas etapas, actos procesales y decisiones judiciales durante el curso mismo del proceso de que se trate, ordenando la reposición de los mismos a efecto de que el proceso recobre la regularidad de su tramitación.

Como puede observarse, el proceso penal tiene una finalidad, los recursos ordinarios, extraordinarios, excepcionales y los juicios impugnativos otra diversa.

De lo expuesto surgen algunas consideraciones que deben ser analizadas detenidamente:

Si un órgano internacional pretende analizar la compatibilidad de lo decidido o actuado por un órgano jurisdiccional con un tratado internacional de derechos humanos, no debe hacerlo a la ligera ni aislar un acto del proceso en específico, sino analizar el proceso *in toto*, esto es, el conjunto de constancias procesales que permitan *reconstruir* la actuación, fundamentación y valoración realizada por el juez o tribunal, a partir de aquellos elementos presentados por las partes de conformidad con las reglas jurídicas vigentes en ese momento.[123]

De igual manera, si se pretende estudiar la concordancia de lo actuación judicial en la decisión de un recurso ordinario o extraordinario, deben tomarse en cuenta el *iter* procesal y la naturaleza jurídica que determina la finalidad del recurso interpuesto.

Sin considerar estos aspectos, señalar que un juez o tribunal no "tomó en cuenta" un punto de vista determinado es un juicio *a priori*, carente de todo fundamento racional y jurídico.

En tal sentido, pretender directa o indirectamente la anulación o revisión de etapas procesales ya decididas, o de recursos ordinarios y extraordinarios también decididos, convierte en efecto a los órganos supranacionales en una instancia más de impugnación, a menos que en efecto lleven a cabo una *reconstrucción* y valoración de las constancias procesales *in toto* comprobando su compatibilidad con las leyes internas y en último grado con los derechos fundamentales previstos en los instrumentos internacionales aplicables.

En el presente asunto, el Estado demostró ante la CIDH la inadmisibilidad de la petición y la compatibilidad de la actuación de las instancias nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual volverá a probar ante la honorable Corte Interamericana, si ésta decide declarar en este caso que hay motivos para su competencia.

3) El tercero consiste en la desestimación por parte de la CIDH de la excepción del no agotamiento previo de recursos internos planteada oportunamente por el Gobierno mexicano.

El tercero se refiere a que, tal como fue planteado y aceptado por las partes actuantes en una de las audiencias celebradas ante la CIDH el 11 de octubre de 2000, un año antes de decidir la admisibilidad de la petición y en actuaciones posteriores del Estado y los peticionarios, la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que recayó al recurso excepcional de

[123] Ver Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 189

reconocimiento de inocencia planteado por los peticionarios, podía ser impugnada *per se* en sus aspectos constitucionales y legales, a través del juicio de amparo indirecto ante un juez de Distrito y, la decisión de éste a su vez podía atacarse jurídicamente en apelación, de la cual conocería, siguiendo las reglas de competencia de ese entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un tribunal colegiado de circuito.

Esto fue aceptado por los presentes en la audiencia, quienes no rebatieron de manera suficiente dicho aspecto y, además, en efecto, los peticionarios presentaron con varios meses de retraso después de la celebración de dicha audiencia el amparo señalado y la apelación (recurso de revisión) que indicó el propio Estado.

De haber interpuesto en tiempo y forma el juicio de amparo, podría haberse permitido a los jueces federales analizar la regularidad constitucional y legal de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, de resultar fundada la pretensión de los peticionarios, habría traído como resultado la emisión de una nueva determinación que podría haber sido favorable a sus intereses, y a la pretendida excarcelación del sentenciado.

Resulta procedente hacer algunas precisiones sobre la naturaleza, los alcances y la finalidad de la etapa previa a la admisibilidad formal de una petición ante la CIDH. Durante la etapa de tramitación inicial de una petición, suponiendo que fue presentada conforme a los requisitos previstos en el artículo 32 del Reglamento de la CIDH entonces en vigor, tienen incidencia sobresaliendo los siguientes momentos:

1) La Comisión actuará por medio de su Secretaría, encargada de recibir y tramitar las peticiones presentadas a la misma (art. 34.1). La Secretaría *tendrá la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones que se presenten a la Comisión y que llenen todos los requisitos establecidos en el Estatuto y el presente Reglamento* (art. 30.1).

2) Si acepta, en principio, la admisibilidad de la petición, solicitará informaciones al Gobierno del Estado aludido transcribiendo las partes pertinentes de la petición (art. 34.1.c.).

3) La solicitud de información no prejuzgará sobre la decisión que en definitiva adopte la Comisión sobre la admisibilidad de la petición (art. 34..3).

4) La Comisión solicitará al Gobierno aludido que suministre información (art. 34.5)

5) Las partes pertinentes de la respuesta y los documentos suministrados por el Gobierno serán comunicadas al peticionario o a su representante (art. 34.7).

6) De recibirse la información o los documentos solicitados se transmitirán las partes pertinentes al Gobierno, facultándosele a presentar sus observaciones finales en el plazo de 30 días (art. 34.8).

7) El expediente será sometido por la Secretaría a la consideración de la Comisión (art. 36)

8) Para que una petición pueda ser admitida por la Comisión, se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos (art. 37.1).

9) Cuando el peticionario afirme la imposibilidad de comprobar el requisito señalado, corresponderá al Gobierno, en contra del cual se dirige la petición, demostrar a la Comisión que los recursos internos no han sido previamente agotados, a menos que ello se deduzca claramente de los antecedentes contenidos en la petición (art. 37.3).

10) La Comisión se abstendrá de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha sido notificado de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los recursos internos (artículo 38).

11) Si el expediente no se ha archivado, la Comisión podrá realizar una audiencia, previa citación de las partes, y proceder a un examen del asunto planteado en la petición. En dicha audiencia, la Comisión podrá pedir cualquier información pertinente y recibirá las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados (artículo 43).

12) La Comisión declarará inadmisible la petición cuando falte alguno de los requisitos de forma y fondo establecidos en la demanda, cuando no se expongan hechos que caractericen una violación de los derechos o cuando la petición sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio peticionario o del Gobierno (artículo 41).

Como puede observarse, de conformidad con los momentos que integran la etapa previa a la determinación de admisibilidad de una petición y las facultades y/o deberes que posee la CIDH durante la misma, dicha etapa tiene por objeto esclarecer los hechos motivo de la queja, confrontar las posturas de las partes involucradas a efecto de delimitar los puntos controvertidos, examinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Convención Americana y el Reglamento de la CIDH para la tramitación y decisión de peticiones individuales y allegarse de toda la información necesaria para determinar si la petición tiene méritos para declarar su admisibilidad o, en caso contrario, su inadmisibilidad o su archivo.

Las audiencias convocadas por la Comisión atienden también a estos objetivos, con la particularidad de que son foros en los que las partes involucradas se encuentran presentes frente a frente ante los Comisionados, quienes están en plena libertad de plantear a las partes los cuestionamientos que consideren pertinentes respecto de los hechos o sobre los méritos de la petición.[124]

[124] Esto se ve corroborado por el texto de diversos preceptos del Reglamento de la CIDH en vigor que se transcriben textualmente a continuación:

"Artículo 60. Objeto

Las audiencias podrán tener por objeto recibir información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA." (énfasis agregado)

"Artículo 62. Audiencias sobre peticiones o casos

La etapa señalada culmina con la determinación de la CIDH sobre si la queja satisface o no los requisitos de admisibilidad previstos primeramente en el artículo 46 de la Convención Americana, esto es, el agotamiento de recursos, el plazo de seis meses y que la queja no esté pendiente en algún procedimiento internacional, claro, siempre y cuando la consideración sobre el agotamiento de recursos internos no haya sido aguardada para la decisión del fondo de la petición.

- **Audiencia de admisibilidad celebrada el 11 de octubre de 2000 ante la CIDH, sobre el caso 12.228.**

Como se señaló, el 11 de octubre de 2000, como parte de la tramitación inicial del caso ante la Comisión, fue celebrada una audiencia de admisibilidad entre las partes involucradas ante la CIDH, misma que resulta de la mayor importancia porque evidencia lo siguiente:

1. Que dicha audiencia, se reitera, era de admisibilidad, esto es, que formaba parte del trámite de la petición y versaría sobre los requisitos para la admisión de peticiones de conformidad con la Convención Americana (artículo 46).

2. Que en efecto los peticionarios debían haber interpuesto como un último recurso el juicio de Amparo, contra la decisión del incidente de reconocimiento de inocencia, declarado infundado por votación unánime de los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

3. Que el plazo que tenían para interponer en tiempo y forma dicho amparo era el de 15 días, contados a partir de que les fue notificada la decisión del Tribunal ya mencionado.

4. Que los peticionarios no agotaron dicho recurso, por lo que dejaban en situación de indefensión al Estado mexicano.

5. Que los peticionarios por vez primera señalan el tema de haber hecho una denuncia formal por los hechos de tortura en 1995. No obstante que 3 meses antes ya habían incluso interpuesto un juicio de amparo contra la determinación definitiva del Ministerio Público de determinar que después de haber realizado las diligencias de investigación que el caso ameritaba, no procedía el ejercicio de la acción penal.

6. Que ante la situación creada por los propios peticionarios, la petición era inadmisible por ser extemporánea o, en su defecto, inadmisible por no haber sido agotados los recursos de la jurisdicción interna que estaban a su alcance, por lo que la CIDH debió haber procedido a decretar la inadmisibilidad de la petición por no haber cumplido con los requisitos del artículo 46 de la Convención Americana. Lo anterior es comprensible si se toma en cuenta que las violaciones alegadas a los derechos humanos son diversas, esto es, por lo que se refiere a la tortura, estando pendiente de resolverse el amparo interpuesto contra el no

---

1. Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso...." (énfasis agregado)

ejercicio de la acción penal, procedía decretar la falta de agotamiento de recursos y, por lo que hace a la violación a la libertad personal y al debido proceso legal, los recursos ya habían sido agotados pero de forma deficiente por parte de los peticionarios, impidiendo éstos que tales recursos desplegaran su efectividad; además, la Comisión debió considerar no sólo aquello que agotaron o pretendieron agotar los peticionarios, sino también lo que no agotaron y que resultaba idóneo y eficaz para esos casos, como lo es el habeas corpus (amparo), en las etapas iniciales de la detención.

La Audiencia fue presidida por el comisionado Claudio Grossman, quien en ese entonces fungía como Vicepresidente de la Comisión, quien dio oportunidad a que las partes presentaran sus respectivas posiciones sobre el asunto.

En dicha oportunidad, los representantes del Gobierno mexicano señalaron:

Que el asunto es cosa juzgada desde el punto de vista jurisdiccional.

Que en todas las etapas que habían sido hasta el momento agotadas, se dio al sentenciado la oportunidad de defensa, un juicio imparcial, el debido proceso legal y las garantías judiciales.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no existió tortura en el presente caso. El personal de estas instancias son independientes, y determinaron que las lesiones que presentaba Alfonso Martín del Campo eran auto infligidas, lo cual no sólo desvanece la imputación sobre tortura, sino que fortalece su culpabilidad en los hechos.

Los certificados médicos que describen las lesiones presentadas por el ahora sentenciado, fueron producidos previamente a su declaración ante el Ministerio Público, y coinciden con las lesiones que se habría producido a sí mismo y con motivo del accidente automovilístico que tuvo en la carretera al trasladarse a la Ciudad de México.

Una vez acreditado que la confesión no fue obtenida mediante tortura y que se respetaron las garantías judiciales en el caso, el Gobierno solicita que el mismo no sea admitido.

Con relación a la resolución administrativa derivada del procedimiento de responsabilidad incoado contra el Sr. Sotero Galván Gutiérrez, y la documentación sobre la calidad del defensor asignado a Alfonso Martín del Campo Dood en su declaración ministerial, fueron presentadas a consideración del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con motivo de la interposición del incidente de reconocimiento de inocencia. El Tribunal determinó que las pruebas que sirvieron de sustento a la sentencia definitiva dictada contra Alfonso Martín del Campo Dood, no fue únicamente la confesión de éste, sino los indicios y datos que arrojó la investigación y que fueron en su momento valorados por la autoridad judicial; de esta manera, los elementos presentados por los peticionarios en la interposición del reconocimiento de inocencia fueron insuficientes para revocar la sentencia definitiva que lo declaró culpable.

La resolución administrativa de referencia no es prueba de la existencia de la tortura, sólo de que una autoridad administrativa determinó faltas de ese tipo con relación a un servidor público, mismo que fue sancionado pero tenía aún a su alcance medios legales para

impugnarla. Una autoridad de control interno no es un órgano facultado para determinar la existencia de tortura, lo cual rebasaría evidentemente su ámbito de atribuciones y competencias. Es el Ministerio Público quien debe determinar esto.

No se tiene noticia de que contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que decidió el planteamiento de reconocimiento de inocencia del sentenciado, se haya interpuesto el juicio de amparo *que sería la vía legal para impugnarla a través de los tribunales federales*, pero se considera que los peticionarios tienen dicha vía para hacer valer sus planteamientos contra dicha resolución. [125]

El sentenciado denunció ante el Ministerio Público los supuestos hechos de tortura tres años después de que habrían ocurrido, lo que motivó que fueran investigados por las autoridades mediante el inicio de una averiguación previa. Con motivo de dicha investigación se llevaron a cabo numerosas diligencias de las que *no se encontró ningún elemento que hiciera comprobable el cuerpo del delito de tortura para todos aquellos a los que se denunció*, por lo que la averiguación previa fue resuelta en definitiva en diversas instancias que la corroboraron. A ese momento no tenía noticia de si la determinación resolutiva del Ministerio Público había sido combatida a través del propio juicio de amparo. [126]

Las autoridades judiciales, cuando resuelven el caso del Sr. Martín del Campo Dodd, no se basan única y exclusivamente en la declaración que produce éste ante el Ministerio Público, sino que en una serie de indicios y otras pruebas adicionales de carácter técnico científico, no testimoniales, que permiten corroborar como verídica la versión que proporciona el sentenciado en relación a cómo ocurrieron los hechos. Hay una serie de elementos que se describen en la sentencia, que dan crédito a esa confesión y los jueces resuelven básicamente con base en la prueba circunstancial la responsabilidad de Alfonso Martín del Campo Dodd, esto es, a través de la valoración del conjunto de los elementos de prueba para llegar a una convicción judicial plena. Los órganos judiciales valoraron los datos que corroboran la declaración del sentenciado, entre otros, pruebas periciales, la reconstrucción de hechos, pero no únicamente la confesión.

A continuación el Gobierno de México se permite transcribir las partes correspondientes de la mencionada Audiencia de Admisibilidad:[127]

.....

.....

Comisionado Grossman: Quisiera saber si los comisionados tienen alguna pregunta.

---

[125] Los peticionarios sabían que a la fecha de celebración de la audiencia, el no ejercicio de la acción penal en dicha investigación, por no satisfacerse elementos del delito alguno, había sido confirmado en definitiva el 6 de junio de 2000, prueba de lo cual es que el 30 de junio de 2000, Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo interpusieron una demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F.

[126] Ver nota anterior.

[127] El texto es una trascripción del disco compacto remitido por la CIDH, que contiene en un archivo de audio el desarrollo de la Audiencia mencionada.

Comisionado Grossman: Yo tengo algunas preguntas.

Comisionado Grossman: Primero a los peticionarios, el Gobierno plantea que la decisión del juez no se basó exclusivamente en la confesión. ¿ustedes están de acuerdo con eso?

.....

Comisionado Grossman: A mi me interesa ver los puntos de divergencia, digamos. Entonces ahí hay un punto de divergencia.

Comisionado Grossman: Segunda. Una pregunta para ustedes (el Gobierno). El policía este que fue suspendido por tres años ¿fue suspendido por los tres años?.

Gobierno: Fue resuelta la suspensión, sin embargo él tiene recursos que hacer valer, no sabemos si los ha hecho valer o si ya se hayan agotado estos.

Comisionado Grossman: ¿Cuando fue suspendido?

.....

Peticionarios: Si me permite honorable comisionado, fue suspendido el 14 de octubre de 1994, mediante resolución de la Contraloría Interna que textualmente señala "que el servidor Sotero Galván Gutiérrez se inhabilita por tres años para desempeñar un empleo, cargo, comisión públicos, a partir del día hábil siguiente en que se notificó esta resolución";

Comisionado Grossman: Cuando alguien fue inhabilitado por tres años, ¿percibe sueldo?

Gobierno: No

.....

Comisionado Grossman: Segundo ¿tiene recursos judiciales una persona que es inhabilitada por tres años?

.....

Gobierno: Recurso ante los tribunales administrativos.

Comisionado Grossman: ¿No puede ir al amparo?

Gobierno: También

Comisionado Grossman: También entonces ante los tribunales judiciales. Ahora, esta resolución de la Contraloría ¿tiene efectos inmediatos, si es que no hace ejercicio de recursos judiciales?

Gobierno: Si no hace uso de los recursos sí.

Comisionado Grossman: Ahora, a mi me gustaría saber si este policía en el hecho fue suspendido… y si hizo o no derecho a, porque creo que todos podemos concluir de que no es la mejor noticia que a uno le pueden dar, que durante tres años no va a percibir salario por ser torturador. ¿Correcto? (dirigiéndose al Gobierno) ¿está de acuerdo con ello? (dirigiéndose a los comisionados) ¿están de acuerdo conmigo? Entonces (dirigiéndose a los peticionarios) ¿ustedes están de acuerdo también que el policía puede hacer ejercicio de derechos, puede apelar de esto, o sea?

Peticionarios: Sí claro, exacto, tiene derecho a los recursos (inaudible).

Gobierno: Sr. Presidente, yo quisiera señalar a esta ilustre Comisión que estas respuestas podemos darlas por escrito, revisar el expediente.

Comisionado Grossman: conforme. Yo considero, yo no quiero que en ningún momento ni los peticionarios ni el Gobierno se sientan sorprendidos por algo, el propósito nuestro es averiguar los hechos, entonces no se trata aquí de "pasar un gol con la mano", o sea nuestro propósito es saber las cosas, si fue suspendido tres años, si no hizo efectivos recursos judiciales, eso vamos a analizar que valor tiene……..

……

……

Comisionado Grossman: Bien, yo quiero recordar una cosa, yo hice algunas preguntas de fondo, pero esta es una audiencia de admisibilidad. En otras palabras aquí hay que ver, si los hechos, de ser verídicos, ah, constituyeran una violación de la Convención Americana, tendríamos que pasar al fondo, o sea constituirían una violación. En este momento no podemos establecer la veracidad de los hechos, pero si alguien alega que el policía no le sonrió, bueno, lo hecho de ser verídico incluso, aunque fuera cierto que no le sonrió, no está desafortunadamente en la Convención, que uno tiene derecho a que le sonría la policía, lo que está en la Convención es la prohibición de tortura. Ahora, es el fondo del asunto, es el fondo del asunto el que establece si son verídicos o no los hechos, lo que estamos viendo es la forma en este momento, si se cumplen las formas ligadas con la Convención.

Ahora, desde luego sí, de ser verídico que hubo tortura, hay una violación de … ser verídico, no sé si es verídico. Ahora, momento, yo quiero saber lo siguiente, el otro requisito de admisibilidad es el tema de la, digamos así, que no haya recursos pendientes. El Gobierno de México ha dicho que hay recursos pendientes. Que podrían haber intentado otro recurso más o no, (dirigiéndose al Gobierno) ¿han planteado eso ustedes? ¿sí? Yo entendí que eso es de lo que usted me hablaba.

Gobierno: Sí, contra la resolución que niega el recurso de reconocimiento de inocencia, procedería el juicio de amparo.

Comisionado Grossman: Ya, el Gobierno de México dice que hay un recurso pendiente, qué opinan los peticionarios.

Peticionarios: No, no se presentó el recurso de amparo, porque sería repetir el mismo concepto de violación, si, el mismo argumento de que la autoridad mexicana estaba negando la existencia de tortura y estaba confirmando la sentencia condenatoria, si.

Comisionado Grossman: ¿hay plazo de presentación del amparo?

Peticionarios: se agotaron todos los recursos disponibles, sí, hay un plazo.

Gobierno: Sí, creo que se aplicaría el plazo de 15 días.

Comisionado Grossman: ¿Cuándo fue la decisión?

Gobierno: En abril de noventa y nueve, 29 de abril de noventa y nueve.

Comisionado Grossman: A ver ustedes (dirigiéndose a los peticionarios) me podrían repetir ¿por qué el amparo no se presentó aquí? Ese este un tema muy importante....

Peticionarios: En este caso agotamos todos los recursos ordinarios, si, la causa que nos tiene acá es la tortura, es la condena, la tortura no sancionada y la condena bajo violación de las garantías del debido proceso y de el artículo 5, la violación a la integridad personal en un proceso judicial.

Comisionado Grossman: Sí entiendo,

Peticionarios: Ese es el fondo y agotamos por esa causa todos los recursos que la jurisdicción ofrece.

Comisionado Grossman: El Gobierno de México dice que no. Dice que ustedes tenían un recurso de amparo y no lo agotaron.

Peticionarios: Sólo, si, tengo que hacer una aclaración, el incidente de reconocimiento de inocencia no es un recurso ordinario, si, sino que es un recurso extraordinario que no teníamos que agotarlo necesariamente, sino que lo agotamos porque podía ofrecer la posibilidad de resolver la situación.

Comisionado Grossman: Bueno, pero qué importa que sea ordinario o extraordinario, esto es, el problema si el recurso puede resolver el criterio establecido,...., es que el recurso permita obtener el resultado que se persigue, ahora, ustedes (dirigiéndose a los peticionarios) ¿Cuándo se presentó el recurso de inocencia?

Peticionarios: El reconocimiento de inocencia se presentó, fue en el mes de, bueno en los primeros días del año 1999, y se resolvió en abril de 1999, perdón, se presentó el 6 de abril y se resolvió el 29 de abril.

Comisionado Grossman: El 29 de abril, ¿cuándo trajeron el caso a la Comisión?

Peticionarios: El caso a la Comisión lo trajimos en octubre de noventa y nueve.[128] Con la venia del Sr. Comisionado, ya estaría precluido el término para presentar el recurso de amparo, o sea que, en este momento.

Comisionado Grossman: Yo entiendo, pero eso es problema de ustedes. Si uno no agota un recurso, de ser el recurso agotable, si ustedes no lo agotaron, privaron al Estado de la posibilidad de corregirlo internamente y el caso es inadmisible, de ser así, yo no estoy diciendo nada, estoy planteando el tema. Ahora, para ustedes fue un recurso de los establecidos bajo Manfredo Angel Velásquez, el recurso de inocencia, porque es el recurso que han contado para los seis meses. Claro, hay que plantear el último recurso, si es que ese recurso no fuera un recurso válido, están fuera de plazo; claro, porque estarían fuera de los seis meses, bueno, ahora el tema entonces es el siguiente, a ver, quisiera escuchar de nuevo entonces por qué el amparo en este caso no era justificable.

Peticionarios: Si, nosotros partimos de los hechos que consideramos una violación en contra de las garantías constitucionales entonces, y de las garantías establecidas por la Constitución a favor de Alfonso Martín del Campo, si, contra esos hechos que violaron esas garantías, agotamos todos los recursos existentes, y los recursos son: apelación contra la sentencia de primera instancia y amparo, si, supimos que existía la posibilidad de un incidente de reconocimiento de inocencia, si, y lo agotamos, lo agotamos como recurso extraordinario, ujum, y una vez que tuvimos la resolución y teniendo confirmados los mismos criterios que se habían utilizado dentro de las sentencias que habían condenado a Alfonso Martín del Campo Dodd, y sabiendo que habíamos agotado todos los recursos que la jurisdicción nos ofrecía para impugnar los hechos desde su inicio, optamos por acudir ante la Comisión Interamericana.

Comisionado Grossman: Ahora, ustedes interpusieron un amparo sobre el hecho de la tortura antes.

Peticionarios: Claro, sobre la tortura presentamos una denuncia penal, si, que es el recurso que existe.

Comisionado Grossman: A mi me gustaría una copia del recurso, porque la tesis de ustedes es que el amparo aquí no era necesario, porque ya se había decidido con argumento similares. Entonces me gustaría tener una copia de esa presentación.

Peticionarios: Sí

Comisionado Grossman: Porque creo que no está en el expediente, y desde luego se le dará traslado al Gobierno para que el Gobierno comente. (dirigiéndose a los peticionarios) ¿Usted quiere agregar algo antes de pasar la voz al Gobierno?

Peticionarios: Sí, dos cosas, eh, Decano, la primera es que nosotros aportamos copia de cada una de las piezas procesales, eh, en su oportunidad en la denuncia, eh, que

[128] Esto es falso, pues la petición inicial ante la Comisión fue de 13 de julio de 1998.

ustedes mismos podrán evaluar que los argumentos expresados en cada una de las providencias emitidas por la jurisdicción, son exactamente los mismos, no varían de manera alguna; y solamente en cuanto al tema de admisibilidad que exige la Comisión (sic) en su artículo 47, es, en cuanto a la caracterización de la violación, quería solamente apuntar en cuanto al tema de la tortura y…

Comisionado Grossman: ¿Cómo, Cómo? A eso no le entendí, ahí me perdí.

Peticionarios: Sí, eh, uno de los requisitos de admisibilidad, si usted me permite, es la caracterización de una violación a la Convención Americana.

Comisionado Grossman: Claro, si ustedes alegaran un hecho, ahora en la fase de admisibilidad no hay que probar, pero si alegaran un hecho que de ser verídico no viola la Convención, lo declaramos inadmisible; ahora, ustedes están alegando tortura, eso satisface un derecho protegido por la Convención, pero además hay otros requisitos, seis meses, que no estén pendientes… no necesito decirle abogado (inaudible), entonces, lo que yo estoy preguntando un poco es sobre el agotamiento de recursos internos, frente a lo que dice el Gobierno de que dejaron pasar un recurso. Entonces, por eso les pregunto por qué, y el argumento de que el recurso de inocencia no sirve, ustedes lo usaron para contar a partir de ese momento los seis meses, entonces es un recurso válido.

Peticionarios: Pero no lo utilizamos, o sea, la intención de utilizar el recurso no fue la de interrumpir el término de caducidad, sino que hasta allí se llegó en la instancia, hasta, ese fue el camino que se recorrió y pasamos….

Comisionado Grossman: Yo no discuto eso, lo que digo nada más es que es un recurso válido.

Peticionarios: Claro, es un recurso al que se acudió. Si, existen diferentes violaciones que hemos denunciado ante la Comisión y hay diferentes recursos para cada violación, si, eh, concretamente para la violación al artículo 5, por tortura, el recurso que existe en México es la denuncia penal, si, y transcurridos los años no tuvimos justicia por los hechos de tortura.

Comisionado Grossman: Pero ahí estamos un poco confundidos porque ahí hay amparo y se lo rechazan a uno, hay declaración de inocencia, porque ustedes están contando los seis meses a partir del recurso de inocencia, que una de las cosas que alega es la tortura. Eso es algo que cuenta y vale, ustedes intentaron ese recurso.

Peticionarios: Sí fue intentado, sí, sí.

Comisionado Grossman: ¿Quisiera comentar algo el Gobierno en esto?

Gobierno: Sí, muchas gracias, Sr. Presidente, en el caso del recurso de inocencia no se recurre al amparo, pero tampoco se recurre al amparo, no se agota el recurso en contra de la tortura, y al respecto me gustaría pedirle al Lic. Alejandro Robledo nos abundara sobre el particular.

Con su permiso Sr. Presidente, efectivamente, contra la investigación realizada por la Procuraduría del Distrito, por los hechos denunciados de la tortura, hay dos instancias internas de la propia Procuraduría que revisan esa resolución a fin de determinar si está o no apegada a derecho, estas instancias dentro de la Procuraduría fueron determinadas que sí fue apegada la resolución de no ejercicio a derecho, contra esa resolución de no ejercicio de la acción penal procede también el juicio de amparo, mismo que hasta la fecha no tengo conocimiento si fue promovido o no, pero si es importante dejar en claro en esta Audiencia que procede el juicio de garantías contra el no ejercicio de acción penal, por los hechos particulares de tortura denunciados y que desconocemos si fue presentado el juicio de garantías o no en ese plazo.

Comisionado Grossman: Pero con el recurso de inocencia podrían haber tenido el mismo resultado, de haber sido concedido ¿o no?

Gobierno: Lo que pasa es que el reconocimiento de inocencia se refiere al proceso, y el no ejercicio se refiere propiamente al delito de tortura denunciado, si le fuese concedido el reconocimiento sería por cuanto hace a la libertad personal del procesado, en relación al proceso; esto es en relación nada más a la denuncia de tortura.

Comisionado Grossman: Ya veo, okay, ¿tienen algo que comentar?

Peticionarios: No.

Comisionado Grossman: (dirigiéndose a los peticionarios) A mi me gustaría tener el beneficio de una nota de ustedes, sobre el tema del agotamiento de los recursos, ustedes tienen que probar, el gobierno argumentaba en esto "cuarta instancia" implícita y también "recurso", agotamiento de recursos, entonces ustedes tienen que, a mi me gustaría, entonces el peso de la prueba está en ustedes. Me gustaría tener una nota de esto, que le vamos a dar traslado al ilustre Gobierno, para que tenga una oportunidad de decir, eh, enfocándolo sobre el tema de los recursos internos sobre las violaciones alegadas, ¿es posible?

Peticionarios: Acataremos su petición.

Comisionado Grossman: ¿En qué plazo?

Peticionarios: Treinta días. Si le parece a usted mucho tiempo…

Comisionado Grossman: me parece muy bien y ahora en plazo de días, plazo de mes. Claro, porque tuvimos un caso contra Guatemala que duró dos meses discutiendo tonteras, sí eran treinta días o un mes, entonces mejor plazo de meses, porque así sabe uno desde qué fecha a qué fecha.

Peticionarios: Para el 11 de noviembre, antes del 11 de noviembre, Sr. Presidente.

Comisionado Grossman: Bien, eso capaz que no los pilla a ustedes en el Gobierno actual.

Gobierno: Capaz que sí Sr. Presidente. Creo que estamos en tiempo.

Comisionado Grossman: Ya, está bien.

Peticionarios: La información que harán llegar el 20 o 21 de noviembre, eh, yo creo que están en posibilidad de presentarla antes, y pienso, me preocupa porque yo no sé si hay movimiento realmente en el gobierno, en su jurisdicción concretamente, yo no sé si en ese momento estaría en posibilidad, y el tipo de información es muy fácil conseguirla antes, razonablemente, a mi me parece que podría ser presentada antes.

Gobierno: Señores miembros de esta ilustre Comisión, y distinguidos peticionarios, lo único seguro de mi vida es mi incertidumbre, me pueden mandar de Embajador a otro lado o de Cónsul, pero haremos lo posible por tenerlo, a la brevedad posible.

Comisionado Grossman: Un plazo máximo, hay una petición de los peticionarios de hacerlo antes.

Gobierno: Sí, con gusto.

Comisionado Grossman: (dirigiéndose a los peticionarios) lo mismo para ustedes. Okay, bien, (dirigiéndose a los peticionarios) ¿otro tema?, (dirigiéndose a los comisionados) ¿otro tema?, (dirigiéndose al Gobierno) ¿otro tema?.

Gobierno: No señor Presidente, muchas gracias.

Comisionado Grossman: Creo que hasta hay una campanilla aquí para golpear, ¡ring! (tocando la campanilla y con ello, dando fin a la Audiencia de admisibilidad)

No se debe perder de vista que la Honorable Corte ha reiterado en múltiples ocasiones que el agotamiento de recursos internos es una regla que "... permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta 'coadyuvante o complementaria' de la interna (Convención Americana, Preámbulo) (*Caso Velásquez Rodríguez*, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 61; *Caso Godínez Cruz*, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 64 y *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales*, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 85)."[129]

La honorable Corte, al igual que la CIDH, tiene el deber de analizar si la petición presentada cumple todos los requisitos del artículo 46 de la Convención, sobre todo lo relativo a la regla del previo agotamiento de los recursos internos. Es bien sabido el criterio de la honorable Corte en el sentido de que " El agotamiento de recursos internos en un caso estrictamente procesal corresponde al fondo del asunto, que se refiere precisamente a la posible ineficacia del Poder Judicial ...". Sin embargo, también lo es que la Comisión "... *debe dar en todos los casos debida consideración al artículo 46.1.a de la Convención que la obliga a tener en cuenta el previo agotamiento de los recursos internos como un requisito de admisibilidad que sirve, entre otras cosas, para determinar la oportunidad de la queja que ante ella se presenta* (art. 47 de la Convención), sujeto ese acto,

[129] Caso Gangaram Panday. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, párr. 38.

como es obvio, llegado el caso, a la posterior revisión de la Corte que será la que, en última instancia, decida al respecto".[130]

La inobservancia de la regla del previo agotamiento de recursos internos, no sólo mengua la posibilidad de que sean las instancias internas las que atiendan los planteamientos del peticionarios en orden a la solución del asunto, sino que disminuye severamente el ámbito de actuación de las autoridades que tienen a su cargo el deber primario de protección de los derechos humanos y, lo que es todavía más grave, desnaturaliza una de las reglas básicas de todo sistema internacional de protección de los derechos humanos.

De la propia audiencia de admisibilidad se desprende que el Gobierno hizo de manera clara el planteamiento de la falta de agotamiento de los recursos internos, no sólo por cuanto hace a la posibilidad de impugnar la decisión que recayó al reconocimiento de inocencia, sino también respecto de la investigación por tortura. Cabe destacar que tres meses previos a la celebración de la audiencia señalada, los peticionarios habían interpuesto un amparo con motivo de la investigación penal por tortura, lo cual omitieron señalar a la CIDH, pero por lo que se refiere al amparo contra la determinación de reconocimiento de inocencia, ante el planteamiento del Gobierno los peticionarios aceptan ante la CIDH que no lo interpusieron en tiempo.

En este orden de ideas, en seguimiento a la audiencia celebrada, el 23 de marzo de 2001 la CIDH transmitió al Gobierno una nota mediante la cual remitió las partes pertinentes de la información de los peticionarios. En dicho documento los peticionarios, en cumplimiento a un requerimiento de la propia Comisión, dan respuesta y ofrecen su postura con relación al tema del agotamiento de los recursos internos planteado por el Estado, dicha postura se aprecia en varios de sus párrafos que se transcriben a continuación:

Los peticionarios "... tienen a bien presentar el presente escrito en cumplimiento a la solicitud formulada por la H. Comisión en la última audiencia sobre el caso en referencia, en la que se nos solicitó el desarrollo de los recursos internos agotados en el presente caso".

"En el caso que nos compete el Estado ha señalado que no se han agotado los recursos internos. Sin perjuicio de que la instancia interna se ha caracterizado en el presente caso por flagrantes violaciones a las garantías judiciales y el debido proceso, (lo que eximiría a los peticionarios del agotamiento de los mismos), recordamos a la H. Comisión los diversos recursos intentados en las vías judiciales como en las administrativas a nivel interno".

"Finalmente y sin perjuicio de la no obligación (sic) de continuar agotando los recursos internos cuando estos han resultado ineficaces violatorios del debido proceso legal, con fecha 19 de marzo de 2001 se presentó ante el Juez de Distrito en Turno un amparo directo (sic) contra la resolución del reconocimiento de inocencia. El mismo se encuentra actualmente en trámite."

"... esta Comisión debe considerar que deben operar las disposiciones establecidas en los artículos 46.2.a de la Convención así como el artículo 37.2.a del Reglamento de la Comisión sobre excepciones preliminares".

---

[130] Ver Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, serie C, no. 30, párrafos 48 y 47.

Esto significa que fue la propia Comisión quien, en efecto, solicitó a los peticionarios información sobre los recursos agotados (pero no que procedieran a su agotamiento), en respuesta los peticionarios aseveraron que operaban excepciones a dicho agotamiento, pero procedieron a interponer el juicio de amparo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,[131] lo cual por una parte confirma la afirmación sostenida por el Estado y, por otra, permite ver claramente que *de facto* aceptaron la excepción interpuesta por el Gobierno mexicano sobre este punto. En dicha respuesta los propios peticionarios admiten que el amparo se encontraba en trámite; sin embargo, por lo que hace al amparo contra la determinación de la procedencia de no ejercicio de la acción penal, los peticionarios no aportaron información alguna..

En respuesta a lo anterior, el 21 de abril de 2001, el Gobierno mexicano reafirma su postura sobre la falta de agotamiento de recursos internos y la improcedencia de excepciones a dicho agotamiento.

Cabe hacer notar que el 1° de mayo de 2001 entró en vigor el nuevo Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en atención a lo dispuesto por la disposición transitoria prevista en el artículo 78 del mismo, y que en virtud de estar en trámite inicial el asunto ante la Comisión, esto es, sin haber sido decidida formalmente la admisibilidad o inadmisibilidad del caso, dicho ordenamiento rige en lo sucesivo la tramitación del asunto.

La CIDH corrió traslado a los peticionarios de las observaciones del Estado ya referidas, quienes en respuesta de fecha 31 de mayo de 2001 señalaron expresamente:

> "... nos gustaría informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") el avance en el juicio de amparo presentado en contra de la resolución de reconocimiento de inocencia. Que si bien desde nuestra perspectiva no es un recurso a agotar, como ya lo señalamos en el comunicado anterior, éste fue presentado el día 19 de marzo de 2001."
>
> "El amparo se tramitó ante el Sexto Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal, correspondiéndole el número de expediente 484/2001 y siendo resuelto por este tribunal el 16 de abril de 2001. (anexo 1). La resolución determinó sobreseer el juicio de amparo al considerar que éste no fue presentado en tiempo."
>
> "El juzgador para fundamentar su resolución citó una tesis aislada, la cual considera que las sentencias de reconocimiento de inocencia no implican como tal un ataque a la libertad personal, lo que a nuestro parecer es aberrante. Por ello mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2001 presentamos un recurso de revisión en contra de la sentencia de sobreseimiento del Juzgado de Distrito (Anexo 2). La revisión está siendo tramitada ante el

---

[131] En otros casos, la Corte ha aceptado que los recursos extraordinarios previstos por el orden jurídico son en efecto recursos internos que deben ser agotados, si se pretende cumplir con el requisito que la Convención Americana establece para la consideración de peticiones. Así se reconoció expresamente en el Caso Maqueda. Resolución de 17 de enero de 1995. Serie C No. 18, párr. 2, donde se dijo "Los representantes del señor Maqueda interpusieron un Recurso Extraordinario, que fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 25 de octubre de 1990. Ante la negativa, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un Recurso de Queja por Denegación del Extraordinario, el que también fue rechazado el 17 de marzo de 1992, quedando así agotadas las instancias procesales existentes en la jurisdicción interna".

5° Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en el Distrito Federal bajo el expediente 945/2001 y su resolución no será emitida antes del 15 de junio del presente año."

Luego de haber sido enterado el Estado de la respuesta de los peticionarios, el 9 de julio de 2001 ofreció sus observaciones a la comunicación de éstos y agregó información sobre la naturaleza del amparo y del reconocimiento de inocencia del inculpado, además de remitir un informe rendido por el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el que se demuestra cómo se determinó la no comprobación de violaciones a los derechos humanos de Alfonso Martín del Campo Dodd. Adicionalmente el Estado señaló en las partes conducentes de sus observaciones, entre otras cosas que:

"El Gobierno de México se permite señalar a la CIDH que omitirá referirse a aspectos en los cuales ya fijó su postura, y que deberán tenerse por reproducidos en la presente comunicación".

"El Gobierno de México se reserva el derecho de proporcionar consideraciones adicionales sobre la admisibilidad de la petición y el fondo de la misma, una vez que se cuente con la decisión definitiva que recaiga al juicio de amparo a que se ha hecho referencia."

La información presentada por el Gobierno de México fue trasmitida a los peticionarios el 20 de julio de 2001. Dicha información nunca fue respondida, ni controvertida en modo alguno por éstos,[132] transgrediendo con esto el artículo 30.5 y 30.6 del Reglamento de la CIDH en vigor en la parte que señalan:

"5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento.

6. Recibidas las observaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la Comisión verificará si existen o subsisten los motivos de la petición. Si considera que no existen o subsisten, mandará a archivar el expediente."

Posteriormente, el 10 de agosto de ese mismo año, los peticionarios solicitaron a la CIDH "... que se decrete una audiencia para el próximo periodo de sesiones a fin de obtener un informe de admisibilidad lo antes posible".

En respuesta a dicha petición, la CIDH respondió el 27 de agosto de 2001 lo siguiente:

"Al respecto, cumplo con poner en su conocimiento que, debido al elevado número de audiencias solicitadas, no nos será posible acceder a su pedido durante este periodo de sesiones. Sin embargo, si tiene interés en que sea considerada para el próximo periodo de

---

[132] En aplicación del principio jurídico que señala *donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición* es procedente aplicar los peticionarios la regla prevista en el artículo 39 del Reglamento de la CIDH, cuyo texto señala "Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si éste no suministra información relevante para controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión conforme al artículo 38 del presente Reglamento, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria". En tal sentido, se deben tener por verdaderas las afirmaciones del Estado que fueron comunicadas oficialmente a los peticionarios, ante el silencio de éstos y la inexistencia de constancia alguna que tales señalamientos del Estado son falsos.

sesiones de la CIDH, ruego a usted que la presente a esta Secretaría con la antelación de 40 días establecida en el artículo 62.2 de su Reglamento.[133]

Mucho agradeceríamos que nos enviara oportunamente cualquier información o hecho nuevo que usted considere relevante y que no conste en el expediente sobre los asuntos de referencia."

El 25 de octubre de 2001 la CIDH recibió un nuevo documento por parte de los peticionarios, mediante el cual informan a dicha Comisión lo siguiente:

"El día 3 de septiembre del presente año el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió la sentencia a la revisión que presentamos en contra de la resolución del Juzgado de Distrito que había determinado sobreseer el caso. La resolución en comento, que pone fin a todas las instancias internas para revisar el caso concluyó" (énfasis agregado)

"Si bien la representación del Estado había sostenido que aún faltaban por agotarse algunos recursos de la jurisdicción interna, y estos alegatos no habían sido aceptados por los peticionarios, con la sentencia del Tribunal Colegiado esta Comisión debe tener por agotados todos los recursos internos y por tanto proceder a realizar el informe de admisibilidad correspondiente." (énfasis agregado)

Las comunicaciones presentadas por los peticionarios en marzo, mayo y octubre de 2001, muestran de manera clara dos extremos, por una parte los peticionarios niegan que el amparo y la apelación que seguiría a éste no eran un recurso interno que debían agotar, sin embargo, en la práctica deciden acudir a ellos y agotar ambos, como quien completa una mera formalidad sin aparente relevancia. El Estado opina que esto hace evidente, por una parte, que los peticionarios mienten y se contradicen por cuanto niegan algo en el papel, pero en la práctica lo realizan y/o, por otra, acuden al agotamiento de recursos "ad cautelam", tal vez por mero trámite, lo cual es indicativo de que se han conducido con mala fe durante el procedimiento.

En efecto, de conformidad con la jurisprudencia establecida por la Honorable Corte:

"... de acuerdo con el principio de buena fe, que debe imperar en el procedimiento internacional, es necesario evitar toda manifestación ambigua que produzca confusión".[134]

Si los peticionarios no consideraban que debían haber agotado tales recursos ¿por qué y para qué decidieron de cualquier forma interponerlos? Eso es algo que tendrán que acreditar y explicar ante la Honorable Corte.

De cualquier forma, resulta sorprendente que la CIDH no haya transmitido al Estado la comunicación de los peticionarios del 25 de octubre de 2001, a fin de que tuviera oportunidad de manifestar los comentarios y observaciones que se había reservado para dicho momento, lo cual es un motivo manifiesto más de la constante indefensión a la que lo redujo durante la tramitación del

---

[133] Esto confirma que el Reglamento de la CIDH es el ordenamiento adjetivo que rige la tramitación del asunto a partir de su entrada vigor el 1° de mayo de 2001.

[134] Caso Cantoral Benavides. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 30.

caso, y una prueba adicional de la manera arbitraria en que condujo el procedimiento ante sí, en especial por la inobservancia del ya trascrito artículo 30.5 y 30.6 del Reglamento de la CIDH en vigor. Así lo confirma la jurisprudencia de la Honorable Corte, al afirmar que "...la jurisdicción internacional lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos[135]

El presente caso no es la primera vez que en el sistema interamericano la Comisión muestra conductas como las que se le imputan; ya en el Caso Fairén Garbi y Solís Corrales en el que efectivamente se había comprobado, a diferencia del presente, que el Estado había interpuesto tardíamente la excepción de no agotamiento de recursos internos, la Honorable Corte afirmó que no obstante esto:

> "... La Corte no debe resolver sin tener en cuenta ciertas actuaciones procesales cumplidas por ambas partes. Por ejemplo, el Gobierno no hizo valer la excepción de los recursos internos en el momento en que recibió la comunicación formal de la petición introducida ante la Comisión, como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondió a la solicitud de información de la Comisión. La Comisión, por su lado, no hizo referencia a la extemporaneidad y a la generalidad de la alusión a los recursos internos por parte del Gobierno ni a los efectos jurídicos que de allí se podrían inferir. Además en sus resoluciones 16/84 y 23/86 se refirió al tema de manera poco congruente, pues mientras en la primera consideró que las gestiones ante varios gobiernos eran suficientes para dar por satisfecho tal requisito, en la segunda se afirmó que el lesionado en sus derechos y el denunciante no habían tenido acceso a la jurisdicción interna. En esas condiciones, y sin más evidencias que las contenidas en el expediente, la Corte considera que sería impropio rechazar **in limine** la excepción del Gobierno sin dar a ambas partes la oportunidad de sustanciar plenamente sus puntos de vista."[136]

En virtud de lo anterior, el Gobierno de México solicita a la Honorable Corte que la conducta procesal tanto de la Comisión, como de los propios peticionarios sea analizada detenidamente, con el fin de evaluar los planteamientos hechos por el Estado sobre las excepciones preliminares interpuestas. Esta petición se fundamenta en que "...no existe razón alguna para que la Comisión no dé estricto cumplimiento a las normas procesales porque, como lo ha dicho ya y lo reitera ahora, es verdad que el objeto y fin de la Convención no pueden sacrificarse al procedimiento pero éste, en aras de la seguridad jurídica, obliga a la Comisión."[137]

El Gobierno mexicano, sin ser notificado de la última comunicación de los peticionarios, recibió, en cambio, el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, mediante el cual la CIDH decide,

---

[135] *Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares.* Sentencia de 18 de noviembre de 1999. Serie C No. 61, párr. 41; *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Excepciones Preliminares*, *supra* nota 4, párr. 42; y *Caso Gangaram Panday. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, párr. 18; Caso de los 19 Comerciantes. Excepciones Preliminares. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 28.

[136] Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 89.

[137] Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, párr. 52.

entre otras cosas, declarara admisible el caso 12.228, señalar que el Estado renunció a la excepción de no agotamiento de recursos internos y decide continuar con el análisis de fondo de la cuestión y publicar dicho informe en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

La emisión y el contenido del Informe de Admisibilidad 81/01 que se explica enseguida, constituye una de las más arbitrarias actuaciones de la CIDH, que son absolutamente contrarias a las reglas aplicables de su propio Reglamento que, como ya se señaló, había entrado en vigor el 1° de mayo de 2001, y contravienen también al propio expediente integrado por ella, las constancias que lo apoyan y las actuaciones que realizó e impulso durante su tramitación.

Se debe considerar que la Honorable Corte ha señalado con acierto que:

> "Atentaría contra el objeto y fin de la Convención Americana, y no tomaría en cuenta el contexto de la misma, aplicar las normas reglamentarias sin un criterio de razonabilidad, ocasionando un desequilibrio entre las partes y comprometiendo la realización de la justicia."[138]

Lo razonable es considerado por la honorable Corte como *lo justo, lo proporcionado y lo equitativo, por oposición a lo injusto, absurdo y arbitrario.*[139] Esto último es lo que caracterizó a la actuación de la CIDH durante la tramitación del presente asunto, en perjuicio del Gobierno mexicano y del funcionamiento regular del sistema interamericano.

Los preceptos del Reglamento de la CIDH en vigor que, como se verá, resultan específicamente transgredidos son en su parte conducente los artículos 60,[140] 62.1,[141] 31.1,[142] 32.1,[143] 31.3,[144] 34,[145]

---

[138] Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Excepciones Preliminares. Sentencia del 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, párr. 40.

[139] Véase Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 33); Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Excepciones Preliminares. Sentencia del 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, párr. 41.

[140] "Artículo 60. Objeto

Las audiencias podrán tener por objeto recibir información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión ..."

[141] "Artículo 62. Audiencias sobre peticiones o casos

1. Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos;.... o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso...." **(énfasis agregado)**

[142] "Artículo 31. Agotamiento de los recursos internos

1. Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos....."

[143] "Artículo 32. Plazo para la presentación de peticiones

1. La Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos".

36,[146] y 37,[147] párrafos numerados como 1 y 2, con lo cual también se viola el artículo 46 de la Convención Americana. Enseguida, se mostrará de manera por demás gráfica cómo es que han sido violados los artículos señalados:

---

[144] 31.3. Cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.

[145] Artículo 34. Otras causales de inadmisiblidad

La Comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando:

a. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento.

b. sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado.

c. la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba sobreviniente presentada a la Comisión.

[146] "Artículo 36. Grupo de trabajo sobre admisibilidad

Un grupo de trabajo se reunirá antes de cada período ordinario de sesiones a fin de estudiar la admisibilidad de las peticiones y formular recomendaciones al plenario de la Comisión."

[147] "Artículo 37. Decisión sobre admisibilidad

1. Una vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto. Los informes de admisibilidad e inadmisiblidad serán públicos y la Comisión los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

2. Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo. La adopción del informe de admisibilidad no prejuzgará sobre el fondo del asunto...."

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*I. Resumen. 3. El Estado mexicano sostiene que no se configuran violaciones de la Convención Americana, pues el señor Martín del Campo tuvo acceso a varios tribunales y procedimientos en los que se respetaron las normas de debido proceso y no se estableció que fuera torturado, y su condena judicial tiene carácter de cosa juzgada que no puede ser revisada por la CIDH. En consecuencia el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.	Tal como se señaló párrafos atrás el Estado ha planteado tres elementos principales que hacen inadmisible la petición, uno de los cuales es precisamente el carácter de cosa juzgada que para las instancias de jurisdicción nacionales tiene el asunto desde la sentencia emitida el 17 de agosto de 1993 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la cual resolvió el fondo de la causa penal instruida contra Alfonso Martín del Campo Dodd. Otro de los elementos expresados es que los órganos de procuración e impartición de justicia nacionales no han violado en perjuicio del sentenciado los derechos establecidos por la Convención Americana. Un tercer elemento derivado de la audiencia celebrada ante la CIDH el 11 de octubre de 2000 es la posibilidad de que la decisión que recayó al recurso extraordinario de reconocimiento de inocencia del sentenciado sea impugnada por vicios propios a través del juicio de amparo ante los tribunales federales.

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*4. El señor Martín del Campo remitió documentación adicional en comunicación de 17 de julio de 1998, que fue contestada por la Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1998 con una solicitud de Información adicional acerca de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.	Esto no es exacto, en la comunicación de la CIDH de 10 de agosto de 1998 se señaló: ".... Que esta Secretaría no puede, por el momento, dar trámite a su comunicación debido a que la información contenida en ella no satisface los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial, en los artículos 32, 33, 34 y 37, copia de los cuales acompañamos a la presente".
*4.... Los peticionarios presentaron observaciones e información adicional el 13 de abril de 2000, el 22 de marzo de 2001 y el 31 de mayo del mismo año. Las correspondientes observaciones adicionales del Estado fueron presentadas el 21 de julio de 2000, el 21 de abril de 2001 y el 9 de julio de 2001.	El Estado no sólo ofreció observaciones, sino que también, al igual que los peticionarios, presentó información adicional en sus comunicaciones, como por ejemplo, en la remitida el 9 de julio de 2001.

090205

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*4.... El 1° de octubre de 2001 los peticionarios presentaron una comunicación en la cual informan acerca de la emisión de la sentencia final sobre el amparo en México.	Esto tampoco es exacto, los peticionarios señalaron expresamente en dicho documento que "La resolución en comento, que pone fin a todas las instancias internas para revisar el caso concluyó" (énfasis agregado). Cabe señalar que la sentencia definitiva de fondo en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd fue emitida el 17 de agosto de 1993 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por otra parte, algo que resulta sumamente grave es que el documento de los peticionarios a que hace referencia la CIDH, nunca fue comunicado, ni transmitido al Estado, a efecto de estar en aptitud de presentar observaciones al mismo.
*4.... La Comisión Interamericana celebró una audiencia sobre el caso con ambas partes el 11 de octubre de 2000, durante su 108° periodo ordinario de sesiones.	La Comisión no hace referencia alguna a instancias de quién fue convocada dicha audiencia, ni tampoco cuestiones cruciales como: el objeto de la misma, su desarrollo y resultados producidos. A la luz del Reglamento en vigor de la CIDH, las audiencias en dicha etapa tienen por objeto **recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información puede referirse a cuestiones de admisibilidad, comprobación de los hechos** o **cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso.** El Gobierno de México considera que es importante conocer el contenido de dicha audiencia, por lo que procedió en su momento a través de la honorable Corte Interamericana a solicitar las constancias pertinentes.

0000406

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*III. Posiciones de las partes sobre la admisibilidad A. Los peticionarios 8. Los peticionarios sostienen que la defensa de la presunta víctima presentó numerosos recursos en la jurisdicción interna: denuncia penal por tortura de 11 de mayo de 1995; proceso 57/92 ante el Juzgado 55 Penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd; recurso de apelación ante la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; juicio de amparo ante la Octava Sala del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal; y finalmente, el reconocimiento de inocencia declarado improcedente por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 6 de abril de 1999…. En consecuencia, sostienen que han cumplido con los requisitos que establecen los artículos 46 y 47 de la Convención Americana a efectos de la admisibilidad de las peticiones.	En este párrafo se omite señalar que de acuerdo con las comunicaciones de los peticionarios de marzo, mayo y octubre de 2001, también fueron presentados como recursos un juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal recaída al incidente de reconocimiento de inocencia del inculpado y un recurso de apelación (revisión) ante un Tribunal Colegiado de Circuito en contra de la decisión emitida por el Juez de Distrito que conoció inicialmente de la demanda de amparo. Tampoco se hace mención al juicio de amparo indirecto interpuesto contra la decisión del Ministerio Público recaída a la Averiguación Previa iniciada por tortura a partir de la denuncia interpuesta por los peticionarios en mayo de 1995, ya decidido el proceso en el fondo y cerca de tres años después de ocurridos los supuestos hechos de tortura.
*III. Posiciones de las partes sobre la admisibilidad B. El Estado 9. En su primera respuesta sobre la petición bajo estudio, el Estado … cita los trámites realizados y la documentación que le llevan a la conclusión de que "no hay evidencia médico legal de que Alfonso Martín del Campo Dodd haya sido objeto de actos de tortura por parte de servidores públicos".	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 3 del informe de admisibilidad.

0000207

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*10. La posición del Estado mexicano en su respuesta a la Comisión Interamericana es que "para las autoridades jurisdiccionales este asunto ha sentado cosa juzgada" y que tanto la CNDH como la CDHDF investigaron el asunto y "concluyeron que no existen elementos que permitan suponer una posible violación de los derechos humanos del Sr. Martín del Campo".[4] (énfasis en el original).	La posición del Estado, al igual que la de los peticionarios, no se agotan en un solo documento o respuesta, sino que se va conformando durante la etapa previa a la admisibilidad, que tiene por objeto centrar la litis, recabar información para esclarecer los hechos y fijar la postura de las partes, no así la de la Comisión que debe permanecer neutral y objetiva. Por lo tanto, la postura del Estado es la que deriva de todas y cada una de sus comunicaciones.
*10.... El Estado mexicano pidió que la Comisión Interamericana declarara inadmisible la petición con base en que no se configuraron posibles violaciones de la Convención Americana. Dicha posición fue reiterada en su comunicación de 21 de julio de 2000, en la cual sostiene que "la CIDH no debe ser una cuarta instancia adicional a los mecanismos jurisdiccionales de los Estados" (énfasis en el original) y que la cuestión denunciada a la Comisión Interamericana ha pasado en autoridad de cosa juzgada según el artículo 23 de la Constitución Federal mexicana que dispone que "ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias".	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 3 del informe de admisibilidad.

0000408

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*11. Sin embargo, en su comunicación de 21 de abril de 2001 a la Comisión Interamericana, el Estado manifiesta que habían recursos de la jurisdicción interna pendientes de agotar. Dicha posición se reitera en la siguiente comunicación de 9 de julio de 2001.	La CIDH hace artificiosamente aparecer los argumentos del Estado en este punto como un planteamiento abrupto, surgido de la nada y decidido de *motu proprio*, cuando en realidad el mismo surge del desarrollo y resultado de la audiencia celebrada el 11 de octubre de 2000 ante la CIDH y en respuesta a la comunicación de los peticionarios de marzo de 2001, por la cual desahogan el requerimiento que la propia CIDH les hiciera sobre dicho punto.
*B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición a. Agotamiento de los recursos internos 14. Se ha planteado en el caso bajo análisis una controversia respecto al agotamiento de los recursos internos en México, por lo que corresponde a la Comisión Interamericana una determinación en tal sentido.	1. La CIDH en ninguna de sus comunicaciones posteriores a la audiencia de octubre de 2000, hace alusión a la supuesta controversia. 2. Si se atiende al contenido de las comunicaciones del Estado y de los peticionarios posteriores a la audiencia de referencia, podrá advertirse que no existe en los hechos tal controversia, pues los peticionarios presentaron en efecto el amparo y la respectiva revisión en calidad de recursos a agotar y así lo aceptan. 3. El contenido de la comunicación presentada por el Estado el 20 de julio de 2001 nunca fue controvertida, ni tampoco contestada por los peticionarios. 4. La CIDH aceptó implícitamente la postura del Estado durante la audiencia de 11 de octubre de 2000, prueba de lo cual es el requerimiento que hizo a los peticionarios sobre el tema del agotamiento de recursos internos, mismo que desahogaron en su comunicación de marzo de 2001 en la que, entre otras cuestiones, informan de la interposición del amparo con fecha 19 de marzo de 2001 contra la resolución del reconocimiento de inocencia. 5. En vista de lo anterior, la pretendida controversia que la CIDH se ve "forzada" a decidir, es simplemente un medio para canalizar su falta de objetividad y de neutralidad con la que se condujo en el presente caso. La propia CIDH se llama a sí misma a decidir un punto que a dicha altura era incontrovertible, a través de una determinación arbitraria con ropaje de una controversia (la cual fue gestada o, por lo menos, alentada por ella misma)

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*15. En la primera oportunidad procesal que tuvo el Estado mexicano, es decir en su respuesta de 2 de febrero de 2000 a la petición transmitida por la Comisión Interamericana, no hizo referencia alguna a recursos internos pendientes en México.	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 11 del informe de admisibilidad.
*15... La segunda oportunidad se verificó en la nota de 21 de julio de 2000, con la cual respondió a las observaciones de los peticionarios; tampoco en esta ocasión el Estado planteó la excepción prevista en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 11 del informe de admisibilidad.
*15... El 21 de julio de 2001, en su tercera comunicación a la CIDH sobre la petición, el Estado sostiene que "como resultado de la audiencia ante esa Honorable Comisión el 11 de octubre de 2000, quedó de manifiesto que había recursos de jurisdicción interna que no habían sido agotados en el presente asunto".	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 11 del informe de admisibilidad.
*16. El Estado alega en tal sentido que los recursos internos han estado en todo momento disponibles a los peticionarios. Sostiene que no se agotaron los recursos internos respecto a los hechos de tortura denunciados a la CIDH, pues la defensa del señor Martín del Campo Dodd no interpuso el amparo, recurso idóneo y efectivo para cuestionar la decisión del Ministerio Público de no ejercitar la acción penal por tales hechos....	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 8 del informe de admisibilidad. Sobre la parte central de este punto específico el Estado formulará observaciones precisas en otra parte del presente documento, en virtud de que descubrió que los peticionarios omitieron deliberadamente a la propia CIDH en su momento información sobre este punto.

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*16. Sostiene además que sigue pendiente el recurso de revisión contra el amparo planteado para revocar la decisión que rechaza el reconocimiento de inocencia. El Estado mexicano "se reserva el derecho de proporcionar consideraciones adicionales sobre la admisibilidad de la petición y el fondo de la misma, una vez que sea resuelto de manera definitiva el juicio de amparo a que se hace referencia".[5] (Comunicación del Estado de 21 de abril de 2001, pág. 1.)	Remitirse cuadros arriba a los comentarios al párrafo 11 del informe de admisibilidad. El 21 de abril de 2001, el Gobierno mexicano simplemente afirma su postura sobre la falta de agotamiento de recursos internos y la improcedencia de excepciones a dicho agotamiento. La reserva que hace el Gobierno para plantear consideraciones adicionales hasta que se decida en definitiva el recurso en vías de agotamiento, es perfectamente compatible con el respeto a la imparcialidad e independencia de los órganos de impartición de justicia en la decisión de una cuestión estrictamente jurisdiccional.
*17. Los peticionarios sostienen que la jurisdicción interna en México se agotó con la sentencia de 29 de abril de 1999 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que rechazó el reconocimiento de inocencia de Alfonso Martín del Campo Dodd.	Esto no es exacto, en la comunicación de los peticionarios recibida por la CIDH 25 de octubre de 2001, éstos afirman con respecto a la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sobre el recurso de revisión, que *la resolución en comento, que pone fin a todas las instancias internas* y que *con la sentencia del Tribunal Colegiado esta Comisión debe tener por agotados todos los recursos internos*. En este punto se subraya que la comunicación de referencia nunca fue transmitida al Estado para observaciones.

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*17.... En cuanto al amparo que fue rechazado y el recurso de revisión contra dicha decisión, los peticionarios han sostenido en todo momento que siguieron presentando acciones jurídicas con la salvedad de que no constituían recursos a ser agotados, de acuerdo a la jurisprudencia del sistema interamericano en la materia.	Este punto contiene imprecisiones graves, puesto que el amparo a que se alude fue declarado improcedente, toda vez que la presentación extemporánea del mismo trae consigo que los actos reclamados se consideren consentidos por Ley, de manera que no había otra decisión a adoptar más que el sobreseimiento. Por otro lado, la contradicción de los peticionarios entre lo que afirman y lo que en realidad hacen es manifiesta, decir que no se está obligado a agotar recursos y al propio tiempo agotarlos "ad cautelam" es como afirmar categóricamente que no va a llover, pero traer consigo un paraguas. La falta de congruencia de los peticionarios muestra por lo menos una conducta maliciosa, que no obstante opera en su propio perjuicio en virtud de que *nadie puede beneficiarse de su propio dolo.* Habría que inquirir a la CIDH a fin de que esclarezca la diferencia abismal que atribuye a los recursos de jurisdicción interna con respecto a las meras acciones jurídicas, y la finalidad que se busca con unos y otras. Tal como señalamos en otra parte del presente documento, "... de acuerdo con el principio de buena fe, que debe imperar en el procedimiento internacional, es necesario evitar toda manifestación ambigua que produzca confusión".[148]

[148] Caso Cantoral Benavides. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 30.

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*17.... En su comunicación de 1° de octubre de 2001, los peticionarios pusieron en conocimiento de la CIDH que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito había emitido el 3 de septiembre de 2001 la sentencia que rechaza el amparo planteado por los representantes del señor Martín del Campo.[6] ([6]Los peticionarios indican que la resolución de 3 de septiembre de 2001 "pone fin a todas las instancias internas para revisar el caso". Agregan: Si bien la representación del Estado había sostenido que aún faltaban por agotarse algunos recursos de la jurisdicción interna, y estos alegatos no habían sido aceptados por los peticionarios, con la sentencia del Tribunal Colegiado que confirma el sobreseimiento del juicio de amparo, esta Comisión debe tener por agotados todos los recursos internos y por tanto proceder a realizar el informe de admisibilidad correspondiente. Vale la pena señalar que, a pesar de la elaboración del amparo y de su revisión, ninguno de los tribunales entró a conocer el fondo del asunto por la no procedencia del recurso de inocencia, lo que pone de manifiesto la ineficacia de los recursos de la jurisdicción interna. Comunicación de los peticionarios de 1° de octubre de 2001, pág. 1.)"	Remitirse en principio a los dos cuadros de comentarios anteriores, en especial la circunstancia de que dicho documento nunca fue transmitido al Estado para observaciones. Hay que captar la contradicción manifiesta entre el contenido del documento de los peticionarios citado textualmente por la CIDH, con la afirmación que hace en otra parte de su Informe en el sentido de que "Los peticionarios sostienen que la jurisdicción interna en México se agotó con la sentencia de 29 de abril de 1999 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal" Por supuesto, las afirmaciones contenidas en el documento de los peticionarios de octubre de 2001 es el que prevalece. En este punto cabe comentar con respecto a que " a pesar de la elaboración del amparo y de su revisión, ninguno de los tribunales entró a conocer el fondo del asunto por la no procedencia del recurso de inocencia", se trata de una afirmación carente de sustento, pues el fondo del asunto fue decidido el 17 de agosto de 1993 por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al emitir la sentencia que recayó al recurso de apelación interpuesto por la defensa del sentenciado.

000413

*18. La Comisión Interamericana observa que el Estado mexicano no có en la petición bajo estudio la falta de agotamiento de los recursos rnos en las primeras etapas del procedimiento. Por el contrario, lo hizo mente en su tercera presentación a la CIDH, luego de una audiencia y scurrido más de un año desde su primera comunicación sobre el asunto.	Sobre este punto, el Estado se permite señalar lo siguiente: • La excepción de no agotamiento de recursos internos fue planteada expresamente en la única audiencia convocada y celebrada por la CIDH antes del declarar, indebidamente, la admisibilidad de la petición. • La audiencia señalada fue celebrada el 11 de octubre de 2000, esto es, un año antes de aprobado el informe que declara la admisibilidad de la petición, por lo que no se afectó o alteró en forma alguna la oportunidad de defensa de los peticionarios, ni el equilibrio procesal de la partes y mucho menos el trámite inicial de la petición.
*19. La Corte Interamericana ha establecido reiteradas veces que la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado.[7] ([7] Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Nicaragua, Sentencia sobre excepciones preliminares de 1° de febrero de 2000, párr. 53. En la misma sentencia, la Corte Interamericana determinó que "para oponerse válidamente a la admisibilidad de la denuncia…el Estado debía invocar de manera expresa y oportuna la regla de no agotamiento de los recursos internos" (énfasis en el original). Idem, párr. 54.)	• El Estado no es dueño de las etapas ni de la duración del procedimiento, en ello intervienen los tiempos de la propia Comisión y las cinco prórrogas concedidas por ésta a los peticionarios, en contraste con únicamente dos solicitadas por el Gobierno. • Como ha quedado demostrado con el propio Reglamento de la CIDH en vigor, que recoge la práctica previa de la misma, las audiencias tienen entre sus objetivos recibir planteamientos sobre admisibilidad. • La CIDH negó la solicitud de los peticionarios de celebrar una segunda audiencia previa al examen de admisibilidad, con lo cual también cerró la puerta al Estado para formular sus planteamientos en dicha vía. • En sus comunicaciones siguientes el Estado continuó sosteniendo y haciendo referencia en sus comunicaciones al tema de los recursos por agotar, además proporcionó información sobre la naturaleza, alcances y eficacia de los mismos. • Los peticionarios de hecho interpusieron los recursos señalados por el Estado, sin que les hayan sido favorables por diversas cuestiones, entre ellas, extemporaneidad imputable únicamente a ellos. La jurisprudencia de la Corte señala que la excepción de no agotamiento de recursos puede válidamente ser interpuesta en las primeras (plural) etapas (plural) del procedimiento. Tales "etapas" son precisamente las que ocurren antes del examen de admisibilidad y no otras.[149] • De lo anterior se colige que el Estado planteó de manera expresa, oportuna y adecuada la excepción de no agotamiento de recursos internos, que no hubo ni puede decretarse renuncia tácita a dicha excepción y que la Comisión la desestimó indebidamente con base en la aplicación distorsionada de la jurisprudencia de la honorable Corte.

0700414

[149] En efecto, ha sido un criterio reiterado en diversos casos decididos por la honorable Corte, que la excepción de no agotamiento de recursos internos será considerada oportuna si plantea en las *primeras etapas del procedimiento*, en cuyo defecto se podrá presumir la renuncia tácita del Estado para oponerla. Véase entre muchos otros, Caso Loayza Tamayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25, párr. 40.

La opinión del honorable Juez Antonio Cançado Trindade confirma claramente lo anterior cuando señala: " De hecho, constituye un requisito de sentido común, de la administración correcta de la justicia y de la estabilidad jurídica, como lo revela el propio plan general de la Convención Americana, que una objeción a la admisibilidad basada en el no agotamiento de los recursos internos se presente solamente *in limine litis*, en la medida en que lo permitan las circunstancias del caso. Si dicha objeción, que beneficia primariamente al Estado demandado, no se presenta por éste en el momento oportuno, es decir, en el procedimiento sobre admisibilidad ante la Comisión, se presume que el Gobierno demandado ha renunciado, aun tácitamente, a dicha objeción." (énfasis agregado) Ver voto razonado en el Caso Gangaram Panday. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, párr. 3.

El Estado no sólo cumplió con plantear oportunamente dicha excepción, sino también con su correspondiente obligación de señalar de manera específica el recurso que debía ser agotado y su efectividad, por lo que su oposición a la admisibilidad de la petición fue arbitrariamente desestimada. Ver a este respecto, Caso Loayza Tamayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25, párr. 41.

Párrafo o texto contenido en el Informe número 81/01 de 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228	Información y observaciones que lo contravienen
*19.... Por lo tanto, la Comisión Interamericana considera que el Estado mexicano renunció en este asunto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, ya que no la presentó dentro de los plazos legales establecidos, y tampoco lo hizo en la primera oportunidad procesal que tuvo, es decir, en su respuesta a la petición que dio inicio al trámite.	• Como se demostró, no existen elementos que apoyen la indebida determinación de la CIDH de considerar la renuncia tácita del Estado a la excepción de no agotamiento de recursos internos. • Adicionalmente, la CIDH no precisa cuales son específicamente los "plazos legales establecidos", un plazo debe tener un inicio y un final claros y específicos que la CIDH omite señalar. • La frase "primera oportunidad procesal" limita el criterio establecido por la honorable Corte, en el sentido de que la excepción de no agotamiento puede plantearse en las "primeras etapas" del procedimiento.
*b. Plazo de presentación 20. En la petición bajo estudio, la CIDH ha establecido la renuncia tácita del Estado mexicano a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.	En virtud de que fue desestimada siendo procedente y válida la excepción de no agotamiento de recursos internos, lo que procedía era declarar la petición inadmisible por la no satisfacción de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con relación al término para presentar la petición, siguiendo la lógica de los argumentos del Estado, con fundamento en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, habiendo sido agotados los recursos de jurisdicción interna con la decisión en revisión/apelación del Tribunal Colegiado de Circuito del 3 de septiembre de 2001 (tal como ocurrió en la realidad), los peticionarios habrían contado con seis meses para la interposición de su queja, dicho plazo venció hace más de un año, el 3 de marzo de 2002.

00004216

*20.... Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. *20.... En tal sentido, la CIDH observa que la comunicación original del señor Martín del Campo Dodd fue recibida el 13 de julio de 1998, con anterioridad a la interposición del recurso de reconocimiento de inocencia. En virtud de las circunstancias particulares de la petición bajo análisis, la CIDH considera que fue presentada dentro de un plazo razonable.	Los requisitos a que hace alusión la Comisión no son independientes, en un caso como el presente el plazo de seis meses está vinculado necesariamente al agotamiento del último de los recursos internos (el recurso de revisión/apelación interpuesto ante un Tribunal Colegiado de Circuito y decidido del 3 de septiembre de 2001). Como se señaló en el cuadro anterior, dicho plazo venció hace más de un año, el 3 de marzo de 2002. Resultaría importante requerir a la CIDH a fin de que esclarezca el significado de las "circunstancias particulares de la petición bajo análisis", que la llevan a considerar que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. Las consideraciones específicas sobre el plazo para la presentación de la petición ya fueron expuestas abundantemente en otra parte del presente documento, por lo que el Gobierno se permite remitir a ellas en obvio de repeticiones innecesarias.
*V. CONCLUSIONES 23. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, *LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana.	En atención a los argumentos y elementos presentados fundadamente por el Estado, éste se permite enfatizar que resulta procedente revocar la admisibilidad decretada por la CIDH, en virtud de las violaciones de fondo y de forma que desatendieron los planteamientos del Gobierno y determinaron arbitrariamente que la petición cumplió con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. 000417

Un punto central que desea destacar el Estado es que la CIDH decretó que éste había renunciado de manera tácita al planteamiento de no agotamiento de recursos internos, esto es, la Comisión ni siquiera fue capaz de trasladar la cuestión del agotamiento para la decisión del fondo del asunto, tal como sucede en muchos casos en los que surge alguna discrepancia entre las partes sobre este punto. Con esto, es obvio que el Estado quedó materialmente imposibilitado para plantear la cuestión en la etapa de consideración del fondo, y mucho menos si como resultado de la misma era emitido el informe confidencial previsto en el artículo 50 de la Convención Americana.

Estos hechos, más las consideraciones adicionales manifestadas por el Estado sobre la infracción a la Convención y las disposiciones reglamentarias, son sometidas a consideración de la honorable Corte a fin de que determine que en efecto existieron violaciones graves al procedimiento, que dejaron en situación de indefensión al Estado y que le impidieron hacer valer los derechos que como tal le asisten.

Esta petición encuentra su más sólido fundamento en la jurisprudencia de la propia Corte, que ha señalado al respecto:

> "Esta Corte deberá determinar, por ende, si se han respetado las cuestiones esenciales implícitas en las reglas de procedimiento contenidas en la Convención. Para ello deberá examinar si, en el curso del trámite de este asunto, se ha visto menoscabado el derecho de defensa del Estado que opone las excepciones a la admisibilidad, o éste se ha visto impedido de ejercer cualquiera de los otros derechos que la Convención le reconoce dentro del procedimiento ante la Comisión. Asimismo la Corte ha de verificar si el presente asunto ha sido tramitado de conformidad con los lineamientos esenciales del sistema de protección dispuesto por la Convención. Dentro de esos criterios generales, la Corte examinará las distintas cuestiones procesales que le han sido sometidas, con el objeto de definir si existen vicios tales en el trámite al que ha sido sometido el presente caso, que deba rechazarse **in limine** la consideración del fondo."[150]

No debe perderse de vista que la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional dependen del equilibrio que se guarde entre la protección de los derechos humanos y la seguridad y equidad procesal de las partes. Dicho equilibrio, como quedó evidenciado, fue desatendido por la propia actuación de la Comisión Interamericana en franca trasgresión de la Convención Americana, por lo que " continuar con un proceso enderezado a lograr la protección de los intereses de las supuestas víctimas, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la propia Convención, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos".[151]

En tal sentido, es hasta la etapa de excepciones preliminares ante la Honorable Corte Interamericana que el Estado puede hacer valer nuevamente sus argumentos sobre la decisión arbitraria de la CIDH, respecto de la cuestión del agotamiento de recursos internos y en general de

---

[150] Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 39.

[151] Caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 63.

la admisibilidad del caso 12.228 ante ésta última. Por eso, el Estado solicita a la honorable Corte considere, y se pronuncie sobre estos aspectos desde la etapa misma de las excepciones preliminares, sin que sean trasladados para una eventual decisión de fondo, sobre la base de la jurisprudencia derivada del Caso Godínez Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p. 86, en el que señaló:

> "La oportunidad en que la Corte deba pronunciarse sobre una alegación relativa a los recursos internos dependerá de las circunstancias propias de cada caso. Nada se opone, en principio, a que la Corte resuelva como excepción preliminar un desacuerdo entre las partes relativo al agotamiento de los recursos internos, ... Por consiguiente, para decidir en el presente caso si la objeción formulada por el Gobierno en relación con la falta de agotamiento de los recursos internos debe ser unida con la cuestión de fondo, la Corte deberá examinar las particularidades que reviste la materia, en los términos concretos en que está planteada".

Con posterioridad a que la Comisión declaró indebidamente la admisibilidad de la petición en el presente asunto, convocó a las partes a ofrecer sus consideraciones finales antes de proceder a resolver el fondo del asunto, mientras tanto, el 14 de febrero de 2002, fue dictada la sentencia definitiva en dicho Amparo, en el que se resuelve en definitiva sobreseerlo, por actualizarse las causales de improcedencia constitucional y legal en el mismo. De conformidad con el artículo 83, fracción IV de la Ley de Amparo, los promoventes del amparo tenían la posibilidad de interponer el recurso de revisión (apelación), contra esa sentencia del Juez de Distrito, con motivo del cual podían también impugnar los acuerdos pronunciados en la misma. La sentencia no fue impugnada y adquirió el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales.

A la conducta parcial y carente de objetividad con que la Comisión había tramitado la petición hasta decidir su admisibilidad, se sumó también una actitud displicente a la hora de evaluar los elementos que integraban el expediente respectivo y, según parece, únicamente atendió los argumentos de los peticionarios a los que en su informe final da especial énfasis, sin revisar adecuadamente y con el detenimiento que un caso de esta naturaleza amerita, las constancias que incluso los propios peticionarios le proporcionaron durante la tramitación del caso. En tal sentido, transgredió frontalmente el artículo 37.3 de su propio Reglamento en vigor, pues la adopción del informe de admisibilidad de hecho *prejuzga sobre el fondo del asunto* y con ello el artículo 50 de la Convención Americana.

Es importante hacer énfasis en estos aspectos pues, a fin de cuentas, son los que supuestamente soportan las acusaciones que imputa la Comisión al Estado mexicano. Las siguientes observaciones, que se presentan con carácter ejemplificativo, validan las afirmaciones del Estado.

Una vez admitido y abierto el caso, recibidas las respectivas posiciones y argumentos de las partes y, de no haber disposición para solucionar el asunto por vía amistosa como fue el caso, la Comisión está facultada para celebrar audiencias para avanzar en el conocimiento del caso, de conformidad con el artículo 38.3 de su Reglamento.

En su comunicación de fecha 3 de abril de 2002, el Estado presentó consideraciones sobre la situación jurídica precisa del caso, su desarrollo procesal, las diversas instancias y oportunidades de defensa de que había gozado el sentenciado, las autoridades judiciales y no jurisdiccionales que habían determinado la carencia de elementos que apoyaran los actos violatorios a sus derechos

fundamentales de que alega fue objeto, los recursos que tuvo a su alcance y la carencia de sustento objetivo para sostener sus afirmaciones como verosímiles.

En oportunidad de dicha respuesta, el Estado señaló:

> "De los elementos aportados anteriormente, resulta evidente que no obstante que los hechos no fueron denunciados con la debida oportunidad, el Estado mexicano a través de sus instituciones realizó esfuerzos a fin de determinar si existieron irregularidades en contra del Sr. Alfonso Martín del Campo, sin embargo, aún y cuando las investigaciones fueron realizadas tanto por la PGJDF, como por las Comisiones de Derechos Humanos, no fueron encontrados elementos que acreditaran que el peticionario fue víctima de tortura".

En otra parte de su respuesta, el Estado dedicó un apartado completo de la misma a detallar las acciones que de buena fe había implementado a partir del Informe de Admisibilidad emitido por la Comisión, entre ellas la búsqueda de opciones jurídicas para verificar si en dicho asunto podría haberse cometido un error judicial y la apertura y continuación de varias investigaciones en torno al caso, así como las acciones que se habían iniciado a nivel del ombudsman capitalino. Por último el Estado expresó su posición de seguir brindando información a la CIDH y la disposición de las autoridades involucradas *para reunirse con los peticionarios y aclarar los planteamientos que realicen éstos.*

La información suministrada por el Gobierno, de haber sido valorada adecuadamente, era muestra más que evidente de que las afirmaciones de los peticionarios no sólo se habían visto controvertidas, sino apoyadas en bases erróneas. Además, algo sumamente importante es que la Comisión poseía información suficiente de documentos oficiales en los que las afirmaciones del Estado encontraban fundamento y apoyo, prueba de ello son las decisiones jurisdiccionales que se acompañan como anexos 2, 3, 5, 18, 20 y 21 de su demanda; la consideración de gran parte de los documentos jurisdiccionales que resultaban cruciales fueron definitivamente obviados por la Comisión, quien no sólo los ignoró, sino que llegó al extremo de otorgar valor a un documento emanado de un órgano administrativo de control interno (Contraloría), sobre la determinación de los órganos autónomos especializados en la atención e investigación de violaciones a los derechos humanos (la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).

A efecto de informar a la CIDH sobre diversos avances en varios puntos del asunto, el Gobierno de México solicitó la celebración de una audiencia con presencia de los peticionarios. Dicha audiencia se llevó a cabo el 18 de octubre de 2002, durante la cual el Estado ofreció a la Comisión un panorama claro y amplio de la evolución del asunto desde la etapa de investigación hasta la determinación última que recayó al amparo interpuesto contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sobre el incidente de reconocimiento de inocencia planteado por los peticionarios.

El Estado informó a la Comisión acerca de las acciones que había emprendido de buena fe, para satisfacer las inquietudes de los peticionarios acerca de la presunta tortura cometida contra Alfonso Martín del Campo Dodd y sobre los posibles vínculos de otras personas con el homicidio del matrimonio formado por Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba.

El desarrollo de dicha audiencia fue audio grabado en un disco compacto que acompañó la Comisión a su demanda,[152] por lo que el Gobierno remite a ellos para ilustrar a la honorable Corte Interamericana sobre las incidencias de dicha audiencia y la postura de buena fe mostrada por el Estado en la misma. En especial habría que destacar los puntos siguientes:

> La PGJDF reabrió la averiguación previa iniciada por Bessie Dodd de Martín del Campo, relacionada con diversos delitos financieros. Este asunto no tiene relación directa con los anteriores, pero se valora como una actuación de buena fe, que podría llegar a aportar indicios que sí incidan en los dos anteriores. [Av. Previa 10/6269/98-12]
>
> El proceso por homicidio, en el que fue sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd, permanece como cosa juzgada.
>
> La Averiguación Previa por tortura y otros delitos concluyó con la determinación de no ejercicio de la acción penal que hizo el Ministerio Público, y con el sobreseimiento del amparo promovido en contra de esa determinación. La tortura sí se investigó, tal investigación es la contenida en la Averiguación Previa SC/3839/95-03.
>
> También se mantiene abierta la averiguación previa (falsedad de declaraciones) iniciada por Bessie Dodd de Martín del Campo. En virtud de esta indagatoria se mantiene la búsqueda de Sotero Galván, a quien Alfonso Martín del Campo ha señalado como la persona que lo torturó. [SC/6103/98-06]
>
> Se reconoció como un aspecto positivo la existencia de una instancia como la que representa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero se dejó en claro que en esa labor reconocemos también un riesgo: el de ser instancia oficiosa cuando se agotan, bien o mal, los recursos internos, independientemente del fundamento con que se cuente para poner en cuestión las decisiones de los órganos nacionales.

Es de señalarse que los peticionarios manifestaron a la Comisión información parcial y desviada de la realidad, puesto que se atrevieron incluso a señalar que las hijas del matrimonio masacrado de Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba, estaban desaparecidas, lo cual no sólo es falso, sino que es una imputación que a la luz de la información presentada por el Gobierno es tendenciosa y de mala fe. Por otra parte, afirmaron que Alfonso Martín del Campo es inocente lo cual es el principal impulso de su actuación en el presente asunto, no obstante lo anterior, la información presentada por el Estado consistente en la declaración de una de las hijas del matrimonio que presenció el homicidio cuando tenía tan sólo 4 años de edad, desvirtúa completamente la posición de los peticionarios y confirma la adecuada actuación de las autoridades mexicanas al investigar, procesar y sancionar a Alfonso Martín del Campo Dodd por el homicidio de su propia hermana y su cuñado.

Por otra parte, el Gobierno de México insistió en la necesidad de que la Comisión contara con la mayor información disponible sobre el caso y ofreció a ésta complementar la información con que

---

[152] De acuerdo con la demanda de la Comisión, en su párrafo 57, señala que el Estado admitió expresamente los vicios procesales del caso, lo cual no es no es verdad y es de rechazarse en virtud de que durante dicha audiencia se señalaron únicamente como hipótesis sin posibles irregularidades, más no se afirmó que en efecto las mismas se hubiesen comprobado.

ya contaba, incluyendo diversas constancias procesales adicionales y documentos oficiales del asunto.

No obstante la disposición del Estado y los elementos puestos a disposición de la CIDH para que analizara con todo cuidado su decisión, la CIDH nuevamente ignoró la buena fe del Estado y la información puesta a su disposición y decidió emitir, tan sólo CUATRO DÍAS DESPUÉS el Informe de fondo 63/02 de 22 de octubre de 2002 (que al momento de la celebración de la audiencia al parecer ya estaba redactado en los términos que se emitió, por lo que la audiencia señalada fue para la Comisión una mera formalidad, sin mayor trascendencia *y*, por lo tanto violatoria del artículo 42.1[153] y contraria al artículo 50 de la Convención Americana).

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 50 de la Convención Americana, de no llegarse a una solución amistosa la Comisión debe proceder a redactar *un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones*, a este se agregarán *las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados*. La Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

- **Consideraciones respecto del Informe de fondo 63/03 de 22 de octubre de 2002.**

De conformidad lo dispuesto por el artículo 50 de la Convención Americana, el Informe de fondo 63/02 de 22 de octubre de 2002, adolece de una exposición parcial e incompleta de los hechos y de la postura y elementos presentados por el Estado, además de que no refleja los elementos que integran el expediente y que corresponden con aquellos que anexan a la demanda presentada ante la Honorable Corte. El Gobierno se permite remitir a la exposición de los hechos realizada en el punto número III de este documento de contestación, que está sustentada también en las constancias que obraban en el expediente de la Comisión, que controvierte lo afirmado por ésta en su demanda y en su Informe de fondo 63/02 de 22 de octubre de 2002 y también lo señalado en el documento de los peticionarios.

El artículo 50 de la Convención Americana fue transgredido por la Comisión en virtud de que los hechos sobre los cuales ésta emitió supuestamente su informe de fondo no corresponden a la verdad histórica de lo ocurrido, ni están apoyados en elementos objetivos. Dicho precepto también es transgredido en cuanto no contiene a cabalidad las exposiciones verbales y escritas presentadas por el Estado en sus diversas comunicaciones y en las audiencias celebradas el 11 de octubre de 2000 y el 18 de octubre de 2002, esta última llevada a cabo cuatro días antes de la emisión del Informe de fondo 63/02 de 22 de octubre de 2002.

Por lo que se refiere a las consideraciones sobre el fondo de las violaciones planteadas ante la Comisión Interamericana que se encuentran en su demanda y en el Informe de fondo 63/02 de 22 de octubre de 2002, el Estado dará puntual respuesta a ellas en apartados posteriores de su contestación a la demanda. En este orden de ideas, si el Informe de fondo está sustentado, tal como

---

[153] Para proceder a la emisión de la decisión de fondo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42.1 del Reglamento de la CIDH, ésta debe deliberar "sobre el fondo del caso, a cuyo efecto preparará un informe en el cual examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes, y la información obtenida durante audiencias y observaciones in loco. Asimismo, la Comisión podrá tener en cuenta otra información de público conocimiento".

se demostrará, sobre bases erróneas, falsas e incompletas, lo están también por ende las conclusiones recomendaciones emitidas por la CIDH, que derivan supuestamente del mismo.

En respuesta a dicho Informe el Gobierno siguió mostrando su buena fe e informó el 30 de diciembre de 2002 de diversas acciones encaminada a la solución definitiva del asunto, pero dejó en claro su postura con relación a la situación jurídica del sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd y, por lo tanto, implícitamente con respecto a las recomendaciones de la CIDH, en el sentido de que no había sido comprobada la tortura, ni violaciones al debido proceso y que, por lo tanto, seguía siendo cosa juzgada inalterada en el ámbito interno.

La Comisión determinó, no obstante las acciones sobre las cuales informó el Estado, que sus recomendaciones no habían sido cumplidas y que el 21 de enero de 2003 había decidido enviar el caso a la Honorable Corte. La decisión y el envío del caso se suma a las violaciones al procedimiento previsto en la Convención Americana, de conformidad con las consideraciones siguientes:

Si bien es cierto que la Honorable Corte ha establecido el criterio de que "... la valoración que hace la Comisión sobre la conveniencia o no del envío de un caso a la Corte debe ser fruto de un ejercicio colectivo de carácter propio y autónomo que hace ésta en su condición de órgano de supervisión de la Convención Americana y, en consecuencia, los motivos que tuvo para su envío no pueden ser objeto de una excepción preliminar",[154] lo que se está planteando es la infracción a los artículos 50 y 51 de la Convención y a las normas de procedimiento que las detallan en el Reglamento de la CIDH, lo que ha provocado durante el tramite del presente asunto un desequilibrio procesal que devino en la indefensión del Estado.[155]

En efecto, la Comisión tiene facultades discrecionales, pero *de ninguna manera arbitrarias, para decidir, en cada caso, si resulta conveniente o adecuada la respuesta del Estado al informe adoptado de conformidad con el artículo 50 de la Convención. Al tomar la decisión de someter o no el caso al conocimiento de la Corte, la Comisión debe escoger la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos en la Convención*[156].

No obstante que está en el ámbito de decisión de la Comisión la presentación o no de un caso a la Honorable Corte, en el nuevo Reglamento de la CIDH en vigor desde el 1° de mayo de 2001, se establecen una serie de parámetros a considerar y satisfacer para plantear un caso contencioso:

El artículo 44 del propio Reglamento de 2001, establece en su parte conducente:

> "2. La Comisión considerará fundamentalmente la obtención de justicia en el caso particular, fundada entre otros, en los siguientes elementos:

---

[154] Caso de los 19 Comerciantes. Excepciones Preliminares. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 31.

[155] Ver Caso de los 19 Comerciantes. Excepciones Preliminares. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 31.

[156] *Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares*, *supra* nota 5, párr. 37; *Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares*, *supra* nota 6, párrs. 26 y 49; y *Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)*, Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, *supra* nota 6, párr. 50; Caso de los 19 Comerciantes. Excepciones Preliminares. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 33.

a. la posición del peticionario;

b. la naturaleza y gravedad de la violación;

c. la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema;

d. el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros; y

e. la calidad de la prueba disponible".

En abono a lo anterior, sobre la indebida e injusta decisión de la Comisión de presentar el caso ante la Honorable Corte, es importante mencionar que ésta ha establecido que la respuesta del Estado al informe de fondo de la CIDH debe ser valorado por ésta "...con el objeto de decidir si someter el caso al conocimiento de la Corte es la alternativa más favorable para la tutela de los derechos contemplados en la Convención, o si, por el contrario, las medidas adoptadas por el Estado para cumplir las recomendaciones de la Comisión constituyen una contribución positiva al desarrollo del proceso y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Americana, de manera que se investiguen las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen, se sancione a los responsables de dichas violaciones y se reparen sus consecuencias".[157]

1) El Gobierno de México considera que a la luz de los argumentos y elementos que ha presentado hasta ahora, tales requisitos no se satisfacen, puesto que en principio la decisión de la CIDH de emitir un informe de fondo declarando responsable al Estado no es un reflejo de todo lo actuado y planteado ante ella, ni tampoco de un estudio de las constancias a su alcance, en especial de tipo judicial. Por tal motivo, la propia decisión de remitir un caso como este a la Honorable Corte no puede afirmarse que esté inspirada en la *obtención de justicia en el caso particular* ya que, como se dejó en claro, el sentenciado no fue detenido arbitrariamente, ni torturado para confesar el crimen que cometió con una crueldad horrorizante, como fue dar muerte a su propia hermana, Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su esposo Gerardo Zamudio Aldaba en 1992, a quienes atacó arteramente en su propia casa mientras dormían, quitándoles la vida al inferirles más de 29 y 35 heridas, respectivamente, producidas por apuñalamiento y que dejó en la orfandad y con un destino incierto a tres pequeñas niñas entonces de tan sólo 2, 5 y 6 años de edad, todas hijas del joven matrimonio formado por la pareja masacrada por el propio Alfonso Martín del Campo Dodd. Cabe destacar que una de las menores presenció impávida lo sucedido a sus padres y la más pequeña, de tan sólo dos años de edad, fue hallada dormida abrazando al cuerpo destrozado de su progenitor.

Es incomprensible cómo la Comisión pretende que sea satisfecha justicia en el presente asunto a través de la presentación del mismo ante la Corte si, en el extremo de que ésta le diera la razón, significaría al menos prever la eventual posibilidad de que un multihomicida pueda ser redimido o considerado como inocente, lo cual resultaría aberrante para todo sistema de derechos humanos que se precie de salvaguardar los derechos de víctimas. El Estado se pregunta si la justicia que está defendiendo la Comisión abarca también a las niñas que quedaron huérfanas y por poco a su suerte a partir de lo acontecido, cómo se explicaría a éstas que gracias a la indebida o cuando menos desafortunada actuación de un órgano internacional como la Comisión Interamericana, el caso del homicidio de sus padres haya quedado en la más completa impunidad.

---

[157] Caso de los 19 Comerciantes. Excepciones Preliminares. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr. 35.

2) Por lo que se refiere a *la posición del peticionario*, la Comisión debió haber valorado la conducta procesal de éstos ante las autoridades nacionales y su intención indebida de utilizar el sistema interamericano para plantear un caso decidido internamente en el fondo en 1993. En específico, son de resaltarse:

a) La presentación de la queja ante la CIDH el 13 de julio de 1998, más de SEIS AÑOS DESPUÉS de ocurridos los supuestos hechos de tortura y más de cinco años después de haber sido dictada la sentencia que decidió el asunto en el fondo.

b) La interposición del incidente de reconocimiento de inocencia del inculpado SIETE AÑOS DESPUÉS de sucedidos los hechos del caso y con cerca de seis años de distancia luego de que el asunto adquirió el carácter de cosa juzgada en 1993. La interposición de dicho medio de impugnación se llevó a cabo cerca de un año después de presentada la queja ante la CIDH.

c) Los peticionarios interpusieron durante la tramitación de la queja ante la CIDH, pero de manera extemporánea el 19 de marzo de 2001 (cerca de DOS AÑOS DE RETRASO), un recurso de jurisdicción interna que habían omitido, que consistió en un juicio de amparo para impugnar la decisión que declaró infundado el reconocimiento de inocencia del inculpado.

d) Los peticionarios omitieron informar a la Comisión, que habían interpuesto el 30 de junio de 2000, Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo una demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F., para impugnar la decisión del Ministerio Público a cargo de la investigación iniciada por supuestos actos de tortura, en el sentido de que no existían elementos para continuar la investigación. Tampoco informaron, lo cual es sumamente grave, que fueron los propios peticionarios quienes desistieron expresamente y por escrito del juicio de amparo señalado, mismo que se declaró por tal motivo sobreseído. Esta última determinación, siendo posible combatirla a través de una revisión (apelación) fue dejada como firme ante la inactividad de los peticionarios.

e) Sobre la defensa jurídica del sentenciado, los peticionarios nunca mencionaron que desde la etapa de declaración preparatoria el entonces inculpado contó con abogados privados, ni tampoco sobre el número de veces que cambio de defensor particular en cada etapa del proceso y en la interposición de los recursos extraordinarios que presentó.

f) También debió haber tomado en cuenta la Comisión, como parte de la posición del peticionario, las alteraciones a la narración histórica de los hechos así como las versiones inconsistentes que han presentado acerca de los mismos. A esto hay que agregar que es completamente inverosímil la utilización de una sola prueba inculpatoria como base de la sentencia del procesado.

3) Sobre l*a naturaleza y gravedad de la violación*, la Comisión no atendió a las constancias, argumentos y elementos presentados a su consideración que hacen inverosímil la existencia de violaciones a los derechos humanos en el presente caso y, por otra parte, demuestran la compatibilidad de la actuación de las autoridades con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos.

4) Sobre *la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema*, tampoco es un requisito que se satisface pues, como ha quedado demostrado en esta contestación, la actuación misma de la CIDH contradice un gran número de los criterios relevantes establecidos por la honorable Corte Interamericana y que dan al sistema interamericano credibilidad y razonabilidad. De ser aceptados los criterios propuestos por la CIDH se verían trastocados los estándares internacionales de derechos humanos en materias como detención arbitraria, tortura, debido proceso, garantías judiciales y protección judicial, de manera tal que los derechos fundamentales sufrirían un grave retroceso al apoyarlos en hechos falsos y una visión parcializada y falta de objetividad.

Por otra parte, la competencia de los órganos de supervisión del sistema interamericano estaría al capricho y la voluntad de los peticionarios, quienes al ver perdida una causa penal que adquirió el carácter de cosa juzgada, simplemente aguardarían años para plantear un nuevo recurso, aunque infundado, para que la Comisión y la Corte se avocaran al conocimiento de los supuestos méritos del asunto.

5) Uno de los aspectos más negativos sería *el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros*, pues de prosperar el presente asunto significaría para los Estados del Continente Americano algunos de los siguientes aspectos negativos, en detrimento del respeto y protección de los derechos humanos y de la procuración e impartición de justicia estatales:

> Cualquier alegación inverosímil de actos de tortura, sin elementos que la sustenten, podría utilizarse para pretender anular una investigación y un proceso tramitado de conformidad con los estándares internacionales de procuración e impartición de justicia.
>
> El carácter de cosa juzgada que adquieren las decisiones de fondo emitidas en un proceso penal, y las decisiones judiciales de órganos locales y federales, pueden ahora ser controvertidas por una alegación de tortura y un dictamen psicológico privado (cuya objetividad es cuestionada), elaborado cerca de diez años después de ocurridos los hechos.
>
> La detención de un presunto responsable por parte de las autoridades competentes de investigación y su presentación ante un juez penal en un plazo menor al del estándar internacional en la materia, constituiría *per se* una detención arbitraria y prolongada contraria a los derechos humanos.
>
> El proceso penal que culmina normalmente con la sentencia de segunda instancia, por la que se decide el fondo del asunto, ahora se prolongará hasta que el peticionario decida, así sea años después, la interposición de los recursos extraordinarios y excepcionales que estime pertinentes, aunque sean improcedentes e infundados.
>
> Se desvirtúa la naturaleza jurídica de los medios de impugnación extraordinarios y excepcionales, ya que con motivo de su interposición se tendrán que estudiar cuestiones que ya quedaron probadas y decididas definitivamente ante los órganos de impartición de justicia competentes, en detrimento de los derechos que asisten a las víctimas del delito.

A partir de estos elementos, cabría preguntar a la Comisión Interamericana cuáles serían a su juicio los efectos que, desde su particular punto de vista, tendría el presente asunto en los ordenamientos jurídicos de los Estados del Continente y de los que son Partes en la Convención Americana.

6) Por lo que hace a la calidad de la prueba disponible, el único elemento que apoya la versión de la presunta tortura es el dictamen psicológico elaborado por miembros de ACAT, que es la organización que ha tramitado el asunto en el ámbito interamericano. Por lo tanto, la supuesta "objetividad" que debe caracterizar a un documento pericial no existe en absoluto en el presente caso. Esto y no otra cosa, constituye el carácter paradigmático del presente caso.

8) Finalmente, de prosperar un caso como el presente, los propios órganos del sistema interamericano se verían imposibilitados para hacer frente simplemente a la tramitación del número de asuntos procesados y decididos ante los órganos de justicia de los Estados Partes, en los que se alegará que hubo tortura y que lo demuestra un dictamen psicológico particular elaborado diez años después de presuntamente sucedidos tales hechos.

De concederse la razón a los peticionarios, situaría los estándares de tortura, gracias a hechos inexistentes, en niveles no cubiertos por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

V. La inexistencia de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la compatibilidad de la actuación de las autoridades nacionales con los estándares internacionales de respeto y protección de los derechos humanos en el caso 12.228.

La CIDH en su demanda solicita a la Honorable Corte que concluya y declare la violación a los artículos 7, 8, 25, 5 y 1.1 de la Convención Americana, y 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el caso 12.228. Los peticionarios por su parte añaden la presunta violación los artículos 2 y 5 de la Convención Americana, éste último en perjuicio de algunas personas distintas del sentenciado.

El Estado en el presente apartado comprobará la inexistencia de las presuntas violaciones a los derechos humanos previstos en todos y cada uno de las disposiciones jurídicas mencionadas, que dio pleno cumplimiento a las mismas y que las instancias internas que han intervenido en el caso, han actuado de forma compatible con los estándares internacionales vigentes en el sistema interamericano al momento de sucedidos los hechos. Con este fin, se solicita a la Honorable Corte que al momento de considerar el presente apartado, lo haga a la luz de la narración de hechos y de las constancias procesales que los sustentan, según consta en el apartado número III de la presente contestación.

De igual manera, el Gobierno de México solicita a la Honorable Corte que en este apartado valore y considere los argumentos y elementos aquí presentados, con respecto únicamente a los hechos que se encuentren dentro de los alcances precisos de competencia en el presente caso, de conformidad con la decisión que hubiere adoptado sobre el particular.

a) La detención de Alfonso Martín del Campo Dodd se llevó a cabo dentro del marco constitucional y legal de actuación de una autoridad competente, respetando y cumpliendo con los derechos humanos previstos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 7 de la Convención Americana establece el derecho a la libertad personal en los siguientes términos:

"Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios."

La Comisión señala de manera específica la presunta violación de los numerales 1 y 3, mientras que los peticionarios agregan el número 2, por lo que para la consideración y decisión de la Honorable Corte habrá de estarse única y exclusivamente a las disposiciones señaladas. Sin embargo, el Gobierno mexicano, brinda información no sólo sobre los hechos que desvirtúan por sí mismos los planteamientos de los peticionarios y de la Comisión, sino también ofrece elementos adicionales para la consideración del caso en su conjunto, que están vinculados a la verdad histórica de los hechos, a la posición del Estado sobre la falta del debido agotamiento previo y oportuno de recursos internos y sobre la conducta procesal de los peticionarios y de la Comisión.

Siguiendo el orden cronológico de las supuestas violaciones que alega la Comisión y los peticionarios, el primer punto que el Gobierno procede a analizar es el relativo al acto material de detención de Alfonso Martín del Campo Dodd, llevada a cabo y agotada el 30 de mayo de 1992. Para tal efecto, habrá que tomar en cuenta los alcances del artículo 7 de la Convención Americana citado, específicamente en los numerales 1, 2 y 3.

El primer párrafo del artículo 7 de la Convención consagra de manera genérica el derecho de todo ser humano a la libertad y a la seguridad personales, mismo que al igual que todo derecho humano no es de carácter absoluto, sino que está sujeto a límites y condiciones previstos en el resto de los

párrafos que integran dicho precepto. Por tal motivo, no puede existir una violación *per se* del derecho a la libertad y seguridad personales si los hechos y la actuación de las autoridades se encuentran dentro de los márgenes que delimitan su contenido y condicionan su alcance.

El párrafo número 2 permite que la libertad física de una persona sea afectada, si esto se lleva a cabo de conformidad con las *causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas*. Esto significa que se dejó en el ámbito de los órganos legislativos de los Estados Partes fijar en sus respectivas Constituciones o leyes tales causas y condiciones o requisitos y, por lo tanto, a éstos habrá necesariamente que atender para calificar los hechos.

Derivado del párrafo número dos la Convención establece en el párrafo siguiente (7.3) que, por lo tanto, *nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios,* entendiéndose por tales aquellos que se realicen en contravención de los extremos del párrafo 2, esto es, que se hayan llevado a cabo fuera del marco Constitucional o legal de los Estados vigentes al momento de sucedidos los hechos[158].

El artículo 7 de la Convención Americana agrega de manera complementaria que estando ya la persona detenida o retenida *debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella* (7.4).

Los párrafos 5 y 6 del artículo 7 de la Convención, detallan los medios a través de los cuales es posible determinar, en el marco de las propias instancias nacionales, si en efecto la afectación a la libertad estuvo conforme con las *causas* y las *condiciones* fijadas de manera previa en la Constitución y/o en las leyes. De ahí que se exija la presentación, sin demora,[159] de la persona ante un juez a efecto de que éste determine si procede juzgarla permaneciendo en detención preventiva, o ponerla en libertad durante el transcurso del proceso, para lo cual podrán fijarse las garantías que aseguren su comparecencia en el juicio; esto significa que corresponde a la autoridad jurisdiccional nacional determinar si se dan o no las causas previstas por la ley, para que una persona sea sometida a proceso penal.

La propia Convención establece como garantía de que en efecto se cumplieron los anteriores requisitos, el derecho de toda persona privada de su libertad "*... a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales... Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona*" (artículo 7.6). De conformidad con esta disposición se aprecia que es la Convención misma, en principio, la que determina la manera idónea y oportuna de combatir un arresto o detención que se estimen arbitrarios o ilegales.

---

[158] De conformidad con el artículo 7.2 de la Convención, los Estados están facultados para modificar por la vía Constitucional y/o legal las causas y condiciones dentro de las cuales puede ser afectada la libertad personal, siempre y cuando, por supuesto, éstas se encuentren en armonía con la Convención Americana.

[159] La palabra *demora* en este contexto denota la existencia previa de un margen temporal, fijado por la legislación interna dentro del cual la autoridad está en aptitud de efectuar la presentación de la persona ante el juez.

La Honorable Corte ha señalado a este respecto que "... Deben considerarse como "indispensables"..., aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades ..."[160]

Si no es combatido de manera oportuna y adecuada (en tiempo y forma), un arresto o una detención, por los cauces que el propio sistema interamericano señala como idóneos y eficaces, su licitud no se ve cuestionada ni trastocada, sino que se convalida de manera que brinda la regularidad jurídica de inicio que permite la continuación del proceso hasta la decisión de fondo, bajo un principio básico de seguridad jurídica. De lo anterior se colige con meridiana claridad que si existen en el ordenamiento jurídico del Estado los medios para hacer efectivo lo exigido por la Convención,[161] la carga inicial de la prueba para demostrar que se acudió a los mismos, o que habiendo acudido a ellos resultaron ineficaces, recae entera y exclusivamente en los propios peticionarios.

De esta manera, todo señalamiento de presunta violación al artículo 7 de la Convención, especialmente los párrafos 1, 2 y 3, y la consiguiente responsabilidad internacional del Estado por estos motivos, está vinculada íntimamente con el ejercicio efectivo del derecho de combatir oportunamente un arresto o detención que se estiman arbitrarios o ilegales.

En términos llanos y precisos, las disposiciones de la Convención Americana no se cumplen si quien alega haber sido detenido arbitrariamente soslayó sin justificación alguna los medios oportunos de defensa a su alcance, a los que la propia Convención hace referencia como idóneos, para combatir la supuesta ilicitud de una orden emanada de una autoridad competente para restringir su libertad física. Resulta francamente contrario a los principios jurídicos básicos que una persona pretenda beneficiarse de sus propios errores y omisiones, habiéndole impedido a las instancias judiciales internas decidir desde los primeros momentos si la licitud de la detención de que fue objeto se vería o no controvertida.

De las anteriores consideraciones se deduce fácilmente, que no es posible sostener que un arresto o detención cuya licitud no fue controvertida judicialmente de manera oportuna, estando en posibilidad de hacerlo, a través de los medios de defensa idóneos previstos por el ordenamiento jurídico, pueda constituir una violación continuada[162]. La decisión judicial adoptada de conformidad con el artículo 7.5, que no es controvertida oportunamente de acuerdo con lo previsto por el artículo 7.6, agota el tema de la licitud del arresto o detención iniciales de una persona, de manera que éstos satisfacen por ese solo hecho, los requisitos del propio artículo 7 en sus párrafos 1, 2 y 3.

Cabe señalar que a partir de que no es combatida en tiempo y forma el arresto o la detención de una persona, no es posible jurídicamente hacer planteamientos posteriores sobre dicho aspecto que quedó agotado y firme, sino únicamente intentar controvertir la regularidad jurídica *per se* del resto

---

[160] Ver *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías* (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 29.

[161] La existencia de tales recursos o medios de defensa permiten a los Estados no sólo cumplir con la exigencia del artículo 7.6, sino también con las garantías judiciales y la protección judicial previstas en los artículos 8 y 25 de la propia Convención Americana.

[162] En todo caso, la continuación de la ilicitud de la actuación judicial es resultado directo de la inactividad voluntaria del peticionario, como en el presente caso.

de las actuaciones y decisiones judiciales emitidas durante el proceso en primera y segunda instancias, teniendo esta última el carácter de definitiva por decidir el fondo del asunto con respecto a la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.

Con el fin de demostrar que la actuación de las autoridades mexicanas cumple con el parámetro establecido en el artículo 7 de la Convención Americana, se presentan a continuación los aspectos más relevantes del derecho positivo vigente en la época en que sucedieron los hechos.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponía, entre otros aspectos, las diversas hipótesis en que una persona podía ser detenida o retenida que consistían básicamente en: 1) cumplimiento de una orden judicial de aprehensión[163]; 2) flagrancia y 3) casos urgentes.

Con respecto a estos últimos, el texto constitucional señalaba en su parte conducente: "Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial."

Como puede apreciarse se autorizaba a cualquier autoridad administrativa ordenar la detención de una persona, siempre que el delito cometido fuera de los perseguibles de oficio y no hubiera en el lugar ninguna autoridad judicial, de la cual pudiera recabarse una orden de aprehensión.

El tipo de casos que ameritaban la intervención de las autoridades administrativas, no sólo el Ministerio Público, eran aquellos en los que las circunstancias del caso hacían necesaria ordenar la detención de una persona involucrada en un delito, con el fin de evitar su fuga y que el ilícito pudiera quedar impune.

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente en 1992, en armonía con el artículo 16 constitucional disponía en la parte conducente de su artículo 132:

> "Queda prohibido detener a cualquier persona, sin orden de aprehensión librada por tribunal competente, excepto cuando se trate de delito flagrante o de casos urgentes en que no haya en el lugar alguna autoridad judicial, tratándose de delitos que se persiguen de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo el Ministerio Público puede, con sujeción a éste precepto, determinar qué personas quedarán en calidad de detenidas, sin perjuicio de las facultades que correspondan al juez o tribunal de la causa. La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Ministerio Público o funcionario de policía judicial que decrete la detención. La persona detenida en contravención a lo dispuesto en este artículo será puesta inmediatamente en libertad."

El texto citado permite afirmar lo siguiente:

---

[163] El artículo 16 señalaba a este respecto: "No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado"

- Que era posible detener a una persona en casos urgentes.

- Que la detención la puede decretar tanto el Ministerio Público, como los agentes de la policía judicial (que por lo regular eran los servidores públicos que llevaban a cabo materialmente las detenciones y las aprehensiones).

- Que únicamente el Ministerio Público podía determinar qué personas quedaban en calidad de detenidos.

Lo anterior se ve confirmado y detallado por lo que establece el propio Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en sus artículos 266 y 268. El primero de estos preceptos señalaba que "El Ministerio Público y la Policía Judicial a su mando, están obligados a detener al responsable, sin esperar a tener orden judicial, en el caso de delito flagrante o de notoria urgencia, cuando no haya en el lugar autoridad judicial", entendiéndose que ambos extremos se actualizan cuando ".... por la hora o por la distancia del lugar en que se practica la detención, no hay ninguna autoridad judicial que pueda expedir la orden correspondiente y existan serios temores de que el responsable se substraiga a la acción de la justicia".

En el caso de la detención de Alfonso Martín del Campo Dodd, el Agente de la Policía Judicial Sotero Galván Gutiérrez procedió conforme a sus atribuciones legales y constitucionales, que le obligaban detener de inmediato al responsable y ponerlo a disposición del Ministerio Público, ya que el homicidio doloso es un delito perseguible de oficio y se estaba en presencia de un *caso urgente*, así calificado por la Constitución y la legislación procesal penal aplicable.

Es importante hacer mención que Alfonso Martín del Campo Dodd, tal como lo aceptan los peticionarios, acudió a la Agencia del Ministerio Público en calidad de víctima/testigo, por lo que encontrándose ahí no era procedente dictar una orden para proceder a su detención, puesto que ya se encontraba en la propia Agencia cuando manifestó haber participado materialmente en los hechos que estaban siendo investigados. Por tal motivo, procedía su inmediata detención tal y como en efecto se llevó a cabo en el marco de lo dispuesto por la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.

Durante una entrevista de rutina que sostuvo el policía Sotero Galván con Alfonso Martín del Campo Dodd, éste en principio repitió la misma historia del supuesto atraco y secuestro que habría sufrido y el resto de los supuestos acontecimientos hasta su arribo a la escena de los hechos después de las 9:00 del día 30 de mayo de 1992; el policía le solicita que narre otra vez la historia que contó y Alfonso comenzó a cambiar su versión original y caer en contradicciones, a lo cual reaccionó manifestando que se encontraba en estado de ebriedad y que por ello no recordaba lo que había sucedido; ésta es la primera vez en que Alfonso, agobiado por sus propias contradicciones manifiestas, expresa por primera vez haber sido quien atacó y dio muerte a su propia hermana y cuñado,[164] por lo que el policía Sotero Galván procedió a ponerlo de inmediato a disposición de la Ministerio Público (13:30 horas), en calidad de principal involucrado en la autoría material del crimen.[165]

---

[164] Ver, puesta a disposición del probable responsable ante el agente del Ministerio Público de la Décima Agencia Investigadora, foja 7 de la averiguación previa10/2160/92-05.

[165] *Idem.*

La aceptación de la participación activa de Alfonso Martín del Campo en los hechos, es el hecho generador del cambio de su situación jurídica, más no una decisión de *motu proprio* de la autoridad investigadora. La reconstrucción de los momentos previos a la puesta a disposición a las 13:30 horas del día sábado 30 de mayo, permite corroborar la calidad de víctima y testigo presencial de los hechos con que Alfonso Martín del Campo fue conducido a la 10ª Agencia Investigadora del Ministerio Público, en la que permaneció con tal carácter hasta su puesta a disposición.[166]

Cabe recordar que el policía Sotero Galván Gutiérrez tenía órdenes expresas de investigar los hechos, por lo que su actuación no sólo fue jurídicamente procedente, sino también oportuna dadas las circunstancias específicas del caso. De no haber procedido en el sentido en que lo hizo, Alfonso Martín del Campo habría permanecido en una completa falta de certeza jurídica ante la autoridad investigadora, deviniendo esto en el menoscabo de sus derechos fundamentales.

En efecto, no se trataba de una detención *in franganti*, ni tampoco se trataba del cumplimiento de una orden judicial de aprehensión, sino de la modalidad de *caso urgente* prevista como válida en la Constitución y las leyes de procedimientos penales, y que en presente asunto estaba materialmente cumplida.

El siguiente aspecto a considerar es el marco normativo de actuación del Ministerio Público, a partir de que fue puesto a su disposición el indiciado Alfonso Martín del Campo Dodd a las 13:30 horas del día 30 de mayo de 1992. En este caso, se dio pleno cumplimiento a lo que disponía el artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señalaba "Cuando el inculpado fuere aprehendido, detenido o se presentare voluntariamente, se procederá inmediatamente de la siguiente forma:

I. Se hará constar el día, hora y lugar de su detención, en su caso, así como el nombre y cargo de quienes la practicaron;

II. Se le hará saber la imputación que existe en su contra y, en su caso, el nombre del denunciante, así como los siguientes derechos:

   a) El de comunicarse inmediatamente con quien estime conveniente.

   b) El de designar sin demora persona de su confianza para lo defienda o lo auxilie, quien tendrá derecho a conocer la naturaleza y causa de la acusación, y

   c) El de no declarar en su contra y de no declarar si así lo desea.

Para los incisos a) y b) se le permitirá utilizar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación...."

En otro precepto relacionado del mismo Código, el artículo 134 bis, se disponía que "Los detenidos, desde el momento de su aprehensión, podrán nombrar abogado o persona de su confianza que se encargue de su defensa. A falta de una u otro, el Ministerio Público le nombrará uno de oficio".

---

[166] *Idem.*

El primer punto fue satisfecho al engrosar al expediente de averiguación previa el documento de puesta a disposición elaborado por el Agente Sotero Galván Gutiérrez, en el que constan los motivos y la hora de la detención, así como el cargo y los datos generales del servidor público que efectuó la detención.

Por lo que se refiere a la fracción II del precepto citado y el resto de las disposiciones señaladas, el Agente del Ministerio Público cumplió con ellos puntualmente, como se puede apreciar durante el desarrollo de la diligencia de declaración ministerial en la que Alfonso Martín del Campo se hace responsable de los homicidios de su hermana y de su cuñado.

En efecto, la actuación de las autoridades que siguió a la puesta a disposición de Alfonso Martín del Campo Dodd como principal probable responsable de los hechos ocurridos en la madrugada del día 30 de mayo de 1992, confirma la salvaguarda de los derechos fundamentales del indiciado.

El Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez adscrito a las Agencias Décima y Trigésima Primera Investigación, fue enterado de que se encontraba detenido el Sr. Alfonso Martín del Campo Dodd por el delito de homicidio, acudiendo a la primera de las Agencias mencionadas para entrevistarse con él. En la entrevista se identificó con Alfonso Martín del Campo, a quien le señaló que si era su deseo lo asistiría; que mientras estuviera sujeto a investigación podía nombrar a una persona de su confianza o a un abogado particular, indicándole además que tenía el derecho de no declarar en su contra o abstenerse de declarar. Alfonso Martín del Campo le señaló que deseaba declarar en su presencia, por lo que el defensor procedió a tomar la aceptación y protesta del cargo conferido.[167]

Estando Alfonso Martín del Campo en calidad de presentado como probable responsable de los hechos ante el Ministerio Público, éste le hizo saber que podía nombrar defensor o persona de su confianza que lo asistiera en su declaración, el derecho de conocer los términos de la imputación que obraba en su contra, el nombre de los denunciantes, el de comunicarse inmediatamente con quien estimara conveniente, el de no declarar en su contra sí así lo deseaba, asimismo, se le hizo saber el contenido del artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el sentido de que tenía derecho a nombrar un facultativo (médico) particular a efecto de que lo examinara, manifestando el presentado que era su deseo que le fuera nombrado el defensor de oficio adscrito a la Agencia Investigadora.

En la Averiguación Previa se da constancia de dicha diligencia, en los siguientes términos: "Nombramiento, aceptación y protesta del cargo. Se toma protesta a Rolando Torres Martínez, defensor de oficio, quien acepta el nombramiento que hiciera en su favor Alfonso Martín del Campo, y promete cumplirlo fielmente mientras dure el cargo". Cabe mencionar que el Defensor de Oficio es un servidor público que no depende del Ministerio Público,[168] ni se encuentra vinculado administrativa ni jerárquicamente con éste, así que su labor de asistencia es independiente.[169]

---

[167] Declaración de el Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez, de fecha 10 de julio de 1995, en la Averiguación Previa por delitos diversos, incluyendo tortura SC/3839/95-03.

[168] La actuación de dichos servidores estaba regulada por la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 1987.

[169] De conformidad con el artículo 4° de la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal referida en la nota anterior, "En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Defensoría de Oficio observará las

El Defensor de Oficio en la etapa de Averiguación Previa tiene sobre todo la función de estar presente en las diligencias, hacer notar alguna irregularidad en su desarrollo y evitar cualquier acto que atente contra la integridad del indiciado.[170]

El Ministerio Público ordenó la práctica del examen de integridad física correspondiente al indiciado, previo a su declaración. Las lesiones que presentaba Alfonso Martín del Campo, eran de las que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida; [171] el certificado médico lo suscribe el médico forense Jesús López Sánchez, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En su declaración ministerial, Alfonso Martín del Campo Dodd no refiere poseer una nacionalidad distinta a la mexicana, y declara estar debidamente enterado de los hechos que se investigan, así como del delito de homicidio que se le imputa y la penalidad para el mismo, como también que acepta los hechos, mismos que son coincidentes en tiempo, lugar, forma y circunstancia con lo declarado por diversos testigos; como por la declaración de María Fernanda Zamudio. Alfonso Martín del Campo hace referencia al móvil, los instrumentos del delito (guantes y cuchillos) y la mecánica de los hechos, relata que vestía pantalón color negro, de vestir, con una camisa cuyo color no recuerda, así como zapatos negros; luego de cometidos los hechos se cambia de ropa usando un pantalón de mezclilla azul, una camisa roja y unos tenis negros; se quita los guantes que había usado y narra que después de lo sucedido planea la forma de simular un robo y un secuestro con la idea de aparentar que no participó en los hechos, quebró tres figuras de cerámica, rompió el cable del teléfono con el cuchillo, se llevó uno de los guantes y un cuchillo, y tomó el automóvil Thunderbird, deposita en el suelo del asiento trasero el cuchillo y el guante. Huye por la carretera a Cuernavaca, pasa la caseta y algunos kilómetros más adelante retorna, con la intención de dejar abandonado en la dirección de regreso el automóvil. Por el exceso de velocidad choca el vehículo, camina unos 15 minutos y luego toma un camión que lo lleva a la caseta de cobro, donde finalmente arriba a la oficina de la Policía de Caminos.

Alfonso narra a los elementos de la Policía Federal de Caminos su versión falsa de lo sucedido (de que fue secuestrado por dos sujetos en su domicilio), refiere que los policías se comunicaron por

---

obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos, de acuerdo con sus facultades específicas, y actuará con la diligencia necesaria para contribuir a la pronta y expedita procuración e impartición de justicia".

[170] La entonces vigente Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, disponía en su artículo 18, entre otras cosas, que los Defensores de Oficio en el área de Averiguaciones Previas tendrían entre sus funciones: "I.- Atender las solicitudes de Defensoría de Oficio, que le sean requeridas por el indiciado o infractor, Agente del Ministerio Público o Juez Calificador; II.- Estar presente en el momento en que su defendido rinda su declaración ante la autoridad correspondiente; III.- Entrevistarse con el indiciado o infractor para conocer de viva voz la versión personal de los hechos y los argumentos que pueda ofrecer a su favor, para hacerlos valer ante la autoridad del conocimiento; IV.- Asesorar y auxiliar a su defenso en cualquier otra diligencia que sea requerido por la autoridad correspondiente; VII.- Vigilar que se respeten las garantías individuales de su representación".

[171] Certificado de estado físico de Alfonso Martín del Campo Dodd, expedido en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 29 de mayo de 1992 (sic), a las 14:00 horas, suscrito por el doctor Jesús López Sánchez. En él se registran dos golpes contusos en la parte posterior de ambos parietales; una escoriación dermoepidérmica en la región paraexiliar del ojo izquierdo; una escoriación del lado izquierdo de la nariz; un golpe contuso en la parte en que nace el vello de la frente; una escoriación en la rodilla derecha; máculas de color rojo en la parte media de la cara, y una escoriación dermoepidérmica en el dorso de la mano derecha.

radio a otro lugar desde donde hablaron por teléfono a Raúl García, y que éste se dirigió al lugar de los hechos y la policía de caminos se comunicó con una corporación policíaca para que verificaran lo sucedido. El indiciado señala que a Gerardo y Raúl García, a Juan Carlos Miranda, y al portero de la casa de nombre Sergio les cuenta la misma historia del secuestro. Refiere que al entrevistado en el lugar de los hechos lo narra todo a un policía judicial, y terminó por informarles como habían sucedido en realidad éstos.

Respecto del móvil del homicidio, refiere que era por el maltrato que recibía de su cuñado y porque éste le reclamó que le había robado 700000 pesos de la casa.

Por otro lado, Alfonso señala que al momento del ataque su hermana había tratado de defenderse y no así su cuñado Gerardo, que fue el primero al que apuñaló (mismo que se encontraba en estado de intoxicación alcohólica severa). Que las lesiones que presentaba (Alfonso) se las ocasionó probablemente al chocar en la carretera, dice también que se golpeó intencionalmente la nariz y que el resto de las lesiones fueron producidas cuando victimó a la pareja; Alfonso ratifica su declaración, la firma en presencia de su defensor, y estampa su huella digital.

Con posterioridad a su declaración, siendo las 19:00 horas, se lleva a cabo una diligencia de reconocimiento de ropas, en la que Alfonso acepta como de su propiedad la camisa color rojo, que presentó dos manchas al parecer hemáticas, la playera blanca sin marca en el cuello y letras anaranjadas y rojas, con un escudo cuadrado a rectángulos en la parte superior, también con líquido hemático, y el pantalón de color negro con manchas al parecer de líquido hemático. Alfonso refiere que la Camisa y la playera blanca las usaba cuando se dio a la fuga y que, por lo que hace al pantalón negro se lo puso cuando victimó a su hermana y a su cuñado; con respecto a la playera que usó, la tiró en la carretera, por otra parte, reconoce como objetos del delito cuchillos, un guante rojo y un dedo de otro guante, y también refirió haber tomado uno de los cuchillos y un guante, mismos que lanzó fuera del automóvil luego de que se estrelló. Estas declaraciones también fueron hechas en presencia del Defensor de Oficio, quien también suscribió los documentos oficiales correspondientes.

Inmediatamente después, a las 19:30 horas, se le practicó un nuevo examen de estado físico, en el que se refiere que presenta las mismas lesiones halladas antes de iniciar su declaración. Dicho examen fue realizado por el médico forense Jesús López Sánchez, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Aproximadamente a las 20:00 horas, se solicita la presencia de peritos en criminalística y fotografía para intervención en diligencia de reconstrucción de hechos.[172]

El día 30 de mayo, siendo las 21:20 horas, arribaron al lugar de los hechos peritos en criminalística y fotógrafo para realizar la diligencia de reconstrucción de lo ocurrido. Para ello, se da intervención a la Policía Judicial para que en compañía de la trabajadora doméstica Inés Guzmán Sánchez y Alfonso Martín del Campo se trasladen al lugar de los hechos: el Ministerio Público en funciones y Miguel Ángel Camarillo, Guillermo Medina Aguilar, Isaac Contreras y Víctor Cano Ojeda, éste

---

[172] La citada diligencia tiene su fundamento en el artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que en su parte conducente señala: "la inspección podrá tener el carácter de reconstrucción de hechos y tendrá por objeto apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan formulado; se practicará dentro de la averiguación únicamente cuando el funcionario que practique las diligencias de policía judicial, o el juez o el tribunal lo estime necesario;"

último tomará el lugar del occiso, la perito en criminalística Beatriz Alminos Morales, el fotógrafo Antonio Várgas Lagunes, y Gabriela Rivera Nieto, quien toma el lugar de la occisa.[173] La reconstrucción de los hechos tuvo lugar alrededor de las 22:15 del día 30 de mayo de 1992 y el acta correspondiente está suscrita por el indiciado y el defensor de oficio.[174]

Los peticionarios han manifestado su inconformidad con la mencionada diligencia, en especial porque a su leal saber y entender, dicha reconstrucción es llevada a cabo sin apego a derecho, las personas, salvo el indiciado y quienes representan a alguien que participó en los hechos verdaderos, tienen una marca que los distingue de éstos. Sobre este punto las afirmaciones de los peticionarios merecen una explicación más detallada: en primer lugar los nombres de los participantes en dicha diligencia sí estaban expresados claramente en el expediente de averiguación previa; en segundo, la práctica de una *reconstrucción de hechos* debe ser de tal manera clara, que no produzca confusión en su apreciación, de esta manera, es obvio que lo importante es que se pueda distinguir a los personajes que tuvieron participación real en los hechos que son reconstruidos; así, si todos los que aparecen en las fotografías no tuvieran la marca que los distingue del indiciado la diligencia no cumpliría su finalidad de confrontar las declaraciones de éste con el estudio criminalístico de los hechos.

En efecto, si todas las personas aparecieran en la fotografía, sin distinguir meros participantes de los sujetos involucrados en los hechos que se reproducen, sería una diligencia no válida jurídicamente pues llevaría a confusión, e incluso atentaría contra los derechos del indiciado. Por otra parte, si fueran personas distintas del indiciado y de la testigo los que participaran únicamente, podría objetarse que se trata de una representación ficticia, que obraría en perjuicio de la defensa y los intereses del involucrado.

Otro aspecto es el relativo a que en algunas de las fotografías se aprecia que Alfonso Martín del Campo es tomado del brazo o las muñecas durante la diligencia; los peticionarios refieren a este respecto dos cuestiones: 1) que las posiciones y movimientos de Alfonso son dirigidos externamente, y 2) que los guantes rojos de látex y los cuchillos no son las evidencias reales que se habían recabado. Esto también merece un comentario sobre algo que escapa a la atención de los peticionarios, en una diligencia de reconstrucción de hechos no se deben utilizar todos los objetos originales que como evidencias fueron encontradas, se trata de una reconstrucción de la mecánica de los hechos, de cómo fueron sucediéndose éstos en el tiempo y espacio, no se trata de utilizar evidencia que puede resultar contaminada, dañada, destruida o alterada. Es por ello que se utilizaron unos guantes rojos de látex similares a los usados en los hechos realmente ocurridos, de igual forma que con los cuchillos que se muestran.

---

[173] Con esto se dio cumplimiento a lo señalado por el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales ya señalado, que dispone las personas que deberán concurrir a la reconstrucción de los hechos, entre ellos: La policía judicial, el acusado y su defensor, el agente del Ministerio Público, los testigos presenciales y los peritos nombrados.

[174] La práctica de la diligencia estaba prevista en el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que indicaba: ".... se trasladará al lugar de los hechos juntamente con las personas que deban concurrir; tomará a testigos y peritos la protesta de producirse con verdad, designará a la persona o personas que substituyan a los agentes del delito que no estén presentes, y dará fe de las circunstancias y pormenores que tengan relación con ésta. Enseguida leerá la declaración del acusado y hará que este explique prácticamente las circunstancias del lugar, tiempo y forma en que se desarrollaron los hechos. Lo mismo se hará con cada uno de los testigos presentes. Entonces los peritos emitirán su opinión en vista de las declaraciones rendidas y de las huellas o indicios existentes, atendiendo a las indicaciones y preguntas que haga el juez (o Ministerio Público) , el que procurará que los dictámenes versen sobre puntos precisos."

Por cuanto a la manera en que se toma a Alfonso Martín del Campo, ello obedece a la necesidad de aseguramiento del indiciado a efecto de evitar su fuga y también a que los cuchillos utilizados no son de *utilería;* sería muy poco inteligente y precavido quien pusiera en las manos libres de un indiciado por un doble homicidio, con arma punzo cortante, un cuchillo para que lo manipule a su antojo, con el consiguiente riesgo que se lastime a sí mismo o que dañe a alguno de los presentes. Así, sólo se toma a Alfonso Martín del campo con fines de salvaguardar su integridad y la de los presentes, para permitir el desarrollo de la diligencia de manera normal, pero no como una forma de manipular sus movimientos cual títere.

La privación de la libertad del ahora sentenciado, fue nuevamente confirmada al finalizar las diligencias de investigación del día 30 de mayo de 1992, en la que el Ministerio Público manifestó por escrito que Alfonso Martín del Campo se hallaba en calidad de detenido.

No obstante la declaración auto inculpatoria emitida por Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Agente del Ministerio Público y las diligencias llevadas a cabo para efecto de corroborar su veracidad, no resultaba procedente determinar si procedía o no el ejercicio de la acción penal en contra del indiciado, pues aún no se completaban diversas diligencias fundamentales con respecto a la acreditación del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del indiciado.

Haber consignado judicialmente a Alfonso Martín del Campo sin la debida satisfacción de ambos requisitos, como resultado de las diligencias de investigación que faltaba practicar, hubiera significado acusarlo sobre bases inciertas e insuficientes, sin el debido esclarecimiento de los hechos, en detrimento de sus derechos fundamentales. Por otra parte, esto habría traído como consecuencia posiblemente una determinación judicial que dejara en libertad al inculpado por falta de elementos para procesar, lo que habría significado dejar en total impunidad el homicidio de Juana Patricia y Gerardo.

Por tal motivo, las diligencias de investigación continuaron, como puede verificarse en la parte correspondiente a las diligencias de investigación del día 31 de mayo y las correspondientes a la mañana del día 1° de junio en que de la investigación culminada se acreditó el cuerpo del delito y resultó presunta responsabilidad del indiciado. En tal sentido, de conformidad con lo previsto por el artículo 286 del Código penal adjetivo para el Distrito Federal, "las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la Policía Judicial tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas de este Código".

En efecto, ante los diversos indicios recabados y habiendo justificado jurídicamente la calidad de la presencia de Alfonso Martín del Campo Dodd en la Agencia Investigadora, el agente del Ministerio Público robusteció el carácter de la detención administrativa de Alfonso Martín del Campo Dodd, fundada en la satisfacción de dos hipótesis jurídicas previstas por la Constitución Federal y la legislación vigente en 1992: 1) que se trataba de un caso urgente (calificado de esa manera por la propia Constitución Federal y la legislación penal adjetiva), en virtud de que se estaba ante a un doble homicidio y existía una imposibilidad material de recabar una orden judicial en ese instante, y 2) la manipulación de la versión de lo realmente ocurrido por parte de Alfonso Martín del Campo Dodd, dejaba ver fundadamente que desde el inicio pretendía evadir la acción de la justicia haciéndose pasar por una víctima más de lo ocurrido, cuando en realidad había tenido participación directa en los hechos en calidad de sujeto activo.

El carácter urgente del caso, fue confirmado por la orden dictada por una autoridad competente de manera oportuna, justificando jurídicamente lo actuado, salvaguardando previamente el derecho del indiciado a saber los cargos de que se le acusan y a no hallarse en modo alguno en detención arbitraria, misma que podría haberse configurado si no hubiera hecho explícito el Ministerio Público que Alfonso Martín del Campo se hallaba en efecto detenido y brindándole los derechos que en tal carácter le asistían.[175]

La presentación formal del entonces inculpado ante el juez se dio el 1° de junio de 1992, mediante su consignación ante el órgano jurisdiccional penal a las 11:30 de la mañana,[176] hora que coincide plenamente con su ingreso al reclusorio o centro de prisión preventiva a disposición del juez penal competente.

La Comisión y los peticionarios imputan al Gobierno de México que la detención de Alfonso Martín del Campo es arbitraria, supuestamente por haber sido sometido a la disposición del Juez penal fuera del plazo previsto por el ordenamiento mexicano, que según ellos era de 48 horas, siendo que según su propio dicho esto tardó cerca de sesenta minutos después de dicho plazo. Lo afirmado por estos no concuerda con la realidad, pues el Ministerio Público realizó las diligencias atingentes a todo detenido luego de la puesta a su disposición por parte del Agente Sotero Galván Gutiérrez, a las 13:30 horas del día 30 de mayo de 1992, cosa que no controvierte la Comisión ni los peticionarios, y se determinó ejercitar acción penal en contra de Alfonso Martín del Campo mediante su consignación ante el Juez efectuada a las 11:30 horas del 1° de junio del mismo año. Esto es que en realidad se puso a disposición al indiciado incluso dos horas antes del plazo de 48 horas que según alegan los propios peticionarios era el aplicable.

A fin de esclarecer si el tiempo que estuvo en calidad de detenido Alfonso Martín del Campo Dodd se encuentra dentro de los márgenes previstos por el orden jurídico mexicano, en armonía con el artículo 7 de la Convención Americana. Se deben hacer algunas precisiones adicionales.

De conformidad con el ordenamiento mexicano vigente al momento de suceder los hechos, no existía un plazo cierto y preciso que delimitara los márgenes temporales dentro de los cuales debía llevarse a cabo la investigación de un delito perseguible de oficio y la correspondiente integración de una Averiguación Previa con presencia del indiciado en calidad de detenido. Esta situación fue modificada con las trascendentes reformas constitucionales de 3 de septiembre de 1993 y, las correspondientes modificaciones legislativas de 10 de enero de 1994.

Según lo dispuesto en el texto del artículo 16 constitucional en vigor en 1992:

> "No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad

[175] Ver texto de la nota anterior.

[176] Ver. Pliego de Consignación de la Averiguación Previa 10/2160/92-05.

> administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial."

El término *inmediatamente* debe ser entendido dentro del contexto general del precepto, y en especial con referencia a los requisitos para que fuera obsequiada una orden judicial de aprehensión, esto es, que se acredite al menos en grado de presunción la existencia de un delito (un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal), y la presunta responsabilidad de la persona a la que se imputa su comisión (existan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado). No tendría objeto racional alguno que una persona fuera puesta *inmediatamente* a disposición del juez, sin que se demuestre previamente que los extremos señalados fueron acreditados; en términos llanos, la puesta a disposición judicial debe realizarse una vez satisfechos el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, lo cual en los casos en que el indiciado se encuentra privado de su libertad por el Ministerio Público debe llevarse a cabo en un plazo razonable, atendiendo a la complejidad y las características de cada caso.

Si la interpretación que dan los peticionarios fuera la correcta se llegaría al absurdo de presentar *de inmediato* a la persona indiciada ante el juez, para *a posteriori* acreditar ante éste la existencia delito por el cual fue puesta a su disposición y las razones y evidencias de por que la persona podría ser la responsable, con la incertidumbre jurídica en que se encontraría la persona y el propio juez.

Una vez integrada la Averiguación Previa, en los casos en que la persona se encuentra detenida, el Ministerio Público no tiene otro margen de acción más que decretar la libertad de la persona o ejercitar la acción penal contra el indiciado. De aquí que el término *inmediatamente* opera sólo cuando han culminado las diligencias de investigación a cargo del Ministerio Público.

Confirma de manera indubitable lo anterior, la exposición de motivos de las reformas constitucionales de septiembre de 1993, en las que el órgano Constituyente acepta que en los casos señalados no existía plazo alguno, por lo que era necesario establecer uno fijo y razonable. En la parte conducente de dicha exposición de motivos se señaló de manera expresa:

Exposición de Motivos que acompañó a la iniciativa de reformas constitucionales de 1993 a diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 2 de julio de 1993. Iniciativa de reformas a los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura de esta Cámara de Diputados.

> "En este orden de ideas, los suscritos sostenemos que un ámbito como el de la justicia penal, no debe quedar exento de este debate, ya que en este campo del derecho en el que se busca el justo equilibrio entre los principios de seguridad y libertad, entre la observancia de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales del ser humanos, se plasma la aspiración de un pueblo para asegurar la paz y la tranquilidad por el camino de la libertad.
>
> Es por ello que resulta necesario, en beneficio de la propia sociedad, adecuar las normas constitucionales, siempre con vistas a la protección de los derechos humanos, garantías individuales, administración rápida y expedita de la justicia, tanto en las etapas de investigación como durante el procedimiento judicial.

Las reformas que se proponen, buscan con mejor técnica legislativa, otorgar mayor claridad al artículo 16, dado que este precepto en la actualidad se compone de cuatro párrafos. Con la reforma propuesta dicho artículo contará con nueve párrafos.

El segundo, regularía lo correspondiente a la orden judicial de aprehensión, precisando los elementos de fondo que deben de cumplirse para que la autoridad judicial pueda girar dicha orden.

El tercer párrafo, de aprobarse esta iniciativa, contempla lo referente a la detención cuando se trate de delito flagrante, la cual puede realizarse por cualquier persona, quien deberá sin demora ponerlo a disposición de la autoridad inmediata y ésta, en su caso, con la misma prontitud a la del ministerio público.

En lo que se refiere el cuarto párrafo, la reforma que se propone regulará la detención en casos urgentes de un indiciado cuando exista delito grave señalado en la ley, facultándose al Ministerio Público para que en dichos supuestos, existiendo el riesgo fundado de que dicho iniciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, pueda ordenar su detención, bajo su responsabilidad, debiendo expresar los indicios y normas que motivan y fundan la misma. Así mismo, la detención deberá ser ratificada por el juez que conozca del procedimiento, ya que en caso contrario, deberá ser puesto en libertad inmediatamente con las reservas de ley.

Con lo anterior, se busca acotar la autorización para la detención en casos urgentes prevista actualmente por la Constitución, ya que entre otras cosas, sólo será para el Ministerio Público y no para cualquier autoridad administrativa, será para los delitos graves que señale la ley y no para cualquier delito perseguible de oficio y por último, se establece un control de legalidad por el juez, quién deberá de calificar si la acción del Ministerio Público se apego a la autorización constitucional, decretando la libertad del detenido en caso de que así no sea.

En el quinto párrafo, la iniciativa en comento incluye lo relativo al plazo máximo que puede ser retenido el indiciado, el cual será por regla general de 48 horas. Ni la Constitución Política ni la legislación secundaria prevén, expresamente, un plazo para concluir la averiguación que se realiza con detenido por flagrancia o urgencia. Por ello, independientemente de darle al artículo 16 constitucional su interpretación adecuada, resulta conveniente contemplar la posibilidad de darle al Ministerio Público un término suficiente en la práctica, tratándose de investigaciones con detenido.

A mayor argumentación, cabe considerar que si el plazo que se le concede al juez en términos del artículo 19 constitucional, para valorar el acervo probatorio resultante de una averiguación previa, éste es de 72 horas, a consideración de quienes suscriben esta iniciativa, resulta lógico conceder a la autoridad investigadora de los delitos, el plazo de 48 horas antes señalado, dado que es quien se allega las pruebas necesarias para una consignación, sobre todo tratándose de una averiguación previa con detenido. A mayor abundamiento, este plazo también corre en beneficio de las defensas del indiciado ya que la propia iniciativa prevé el derecho que tiene para aportar pruebas, desde el momento mismo de la indagatoria.

> Con la determinación del plazo, queda perfectamente clara la referencia temporal que tiene la autoridad para investigar el hecho, por lo que cualquier exceso deberá ser penado por la ley."

Con los párrafos precedentes queda claro que el término en que el Ministerio Público integró la Averiguación Previa para esclarecer los delitos de homicidio en contra de Juana Patricia y de Gerardo, encontrándose detenido por tales hechos Alfonso Martín del Campo Dodd, no sólo fue razonable, sino que perfectamente compatible con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y respetuosa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en específico en su artículo 7.3.

En la Recomendación 13/2002 que los peticionarios agregan como anexo a su libelo, se señala erróneamente que el término que tenía el Ministerio Público para poner a disposición del juez al indiciado era de tan sólo 24 horas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal basa su "convicción", en el siguiente razonamiento:

> "32.... En términos de la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución:
>
> ...sería consignada a la autoridad o agente de ella, el que, realizada una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición de su juez dentro de las 24 horas siguientes.
>
> 33. Además, el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (en adelante "Código de Procedimientos Penales") establecía la obligación del juez penal de poner inmediatamente en libertad a las personas detenidas, cuando su detención se hubiera realizado contraviniendo lo establecido en el artículo 16 de la Constitución..."
>
> 34.... En otras palabras, el agente del MP "retuvo" a Alfonso por más de 24 horas, excediéndose el término permitido por la Constitución (artículo 107, fracción XVIII).
>
> 35. El juez penal, al no haber corregido las irregularidades cometidas en perjuicio de Alfonso, indebidamente aceptó como válidas las declaraciones de éste rendidas ante el MP. En efecto, el segundo párrafo del artículo 134 del Código de Procedimientos Penales señalaba que:
>
> ...En caso de que la detención de una persona exceda los términos señalados en los artículos 16 y 107 fracción XVIII de la Constitución, se presumirá que estuvo incomunicado y las declaraciones que haya emitido no tendrán validez."

La fracción XVIII del artículo 107 constitucional, que regula exclusivamente lo relativo a las bases de tramitación del juicio de amparo, señalaba en 1992 lo siguiente:

> "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

.....

.....

XVIII. Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de las 72 horas que señala el artículo 19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán llamar la atención de este sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, lo pondrán en libertad.

Los infractores del artículo citado y de esta disposición serán consignados inmediatamente a la autoridad competente.

También será consignado a la autoridad o agente de ella, el que, realizada una aprehensión, no pusiera al detenido a disposición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la detención se verificare fuera del lugar en que reside el juez, al término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y en el que se efectuó la detención".

La fracción XVIII transcrita, se refiere a los casos de detenciones en cumplimiento de una orden judicial de aprehensión y no otros. En el presente caso, como se explicó de manera abundante en párrafos previos, se trató de un *caso urgente*, así calificado por ordenamiento jurídico, en el que no estaba previsto un plazo determinado, por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, no le es aplicable en modo alguno dicho supuesto.

Esto se ve corroborado por el artículo 134 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, entonces en vigor, que establecía:

"Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido, sin demora alguna, a disposición del tribunal respectivo, informando a éste de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor.

En caso de que la detención de una persona exceda los términos señalados en los artículos 16 y 107 fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el detenido no tendrán validez."

Resulta a todas luces evidente, que el precepto trascrito fue descontextualizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para justificar su "convicción" de que había existido detención arbitraria, puesto que en realidad dicho artículo sigue refiriéndose exclusivamente a los casos de detención derivados de una orden judicial de aprehensión y nò de un *caso urgente*.

En el mismo sentido, hay que atender a lo señalado por el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales ya señalado, en el que refiere que "Cuando el acusado sea aprehendido el Ministerio Público estará obligado bajo su más estricta responsabilidad, a poner inmediatamente al detenido a disposición de la autoridad judicial, remitiéndole, al efecto, el acta correspondiente...".

Es notorio que el precepto hace referencia nuevamente a la hipótesis de cumplimiento de una orden judicial de aprehensión.

A mayor abundamiento, en la exposición de motivos adicional a las reformas constitucionales de 3 de septiembre de 1993,[177] se señaló expresamente:

> "... ante la necesidad de lograr una reforma coherente en la materia a estudio y de una mejor sistemática constitucional y, fieles al espíritu que motiva a la iniciativa original, los suscritos proponemos la reforma al artículo 19 y la derogación de la fracción XVIII del artículo 107 de nuestra Constitución.
>
> Ante la observación de los representantes del Senado y de algunos miembros de las comisiones unidas, se apreció la necesidad de reformar el artículo 19 por motivos de coherencia, lo que se sustenta en las siguientes razones:
>
> a) La necesidad de precisar que el plazo perentorio de setenta y dos horas sólo corre para el juez a partir de la puesta a su disposición del consignado.
>
> .....
>
> c) Para trasladar lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 107 fracción XVIII al artículo 19, lugar de su correcta ubicación constitucional.
>
> En relación al 107 XVIII, además del traslado mencionado en el inciso anterior, se considera conveniente el cambio de ubicación de sus párrafos tercero y cuarto al artículo 16 constitucional, con lo que, aunado al criterio de correcta ubicación, se logrará una mejor precisión en lo que hace a la referencia temporal de los actos de molestia realizados por la autoridad administrativa en materia penal."

Los argumentos y preceptos jurídicos señalados, entendidos de manera racional, lógica y coherente, permiten afirmar que: 1) el arresto de Alfonso Martín del Campo Dodd, se llevó a , cabo por las causas y condiciones previstas en el orden jurídico mexicano; 2) Que dicha persona permaneció detenida dentro del margen temporal admitido por el derecho vigente al momento de sucedidos los hechos, 3) Que las diligencias practicadas y ordenadas por el Ministerio Público fueron jurídicamente válidas y dirigidas a esclarecer los hechos y determinar la existencia de la presunta responsabilidad de quien se los había atribuido, y 4) que la puesta a disposición del indiciado ante el Juez penal fue realizada en tiempo y con las formalidades exigidas por la Constitución y las leyes, en concordancia con la Convención Americana, por lo tanto, no se acredita en modo alguno la detención ilegal o arbitraria que alegan la Comisión y lo peticionarios.

En el documento de consignación se remite al Juez la Averiguación Previa constante en 165 fojas, en la que se aprecia que el cuerpo del delito de homicidio calificado fue comprobado de conformidad con las reglas del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal:

---

[177] Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a los artículos 19 y 107 constitucionales, de fecha 8 de julio de 1993.

El desarrollo mismo de las investigaciones no se detuvo, ni siquiera después de que el indiciado declaró haber cometido los homicidios, las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos no se detuvieron por dicha circunstancia, por lo que la actividad desplegada por la autoridad investigadora fue continua, sería y objetiva, lo cual es un elemento más que desvirtúa la presunta detención ilegal de ahora sentenciado. La autoridad investigadora hizo su mejor esfuerzo para allegarse de los elementos objetivos y de convicción pertinentes en un plazo razonable.

Por lo que se refiere a la declaración autoinculpatoria del indiciado además de haber sido producida ante el Agente del Ministerio Público en presencia del defensor de oficio, no figura desde la consignación como el único o más relevante elemento de convicción, se trata de un conjunto de elementos, que concatenados unos con otros, hacen arribar a la convicción de que en los hechos violentos tuvo participación Alfonso Martín del Campo, como autor de los mismos.

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, preveía en su artículo 136 que *la confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no menor de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. A su vez, éste último precepto en su fracción II, establecía el derecho a no ser compelido a declarar, por lo cual quedaba rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio tendiente a compeler al declarante.

El artículo 249 del citado ordenamiento procesal penal, señalaba los requisitos que debía reunir la confesión, entre los que se encontraban: a) la plena existencia del delito, b) que el emitente sea mayor de edad, y que sea en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia física o moral, c) que sea de hechos propios, d) que se efectúe ante el Ministerio Público o el Juez en presencia del defensor o persona de su confianza y que esté el inculpado debidamente enterado del procedimiento, e) que no vaya acompañada de otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil a juicio del juez. Como complemente de este precepto, el artículo 138 del mismo ordenamiento establecía que para todos los efectos legales *la confesión extrajudicial se valorizará de acuerdo con las reglas que el* propio Código de Procedimientos Penales establece.

El Juez 55 Penal formalizó la recepción del inculpado puesto a su disposición y en esa misma fecha, siendo las 16:00 horas, procedió a recabar su declaración preparatoria. Cabe señalar que el juez debe, por mandato constitucional y legal, determinar la situación jurídica del inculpado en el término de 72 horas, esto es, declarar o no comprobado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de aquel a quien se imputa su comisión;[178] para lo cual debe recabar la declaración preparatoria del inculpado dentro las primeras 48 horas de dicho término, de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 20 constitucional.[179]

---

[178] El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba en su parte conducente: "Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la presunta responsabilidad del acusado..."

[179] La fracción III del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba: En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías: "III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su

Al inicio mismo de la primera diligencia ante el Juez 55 Penal, el inculpado señaló como su defensor particular al Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, quien aceptó dicho cargo asumiendo desde ese momento la defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd en el proceso penal que se le siguió por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado (agravado) cometido contra su propia hermana, Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba.

El Juez 55° penal determinó que las probanzas presentadas adminiculadas recíprocamente arrojaban hasta el momento indicios suficientes para establecer la probable responsabilidad del indiciado Alfonso Martín del Campo Dodd. El Juez reconoció que Alfonso Martín del Campo se había retractado de su declaración ante el Ministerio Público, y que había señalado haber sido presionado, golpeado y amenazado por los agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que así había sido como aceptó declarar, y que posteriormente lo llevaron al lugar de los hechos, donde le preguntaron cómo había hecho las cosas y que lo estuvieron fotografiando; asimismo, el Juez da cuenta de la narración Alfonso Martín del Campo acerca del supuesto ataque y secuestro que sufrió por parte de dos sujetos, hasta su llegada a la Oficina de la Policía Federal de Caminos luego de haberse accidentado el automóvil Thunderbird donde lo transportaban.

Con relación a este último relato sostenido por el indiciado el Juez señaló "... que hasta ese momento de la presente resolución no aporta elemento alguno que acredite lo antes señalado, y sí por el contrario de sus propias declaraciones del inculpado, se desprende que se sitúa en circunstancias de modo y tiempo, lugar en que se dice sucedieron los hechos...", a mayor abundamiento el juez señaló que la chapa de la cajuela de donde supuestamente habría salido Alfonso Martín del Campo no presentaba huella alguna por manipulación de cuerpo duro, encontrándose en estado normal de funcionamiento, en tal sentido, no hay prueba alguna que desvirtúe las existentes en su contra.

Como resultado del análisis realizado por el Juzgador, éste determinó resolver: el día 4 de junio de 1992, dentro del plazo señalado por la Constitución Federal[180] y el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, la situación jurídica del inculpado, fecha en que dictó el proveído conocido como auto de formal prisión o auto de plazo constitucional,[181] cuyos puntos resolutivos principales fueron los siguientes:

a) Que Alfonso Martín del Campo Dodd quedaba formalmente preso como presunto responsable en la comisión del delito de homicidio, por el que había ejercitado acción penal el Ministerio Público.

---

acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria".

[180] De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, se disponía: "Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la presunta responsabilidad del acusado..."

[181] El auto de formal prisión es la determinación judicial que da inicio a la primera instancia del proceso penal.

b) Que por lo que hacía a las calificativas del delito (agravantes), éstas serían materia de estudio en el momento procesal oportuno.

c) Que se declaraba abierto el proceso penal ordinario, para lo cual se otorgaban a las partes 15 días a efecto de ofrecer pruebas, mismas que serían desahogadas en la audiencia fijada para el 14 de julio de 1992.

d) Que se hiciera del conocimiento del procesado y de su defensor el derecho y término para interponer apelación contra el auto de formal prisión.[182]

Con el auto de formal prisión quedó agotada la etapa de preinstrucción y se dio inicio formal al proceso penal ordinario contra Alfonso Martín del Campo Dodd, inculpado de haber dado muerte a Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba la noche que transcurrió entre los días 29 y 30 de mayo de 1992.

Es importante resaltar un aspecto, en el ordenamiento jurídico mexicano dos tipos de procedimiento penal: el ordinario y el sumario. La diferencia entre la tramitación de ambos radica en que éste último procede sólo en casos muy precisos, cuyas características permiten que los plazos y términos de tramitación sean menores con respecto a los que contempla el de carácter ordinario. [183]

Algunas de las hipótesis de procedencia de la tramitación del proceso penal sumario son: a) cuando se trate de delito flagrante, b) cuando exista confesión ante la autoridad judicial, o cuando sea ratificada la que se hubiere rendido con anterioridad. El hecho de que se haya ordenado la tramitación del asunto por la vía ordinaria, significa que a la declaración autoinculpatoria del inculpado no se le dio el valor que los peticionarios pretenden, sino que fue un simple indicio, tomado en cuenta dentro del conjunto de las pruebas disponibles que no fueron desvirtuadas hasta ese momento por la defensa privada de Alfonso Martín del Campo Dodd.

El Gobierno de México informará a continuación acerca de diversos hechos y omisiones jurídicas atribuibles a los peticionarios, que ejemplifican la conducta procesal que tuvieron estos durante la tramitación del caso ante las instancias nacionales y con posterioridad ante la CIDH, además acerca de la indebida actuación de esta última al dejar de considerar aspectos cruciales relacionados con la admisibilidad inicial de la petición de conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana.

El orden jurídico mexicano, prevé diversos medios para impugnar de manera oportuna una detención que se considera ilegal o arbitraria, desde el momento mismo de haberse efectuado ésta. Tales medios cumplen y son compatibles con lo dispuesto por el artículo 7.6 de la Convención Americana, ya que brindan a *toda persona privada de libertad el derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o*

---

[182] El artículo 79 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece: "Artículo 79. Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando, notificada la parte, conteste expresamente de conformidad o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda".

[183] De conformidad con el artículo 305 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal: "Se seguirá procedimiento sumario cuando se trate de flagrante delito; exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial; la pena aplicable no exceda en su término medio aritmético, de cinco años de prisión, o sea alternativa o no privativa de libertad..."

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales; tales recursos pueden ser interpuestos por sí o por otra persona.

El habeas corpus ha sido identificado tanto por las legislaciones de los Estados del continente, como por los órganos supranacionales de supervisión del sistema interamericano,[184] como el recurso idóneo para combatir la ilegalidad de una detención o un acto de autoridad que afecta directamente la libertad personal, llevada a cabo fuera de las causas y condiciones jurídicas previstas por el ordenamiento.[185] En el orden jurídico mexicano dicha función es realizada a través del juicio de amparo, que para los casos señalados cuenta con reglas de tramitación ágiles y sencillas, sin formalismos excesivos, que confirman su eficacia e idoneidad en la protección de los derechos humanos de la persona, contra posibles detenciones irregulares y actos atentatorios a la vida e integridad física y psíquica.[186]

El amparo-habeas corpus, tal como lo ha denominado la doctrina mexicana, procede contra leyes o actos que, entre otras hipótesis, importen peligro de privación de la vida, ataques a la integridad física del detenido o a la libertad personal fuera de procedimiento judicial.[187] Dicho medio de defensa carece de formalidades estrictas, puesto que inclusive puede ser planteado por cualquier persona en nombre del afectado que se encuentre imposibilitado para hacerlo, aun cuando el promovente sea un menor de edad.

Debido a la naturaleza de los actos que lo hacen procedente, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo (no está sujeta a plazo preclusivo alguno), incluso de manera verbal o también vía telegráfica, a cualquier hora del día o de la noche, los 365 días del año. El juez de amparo está

---

[184] En efecto, así lo ha expresado la honorable Corte al señalar: " El hábeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad." Ver *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías* (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 33.

[185] La honorable Corte ha señalado sobre el particular que "... El texto citado (artículo 25 CADH) es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención...". Ver el *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías* (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 32.

[186] La honorable Corte está al tanto de esta particularidad y ha expresado "Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, puede afirmarse que el amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos por la Convención así como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad pero en otras ocasiones el hábeas corpus es denominado "amparo de la libertad" o forma parte integrante del amparo. Ver *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías* (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 34.

[187] Ver artículos 17, 18, 22 fracción II, 23 segundo párrafo, 38, 39, 40, 80, 117 y 123 fracción I, todos ellos de la Ley de Amparo. Vigentes al momento de los hechos.

ampliamente facultado para tomar todas las acciones pertinentes para hacer comparecer al detenido y para determinar las medidas cautelares que procedan en su beneficio.[188]

La demanda de amparo-habeas corpus es tramitada ante un juez federal, pero en casos en que así lo ameriten puede también interponerse ante un juez local de primera instancia, o en su defecto, ante cualquier funcionario judicial del lugar en el cual se pretende ejecutar el acto que se reclama, quienes están facultados para iniciar la tramitación del asunto y dictar las medidas urgentes que el caso requiera.

En estos casos, de comprobarse la actuación irregular de la autoridades que ordenaron y llevaron a cabo la detención del presunto agraviado, el amparo tiene como efecto restituir a éste en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Los jueces de amparo están plenamente facultados para ordenar y hacer cumplir sus determinaciones, que en casos como éste consisten en mandar poner en libertad a la persona. Los encargados de las prisiones deben dar debido cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los jueces federales o la autoridad que haya conocido del juicio. (artículo 111 de la Ley de Amparo).

En caso de que se considere que la decisión sobre las medidas cautelares adoptadas por el juez o la sentencia de fondo emitida por éste último, no se ajusten a lo previsto por la Ley de Amparo, es posible interponer el recurso de revisión (apelación), que puede ser conocido y decidido en definitiva por un tribunal colegiado de circuito o, en casos excepcionales, por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.[189]

Los peticionarios no informaron en ningún momento a la Comisión Interamericana, ni tampoco en su documento dirigido a la honorable Corte, haber interpuesto el juicio de amparo en la etapa de detención administrativa de Alfonso Martín del Campo Dodd, por lo cual debe considerarse como un hecho incontrovertible.

De no interponerse el amparo para combatir la detención decretada por el Ministerio Público, existía la posibilidad de impugnar el auto de formal prisión dictado por el Juez 55 Penal el día 4 de junio de 1992. En esta hipótesis resultaba procedente no sólo la apelación como recurso ordinario,[190] sino nuevamente la alternativa del propio juicio de amparo, en los términos ya señalados, pero ahora contra el auto de formal prisión señalado; ni el peticionario, ni tampoco el

---

[188] Cabe recordar lo que la honorable Corte ha señalado sobre el particular: "El hábeas corpus, para cumplir con su verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ver *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías* (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 35.

[189] Ver artículos 83 y ss. de la Ley de Amparo.

[190] El artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vigente al momento de sucedidos los hechos, señalaba en su fracción II que son apelables "Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de formal prisión o el que la niegue; el que conceda o niegue la libertad"; el artículo 414 de dicho ordenamiento dispone que "El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada".

abogado privado que lo representaba, el Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, interpusieron dichos medios de impugnación que resultaban procedentes e idóneos para combatir la legalidad o la constitucionalidad, respectivamente, de la supuesta detención arbitraria. Esto también debe considerarse como un hecho no combatido, así como la circunstancia de que en el propio auto de formal prisión el juez ordenó que se hiciera saber al procesado su derecho de apelar la decisión de este último.

La apelación en estos casos no reviste mayores formalidades para su interposición, puesto que puede hacerse por escrito o incluso de palabra, dentro de tres días de hecha la notificación del auto de formal prisión. [191] Resulta pertinente señalar que de conformidad con el artículo 79 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal "Las resoluciones judiciales no se entenderán consentidas, sino cuando, notificada la parte, conteste expresamente de conformidad o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda."

Como puede apreciarse, Alfonso Martín del Campo Dodd tuvo la calidad de detenido alrededor de las 13:30 horas del día 30 de mayo de 1992, por orden de una autoridad competente, de conformidad con las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes dictadas conforme a ella; en tal sentido, no es posible calificar dicha detención como arbitraria.

Con ello, se satisficieron los requisitos que la Honorable Corte ha señalado con respecto al artículo 7 de la Convención, en el sentido de que éste "... contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)". [192]

Alfonso Martín del Campo Dodd fue debidamente informado en la etapa de averiguación previa de los cargos formulados en su contra y de los derechos que en su calidad de detenido le asistían; esto se llevó a cabo también en la diligencia de declaración preparatoria ante el Juez 55 Penal. El Ministerio Público presentó al detenido dentro del margen establecido por la Convención Americana, la Constitución Federal y las leyes procesales penales, ante el juez penal competente.

El juez determinó en tiempo y forma la situación jurídica del inculpado, sometiéndolo a proceso penal ordinario por su probable responsabilidad en el homicidio de Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba.

El peticionario, su defensor particular o cualquier persona en su nombre tuvo una amplia oportunidad de combatir la legalidad de la detención, a través de diversos medios de impugnación, en un primer momento la detención ante el Ministerio Público y, posteriormente, el auto mismo de formal prisión dictado por el Juez 55 Penal, que sometió al inculpado a proceso penal. De haber interpuesto dichos medios de impugnación, habría sido posible para las autoridades judiciales

---

[191] Artículo 416 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vigente al momento de sucedidos los hechos.

[192] Caso Villagrán Morales y otros, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C no. 63, párrafo 163; también *Caso Gangaram Panday*, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47.

conocer y decidir sobre la supuesta ilegalidad de la detención de Alfonso Martín del Campo Dodd, que por no haber sido combatida oportunamente dio certeza y seguridad jurídicas a la tramitación del proceso penal respectivo.

En tal sentido, en la legislación mexicana se consagra el derecho de hábeas corpus, que como ha señalado la Corte, debe ser garantizado en todo momento a un detenido, aún cuando se encuentre bajo condiciones excepcionales de privación de la libertad legalmente decretadas. La Corte puede comprobar que esta garantía está debidamente regulada en México, tanto por la Constitución Política como por la Ley de Amparo.

De conformidad con las pruebas que se presentaran ante esta Corte, la Comisión ni los peticionarios pueden demostrar que la supuesta víctima haya intentado interponer este recurso, tampoco consta que ninguna otra persona haya siquiera intentado interponerlo en su nombre.[193]

De lo anterior se concluye necesariamente que el Gobierno mexicano no es responsable internacionalmente de la violación al artículo 7, párrafos 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le imputan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los peticionarios.

b) No existió violación alguna a los artículos 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni a los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el caso 12.228.

Tal y como se procedió en el punto anterior relativo a la legalidad de la detención de Alfonso Martín del Campo Dodd, el Gobierno de México demostrará que no existen elementos que acrediten la supuesta tortura cometida contra el sentenciado y que la actuación de las autoridades nacionales al atender los planteamientos de los peticionarios en el presente punto, es compatible y satisface los estándares internacionales de protección a derechos humanos en la materia.

El Estado se permite llamar la atención de la Honorable Corte a fin de que advierta y considere las siguientes irregularidades, imputables a los peticionarios y a la propia Comisión, que en el presente caso operan enteramente en perjuicio de éstos:

1) Los peticionarios y entre ellos el propio sentenciado ha variado sustancialmente en diversa ocasiones la narración de los supuestos hechos de tortura que, según alegan, éste último sufrió. Para ser siquiera atendible la narración de los supuestos hechos, ésta debe ser única y conteste en las diversas ocasiones que se produjo, de lo contrario, el relato es contradictorio, incoherente y carente de toda credibilidad y verosimilitud.

---

[193] Ver Caso Súarez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, serie C, no. 35, párrafos 59 y 60. Véase también el criterio derivado del caso Blake en donde reconoció que "los familiares del señor Nicholas Blake no promovieron instancia judicial alguna, como habría sido el recurso de exhibición personal (hábeas corpus), para establecer la desaparición y lograr, de ser posible, la libertad del propio señor Nicholas Blake. En tales circunstancias, este Tribunal no puede concluir que se privó, a los familiares de la víctima, de la protección judicial a que se refiere este precepto, *pues no se cumplió el requisito necesario para la aplicación del artículo 25 de la Convención.*" Caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, serie C no. 36. Párrafo 104.

2) La narración de los supuestos hechos ha sido alterada en varios aspectos por los peticionarios ante las diversas autoridades que conocieron del asunto en distintas etapas, incluyendo ante los propios órganos de supervisión del sistema interamericano. Lo importante es considerar la narración de hechos que sirvió de base a la tramitación de la petición ante la CIDH, misma que llevó a ésta a plantear el caso ante la honorable Corte Interamericana y contrastarla con las constancias oficiales pertinentes, especialmente aquellas que tuvo a su alcance la CIDH y que no analizó; de otra forma, se estaría sometiendo a México a un proceso jurisdiccional internacional sobre hechos no incluidos en la queja ante la CIDH y respecto de los cuales el Estado no estuvo oportunidad de controvertir.

3) La posición del Estado con relación a la verdad histórica de los hechos está apoyada en aquello que los órganos competentes de procuración e impartición de justicia nacionales han tenido por efectivamente acreditado, lo que han valorado y decidido conforme al ámbito y naturaleza estricta de sus atribuciones. Esto es, a final de cuentas, lo que resultó determinante para esclarecer el homicidio de Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba, hechos de los que devino responsabilidad penal a Alfonso Martín del Campo Dodd como autor de dichas muertes.

4) Las consideraciones del Gobierno en el presente apartado estarán enfocadas en un primer momento a un periodo específico, que es el transcurrido entre la mañana del día 30 de mayo y la mañana del día 1° de junio de 1992, mismo que comprende las actuaciones del Ministerio Público para el esclarecimiento del homicidio de Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba, hasta la puesta a disposición de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el juez penal como presunto responsable del doble homicidio perpetrado.

5) Un segundo momento estará integrado por la actuación de las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales, con respecto al tema específico de la supuesta tortura.

El artículo 5.1 de la Convención Americana establece el derecho genérico al respeto a la integridad física, psíquica y moral de la persona, mismo que se complementa con la prohibición abstracta de someter a ésta a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; en tal sentido, toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano;[194] de la lectura congruente y completa del artículo 5 de la Convención y apoyándose en el sentido común, el contexto más adecuado de su aplicación es la situación de la persona que se encuentra en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o compurgando una pena privativa de libertad, más no la detención administrativa en el marco de una investigación criminal.

La Convención Americana no precisa qué debe considerarse como tortura, ni tampoco las diferencias sustantivas y de grado que existen entre la tortura y las penas o tratos crueles, las penas o tratos inhumanos o las penas o tratos degradantes, pero internacionalmente se ha reconocido que la tortura es la forma más agravada de un trato cruel, inhumano y degradante. Si los estándares para

---

[194] En el presente caso carecen de toda relevancia y pertinencia los párrafos 5.3 a 5.6, por lo que se omitirá hacer referencia a ellos en el presente apartado. De esto resulta que el único párrafo relevante es en realidad el 5.2 derivado del texto genérico del 5.1.

considerar un hecho como tortura son rebajados en su cualidad e intensidad hasta niveles ínfimos, eso provocaría dejar completamente sin sentido las categorías mismas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, considerando indiscriminadamente que cualquier supuesta afectación a una persona, por insignificante que pareciera, sería desde este punto de vista una conducta que podría calificarse como tortura, lo cual resultaría completamente absurdo. Es por ello que en diversos instrumentos internacionales la tortura se reduce a aquellos casos en que los supuestos dolores y sufrimientos que se infligen al individuo son de tipo *grave*.

Los hechos y actos que supuestamente generaron inicialmente la presunta violación a los derechos humanos de Alfonso Martín del Campo Dodd, se habrían presentado en el contexto de la fase de investigación del homicidio de la joven pareja formada por Patricia Martín del Campo Dodd y el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba.

Por otra parte, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos cuenta desde 1985 con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que entró en vigor en lo general el 28 de febrero de 1987, y para el Estado mexicano el 22 junio 1987, fecha en que éste depositó el instrumento de ratificación respectivo.

La Comisión imputa a México en su demanda la violación a los artículos 6, 8 y 10 de la Convención mencionada.[195] Tales preceptos hacen referencia al deber de los Estados de prevenir y sancionar la tortura, de investigar las denuncias de hechos de ese tipo en casos concretos y que ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso. (énfasis agregado)

Antes de presentar los hechos que desvirtúan las aseveraciones de tortura por parte de la Comisión y de los peticionarios, es importante ahondar en el sentido y alcance de las disposiciones

---

[195] Artículo 6

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 8

Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.

Artículo 10

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

internacionales que constituyen los estándares interamericanos en la materia. Resultan relevantes en el presente caso el artículo 8 de la Convención Americana en sus párrafos 2.g y el artículo 3, así como también el artículo 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en adelante referida como "Convención sobre Tortura".

El artículo 8 de la Convención Americana se refiere a las garantías judiciales, y señala en su parte conducente que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a *no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.* (énfasis agregado). El artículo 10 de la Convención sobre Tortura establece textualmente en su parte conducente que "Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso…". (énfasis agregado)

El énfasis agregado pretende esclarecer un punto que no debe pasar desapercibido por la Honorable Corte, tal como el contexto y el ámbito de aplicación de los preceptos señalados que es el de un proceso judicial, más no una investigación llevada a cabo por autoridades administrativas, actuaciones que no forman parte del proceso, sino de una etapa previa al ejercicio de la acción, anterior al mismo proceso.

Todo proceso inicia con el ejercicio de la acción, en la que se concretan las pretensiones de quien acude a un órgano jurisdiccional. En el orden jurídico mexicano, la intervención del juez en un proceso penal se genera a partir del ejercicio de la acción penal o *consignación* llevada a cabo por el Ministerio Público, por lo que cualquier etapa previa queda fuera de la noción misma de *proceso* que está vinculada necesariamente a la actuación de un órgano jurisdiccional.

Corrobora lo anterior que la Convención señala en su artículo 8 la frase *garantías judiciales*, esto es, aquellas que tienen aplicación por y ante los jueces con motivo de los procesos sometidos a su consideración.[196] Asimismo, los derechos previstos en dicho precepto son aquellos que toda persona tiene durante el proceso, esto es, dentro de los margen previstos entre el inicio y final del mismo.[197]

En el orden jurídico mexicano, el proceso penal en efecto se inicia con el ejercicio de la acción penal o *consignación* por parte del Ministerio Público, lo que abre la etapa conocida como *el primer periodo de la instrucción*, que abarca del auto de radicación por el cual el órgano de la jurisdicción penal admite la *consignación*, hasta la determinación judicial emitida antes de fenecer el término de 72 horas previsto por la Constitución Federal, en la que el juez decide si se debe procesar penalmente a una persona o no, señalando en el primer supuesto los hechos delictivos por los que se debe seguir el proceso.

---

[196] La honorable Corte confirma este punto al señalar "Las garantías deben ser no sólo indispensables sino judiciales. Esta expresión no puede referirse sino a medios judiciales idóneos para la protección de tales derechos, lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial apto para determinar la legalidad de las actuaciones …". Ver *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías* (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 30.

[197] La honorable Corte ha señalado que "… En efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención", Ver *Garantías judiciales en estados de emergencia* (artículos 27.2, 25 y 8 Convención americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A, no. 9, párrafo 27.

Con la última de las determinaciones judiciales señaladas, conocida como "auto de término constitucional", inicia la etapa de *segundo periodo de la instrucción* que abarca desde el auto que fija el objeto del proceso hasta aquel que declara cerrada la instrucción. La etapa que sigue a esta es la denomina *de juicio*, misma que comprende la formulación de las conclusiones de las partes y la sentencia del juzgador, con la que se da fin a la *primera instancia* del proceso penal; por último, de ser interpuesto el recurso ordinario de apelación se inicia la *segunda instancia* que culmina con la sentencia definitiva que da fin al proceso penal.

La Convención Americana y la Convención sobre Tortura son claras en este punto, se trata de derechos fundamentales y formalidades que tienen lugar en un proceso judicial, ante un juez (se insiste), no en un procedimiento ante autoridades distintas de la judicial.

Corresponde ahora precisar las etapas procesales en los que los tienen aplicación los artículos citados con anterioridad. Lo establecido por el artículo 8 de la Convención se ubicaría en un primer momento en el *primer periodo de la instrucción*,[198] que es la etapa donde se lleva a cabo en presencia del juez y el abogado del inculpado la diligencia conocida como *declaración preparatoria* del mismo, dentro de las 48 horas siguientes al *auto de radicación*, que es el primer proveído que dicta un juez penal.

Por lo que se refiere al artículo 10 de la Convención sobre Tortura, se ubicaría dentro del marco del proceso penal en la etapa de admisión de las pruebas, ya que señala que habiéndose comprobado que una declaración fue obtenida mediante tortura, no *podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso.* La etapa probatoria de un proceso penal tiene también un margen de inicio y de un fin.

Por otra parte, hay que precisar que el artículo 10 de la Convención sobre Tortura señala: "Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso…". (énfasis agregado) Lo cual para efectos de su debida comprensión y alcances puede a su vez dividirse en los siguientes elementos:

a) Que exista una declaración de una persona (se sobreentiende que es en el ámbito de un proceso penal).

b) Que se compruebe que dicha declaración fue obtenida mediante tortura. La disposición no señala "que se alegue", o que "se asevere" que fue obtenida mediante tortura, sino que se compruebe, esto es, que se acredite con elementos de prueba.

c) Una vez que se haya comprobado lo anterior, dicha declaración no podrá ser admitida, esto último como un evento futuro que debe ocurrir lógica y cronológicamente, después de haber sido en efecto comprobada la incidencia de tortura.

d) La prohibición de admitir la confesión es únicamente en su calidad de medio de prueba en un proceso. La admisión, desahogo y valoración de lo que constituyen pruebas en un proceso penal es una etapa precisa dentro de éste, por lo que el precepto se refiere a dicho periodo probatorio y no a otro.

---

[198] Sin embargo, habría que considerar que la confesión podría emitirse en etapas posteriores del transcurso del propio proceso, pero siempre dentro y con motivo de éste. En el caso que nos ocupa esto no ocurrió, por lo tanto resulta irrelevante hacer consideraciones sobre este punto.

e) Esto significa que la tortura debió haber sido en efecto primero comprobada, para que pudiera válidamente oponerse la admisión de la confesión como medio de prueba en la etapa correspondiente de un proceso.

f) El artículo 10 de la Convención sobre Tortura no admite otra interpretación que la señalada, ya que:

> El precepto indica una serie de actos cronológicamente y sucesivamente concatenados, que se dan y se agotan en momentos precisos, de manera que la falta de satisfacción de los previos impide lógicamente que se den los posteriores.
>
> El marco de aplicación del precepto es un proceso, no actos previos ni posteriores al mismo.
>
> La tortura debe ser comprobada para que se impida la admisión de la confesión como medio de prueba en el proceso. El precepto no admite que la tortura se compruebe con posterioridad al proceso o fenecido éste, ya que esto haría materialmente imposible evitar la admisión de la declaración como prueba.
>
> Esto confirma por qué el precepto no señala la posibilidad de anulación *a posteriori* de una declaración como medio de prueba, puesto que está dirigido una etapa previa a la admisión de la prueba en el proceso y se limita a la duración e instancias de éste.

Una vez precisados jurídicamente estos aspectos, se procede ahora a confrontarlos con los elementos del caso 12.228, en lo que se refiere exclusivamente a las aseveraciones de afectación a la integridad de Alfonso Martín del Campo Dodd.

Cronológicamente, la primera ocasión que Alfonso Martín del Campo refiere afectaciones a su integridad física es en la declaración preparatoria que rinde ante el Juez 55° Penal el día 1 de junio de 1992 a las 16:00 horas. Con las posteriores oportunidades en que el procesado y su defensor se avocaron a replantear la narración de los supuestos hechos en su favor, se podrá observar cómo fueron estos infructuosamente y con toda intención, perfeccionando y agregando nuevos detalles, cambiando, omitiendo y de plano en ocasiones auto contradiciéndose, con el fin de hacer que sus aseveraciones fueran al menos presumibles.

Lo anterior se hace evidente si se compara el contenido de dicha declaración y los hechos plasmados en la queja interpuesta ante la CIDH más de seis años después de ocurridos los homicidios.

Declaración de Alfonso Martín del Campo de 1° de junio de 1992.	Hechos de la queja presentada ante la CIDH el 29 de octubre de 1998
"... leída que le fue su declaración que obra en autos dijo: que la niega totalmente, toda vez que lo presionaron fisicamente los judiciales y que en un principio el de la voz les platicó a los judiciales la historia verdadera en dos o tres veces; y que estos le decían que cómo lo había hecho cambiándole todo y que la historia que les decía era de niños; y después que lo habían golpeado varias veces, le pusieron la bolsa en la cabeza y lo detuvieron; y le manifestaban al de la voz "vas a cantar o no y si no ahí viene el minuto y luego el minuto y medio, ya que nosotros somos especialistas en trabajar", a lo que el declarante les manifestó que si querían se declaraba culpable, pero que ya no lo siguieran golpeando ni hicieran otras cosas. Que todo lo que señala en la declaración al de la voz le preguntaban "cómo hiciste esto", contestándole no sé y lo golpeaban, y le decían que no se hiciera y que el de la voz les decía que las cosas habían sido así y le manifestaban que no se hiciera, y que las cosas que el manifestaba consideraba que estaban bien le decía que sí y si no le decían que no se hiciera; y así fue como sacaron la declaración y que fueron varias personas de la delegación, y que el de la voz asentó en la declaración y después de haber terminado esto, fue grabado. "Que el de la voz si leyó su declaración, que aparece su nombre antes de firmarla; e inclusive en ese momento manifestó que era inocente; que había varias personas presentes cuando el declarante firmó su declaración ignorando quienes sean; que al de la voz cuando lo presionaban en la bolsa en la cabeza lo hacían en la oficina del comandante en un cuartito por lo que no había ninguna otra persona, solo los agentes y el de la voz; y que se refiere a la historia verdadera es la que acaba de relatar en la última parte de esta declaración preparatoria; que el manifestó en su declaración y que las fallas que el declarante tenía en su citada declaración los agentes se lo iban corrigiendo al hacer la reconstrucción de hechos; que el de la voz recuerda que cuando estaban reconstruyendo había siete personas y ocho aproximadamente".,	En la Delegación Benito Juárez se comunicó con su padre. Luego lo llevaron a la oficina del Comandante, en donde le colocaron una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza, esta bolsa la apretaban con el fin de que le faltara aire, mientras los policías judiciales iban redactando su versión de los hechos. Fueron entre 10 y 12 agentes los que lo presionaban, asimismo fue severamente golpeado en el estomago con franelas mojadas, así como en la cabeza. Recibió también golpes con la mano abierta en la cara, dándole también patadas en los testículos, los policías judiciales se turnaban para golpearlo, obligándolo a firmar una declaración auto inculpatoria y a colocar su huella dactilar. Dicha declaración es la que, finalmente, aparece como su declaración ministerial. Dentro de la declaración arrancada bajo coacción Alfonso Martín del Campo reconoce haber asesinado tanto a su hermana como a su cuñado, señalando también que trató de aparentar un secuestro para evadir su culpabilidad. 00004657

Que asimismo fue llevado al lugar de los hechos en donde le preguntaron que cómo había hecho las cosas en donde lo estuvieron fotografiando; que al de la voz le quitaron una playera blanca, una camisa color rojo, marca furor, que había un pantalón que los judiciales sacaron de la casa y le decían que éste era de él, lo que no es cierto siendo todo lo que tiene que declarar, sin tener nada más que agregar. Manifestando que en uso de su garantía constitucional, no es su deseo contestar pregunta alguna que le sea formulada por el agente del Ministerio Público ..." El defensor particular de Alfonso Martín del Campo intervino en la diligencia de declaración preparatoria, sólo para formular a éste algunas preguntas, mismas que respondió el inculpado señalando únicamente: "Que el de la voz firmó la declaración que aparece bajo su nombre en la indagatoria toda vez que como ya lo habían golpeado varias veces era de suponerse que lo haría."	La reconstrucción de los hechos se realizó el día 30 de mayo, en la que estuvieron presentes las mismas 10 o 12 personas (policías judiciales) que lo torturaron en la Delegación Benito Juárez y que arrancaron con estos medios la confesión a la que hace mención. En la diligencia el Ministerio Público y los policías judiciales le decían de qué manera tenía que hacer lo que ellos creían conveniente, so pena de golpearlo nuevamente. Durante la diligencia en ningún momento les señalaron a ninguna persona que fuera a actuar como su defensor. Cabe mencionar que dicha diligencia estuvo plagada de irregularidades: en todas y cada una de las fotografías que se tomaron durante la diligencia, las personas que participaron en ésta aparecen con una línea gruesa de color negro en la cara con el fin de que no fueran identificadas y no fueran llamadas a declarar posteriormente. El único que no tiene dichas líneas en la cara es el señor Alfonso Martín del Campo.

0070458

La sola comparación de las narraciones del propio Alfonso Martín del Campo son muestra más que evidente de la manera en que ha ido perfeccionando su versión de que fue coaccionado para confesar el crimen que efectivamente cometió. Sin embargo, queda a todas luces evidenciado que no refiere haber sido coaccionado ni intimidado de forma alguna en su declaración ministerial, ya que sólo se limita a señalar que en efecto firmó su declaración, bajo una suposición de una supuesta coacción, que resultó inexistente.

Esto permite separar varios momentos perfectamente identificables que los peticionarios y la Comisión entremezclan indebidamente. El primero de ellos estaría comprendido entre los instantes previos al arribo de Alfonso Martín del Campo a la Agencia Investigadora del Ministerio Público en calidad de víctima/testigo y su estancia en con dicha calidad; el segundo, que va desde la puesta a disposición que realiza el servidor público Sotero Galván Gutiérrez hasta la diligencia de declaración ministerial; el tercero, que comprende las diligencias posteriores a la declaración mencionada hasta la declaración preparatoria ante el Juez 55° Penal.

Con el fin de contestar cabalmente la demanda de la Comisión y el documento de los peticionarios, el Estado dará respuesta separando cada uno de los momentos señalados.

1) Hechos y actuaciones oficiales comprendidas entre las 6:40 y las 13:30 horas del día 30 de mayo de 1992.

En el apartado de hechos de la presente contestación se hizo un recuento momento a momento de lo acontecimientos que se dieron el día 29 de mayo de 1992, previo a los homicidios de Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio, así como de las diligencias de investigación que iniciaron la mañana del día 30 de mayo de 1992.

En este punto sólo se hará referencia a los momentos más relevantes ocurridos en la mañana del día 30 de mayo de 1992. Ese día, siendo las 6:40 horas de la mañana, Alfonso Martín del Campo se presentó en la Oficina de la Policía Federal de Caminos ante el Oficial de Guardia de dicha corporación, Manuel Guillermo Hernández Ortega[199], ante dicho oficial refiere:

> "que horas antes había sido asaltado, secuestrado y metido en la cajuela del vehículo descrito (marca Thunderbird) por dos personas con el rostro cubierto con medias de mujer en el interior de la casa del domicilio citado (Casa de Amores 1523) y que después de darse cuenta que se accidentaba el vehículo y percatándose posteriormente que no escuchaba ningún ruido, optó por abrir desde el interior la cajuela, saliendo de ella, llegando a las instalaciones del destacamento a solicitar ayuda"[200]

De acuerdo con la narración del propio Alfonso Martín del Campo, el automóvil en el que alega fue secuestrado, habría sido conducido rumbo a Cuernavaca pero después de la caseta de cobro habría hecho una maniobra de retorno a la Ciudad de México, y se accidentó[201] (el lugar del percance está

---

[199] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[200] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[201] Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55° Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

situado a cerca de 9 nueve kilómetros de la caseta de cobro y de la Oficina de la Policía Federal de Caminos).[202]

Horas más tarde, alrededor de las 9:00 de la mañana, arriba a la calle de Amores 1523 Alfonso Martín del Campo Dodd, acompañado del oficial de la Policía Federal de Caminos Carlos Alberto García Urquiza,[203] quien lo condujo al sitio desde la oficina en la caseta de Cuernavaca en su vehículo particular.[204]

A su arribo, Alfonso Martín del Campo fue observado por diversas personas, quienes refieren haberlo visto usando una camisa roja,[205] la cual estaba manchada al parecer de sangre,[206] despeinado,[207] y que se observaba golpeado o hinchado en varias partes del rostro[208] y del labio,[209] que tenía un descalabro en la cabeza[210] y que se le apreciaba también manchas al parecer hemáticas en el rostro.[211]

Una vez que es trasladado a la Décima Agencia Investigadora del Ministerio Público, ahí permanece en calidad de víctima/testigo de lo ocurrido la madrugada de ese día, en que asesinaran a sus familiares Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio.

En dicha Agencia y según la versión ofrecida por Alfonso Martín del Campo de la Peña, padre del sentenciado, éste realizó una llamada telefónica a las 10:30 horas aproximadamente para comunicarle que Patricia y Gerardo habían sufrido un accidente automovilístico.[212] Minutos más tarde, aún en la calidad de víctima, a Alfonso Martín del Campo se le practicó un examen coprológico que concluyó a las 12:10 horas, cuando se emitió el dictamen médico solicitado por la autoridad investigadora.[213]

Siendo alrededor de las 12:30 horas del mismo día sábado, el policía Sotero Galván se entrevistó con Alfonso Martín del Campo Dodd, en instalaciones de la Delegación de Benito Juárez, a fin de completar su informe sobre los hechos y la parte que le correspondió de la investigación. Es en el

---

[202] Comparecencia del oficial Víctor Ramón Cetina Vargas a declarar en la causa penal 57/92, el 24 de agosto de 1992.

[203] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[204] Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

[205] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[206] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[207] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[208] Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[209] Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992; Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[210] Ampliación de Declaración de Gerardo García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992; Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992; Declaración de Carlos Alberto García Urquiza, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992; Declaración de Víctor Ramón Cetina Vargas, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992;

[211] Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992. Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

[212] Crf. Foja 18 de la averiguación previa 10/2160/92-05, declaración de Alfonso Martín del Campo de la Peña.

[213] Cfr. Dictamen Médico- Coprológico, del doctor Jesús López Sánchez, Médico Legista adscrito a la Décima Agencia Investigadora en Benito Juárez.

transcurso de dicha entrevista donde Alfonso Martín del Campo Dodd en principio repite la misma historia del supuesto atraco y secuestro que sufrió hasta que arribó a la Calle de Amores; el policía le solicita que narre otra vez la historia que contó y Alfonso comenzó a cambiar su versión original y caer en contradicciones, manifestando que se encontraba en estado de ebriedad y que por ello no recordaba lo que había sucedido; ésta es la primera vez en que Alfonso, agobiado por sus propias contradicciones manifiestas, expresa por primera vez haber sido quien atacó y dio muerte a su propia hermana y cuñado,[214] por lo que el policía Sotero Galván procedió a ponerlo de inmediato a disposición de la Ministerio Público (13:30 horas), en calidad de principal involucrado en la autoría material del crimen.[215]

Como puede observarse, la reconstrucción de lo ocurrido a partir de las constancias que obran en el expediente mismo de investigación, ponen de manifiesto la falta de veracidad con que se conducen los peticionarios a lo que se ha sumado la propia Comisión; es de hecho imposible que Alfonso Martín del Campo haya sido sometido como refiere a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En primer lugar porque de las propias diligencias que se sucedieron en la Agencia del Ministerio Público, se demuestra que una gran parte del tiempo Alfonso Martín del Campo estuvo en espera de rendir su testimonio, que inclusive tuvo oportunidad de hablar con su padre telefónicamente y que le fue practicado un estudio médico; y en segundo lugar, porque el agente del Ministerio Público se encontraba realizando y ordenando un gran número de diligencias para lograr esclarecer los hechos, entre las que se encuentran diversas declaraciones que se realizaron también en la misma Agencia Investigadora; el propio agente Sotero Galván Gutiérrez refiere que los momentos en que se entrevisto con Alfonso Martín del Campo, fueron lapsos de 5 a 10 minutos exclusivamente; que además de las personas involucradas como testigos, se encontraba en el lugar un número indeterminado de personas en la Agencia, entre ellos diversos periodistas y que por lo mismo en ningún momento se encontró sólo con Alfonso. [216]

Destacan en este periodo las lesiones que presentaba Alfonso Martín del Campo a su llegada a la escena de los hechos, por la mañana del día 30 de mayo de 1992.

2) Hechos y actuaciones oficiales comprendidos entre las 13:30 horas y la declaración ministerial de Alfonso Martín del Campo Dodd el día sábado 30 de mayo de 1992.

Una vez que Alfonso Martín del Campo manifiesta haber tenido intervención en los homicidios como autor material de los mismos, el Ministerio Público ordenó como procedía jurídicamente la práctica del examen de integridad física correspondiente al indiciado, a efecto de recabar su declaración. Las lesiones que presentaba Alfonso Martín del Campo, fueron descritas en el certificado médico suscrito por el médico forense Jesús López Sánchez, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien practicó el examen correspondiente a las 14:00 horas aproximadamente.

Momentos después del examen de estado físico, se llevó a cabo la diligencia de declaración ministerial en la que Alfonso Martín del Campo, en la que se le hicieron saber los motivos de su detención y los derechos que le asistían. Estando en presencia del Defensor de Oficio, Alfonso narró de manera libre y espontánea cómo dio muerte a su hermana y cuñado, así como haber inventado una coartada para

---

[214] Ver, puesta a disposición del probable responsable ante el agente del Ministerio Público de la Décima Agencia Investigadora, foja 7 de la averiguación previa10/2160/92-05.

[215] *Idem.*

[216] (véase diligencia judicial de ampliación de declaración del servidor público Sotero Galván Gutiérrez a foja 275 de las actuaciones procesales)

evadir su responsabilidad. Sobre las lesiones que presentaba, Alfonso explica que probablemente se las había producido al chocar en la carretera, que se golpeó intencionalmente la nariz y respecto del resto de las lesiones se las había producido en los momentos en que victimó a Juana Patricia y a Gerardo. La diligencia ministerial fue leída, ratificada y firmada por el propio Alfonso, quien además estampó su huella digital en el documento, el cual está suscrito también por el Defensor de Oficio.

Con posterioridad a su declaración, siendo las 19:00 horas, se lleva a cabo una diligencia de reconocimiento de ropas, en la que Alfonso acepta como de su propiedad la camisa color rojo, que presentó dos manchas al parecer hemáticas, la playera blanca sin marca en el cuello y letras anaranjadas y rojas, con un escudo cuadrado a rectángulos en la parte superior, también con líquido hemático, y el pantalón de color negro con manchas al parecer de líquido hemático. Alfonso refiere que la Camisa y la playera blanca las usaba cuando se dio a la fuga y que, por lo que hace al pantalón negro se lo puso cuando victimó a su hermana y a su cuñado; con respecto a la playera que usó, dice haberla tirado en la carretera, por otra parte, reconoce como objetos del delito cuchillos, un guante rojo y un dedo de otro guante, y también refirió haber tomado uno de los cuchillos y un guante, mismos que lanzó fuera del automóvil luego de que se estrelló. Estas declaraciones también fueron hechas en presencia del Defensor de Oficio, quien también suscribió los documentos oficiales correspondientes.

Inmediatamente después, a las 19:30 horas, se le practicó un nuevo examen de estado físico, en el que se refiere que presenta las mismas lesiones halladas antes de iniciar su declaración. Dicho examen fue realizado por el médico forense Jesús López Sánchez, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

De estos hecho se puede apreciar que fue el propio Agente del Ministerio Público quien ordenó la práctica de un examen físico al indiciado, antes y después de haber rendido su declaración y de haber participado en la diligencia de reconocimiento de ropas. De haber sido coaccionado brutalmente Alfonso Martín del Campo Dodd como alegan los peticionarios y la Comisión, difícilmente el Ministerio Público habría ordenado la práctica de un examen de estado físico que arrojaría las lesiones que se le hubieran infligido.

Por el contrario, la práctica de los exámenes físicos mencionados certifica el estado de integridad de Alfonso Martín del Campo, que coincide con las lesiones que le apreciaron a simple vista las personas que atestiguaron haberlo visto llegar al lugar de los hechos, la mañana del día 30 de mayo de 1992. De igual forma, en su declaración Alfonso Martín del Campo refiere datos de cómo podría haberse producido las lesiones que presentaba.

Antes, durante y al finalizar las diligencias en que participó Alfonso Martín del Campo Dodd, no existe evidencia alguna que permita afirmar que se atentó contra la integridad del indiciado, por el contrario, las diligencias oficiales apoyan el hecho de que el indiciado presentaba lesiones previas desde su arribo a la Agencia del Ministerio Público y que varias de ellas fueron auto infligidas y otras provocadas por la mecánica de los homicidios y el accidente automovilístico que sufrió en la carretera Cuernavaca-México.

3) Hechos y actuaciones oficiales comprendidos entre las 19:30 horas del día 30 de mayo de 1992 y el 1° de junio de 1992.

Las diligencias practicadas a partir de las 19:30 horas del día 30 de mayo de 1992, se encuentran detalladas en el apartado de hechos de la presente contestación, por lo que el Gobierno se permite remitir a éste para su lectura en detalle. No obstante lo anterior, resaltan por su importancia la

diligencia de reconstrucción de hechos ya comentada en el apartado correspondiente a la no configuración de violaciones al artículo 7 de la Convención Americana.

Cabría la pena mencionar que en las constancias de Averiguación Previa se mencionan con precisión las personas y los servidores públicos que participarían en la reconstrucción de hechos, entre las que se encontraban el propio Alfonso Martín del Campo Dodd e Inés Guzmán Sánchez, además del Defensor de Oficio y el personal pericial experto en criminalística y fotografía.

No existe evidencia alguna de que el indiciado haya sido presionado física o psicológicamente antes, durante o con posterioridad a la diligencia practicada. Por lo que se refiere a las aseveraciones de los peticionarios y de la Comisión respecto de la justificación y el desarrollo de dicha diligencia, ya se explicado con toda claridad, que la práctica de ésta fue oportuna, idónea y jurídicamente justificada, por lo que resultan falsas las acusaciones en contra de las autoridades de investigación y del personal pericial que participó en su realización. Las evidencias gráficas en que se plasmó el desarrollo de la diligencia mencionada, fortalece la posición del Gobierno de que Alfonso Martín del Campo no fue objeto de atentado o menoscabo alguno a su integridad física y psíquica.

En el transcurso de la investigación que continúo el día 31 de mayo, ni los peticionarios ni la Comisión refieren hecho alguno atentatorio de la integridad de Alfonso Martín del Campo, por lo que en ese punto no existe discrepancia con el Gobierno. Por otra parte, en esa fecha, Alfonso fue visitado por sus familiares y conocidos; asimismo, le fue practicado por la tarde un examen psiquiátrico en el que se aprecia lo siguiente:

> "A la entrevista directa se encuentra ansioso, inquieto, con orientación en las tres esferas adecuadas, su atención y comprensión son normales, su discurso es emitido en tono de voz normal, con curso coherente, dentro de su contenido no se aprecian alteraciones de ningún tipo, su afecto es apropiado modulando correctamente, niega alteraciones de la percepción, sus memorias se encuentran conservadas, juicios dentro de la realidad, síntesis y abstracción término medio lo que lo ubica con un coeficiente intelectual dentro de la normalidad. No se aprecian actitudes o conductas de alucinado. Su proyección hacia el futuro es aceptable.... Conclusión: Alfonso Martín del Campo Dodd, no presenta en este momento ningún trastorno mental, tiene capacidad de querer y entender".

El dictamen señalado corrobora y fortalece el estado psicológico normal en que se encontraba Alfonso Martín del Campo, quien no presentaba trastorno alguno. Si bien los peticionarios y la Comisión apoyan sus afirmaciones de tortura en un supuesto estudio particular de carácter psicológico, en el que se señalan secuelas de estrés postraumático, la credibilidad que se debe dar a dicho dictamen es completamente nula para los supuestos efectos de demostrar la existencia de tortura psicológica en Alfonso Martín del Campo a diez años de lo ocurrido.

El lunes 1° de junio, una vez integrada la Averiguación Previa en el transcurso de los días sábado 30 y domingo 31 de mayo de 1992, el Ministerio Público determinó ejercitar acción penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd por su presunta responsabilidad en la muerte de su hermana Juana Patricia Martín del Campo y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba.

A las 10:48 horas del día 1° de junio, le fue practicado a Alfonso Martín del Campo un nuevo examen médico a su ingreso al Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México, lo que confirma que el Ministerio Público había ejercitado acción penal por la mañana del día ya mencionado, quedando el inculpado a disposición de la autoridad jurisdiccional. En dicho examen, el Médico Cirujano Dr. Héctor Arturo Guzmán Aguirre, señaló que se apreciaba lo siguiente: "lesiones caracterizadas por

laceración del labio superior, lado derecho. Herida no suturada de 2 centímetros con costra hemática en región parietal, lado derecho. Escoriación en pirámide nasal y región zigomática y mejilla del lado izquierdo. Equimosis del tercio superior en cara externa del brazo derecho de color verde amarillento."

Nuevamente es de hacerse notar que las lesiones que en dicho certificado se aprecian, son similares y corresponden con las que Alfonso Martín del Campo mostraba desde su regreso al lugar de los hechos por la mañana del día sábado 30 de mayo de 1992 y en absoluto coinciden con la descripción de las supuestas lesiones que le habrían fueron infligidas.

4) Pruebas fehacientes de la inexistencia de tortura en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd.

A. La determinación de inexistencia de violaciones a los derechos humanos por parte de los órganos no jurisdiccionales de protección de tales derechos.

El 3 de noviembre de 1998, habiéndoles sido adversa la sentencia de amparo directo al sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd, y más de cinco años después de dictada la sentencia definitiva de fondo, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Bessie Dodd Burke de Martín del Campo, padres del sentenciado, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que fue remitida por incompetencia a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la que solicitaron:

a) Se forme una comisión especial e inicie una nueva línea de investigación, ya que consideran que el móvil del homicidio (presuntamente cometido por familiares de Gerardo Zamudio Aldaba) es el cobro de un seguro de vida por la cantidad de $2'950,000.00 dólares estadounidenses, y

b) Se declare nula la confesión de su hijo Alfonso Martín del Campo Dodd, ya que presuntamente fue obtenida por medio de tortura, infligida por un agente de la Policía Judicial del Distrito Federal. Además, refieren que su hijo fue asistido en su declaración por un supuesto defensor de oficio que no contaba con cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho.

Al respecto, la CDHDF inició el expediente número CDHDF/121/98/BJ/N4489.000 realizando las siguientes acciones:

El 10 de noviembre de 1998 dos visitadoras de la Comisión efectuaron una entrevista con el sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd, en el Centro de Readaptación Social de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.

En esa misma fecha, el Director del Centro de Readaptación Social proporcionó copia simple del certificado del estado físico de ingreso del señor Alfonso Martín del Campo Dodd al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en la Ciudad de México, elaborado el 1 de junio de 1992.

El 24 de noviembre de 1998 la CDHDF solicitó al Juez Quincuagésimo Quinto Penal del Distrito Federal copia del expediente de la causa penal 57/92. En dicho expediente constaban diversos certificados de integridad física del presunto agraviado y su declaración ministerial del 30 de mayo de 1992, en el sentido de que él mismo se causó las lesiones que presentaba, algunas intencionalmente para reforzar su coartada, y otras al cometer los homicidios y al chocar, posteriormente, el vehículo en que viajaba.

Al emitir su opinión, la médica legista de dicha Comisión analizó los siguientes documentos:

a) Estudio coprológico realizado en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de fecha 29 de mayo de 1992 (sic), a las 12:10 horas, con los siguientes datos: forma de nalgas masculinas, sin lesiones anales ni perianales; mucosa normal sin secreción; esfínter elástico; ano infundibuliforme; pliegues normales; no hay incontinencia fecal; no hay erosión en la mucosa, y no hay síntomas ni signos que indiquen en el momento del examen la presencia de enfermedades venéreas.

b) Certificado de estado físico de Alfonso Martín del Campo Dodd, expedido en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 29 de mayo de 1992 (sic), a las 14:00 horas, suscrito por el doctor Jesús López Sánchez. En él se registran dos golpes contusos en la parte posterior de ambos parietales; una escoriación dermoepidérmica en la región paraexiliar del ojo izquierdo; una escoriación del lado izquierdo de la nariz; un golpe contuso en la parte en que nace el vello de la frente; una escoriación en la rodilla derecha; máculas de color rojo en la parte media de la cara, y una escoriación dermoepidérmica en el dorso de la mano derecha.

c) Dictamen de psiquiatría forense realizado por el doctor Guillermo León González, de la Dirección General de Servicios Periciales, de fecha 31 de mayo de 1992, en el que concluyó que el examinado no presenta en ese momento ningún trastorno mental, y tiene capacidad de querer y entender.

d) Certificado de estado físico, expedido en el Servicio Médico del Reclusorio Oriente, de fecha 19 de enero de 1994, a las 10:48 horas, suscrito por el doctor Héctor Arturo Guzmán Aguirre, que es una copia fiel de la certificación de fecha 1° de junio de 1992. En él se registra que Alfonso Martín del Campo presentó una laceración en el labio superior del lado derecho, una herida no suturada de 2 centímetros con costra serohemática en la región parietal del lado derecho; escoriación en la pirámide nasal, en la región cigomática y en la mejilla del lado izquierdo, y una equimosis del tercio superior en la cara externa del brazo derecho, de color verde amarillento. Lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días.

La médico legista concluyó que:

"a) No es posible determinar las características de los agentes lesionantes, en virtud de que no se describen las dimensiones y forma de la lesiones.

b) No se puede determinar la mecánica de las lesiones que presentó en la cabeza, pero con base en la versión del presunto agraviado (los sujetos que entraron a su domicilio lo golpearon con unas figuras de porcelana en la cabeza y en la cara, y le rompieron 5 o 6 figuras de porcelana en la cabeza), existe un alto grado de posibilidad y de probabilidad que las lesiones que presentó -en el primer certificado- a nivel de los parietales, la frente, el ojo izquierdo, la nariz, y en la parte media de la cara, correspondan con ésta versión ya que se encuentran distribuidas anatómicamente en las regiones que él señaló.

c) En la segunda certificación, apareció una lesión nueva, la herida en la región parietal derecha, la cual correspondería con uno de los tres golpes contusos en la cabeza certificados en la primera revisión, es altamente probable que esta lesión se la ocasionaran al romperle una figura de porcelana, ya que el también manifestó que: al subirlo a la cajuela ya presentaba varias lesiones, por lo que la cajuela tenía huellas de sangre.

d) De haber sido lesionado totalmente como el refirió, debió de haber presentado múltiples equimosis a nivel del muslo izquierdo, las piernas y los costados."

e) Refirió que en cuatro ocasiones le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza con la finalidad de asfixiarlo para que se declarara culpable; sin embargo, la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza no deja huella de lesión".

Con relación al pedimento de la quejosa en el sentido de la CDHDF intercediera para que la misma fuera atendida por el delegado de la PGJDF en Benito Juárez, se solicitó a éste último por escrito que atendiera a dicha persona.

En otro punto de dicha determinación se señaló expresamente: "Respecto de la solicitud de que se declarara nula la declaración que rindió su hijo, este organismo aún cuando hubiese comprobado violación a derechos humanos en ese aspecto y emitir una Recomendación, carece de competencia para anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se haya presentado la queja o denuncia...Aunado a lo anterior, la confesión que refiere la quejosa, fue materia de valoración por parte de la autoridad judicial, en primera y segunda instancia, así como en el juicio de amparo, por lo que, al tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional, tampoco se surte nuestra competencia".

El expediente de queja CDHDF/121/98/BJ/N4489.000 se concluyó el 29 de enero de 1999 por orientación al remitir a la quejosa ante la PGJDF para que fuera atendida, y por no haberse comprobado violación a derechos humanos por lo que se refiere al resto de las pretensiones que motivaron la queja.

Los quejosos se inconformaron con la determinación de la CDHDF y acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a interponer un Recurso de Impugnación previsto en la Ley de esta última, el cual fue radicado con el número de expediente CNDH/121/99/DF/I00051.000.

Dentro de la investigación realizada por la CNDH, la médico legista de la CDHDF ratificó su opinión médica el 26 de marzo de 1999, y determinó como conclusión final, que no hay evidencia médico legal de que Alfonso Martín del Campo Dodd haya sido objeto de actos de tortura por parte de servidores públicos.

En consecuencia, el expediente CNDH/121/99/DF/I00051.000 fue concluido el 31 de agosto de 1999, por carecer de sustento jurídico los agravios que hicieron valer los recurrentes.

Las determinaciones de ambas Comisiones de Derechos Humanos, basadas en elementos de prueba y análisis minuciosos, incluyendo las propias declaraciones y manifestaciones de Alfonso Martín del Campo, contradicen de manera sustantiva y frontal el sentido y alcance que han pretendido dar los peticionarios a la decisión administrativa de la Contraloría contra el agente Sotero Galván Gutiérrez.

B. La confirmación judicial incólume del no ejercicio de la acción penal sobre la supuesta tortura y otros delitos supuestamente cometidos en agravio de Alfonso Martín del Campo Dodd.

El 13 de marzo de 1995, derivado de la resolución administrativa de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal emitida el 14 de octubre de 1994, se solicita el inicio de una investigación penal por la probable responsabilidad servidores públicos en la integración de la Averiguación Previa 10/2160/92-05, respecto de los homicidios de Juana Patricia Martín del Campo y de su esposo Gerardo Zamudio Aldaba. La Averiguación Previa solicitada fue iniciada y radicada con el número SC3839/95-03 el 23 de marzo de 1995 en la Dirección General de

Investigación de Delitos contra la Seguridad de las Personas, las Instituciones y la Administración de Justicia, contra Juan Carlos Velázquez Manzanita, Juez 55° Penal; Arturo Vázquez Ortíz, Secretario de Acuerdos del Juzgado 55° Penal; Rolando Torres Martínez, Defensor de Oficio; Juan Marcos Badillo Sarabia, Agente del Ministerio Público; Sotero Galván Gutiérrez, Policía Judicial; Roberto Valero Chávez, Fiscal Especial; Beatriz Araceli Minor Morales, Perito en Criminalística; Jesús López Sánchez, Perito Médico Forense; Manuel García Rebollo, Fiscal Especial; Ernesto Hernández Ramírez, Agente del Ministerio Público.

El 29 de marzo de 1995, los peticionarios presentan ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal un escrito en el que solicitan se investigue a Miguel García Rebollo, Roberto Balero (sic), Rolando Torres Martínez, Beatriz Minor Morales, Juan Carlos Velázquez Manzanita y Arturo Vázquez Ortíz, por *abuso de autoridad, conjunsión (sic) de funcionario, delitos que incurren los administradores de justicia (sic) etcétera*.

La Averiguación Previa fue tramitada e integrada con numerosas diligencias y declaraciones de los indiciados, a efecto de encontrar la verdad histórica de los hechos y determinar la responsabilidad que, en su momento, correspondiera a los servidores públicos enlistados. Debe señalarse que como parte de los documentos tomados en consideración, entre muchos otros, se encontraban los siguientes:

a) La resolución administrativa de la Contraloría emitida el 14 de octubre de 1994.

b) La ratificación del escrito de denuncia de Alfonso Martín del Campo de 6 de abril de 1995.

c) La declaración del propio Alfonso Martín del Campo, emitida el 11 de mayo de 1995.

d) Las comparecencias y declaraciones de los servidores públicos señalados en la denuncia de Alfonso Martín del Campo.

e) La causa penal 57/92 por la cual en primera instancia, Alfonso Martín del Campo fue declarado penalmente responsable del homicidio calificado cometido en agravio de su propia hermana Juana Patricia Martín del Campo y del esposo de ésta Gerardo Zamudio Aldaba.

Luego del análisis y estudio de las diligencias practicadas para integrar la investigación, el 1° de agosto de 1997 se concluyó que los hechos imputados a los servidores públicos ya mencionados no eran constitutivos de delito. En efecto, se arribó a la conclusión de que:

- No se acreditaron los elementos de los tipos penales sobre delitos contra la administración de justicia.

- No existen elementos que indiquen que en algún momento haya sido infringida la Ley, tampoco que haya existido abuso de autoridad o menos la tortura física y psicológica que se alega contra Alfonso Martín del Campo, ni tampoco privación ilegal de la libertad de éste último.

- No se actuó contra derecho en la elaboración de los dictámenes médicos ni periciales.

- El defensor de oficio asignado al sentenciado sí lo asistió y estuvo presente en la diligencias.

- Que Alfonso Martín del Campo y su defensor particular, no hicieron valer los recursos legales disponibles para inconformarse con las determinaciones que les fueron adversas.

- Que de la diligencia de careo entre Alfonso Martín del Campo y Sotero Galván, no se desprende que éste haya aceptado la imputación que se hizo, atendiendo a la última de las frases de dicho careo, en donde el último de los señalados desmiente lo que le atribuye su careado procesado.

- Que no existieron actos u omisiones indebidos que hubieran afectado al entonces indiciado.

Como consecuencia de lo anterior, el mismo 1° de agosto de 1997, fue elaborado un acuerdo fundado y motivado de no ejercicio de la acción penal. Dicha determinación fue notificada como procedía a los interesados, quienes en diciembre de 1997 manifestaron estar inconformes con lo resuelto.

No obstante que en su inconformidad los interesados no aportaron elementos novedosos, se determinó el 4 de marzo de 1998 la realización de diligencias complementarias para integrar debidamente la averiguación previa SC3839/95-03, dejando insubsistente la determinación de 1° de agosto de 1997.

Una vez reunidos elementos y consideraciones sobre la investigación, se fundó y motivo una nueva resolución de no ejercicio de la acción penal el 25 de mayo de 1998, misma que nuevamente fue notificada a los peticionarios, quienes el 2 de junio de 1998 aseveraron estar inconformes sin señalar los motivos y fundamentos adecuados de su negativa.

El 2 de julio de 1998 se confirma la procedencia de la decisión de no ejercicio de la acción penal de 25 de mayo de 1998. Con el fin de salvaguardar la certeza jurídica que debe regir en asuntos como éste, se remitió a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador todo lo actuado, determinándose el perfeccionamiento de algunas diligencias, incluyendo la resolución de la investigación sobre las imputaciones de cohecho hechas por Bessie Dodd.

El 26 de julio de 1999, por así resultar de lo actuado, se propone y confirma el no ejercicio de la acción penal por los ilícitos de abuso de autoridad, cohecho, tortura, concusión, encubrimiento y peculado, lo cual fue notificado nuevamente a los peticionarios. El 26 de enero de 2000, la Sra. Bessie Dodd se inconformó, pero no lo hizo ante el área institucional correspondiente, lo que impidió que la investigación fuera remitida al archivo.

Una vez que se corroboró la presentación de la inconformidad de los peticionarios, se determinó la continuación del trámite a efecto de estudiar lo planteado en ésta. Así, del análisis realizado se determinó la no comprobación de tortura, ni de elementos que la pudieran hacer presumir, así como la falta de elementos para acreditar el resto de las imputaciones contra servidores públicos, por lo que la denuncia presentada fue considerada improcedente e infundada, al igual que la inconformidad planteada. Asimismo, se da cuenta de que la denuncia misma de los hechos que dieron origen a la Averiguación Previa SC3839/95-03, fue llevada a cabo con posterioridad a que había sido dictada la sentencia de segunda instancia en el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, esto es, habiéndose confirmado su responsabilidad por los homicidios.

En tal sentido, el 6 de junio de 2000 se resuelve en definitiva confirmar el no ejercicio de la acción penal planteado, lo cual de nueva cuenta es hecho del conocimiento de los peticionarios, con lo cual estos estarían en aptitud de agotar las instancias judiciales a su alcance. En efecto, el 30 de junio de 2000, Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo interpusieron una demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F.

El 14 de febrero de 2002, fue dictada la sentencia definitiva en dicho Amparo, en la que se resuelve en definitiva sobreseerlo, por actualizarse causales de improcedencia constitucional y legal en el mismo.

De conformidad con el artículo 83, fracción IV de la Ley de Amparo, los promoventes del amparo tenían la posibilidad de interponer el recurso de revisión (apelación), contra la sentencia del Juez de Distrito, con motivo del cual podían también impugnar los acuerdos pronunciados en la misma. La sentencia no fue impugnada y adquirió el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales.

C. La falta oportuna de denuncia ante los órganos de investigación del delito.

La manifestación de los peticionarios que en el presente caso existió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a partir de la cual pretenden impugnar el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, está sustentada en bases falaces e incongruentes.

A efecto de comprender el argumento presentado por el Estado, se debe tener en cuenta una distinción básica entre diversos momentos cronológicamente determinados. El primero de ellos es la ocurrencia real y verdadera de los hechos, el segundo la verificación o comprobación de que en efecto tales hechos existieron y, tercero, la calificación y consecuencias jurídicas que se les asigne.

La tortura en el orden jurídico mexicano es un delito sancionado por la ley con penal privativa de libertad, tal como lo señala el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que señala en su artículo 4º :

> "A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta...."

El esclarecimiento de los hechos y la calificación jurídica definitiva de los mismos corresponde a órganos del Estado diversos. De conformidad con el artículo 21 Constitucional: " La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato".

A efecto de estar el Ministerio Público en posibilidad de desplegar su actividad investigadora y estar en condiciones de solicitar al Juez que obsequiara una orden de aprehensión, era necesaria definitivamente la denuncia de los hechos o haber tenido noticia formal de ellos.

El 6 de enero de 1993, es interpuesta una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se alega a favor de Alfonso Martín del Campo que habría sido objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos en la etapa de Averiguación Previa, que en la declaración ministerial su firma había sido falsificada y que el automóvil en que había sido secuestrado no aparecía. Cabe señalar que en dicha queja, se omite informar a la Comisión referida, el estado del proceso penal a que estaba siendo sujeto Alfonso Martín del Campo, e inclusive sin haber siquiera esperado a que el Juez de la causa cerrara la instrucción o emitiera la sentencia de primera instancia. Dicha Comisión dio trámite a la queja e investigó los hechos, y tiempo después decidió darla por concluida durante el procedimiento, lo cual significa que las autoridades competentes tomarían conocimiento del asunto y procederían de acuerdo con sus atribuciones.

La denuncia formal de hechos presuntamente constitutivos de delito es presentada por los peticionarios el 29 de marzo de 1995, fecha en que mediante un escrito solicitan a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se investigue a Miguel García Rebollo, Roberto Balero (sic), Rolando

Torres Martínez, Beatriz Minor Morales, Juan Carlos Velázquez Manzanita y Arturo Vázquez Ortíz, por *abuso de autoridad, conjunsión (sic) de funcionario, delitos que incurren los administradores de justicia (sic) etcétera*. Como puede observarse, la denuncia de hechos directamente ante el órgano de investigación de los delitos se produce cerca de tres años después de haber supuestamente ocurridos y con posterioridad a que las propias autoridades habían decidido el esclarecimiento de los mismos.

D. La comprobación y calificación jurídica de los hechos.

Resulta de la mayor importancia distinguir las alegaciones de la existencia de tortura o de malos tratos por parte de los peticionarios, de la comprobación y calificación jurídica de los hechos que supuestamente la hacen existente, esto es, en qué momento se puede afirmar que los hechos que alegan los peticionarios son o no son tortura.

Los peticionarios señalan que la calificación jurídica de tortura está representada por la determinación de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 14 de octubre de 1994, en la que determina sancionar al policía Sotero Galván Gutiérrez por infracciones a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Dicha Contraloría no es un órgano facultado para la calificación de hechos constitutivos de delito, puesto que no es un Ministerio Público, razón por la cual con posterioridad se dio vista a éste para realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Suponiendo, sin que esto implique admitir, que en efecto la existencia de tortura se evidenció y que su responsable era Sotero Galván Gutiérrez, dicho servidor público fue inhabilitado por tres años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos pero, lo que es más relevante es que la calificación jurídica de que los supuestos hechos constituían tortura se produjo en 1994, cuando el proceso contra Alfonso Martín del Campo Dodd ya había sido decidido por sentencia firme, contra la cual no procedía ningún tipo de recurso ordinario.

En esa lógica, lo que procedía era utilizar esa supuesta "prueba" oficial de la existencia de tortura ante los órganos jurisdiccionales federales que conocieran del recurso extraordinario de nulidad denominado *juicio de amparo directo*, contra la sentencia firme de segunda instancia, para hacer valer sus alegatos. Los peticionarios estaban perfectamente al tanto de dicho procedimiento administrativo y de su resolución, lo cual se demuestra con el escrito de la Embajada Americana de fecha 25 de marzo de 1994, en la que se refiere que fueron los propios peticionarios quienes proporcionaron a dicha representación diplomática la información sobre el procedimiento ante la Contraloría.[217]

No obstante que los peticionarios plantearon el juicio de amparo directo señalado hasta junio de 1997, no argumentaron absolutamente nada con respecto a la determinación de la Contraloría, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció y decidió dicha demanda de Amparo, no tuvo oportunidad de tomar en consideración dicho documento y pronunciarse sobre su idoneidad como prueba de la existencia de tortura y su impacto en el proceso penal ya decidido en 1993.

Las pretensiones de que la calificación inicial de los hechos como correspondientes a tortura, se vino completamente abajo con la determinación de 6 de junio de 2000, en la que se resuelve en definitiva confirmar el no ejercicio de la acción penal planteado, lo cual de nueva cuenta es hecho del conocimiento de los peticionarios, con lo cual estos estarían en aptitud de agotar las instancias

[217] Ver escrito del 25 de marzo de 1994, que la Embajada Americana dirigió un escrito al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

judiciales a su alcance. En efecto, el 30 de junio de 2000, Alfonso Martín del Campo y Bessie Dodd de Martín del Campo interpusieron una demanda de amparo, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F.

Esto se confirmó en definitiva judicialmente, cuando el 14 de febrero de 2002, fue dictada la sentencia definitiva del amparo interpuesto contra dicha determinación, en el que se resuelve sobreseerlo, por actualizarse causales de improcedencia constitucional y legal en el mismo. De conformidad con el artículo 83, fracción IV de la Ley de Amparo, los promoventes del amparo tenían la posibilidad de interponer el recurso de revisión (apelación), contra la sentencia del Juez de Distrito, con motivo del cual podían también impugnar los acuerdos pronunciados en la misma. La sentencia no fue impugnada y adquirió el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales.

Después de las determinación de 6 de junio de 2000 y la sentencia de 14 de febrero de 2002, se acredita que no existió la tortura que alegan los peticionarios.

E. Las alegaciones de confesión coaccionada y el proceso penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd.

La declaración que emitió el sentenciado ante el Juez 55 de lo penal, con motivo de la diligencia de declaración preparatoria celebrada el día 1 de junio de 1992 a las 16:00 horas, es la primera declaración ante el órgano jurisdiccional. Con las posteriores oportunidades en que el procesado y su defensor se avocaron a replantear la narración de los supuestos hechos en su favor, se podrá observar cómo fueron estos infructuosamente y con toda intención, perfeccionando y agregando nuevos detalles, cambiando, omitiendo y de plano en ocasiones auto contradiciéndose, con el fin de hacer que sus aseveraciones fueran al menos presumibles.

En la parte conducente de dicha diligencia, que fue plasmada por escrito, ratificada y firmada por el inculpado y su defensor particular, el Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, se estableció que estando presente el detenido y habiéndosele informado de la naturaleza y causa de la acusación, así como de los derechos que le asisten:

> "... leída que le fue su declaración que obra en autos dijo: que la niega totalmente, toda vez que lo presionaron físicamente los judiciales y que en un principio el de la voz les platicó a los judiciales la historia verdadera en dos o tres veces; y que estos le decían que cómo lo había hecho cambiándole todo y que la historia que les decía era de niños; y después que lo habían golpeado varias veces, le pusieron la bolsa en la cabeza y lo detuvieron; y le manifestaban al de la voz "vas a cantar o no y si no ahí viene el minuto y luego el minuto y medio, ya que nosotros somos especialistas en trabajar", a lo que el declarante les manifestó que si querían se declaraba culpable, pero que ya no lo siguieran golpeando ni hicieran otras cosas. Que todo lo que señala en la declaración al de la voz le preguntaban "cómo hiciste esto", contestándole no sé y lo golpeaban, y le decían que no se hiciera y que el de la voz les decía que las cosas habían sido así y le manifestaban que no se hiciera, y que las cosas que el manifestaba consideraba que estaban bien le decía que sí y si no le decían que no se hiciera; y así fue como sacaron la declaración y que fueron varias personas de la delegación, y que el de la voz asentó en la declaración y después de haber terminado esto, fue grabado, que asimismo fue llevado al lugar de los hechos en donde le preguntaron que cómo había hecho las cosas en donde lo estuvieron fotografiando; que al de la voz le quitaron una playera blanca, una camisa

> color rojo, marca furor, que había un pantalón que los judiciales sacaron de la casa y le decían que éste era de él, lo que no es cierto siendo todo lo que tiene que declarar, sin tener nada más que agregar. Manifestando que en uso de su garantía constitucional, no es su deseo contestar pregunta alguna que le sea formulada por el agente del Ministerio Público ..." (foja 1)

Más adelante, en la misma declaración, Alfonso Martín del Campo Dodd manifestó (foja 5) que sí era su deseo contestar a las preguntas del agente del Ministerio Público, quien procedió a formular diversos cuestionamientos al inculpado, mismos que fueron calificados como legales por parte del Juez. De las manifestaciones del inculpado se desprende lo siguiente:

> "Que el de la voz si leyó su declaración, que aparece su nombre antes de firmarla; e inclusive en ese momento manifestó que era inocente; que había varias personas presentes cuando el declarante firmó su declaración ignorando quienes sean; que al de la voz cuando lo presionaban en la bolsa en la cabeza lo hacían en la oficina del comandante en un cuartito por lo que no había ninguna otra persona, solo los agentes y el de la voz; y que se refiere a la historia verdadera es la que acaba de relatar en la última parte de esta declaración preparatoria; que el manifestó en su declaración y que las fallas que el declarante tenía en su citada declaración los agentes se lo iban corrigiendo al hacer la reconstrucción de hechos; que el de la voz recuerda que cuando estaban *reconstruyendo había siete personas y ocho aproximadamente*".

El defensor particular de Alfonso Martín del Campo intervino en la diligencia de declaración preparatoria, sólo para formular a éste algunas preguntas, mismas que respondió el inculpado señalando únicamente:

> "Que el de la voz firmó la declaración que aparece bajo su nombre en la indagatoria toda vez que como ya lo habían golpeado varias veces era de suponerse que lo haría."

El Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, solicitó el uso de la palabra manifestar "que solicita se haga constar las lesiones que presenta el detenido en este momento". Ante dicha solicitud el juez ordenó que se procediera a hacer constar las lesiones que presentaba el detenido, mismas que fueron las siguientes:

> "una cicatriz de aproximadamente dos centímetros en la cabeza en parte parietal superior derecha; asimismo se le aprecia otra en la parte superior de la cabeza ambas cubiertas por el cabello, se le aprecia un punto rojo a la altura del codo del brazo izquierdo; una mancha de tamaño irregular color claro a la altura del brazo del lado derecho, se le aprecia otro punto rojo en el dorso de la mano derecha, en donde comienza la ceja y en la nariz ambos del lado izquierdo, se le aprecian dos puntos y de color rojizo, asimismo en la frente así como del lado izquierdo de la misma se le aprecia una pequeña inflamación, asimismo se le aprecia un pequeño hematoma en la rodilla derecha, lo que se certifica para todos los efectos a que haya lugar"

Al final del documento en que se consagra la diligencia realizada se señala que la declaración fue leída y ratificada por el inculpado, quien la firmó al margen para constancia, con lo cual quedó cerrada dicha actuación el mismo 1° de junio de 1992.

Como puede apreciarse, ni el abogado particular ni el propio inculpado, hicieron señalamiento alguno al Juez para que éste procediera a dar vista al Ministerio Público a efecto de investigar el origen y, en

su caso, la autoría de las supuestas lesiones; el abogado particular y propio inculpado tampoco denunciaron los hechos ante el órgano de investigación (Ministerio Público). La certificación de lesiones es simplemente una constancia de lo que se aprecia visualmente el estado que presenta el inculpado, pero no constituye en modo alguno explicación sobre su origen o imputación contra persona alguna con relación a las mismas.[218]

El abogado defensor particular o éste tuvieron la más amplia oportunidad para denunciar los hechos ante el Ministerio Público, sin embargo, sólo ellos pueden explicar por qué no procedieron de esa manera, si su interés último, tal como se aprecia en su documento, es invalidar la confesión de Alfonso Martín del Campo por tal motivo a como de lugar.

Posteriormente, estando en trámite la primera instancia del proceso penal instruido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, el Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, presentó un escrito ante el Juez de la causa, el 25 de junio de 1992, mediante el cual ofreció lo que calificó como pruebas de descargo a favor de su cliente, entre las que se menciona la ampliación de declaración de éste último y el resultado de los careos que fueran practicados.

En la Audiencia de Desahogo de Pruebas, celebrada el 14 de julio de 1992 (habiendo transcurrido 45 días de sucedidos los homicidios), estando presentes el procesado asistido de su defensor particular, el agente del Ministerio Público ante el Juez, se procedió a recabar la ampliación de declaración ofrecida por la defensa. En dicha ocasión el procesado manifestó:

> "Por lo que hace a su declaración ministerial manifiesta que la desconoce, ya que lo obligaron y lo presionaron fisicamente para firmarla, así como para hacerla, asimismo fue obligado a poner su huella dactilar, y por lo que respecta a su declaración preparatoria sí la ratifica; reconociendo como suyas las firmas que obran al margen de dichas declaraciones, deseando aclarar algunas cosas; como son: que la bolsa de plástico que le pusieron en la cabeza le cubría toda la cabeza y que a la altura del cuello se la apretaban a efecto de que le faltara el aire;.... y que las personas que asistieron a la reconstrucción de hechos no eran ocho, sino que eran como diez o doce personas, siendo todo lo que tiene que aclarar sin tener nada más que agregar en relación a los hechos materia de esta causa".

El defensor particular del entonces procesado, realizó a éste algunas preguntas respecto de las cuales contestó:

> "... que aproximadamente eran 10 o 12 agentes de la Policía Judicial los que presionaban al de la voz y en especial uno que le decían fiscal que el de la voz se encontraba en un cuarto cerrado con una puerta y en la Delegación Benito Juárez, cuando fue presionado físicamente; el de la voz fue golpeado en el estómago con franelas mojadas que traían en las manos así como en la cabeza y en la cara con la mano abierta, y le daban de patadas en sus partes bajas, es decir en los testículos; que las diez o doce personas que menciona se iban turnando para golpear al declarante; que cuando le decían que no se hiciera lo que entendía el de la voz, es de que no se hiciera pendejo,

[218] Cabe señalar que el tipo de lesiones que presentaba el inculpado eran del tipo y magnitud de las perseguibles a petición de parte ofendida, lo que confirma que ellos debían haber acudido al Ministerio Público para ponerlo en conocimiento de los hechos y hecho valer sus aseveraciones sobre las causas de dichas lesiones y sobre los supuestos autores de las mismas, lo que hubiera permitido al propio Ministerio Público calificar los hechos y, de ser procedente, investigarlos como presunción de tortura.

toda vez que el de la voz aceptaba lo que los judiciales le decían le manifestaban "no te hagas pendejo"; que las personas que le sacaron la declaración eran las mismas personas y que eran 10 o 12 que la forma en que fue narrada su declaración y de lo que se percató el de la voz es que le dijeron que leyera su confesión despacio y pausadamente si no lo iban a golpear; y que sabe que fue grabada toda vez que tenía la grabadora, y que el fiscal la tenía en su mano; que las mismas 10 o 12 personas fueron las que lo trasladaron al lugar de los hechos; y que lo trasladaron en un vehículo de los llamados minivan -tipo combi, y que aparte iban otros dos carros de la marca dodge dart; que durante la reconstrucción de hechos, el fiscal y los judiciales le decían de qué manera tenía que hacer lo que ellos creían conveniente, si no lo hacía lo golpeaban nuevamente; que el de la voz no recuerda las características del pantalón que los judiciales sacaron y únicamente recuerda que era de color negro..."

El defensor en dicha diligencia, en uso de la palabra, manifestó lo siguiente:

"Que pide con toda atención de su señoría se sirva analizar, estudiar y observar con todo detenimiento todas y cada una de las fotografías que integran la supuesta reconstrucción de hechos, concretamente la situación de que todas las personas que participaron en dicha diligencia, con excepción de mi defendido se encuentran con una línea gruesa de color negro sobre su rostro, esto es con la finalidad de ocultar su identidad y de este modo evitar que fueran llamados a declarar ante este órgano jurisdiccional, ya que en todo caso y al ser interrogados por esta defensa se pondría de manifiesto las arbitrariedades e injusticias cometidas en agravio de mi representado durante el desarrollo de dicha diligencia, por lo que insisto con toda atención que en que debe desestimarse y no concederle ningún probatorio (sic) a tal diligencia, ya que fue realizada con la única finalidad de fabricar un culpable y encontrar un chivo expiatorio a quien atribuirle la comisión de estos hechos, basándose para ello en un claro rebasamiento de las facultades que otorga la ley al órgano investigador".

El juez acordó que lo solicitado por el defensor con relación a la diligencia de la reconstrucción de hechos, sería materia de estudio en el momento procesal oportuno y una vez culminada la ampliación de declaración del procesado, declaró culminada y cerrada dicha diligencia.

En diversas fechas posteriores se fue continuando las diligencias de desahogo de pruebas, resultando relevante la llevada a cabo el día 9 de septiembre de 1992 (habiendo transcurrido más de tres meses de sucedidos los homicidios), en la que se llevaron a cabo, entre otras, la ampliación de informe de puesta a disposición suscrito por el agente de la Policía Judicial Sotero Galván Gutiérrez y el careo de éste con el procesado.

Con relación a la primera de las diligencias mencionadas, el Sr. Sotero Galván Gutiérrez manifestó que se había entrevistado con el procesado en dos ocasiones en la oficina del Ministerio Público, pero que en todas ellas estuvieron presentes diversas personas, entre ellas varios periodistas; que las entrevistas con el procesado duraban aproximadamente 5 minutos, y que a partir de la última de ellas transcurrieron aproximadamente tres o cuatro horas antes de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público en calidad de indiciado; que estuvo presente en la declaración ministerial del indiciado en la que se encontraban varias personas, entre elementos policiacos (sic) y también periodistas, que no participó en la reconstrucción de hechos efectuada durante la investigación. (foja 275 de las actuaciones procesales).

Por lo que se refiere a la diligencia de careo judicial entre el Sr. Sotero Galván Gutiérrez y Alfonso Martín del Campo Dodd, la misma reviste especial relevancia en el presente caso, por lo que se transcribe a continuación (para la mejor comprensión de dicha diligencia lo escrito en cursivas corresponde a lo manifestado por Alfonso Martín del Campo Dodd y las mayúsculas a lo declarado por Sotero Galván Gutiérrez):

> CAREO ENTRE EL PROCESADO Y EL AGENTE DE LA POLICIA JUDICIAL, Enseguida se exhortó al primero y protesto al segundo para que se conduzca con verdad en la diligencia en que van a intervenir, se dio lectura sus respectivas declaraciones rendidas en autos, y se les hizo ver los puntos de contradicción, y puestos en formal careo del debate resultó:
>
> *Que el procesado le sostiene a su careado que miente, ya que lo llevaron a una oficina esta abajo de la delegación en la cual estaban como 12 agentes de la Policía Judicial lugar en donde lo golpearon y le decían que dijera cómo había matado a los hoy occisos*; A LO QUE LE RESPONDE SU CAREADO QUE NO ES CIERTO Y QUE INCLUSIVE LE MANIFESTARA A SU CAREADO QUE LE MANIFESTARA SI ESTABA AMENAZADO O NO A LO QUE SU CAREADO LE CONTESTABA QUE NO, QUE ÉL LOS HABÍA MATADO; *a lo que su careado le contesta que si estuvo tanto tiempo arriba como lo señala, cómo es que sus familiares nunca los vió en la delegación ni a ningún abogado y por lo que dice del café miente*, A LO QUE SU CAREADO LE CONTESTA QUE NO Y QUE INCLUSIVE ÉL LE DIO EL AGUA, Y LE SOSTIENE AL PROCESADO QUE MIENTE YA QUE EL MANIFESTÓ QUE ÉL HABÍA SIDO, Y QUE INCLUSIVE MANIFESTABA QUE NO TENÍA QUE HECHARLE (sic) LA CULPA A OTRAS PERSONAS; *a lo que su careado procesado le contesta que no; que inclusive lo encueraron y le dijeron que con una lana iba a salir; y como el de la voz no decía que él había sido, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon en todo el cuerpo; que inclusive se iban turnando de dos en dos para golpearlo*, POR LO QUE CAREADO LE VUELVE A CONTESTAR QUE SI, *contestando en ese acto el procesado que hasta que le pusieron la bolsa tuvo que decir que sí firmaría su declaración*, VOLVIERON (SIC) A REITERAR SU CAREADO QUE EL PROCESADO MIENTE EN LO QUE DICE SU CAREADO y en lo demás cada quien se sostiene en lo que ya tienen declarado." (fojas 218-219 del documento de conclusiones).

Posteriormente, una vez cerrada la instrucción por parte del juez el 1° de abril de 1993, esto es, habiendo sido desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, así como las practicadas por el propio juez para mejor proveer, el defensor particular de Alfonso Martín del Campo Dodd presentó el 16 de abril de 1993 las correspondientes conclusiones.

En dicho documento el abogado acepta como primer punto que:

"el cuerpo de los diversos delitos de homicidio, se acreditó en autos en los términos y con los elementos de prueba señalados por el Ministerio Público de la adscripción en su pliego acusatorio, exceptuando desde luego, como probanza para este fin, la supuesta confesión ministerial, que aparentemente emitió mi defendido,..." foja 1 del documento de conclusiones.

En el punto segundo del documento de conclusiones de la defensa, el abogado particular Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, hizo referencia a la confesión ministerial de su defendido y a la reconstrucción de hechos en que éste participó. El mencionado abogado aseveró:

> "... en este caso existe únicamente como elemento de cargo, una supuesta confesión ministerial, que según dicen rindió mi defendido y a la cual me repito (sic) para evitar repeticiones; sin embargo, ésta confesión no se encuentra corroborada por ningún elemento probatorio que la pudiera hacer verosímil y por lo tanto resulta insuficiente para fundamentar una sentencia condenatoria en contra de mi representado; además es importante hacer notar a su Señoría que la referida confesión, fue obtenida mediante golpes, amenazas y torturas sufridas por mi defendido, lo que se acreditó fehacientemente con la fe judicial de lesiones que le fueron apreciadas a éste, en el momento de rendir su declaración preparatoria ante este H. Juzgado, mismas que dicha diligencia se describieron y que le fueron causadas por los elementos policiacos que lo privaron injustamente de su libertad, así como por el personal de la Fiscalía Especial de Homicidios de la Delegación Benito Juárez, lo cual también se probó ampliamente con la exhibición que hizo esta defensa, del diario vespertino "ovaciones" el cual obra en autos y en el que se publicó la noticia de que serían procesados varios funcionarios de dicha fiscalía, por los delitos de extorsión, tortura, privación ilegal de la libertad y otros, es importante mencionar el resultado de la diligencia de careos, practicados entre mi defendido y el Sr. Sotero Galván Gutiérrez, quien es un elemento de la Policía Judicial del Distrito Federal, en la que mi referido representado, hoy procesado dijo: '.... Que inclusive lo encueraron y le dijeron que con una 'lana' iba a salir, y como el de la voz no decía que él había sido, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en todo el cuerpo, que inclusive se iban turnando de dos en dos para golpearlo; 'por lo que su careado (Policía Judicial del D.F.), le vuelve a contestar que sí, esta aceptación del citado elemento policiaco, debe ser considerada con pleno valor probatorio en su contenido, por tratarse de una actuación judicial efectuada ante ese H. Juzgado, y con la misma acredita indubitablemente que la supuesta confesión ministerial antes referida, efectivamente le fue arrancada materialmente golpes, amenazas y torturas a mi defendido y por lo mismo es irrelevante la misma y carente de todo valor probatorio; asimismo, se recalca que el procesado al rendir esa supuesta confesión viciada, en ningún momento estuvo presente algún defensor, o persona de su confianza, como lo ordena el artículo 134 bis, del Código Procesal Penal; debido a lo anterior y por no reunir dicha supuesta confesión, ninguno de los requisitos exigidos por el numeral 249 del mismo cuerpo de leyes invocado, no contiene ningún valor probatorio y en tal virtud, debe ser desestimada ...".

Con respecto a la diligencia de reconstrucción de hechos, el defensor particular la tacha de haber sido manipulada, de que no se identificaba a las personas que intervinieron en la misma, con excepción del procesado y que no se aprecia si este había sido asesorado por un defensor, asimismo, dicho abogado refiere:

> "en caso de que efectivamente hubiera estado presente un defensor en tal reconstrucción, por mínima ética profesional, no hubiera permitido ningún tipo de presión sobre el procesado, ni tampoco hubiera aceptado que lo obligaran a realizar los movimientos que 'el fiscal' lo ordenaba, ni mucho menos hubiera permitido que los múltiples agentes policiacos que se observan en las fotografías respectivas, hubiesen intervenido en la misma y también tenía obligación de haber protestado porque el procesado lo obligaron

> a grabar las palabras que el llamado 'fiscal' le indicaba ... todas y cada una de estas arbitrariedades e injusticias, se hicieron notar con toda oportunidad por esta Defensa, en la audiencia celebrada el 24 de julio de 1992, suplicando atentamente a su Señoría, se sirva analizar, observar y estudiar todo con detenimiento tal situación y no se le conceda valor probatorio a dicha Reconstrucción de hechos, por los motivos y razonamientos antes señalados". Foja 3 del documento de conclusiones.

El resto de su legajo, lo dedica el defensor a intentar infructuosamente desvanecer la probable responsabilidad de su defendido, a plantear nuevamente que si bien confesó, esto lo hizo presionado por los policías judiciales y, por si esto no tuviera el efecto que hubiera deseado, también se avocó simplemente a buscar desacreditar algunos de los elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público que a su juicio les perjudicaban, como son algunas declaraciones de testigos o los peritajes técnicos realizados. Derivado de las conclusiones presentadas por la defensa, ésta solicitó al juez que dictara sentencia absolutoria en el proceso y, como consecuencia, se ordenara la liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd.

Como puede apreciarse, en la supuesta lógica de la defensa primero habría que demostrar si bien había sido cometido un delito, el procesado no había tenido participación en su comisión, lo que expresamente había reconocido en su declaración ministerial; por tal motivo, un punto importante a desvirtuar era la espontaneidad de la confesión; si no se contradecía la confesión rendida, entonces habría que lograr a toda costa que inclusive los propios hechos derivados de ésta última, resultaran inverosímiles.

Los anteriores párrafos merecen comentarios específicos, que derivan del propio desarrollo del proceso penal.

El 28 de mayo de 1993, el Juez 55° Penal emitió la sentencia de fondo de primera instancia en la causa penal 57/92, instruida contra Alfonso Martín del Campo Dodd por el delito de homicidio contra quienes en vida llevaran los nombre de Juana Patricia Martín del Campo y su esposo Gerardo Zamudio Aldaba. La sentencia consta de 41 fojas tamaño oficio, escritas por ambos caras (82 cuartillas) en las que el Juez analiza con detalle en los apartados relativos a Resultandos (cuestiones fácticas), Considerandos (aspectos de derecho aplicables) y Puntos resolutivos (decisión), el expediente penal del proceso contra Alfonso Martín del Campo, los respectivos argumentos tanto del Ministerio Público, como de éste último y de su defensor particular, las pruebas ofrecidas y desahogadas, el valor que con fundamento en derecho corresponde a las mismas, los elementos que demuestran la existencia del delito, así como la responsabilidad que corresponde al acusado en su comisión y el grado de culpabilidad de éste para la debida individualización de la sanción penal correspondiente.

Por lo que se refiere a la responsabilidad del procesado, el juez señaló en su sentencia que los elementos de prueba presentados, estudiados y valorados llevaban a tener por demostrada plenamente la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito cometido contra Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba, "... hechos probados y elementos de convicción a los que se hizo alusión y que generan indicios suficientes los que analizados en su conjunto en forma natural y lógica conducen de la verdad conocida a la que se busca hasta integrar la prueba presuncional o circunstancial con valor convictivo pleno". (foja 29 anverso) Asimismo, en otra parte de la resolución se señala "... sin que sea atendible lo declarado por el procesado en su declaración preparatoria rendida ante éste Juzgado al señalar que les platicó a los judiciales la historia verdadera de los hechos y que le cambiaron todo, que lo estuvieron golpeando varias veces y le pusieron una bolsa en la cabeza, que los

judiciales sacaron un pantalón de la casa y le decían que éste era de él, lo que no es cierto... " (foja 34 anverso).

El juez dio cuenta de la versión de Alfonso Martín del Campo, tanto en la retractación de su declaración ante el Ministerio Público, como en la ampliación de declaración rendida en la etapa de desahogo de pruebas en el proceso. En la sentencia se señala sobre esto que ".. no obra prueba alguna que acredite plenamente que efectivamente dos sujetos entraron a su domicilio y son los que llevaron a cabo la comisión de los delitos que nos ocupan y por el contrario su manifestación de haber sido el procesado quien privó de la vida a los hoy occisos, y que después tomó el vehículo Ford Thunderbird color negro fraguando la forma de evadir su responsabilidad y simulando un secuestro, sí se encuentra corroborada con las pruebas antes especificadas y toda vez que dichas manifestaciones fueron rendidas por el acusado en su primera declaración, sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas, y por consiguiente deben prevalecer sobre las posteriores, y si bien señala el acusado que su confesión fue obtenida a base de golpes, amenazas y torturas, lo anterior no se encuentra corroborado ya que sí obra la fe judicial de las lesiones que presentó al rendir su declaración preparatoria, como se mencionó no obra prueba alguna que demuestre plenamente que dichas lesiones le fueron inferidas por elementos de la policía judicial para aceptar los hechos que se le imputan, sin que sea óbice para llegar a tal conclusión el careo celebrado entre el procesado y el policía judicial Sotero Galván Gutiérrez en el que el procesado le sostiene a su careado que lo golpearon, y éste le contestó que no es cierto e incluso le preguntó si estaba amenazado, contestándole el procesado que no y que el los había matado, a lo que el procesado le contestó que miente, que incluso lo encueraron colocándole una bolsa en la cabeza y golpeándolo en todo el cuerpo y lo hacían de dos en dos, a lo que su careado le vuelve a contestar que sí y vuelve a manifestar el policía judicial que su careado miente y por lo demás cada uno de los protagonistas de dicho careo se sostienen en lo que tienen declarado, y por otra parte existe lo manifestado por el acusado en el sentido de que las lesiones se las provocó al momento del choque del vehículo, otras el mismo se las infirió; situaciones éstas que manifiesta el defensor en su escrito de conclusiones y las que no son de tomarse en consideración por los motivos señalados..... Por otra parte, si bien es cierto que de inspección ocular y judicial se desprende que se encontró un trozo al parecer de media de mujer en el interior de la cajuela del vehículo Ford Thunderbird, también lo es que como ya se dijo no se acreditó la existencia de los supuestos secuestradores, ni mucho menos aún que éstos se hayan quitado las medias que dice el procesado les cubría la cara o las hayan dejado en la cajuela, pues ni siquiera el mismo procesado hace manifestación alguna en este sentido ya que únicamente dice en su declaración exculpatoria, que los sujetos lo subieron a la cajuela y la cerraron... Asimismo, por lo que hace al dictamen oficial de pelos en el que se concluye: Que los pelos encontrados en el lugar de los hechos, así como en diferentes partes del cuerpo de la hoy occisa, son diferentes a los del procesado, es pertinente señalar que dicho a dicho sitio habían entrado varias personas después de los hechos, pudiendo pertenecer a cualquiera de dichas personas" (fojas 37 anverso y reverso y foja 39 anverso)

Por otra parte, en la foja número 40 de la sentencia, se señala textualmente:

"Para efectos de la individualización de la pena, éste Juzgado acata lo dispuesto por los artículos 320, en relación con el 51 y 52 del Código Penal, por lo que tomando en consideración la naturaleza dolosa de las acciones y la ferocidad empleada para ejecutarla; la extensión del daño causado y de que el acusado no corrió peligro alguno, que al momento de suceder los hechos, dicho acusado contaba con 26 años de edad, soltero, católico, comerciante, con instrucción de 2º semestre de administración de empresas, originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que no es afecto a las bebidas embriagantes, ni a ningún tipo de estimulantes, que no ha padecido ningún tipo de

enfermedad, con un ingreso de tres millones de pesos mensuales, que no depende de él ninguna persona, que no cuenta con anteriores ingresos a prisión, que entre el procesado y los ofendidos existían relaciones familiares, que el motivo que lo llevó a delinquir fue el hecho de que sintió coraje hacia el occiso porque éste le había reclamado la pérdida de un dinero, y que privó de la vida a la occisa a efecto de que no denunciara los hechos, que los hechos sucedieron en el domicilio que habitaban los ofendidos así como el procesado, todo lo cual revela una peligrosidad entre la media y la máxima, exactamente entre ambos extremos y toda vez que nos encontramos ante la presencia de un concurso real o concurso material de delito, será de imponerse la sanción del delito mayor que en el presente caso lo es cualquiera de los homicidios calificados, por lo que se estima justo y equitativo imponerle al acusado por el delito de homicidio en agravio de Gerardo Zamudio Aldaba una punición de 42 cuarenta y dos años 6 seis meses de prisión, y en uso de la facultad que le concede a este órgano jurisdiccional el artículo 64 del Código Penal, se le aumenta en 42 cuarenta y dos años 6 seis meses más por el diverso delito de homicidio en agravio de Juana Patricia Martín del Campo de Zamudio, ambas que sumadas nos dan un total de 85 ochenta y cinco años de prisión, pero en acatamiento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 64 antes mencionado y 25, del Código Penal, en el que se señala que el límite máximo de la pena será de 50 cincuenta años, por lo que en forma total y definitiva se le imponen a Alfonso Martín del Campo Dodd la pena de 50 cincuenta años de prisión, privativa de la libertad que deberá compurgar dicho sentenciado en el lugar que al efecto designe la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, computándose a partir de la fecha de su detención por motivo de la presente causa, que lo fue el día 30 treinta de mayo de 1992."

En el punto resolutivo quinto de la sentencia condenatoria, el Juez ordena se le informe al sentenciado el derecho y término que conforme a la Ley tenía para interponer el recurso de apelación contra la misma, en caso de no estar conforme con ella, el cual fue de cinco días. El sentenciado y su defensor particular, el Lic. en Derecho José Faustino Mejía Hernández, fue debidamente notificado de la sentencia el mismo día de su emisión, el 28 de mayo de 1993, y en esa misma fecha y oportunidad Alfonso Martín del Campo plasmó de puño y letra su deseo de apelar la sentencia. (foja 41, reverso).

Las diligencias estudiadas son muestra clara y contundente que el propio Juez valoró en su momento la versión exculpatoria del sentenciado y que estuvo al tanto de sus argumentos con relación a su declaración ministerial coaccionada, sin embargo, en uso de sus atribuciones legales calificó los hechos con base en las pruebas ofrecidas por las partes y decidió sentenciar al procesado.

199. La presentación de los argumentos que sustentaron la apelación del sentenciado estuvo a cargo de una abogada defensora de Oficio, misma que presentó por escrito, el día 13 de julio de 1993, los agravios en contra de la sentencia de primera instancia. Dichos agravios consistieron en la supuesta violación a diversos preceptos del Código Penal, con respecto específicamente a al responsabilidad del sentenciado.

Entre los argumentos mencionados se hallan los siguientes:

> "... si bien se puede dar por acreditado el cuerpo del delito, no así responsabilidad de mi defenso"

"... esta Defensa Social considera que el Juez *a quo* sólo conjetura la participación de mi defenso en los hechos delictuosos, sin que los elementos allegados a la investigación sean suficientes para acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinado".

La defensa solicita que el órgano de apelación reste o, en su caso, anule el valor de las siguientes pruebas que obran en el proceso:

a) Las declaraciones de Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral.

b) La declaraciones de Gerardo García Chavarría y Raúl García Chavarría.

c) La declaración de Inés Guzmán Sánchez.

d) La declaración de María Violeta Garibay Martínez.

e) Las declaraciones de Bessie Dodd de Martín del Campo, José María Rosano Moreno, Roberto Chávez Reséndiz, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Oscar Moreno Espinosa.

f) La declaración de Sergio Sierra Fuentes

g) La declaración de Antonio Arreola Díez

h) La declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara.

i) La declaración de Víctor Ramón Zetina Vargas.

j) La declaración de Carlos Alberto García Urquiza y Claudia Rosales Pamanes.

k) La declaración de Sotero Galván Gutiérrez.

"Por lo que respecta a lo declarado por el agente de la Policía Judicial Sotero Galván Gutiérrez resulta inverosímil y poco creíble lo que manifiesta en cuanto a que mi defenso le señaló en forma espontánea y sin coacción alguna que el había causado la muerte de los hoy occisos ...."

"... resulta increíble que si como sostienen las autoridades ya mencionadas fraguó (Alfonso) la forma de cubrirse para que no se le inculpara por la muerte de los occisos, declara de buenas a primeras que él era el culpable, declaración rendida ante la policía judicial y que según menciona el Instructor es la misma que vierte en su declaración ministerial, pero que no ratifica en preparatoria, ya que manifiesta que fue coaccionado físicamente para que se inculpara él mismo, situación que se robustece con el certificado de lesiones que consta en autos y con lo manifestado con lo ya manifestado por el Federal de Caminos Víctor Ramos Zetina Vargas en cuanto a que mi defenso presentaba un golpe en la frente sin mencionar las escoriaciones que éste presentaba en el cuerpo, las cuales bien pudieron ser causadas como menciona mi defenso por los Agentes Judiciales; por lo que es de considerarse que su declaración inculpatoria rendida ante la Policía Judicial y que ratifica en la ministerial carece de valor probatorio, toda vez que fue obtenida mediante coacción".

Por otra parte, menciona que a favor de la inocencia de su defendido operan, el dictamen pericial que señala que la cajuela del automóvil en donde se supone que lo secuestraron, sí puede ser abierta desde el interior y que había manchas de sangre humana en dicha cajuela.

Además refiere que cabellos encontrados en el interior del auto y en un zapato tenis encontrado en la escena del crimen, no pertenecían ni a los occisos, ni al sentenciado, "lo que pone de manifiesto que bien puede ser cierto lo manifestado por mi representado en su declaración preparatoria en cuanto a que la muerte de los hoy occisos fue ocasionada por los individuos que penetraron a la casa y que posteriormente lo secuestraron."

200. Además del escrito de agravios presentado por la Defensoría de Oficio, Alfonso contó con la asesoría privada del Despacho Jurídico del Lic. Elías Cruz Delgadillo, según se aprecia en el escrito que por su propio derecho presentó en su favor ante el tribunal de apelación. Dicho escrito fue presentado de manera extemporánea el 15 de julio de 1993, pero se aprecia que el sentenciado se dice inocente y argumenta únicamente aplicación de diversos preceptos Constitucionales, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales.

201. En sus argumentos, el sentenciado afirma que el cuerpo del delito no se encuentra legalmente comprobado, "en virtud de que los vestigios o pruebas materiales de su perpetración fueron preparadas y dejadas en el lugar de los hechos por terceras personas con el propósito de hundirme, ya que los mismos objetos, no presentan ni huellas del exponente, ni huellas hemáticas que correspondieran a los hoy occisos ni al suscrito".

- "El juzgador no valoró ni tomo en cuenta el certificado de integridad física las lesiones que me causaron las personas que me secuestraron, y luego mis aprehensores como son dos golpes contusos en parte posterior de ambos parietales escoriaciones dermo epidérmicas en región paraexiliar del ojo izquierdo, escoriaciones en el lado izquierdo de la nariz, golpe contuso en la parte en que nace el bello de la frente, escoriaciones en rodilla derecha, máculas color rojo en la parte media de la cara, escoriaciones dermoepidérmicas en codo, y en dorso mano derecha".

- "El juzgador no valoró en mi beneficio dicho certificado de integridad física, sino todo lo contrario, ya que con el mismo acreditó que al secuestrarme y detenerme ejercieron violencia física en mi contra". "El certificado de estado físico ... no lo valoró en mi beneficio sino en mi perjuicio ya que con el mismo demuestro que fui objeto de secuestro ejerciendo actos de violencia en mi perjuicio".

- El juez no valoró: El informe de Policía Judicial que corre agregado en autos; el parte de accidente rendido por la Policía Federal de Caminos, con el cual dice demostrar el sentenciado que iba en la cajuela posterior; la reconstrucción de hechos no tiene ninguna validez jurídica; la primera declaración no tiene ninguna validez jurídica; la declaración de Inés Guzmán Sánchez, no fue valorada, las declaraciones de Gerardo García Chavarría, Raúl García Cavarría y Nora Violeta Garibay Martínez, no tienen tampoco validez jurídica.

- En la parte final del escrito de Alfonso Martín del Campo se señala "nombro como mi defensor en segunda instancia al señor Lic. Elías Cruz Delgadillo, a quien solicito se le haga saber su nombramiento para los efectos de la aceptación y protesta del cargo".

202. El día 15 de julio de 1993, a las 10:15 horas, los Magistrados dieron cuenta de las constancias y escritos de la defensa de oficio del sentenciado y del pedimento del Ministerio Público.

203. La resolución definitiva y de fondo fue emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993. La Sala mencionada asentó expresamente que

de conformidad con la ley, supliría la deficiencia u omisiones que presentaren sus escritos de agravios.

204. De conformidad con la resolución de apelación, plasmada en 40 fojas escritas por ambas caras (80 cuartillas tamaño oficio), el cuerpo del delito de homicidio quedó comprobado con los siguientes elementos de convicción que tienen valor probatorio:

1. Con la declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara.

2. Con la inspección ocular, fe ministerial de cadáveres, lesiones, levantamiento y traslado de los mismos.

3. Media filiación y actas médicas, así como nuevo reconocimiento de los cadáveres.

4. Acta médica número 35, de fecha 30 de mayo de 1992.

5. Certificado de necropcia de fecha 31 de mayo de 1992, realizado al cadáver de Juana Patricia Martín del Campo.

6. Declaración de Alfonso Martín del Campo de la Peña.

7. Declaración de Oscar Moreno Espinoza.

8. Acta médica número 36, de fecha 30 de mayo de 1992.

9. Certificado de necropcia de fecha 31 de mayo de 1992, realizado al cadáver de Gerardo Zamudio Aldaba.

10. Declaración de Roberto Zamudio Aldaba.

11. Declaración de María del Carmen Aldaba Corral.

12. Fe ministerial de necropsias.

205. La responsabilidad penal de Alfonso Martín del Campo Dodd, en la comisión de los delitos de homicidio en agravio de su hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd, y su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, por los que lo acusó formalmente el Agente del Ministerio Público, *quedó plenamente comprobado de actuaciones, tomando en consideración el contenido de todos y cada uno de los elementos de prueba que quedaron transcritos en el considerando cuatro* (la lista transcrita) y, además, por *el material probatorio siguiente*[219]:

- La declaración de Alfonso Martín del Campo Dodd, de 30 de mayo de 1992, en comparecencia ante el agente del Ministerio Público.
- La diligencia de reconocimiento de ropas e instrumentos del delito.
- Fe ministerial de cuchillos.
- Declaración de Inés Guzmán Sánchez.

[219] Sentencia de primera instancia.

- Dictamen de criminalística de campo 30 de mayo de 1992. 0000483
- Diligencia de reconstrucción de hechos de 30 de mayo de 1992, a las 22:15 horas.
- Dictamen criminalístico de cuchillos.
- Dictamen de criminialística emitido por el Perito tercero en discordia, Gregorio A. Ávila Olguín.
- Informe del área de criminalística de campo de la Procuraduría General de Justicia del D.F. de 30 de mayo de 1992.

206. En otras partes de la sentencia de primera instancia se aprecian los siguientes elementos relevantes:

- Alfonso Martín del Campo Dodd, en comparecencia ante el Ministerio Público, fue enterado de los hechos que se investigan, así como del delito de homicidio que se le imputa y la penalidad para el mismo, aceptando los hechos. (foja 24, reverso)
- La historia de enfrentamiento con dos agresores, supuestos homicidas, y de su posterior secuestro y escape, *lo inventó para evadir su responsabilidad en el homicidio*. (foja 27 reverso).
- Que no participó además de el sentenciado, otra persona en la comisión del delito. (foja 28 anverso).
- Que las lesiones que mostraba ante el Ministerio Público, fueron resultado del percance que tuvo en su huída y algunas de ellas auto infligidas. (foja 28 reverso).
- El Tribunal Superior de Justicia otorgó a la declaración ministerial de Alfonso Martín del Campo, más no a la que supuestamente realizó ante la Policía Judicial, un valor probatorio pleno ya que *fue producida de manera espontánea, no inducida, de hechos propios y en su contra y además, conforme al principio de inmediatez procedimental, pues la misma fue vertida por su producente con una marcada cercanía a los hechos que se realizan, sin el tiempo necesario para un aleccionamiento o reflexión acerca de establecer elementos de descargo a su favor (como en un momento determinado intentó hacerlo valer), tal como se evidencia con la puesta a disposición del encausado de mérito ante el Agente el Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en la Décima Agencia Investigadora, por parte del Agente de la Policía Judicial que dijo llamarse Sotero Galván Gutiérrez.... En donde se establecen las 13:30 horas, del día 30 de mayo de 1992, en que se efectúa dicha puesta a disposición, así como también la comparecencia de dicho servidor público ante el propio órgano investigador, circunstancias que hacen creíble lo declarado por el ahora procesado ante el representante social* (foja 29 anverso).
- Alfonso Martín del Campo Dodd cambió su versión original y cayó en contradicciones, manifestando incluso que se encontraba en avanzado estado de ebriedad, por lo que no recordaba que había sucedido. (foja 29 reverso).
- La declaración ministerial de Alfonso Martín del Campo, no la supuesta declaración ante la Policía Judicial en la que confesó y detalló su coartada, fue valorada por el órgano

jurisdiccional como el único *indicio de prueba*, no señala que sea una verdadera prueba ni la única, sino un mero *indicio*, que resultaba relevante *en cuanto al esclarecimiento de los hechos*, esto es, la verdad histórica de lo sucedido, así, *es el único que establece un panorama respecto de la forma en que acaecieron y los restantes elementos probatorios son indicios que la corroboran y la tornan verosímil, ya que como se ha anticipado, se aprecia de manera fehaciente, que la declaración del encauzado ofrece una secuencia causal, lógica, coherente y congruente de la que es posible vincular directamente la acción desarrollada por él y el resultado material conocido.* (foja 30 anverso)

- Como puede observarse, el Tribunal Superior de Justicia otorgó a la declaración rendida por Alfonso Martín del Campo el valor probatorio de indicio relevante en términos de lo establecido por el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal entonces en vigor, que establece "el Ministerio Público, los Jueces y Tribunales según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se buscará, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones para poder considerar su conjunto como prueba plena".

- En la reconstrucción de hechos intervinieron el indiciado e Inés Guzmán Sánchez, quien hacia las labores del hogar para la familia, por lo que Alfonso Martín del Campo no fue el único que colaboró en dicha diligencia. Además a esta se suma el informe de área de criminalística de campo, suscrito por peritos en la materia, que evidencia *de manera por demás elocuente, la consistencia y verosimilitud de la mecánica relatada por el encausado, ya que, pormenorizadamente confirma todos y cada uno de los momentos relevantes derivados de su confesión* rendida ante el Ministerio Público.

- A mayor abundamiento, *las ropas que refiere el propio acusado uso al momento de llevar a cabo su conducta delictiva, consistiendo estas en una camisa color rojo*, presenta dos manchas, al parecer hemáticas; una playera blanca que también contiene manchas y embarraduras de líquido hemático; un pantalón color negro, que presenta manchas de líquido hemático, una al final de la bragueta y al lado izquierdo de la pierna del pantalón, todas ellas prendas que el inculpado reconoce de su exclusiva propiedad, sin temor a equivocarse, y son las mismas que llevaba puestas el día de los hechos. (foja 30 reverso).

- Otro elemento de cargo que corrobora la declaración del sentenciado son la mecánica de lesiones, plasmada en las necropsias realizadas a los cuerpos de los occisos. Foja 31 reverso. De tal manera, *que en base al conjunto de los elementos probatorios indicados con antelación entre los que destaca, como se ha anticipado y se reitera, la declaración confesoria del encauzado* (se refiere únicamente a la declaración Ministerial), *es factible formular un panorama coherente y verosímil acerca del modo en que ocurrieron los hechos, que motivaron la presente y sin que esta Sala revisora no pase inadvertida, la retracción que respecto a su declaración confesoria en la comisión de los hechos delictuosos que se le imputan, efectúa el ahora procesado ante el órgano jurisdiccional en vía de preparatoria en la que retoma el argumento con el que intentaba fallidamente, establecer elementos de descargo en su favor a propósito de evadir su responsabilidad penal en los mismos.* (foja 32 reverso)

- Respecto de la retractación de la declaración ministerial ante el Juez de Primera Instancia, y de la ampliación de declaración del procesado, la Sala señaló que tales *argumentos no tienen valor probatorio alguno, en virtud de que se contraponen a la realidad de los hechos,*

así como se ven desvirtuados con el acervo probatorio contundente ya valorado que obra en su contra, resultando ser un elemento singular y aislado que durante la secuela procedimental no fue corroborado, ni apoyado con algún elemento convictivo de indubitable valor probatorio. (foja 34 reverso).

- Con relación al dictamen sobre los cabellos encontrados y que no correspondían ni al procesado, ni a los occisos, si bien esto no se discute, es cierto *por una parte, de que dicho documento técnico científico también se desprende que cinco pelos de origen humano, de la región de la cabeza tomados de la mano izquierda de la occisa Patricia Martín del Campo, así como que un pelo único de origen humano de la región de la cabeza, tomados del pelo* (sic, dedo) *del guante proporcionado por el criminalista y, además, que cinco pelos de origen humano de la región de la cabeza tomados del piso del lado izquierdo, por debajo del asiento anterior izquierdo, a cinco centímetros del estribo del Ford Thunderbird color negro.... resultaron ser semejantes a los cabellos de la occisa, Patricia Martín del Campo* (foja 35 anverso).

- Otro punto importante es que la cajuela del automóvil, donde supuestamente estuvo maniobrando por espacio de más de una hora Alfonso Martín del Campo, de acuerdo con el perito en la materia la chapa de dicha cajuela no mostraba huellas o indicios de manipulación (foja 35 reverso). No obstante que según el procesado, había utilizado una llave de birlos en forma de "L".

- Las muestras de líquido hemático en diversos objetos (guante, cajuela, ropas, entre otros), presentados como evidencia, corresponden al tipo de sangre "o". Ambos occisos, comparten el mismo tipo de sangre con el sentenciado. Esto lo hizo evidente el perito Sr. Juventino Montiel Sosa, ofrecido por Alfonso Martín del Campo Dodd y su abogado el Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández.

207. Los anteriores elementos que pueden ser corroborados y ampliados con la lectura completa de la sentencia que se comenta, determinaron que la Sala del Tribunal Superior de Justicia decidiera en apelación y en definitiva, la responsabilidad de Alfonso Martín del Campo Dodd por la comisión de los delitos de homicidio calificado (premeditación, alevosía, ventaja y traición) en contra de sus propios familiares (hermana y cuñado), apoyada en elementos probatorios contundentes.

208. Por lo que se refiere al escrito de agravios presentado supuestamente por Alfonso Martín del Campo, por su propio derecho, este fue considerado extemporáneo y, además, carecía de un elemento fundamental que es la propia firma del supuesto recurrente, por lo que fundadamente fue demeritado.

209. Con relación a la solicitud de la defensa, en el sentido de anular el valor probatorio de numerosos testimonios que obran en la causa penal, la Sala expresó *que no son los únicos elementos de convicción que obran en autos, ni en la presente resolución se les otorgó valor probatorio en contra del inculpado de mérito.*

210. En los puntos resolutivos de la sentencia definitiva, se establece:

"Primera.- Se confirma la sentencia apelada en sus puntos resolutivos primero, tercero y cuarto, por ser acordes a la ley y a las constancias procesales.

Segundo.- Quedan intocados los puntos resolutivos segundo y quinto de la resolución impugnada, el primero por no ser materia de la Alzada y no irrogar agravios al inculpado recurrente y, el último por ser de carácter administrativo.

.....

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los CC. Magistrados de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."

c) No existió violación alguna a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en el caso 12.228.

La Comisión y los peticionarios imputan al Gobierno mexicano la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana ya que, a su juicio, no se respetaron las reglas del debido proceso ni se brindó una tutela judicial efectiva en el caso 12.228.

En el mismo sentido en que se ha procedido para demostrar plenamente la inexistencia del resto de las violaciones que se atribuyen al Estado, en primer término se establecerá el estándar interamericano vigente con relación a los temas señalados.

La Comisión Interamericana señal específicamente la violación al artículo 8 en sus párrafos 1, 2 (c, d, e, f, g) y 3, que se transcriben a continuación:

"Artículo 8. Garantías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza."

Por otra parte, se señala de manera específica la violación al artículo 25.1, mismo que señala textualmente:

"Artículo 25. Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

El artículo 8 y 25 de la Convención se encuentran estrechamente vinculados, el primero de dichos preceptos consagra las reglas básicas del debido proceso legal, mientras que el segundo es el fundamento del deber de los Estados de proveer un instrumento de garantía judicial de los derechos fundamentales, en cuyo tramitación también deben ser observadas las reglas del debido proceso legal.

La honorable Corte ha tenido oportunidad de establecer un importante cúmulo de criterios que dan sentido y alcance a los derechos previstos en los artículos mencionados, de esta manera, la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte, como en muchos otros casos, integran el estándar mínimo que tienen el deber de respetar y garantizar los Estados Partes de la Convención.[220]

El Estado procede ahora a demostrar el cumplimiento al debido proceso legal y a las garantías judiciales en el caso 12.228.

I. El primer aspecto que debe ser abordado es el relativo a si Alfonso Martín del Campo Dodd fue procesado con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de la acusación penal formulada en su contra.

Como puede apreciarse en el apartado de hechos de la presente contestación, tanto en la etapa de Averiguación Previa, como durante el proceso y la substanciación de los recursos de jurisdicción interna que fueron agotados, fueron debidamente observadas las reglas del debido proceso legal, como son la presunción de inocencia y el debido derecho de defensa y de audiencia a favor de Alfonso Martín del Campo Dodd.

---

[220] Corte IDH *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni*, sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C no. 79, párrafos 11 y 112, *Caso Ivcher Bronstein*, sentencia del 6de febrero de 2001, Serie C no. 74, párrafo 136, *Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú)*, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71, *Caso Cantoral Benavides*, sentencia del 18 de agosto de 2000, Serie C no. 69 párrafo 163, *Caso Durand y Ugarte*, sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C no.68, párrafo 102, *Garantías judiciales en estado de Emergencia* (artículo 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A no.9, párrafo 23.

El proceso penal inició el 1° de junio de 1992, a partir del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público contra Alfonso Martín del Campo Dodd por la presunta autoría de éste en los homicidios de su propia hermana Juana Patricia Martín del Campo y de su Cuñado Gerardo Zamudio Aldaba.

Durante la primera etapa de la instrucción, el Juez 55° Penal procedió a informar al inculpado de los beneficios que la Constitución de la República establecía a favor de toda persona acusada de un delito;[221] Alfonso Martín del Campo nombró como su defensor particular al Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández, quien aceptó dicho cargo asumiendo desde ese momento la defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd en el proceso penal.

En la práctica de la diligencia conocida como declaración preparatoria, Alfonso Martín del Campo fue informado debidamente de su derecho a no declarar si así lo deseaba, en lo que señaló el inculpado tuvo absoluta libertad para expresar lo que quisiera en su favor, e inclusive aprovechó dicha oportunidad para retractarse de la declaración que había emitido ante el Ministerio Público, no obstante que dicha diligencia ministerial fue llevada a cabo con las debidas formalidades que la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales establecían. Asimismo, el inculpado hizo referencia a su inconformidad con algunas diligencias de investigación ministerial y señaló haber sido golpeado y presionado por Agentes de la Policía Judicial para confesarse autor de los crímenes que se le imputaban.

El Juez 55° Penal, valoró y calificó jurídicamente los elementos puestos a su disposición, a efecto de decidir si existían elementos para proceder penalmente contra el inculpado, esto es, si se encontraba acreditado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. El día 4° de junio de 1992, dentro de los términos permitidos por la Constitución mexicana, el Juez determinó que sí había elementos para someter a proceso penal a Alfonso Martín del Campo Dodd, en contra del cual dictó un auto de formal prisión, con el que se dio formal inicio al proceso. La defensa particular del sentenciado tuvo oportunidad de inconformarse con la decisión de sometimiento a proceso penal de Alfonso Martín del Campo, mediante la posibilidad de interponer recursos ordinarios y extraordinarios, pero no agotó ninguno de ellos.[222]

En el transcurso del proceso, la defensa de Alfonso Martín del Campo y éste en lo personal, tuvieron una amplia oportunidad para ofrecer y presentar las pruebas y elementos de descargo que consideraron convenientes, todo ello en igualdad procesal de circunstancias con el Ministerio Público a cargo de la acusación. Las pruebas ofrecidas por las partes fueron admitidas y desahogadas de manera oportuna, sin que hubiera menoscabo o inequidad procesal en detrimento de alguno de éstos; el propio Juez 55° Penal ordenó dentro del marco de sus atribuciones, la celebración de diligencias adicionales con el fin de conocer la verdad histórica de los hechos y estar en aptitud de dictar una sentencia justa y apegada a derecho.

---

[221] La fracción III del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba: En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías: "III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria".

[222] Por lo tanto no se cumplió el requisito para la aplicación del artículo 25, *Caso Blake*, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C, no. 36, párr. 104 y Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, serie C no. 30 párr. 89.

Las determinaciones del Juez fueron debidamente fundadas y motivadas, asimismo, las partes tuvieron la más amplia oportunidad de interponer los medios de impugnación que consideraran necesarios, en caso de que la legalidad o justicia de las determinaciones judiciales no les satisficieran.

El proceso en su primera instancia duró cerca de un año, lo cual se encuentra dentro de los márgenes del plazo razonable, siendo dictada la sentencia el 28 de mayo de 1993. En la sentencia el juez dio cuenta de los hechos del caso, las respectivas posiciones del órgano de la acusación y de la defensa del procesado, del cúmulo de elementos de convicción que integraban el expediente, así como de la valoración de los indicios y pruebas ofrecidos que llevaron a dicho Juzgador a la convicción de la culpabilidad de Alfonso Martín del Campo Dodd en la comisión de los delitos que se le imputaron.

En la parte de fundamentación y motivación de la sentencia el Juez se refirió, entre otras cosas, a los argumentos de la defensa, en particular sobre los planteamientos exculpatorios del procesado y determinó que ni éste ni su defensor habían sustentado con pruebas fehacientes su versión de los hechos, ni la supuesta coerción de que habría sido objeto por parte de elementos de la Policía Judicial. La sentencia condenatoria no estuvo apoyada únicamente en la confesión ministerial del procesado, pues éste se retractó de ella, con lo cual tuvo el carácter de un mero indicio que se unión a la cadena de elementos de convicción que arrojaba el expediente.

La defensa de Alfonso Martín del Campo Dodd impugnó la sentencia de primera instancia por considerar que el Juez no había valorado adecuadamente las pruebas, ni la versión ofrecida por la defensa, en pocas palabras que la sentencia había sido dictada al margen del derecho y era injusta. El tribunal que conoció de la apelación, recibió y valoró los elementos puestos a su disposición por la defensa de Alfonso Martín del Campo y de la parte acusadora, y en el fallo de segunda instancia señaló que la actuación del Juez 55° Penal fue apegada a lo dispuesto por las leyes penales sustantivas y de procedimientos, por tal motivo, los agravios hechos valer por Alfonso Martín del Campo resultaron infundados, tampoco en esta etapa fue considerada la declaración ministerial del sentenciado como la única prueba de su responsabilidad, sino como un mero indicio de prueba que se veía apoyado por el resto de los testimonios, diligencias y dictámenes periciales rendidos en el proceso. La sentencia de fondo, de segunda instancia, fue emitida el 17 de agosto de 1993, con lo cual los recursos ordinarios estaban agotados y decididos fundadamente.[223]

La defensa intentó controvertir la sentencia definitiva años después, primero a través de la interposición del juicio de amparo directo con el objeto de cuestionar la constitucionalidad y legalidad del fallo emitido (4 años después de emitida la sentencia), y después mediante la presentación de un incidente de reconocimiento de inocencia (6 años después de pronunciada la sentencia definitiva).

En la tramitación de los recursos extraordinarios y excepcionales, respectivamente, también fueron observadas las reglas del debido proceso legal, puesto que en ambos se analizaron los respectivos conceptos de violación y los elementos de convicción presentados por la defensa del sentenciado. En el caso del amparo, presentado el 18 de junio de 1997, éste tuvo por resultado la confirmación implícita de la sentencia definitiva dictada en el proceso penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd, al determinarse que los agravios manifestados por la defensa no demostraron que la sentencia o el procedimiento se apartaban de los señalado por la Constitución y las leyes aplicables. La sentencia de fondo en este caso fue emitida el 2 de diciembre de 1997.

---

[223] Cfr. Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C número 52, párr. 161 - características del Tribunal de segunda instancia-.

Por lo que se refiere al incidente de reconocimiento de inocencia del inculpado, éste no fue *rechazado* como afirma la Comisión y los peticionarios, puesto que los magistrados que conocieron del mismo entraron al análisis de fondo, a efecto de determinar si en efecto los elementos presentados por la defensa a favor de la inocencia del Alfonso Martín del Campo eran suficientes para invalidar las pruebas en las que sirvieron de fundamento a la condena. La petición fue presentada el 6 de abril de 1999 y decidida en forma unánime el 29 de abril de ese mismo año, en la que se declararon infundadas las pretensiones de Alfonso Martín del Campo y de su defensa.[224]

Es importante mencionar que la compatibilidad de la resolución del incidente de reconocimiento de inocencia con la Constitución Federal y las legislación procesal penal, era susceptible de combatirse o cuestionarse de inmediato mediante la interposición de un juicio de amparo ante un Juez federal de amparo (Juez de Distrito) en primera instancia y en apelación ante los Tribunales Colegiados de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante lo anterior, a sabiendas de estar evidentemente fuera de tiempo, los peticionarios intentaron agotar formalmente dicho juicio dos años después de fenecido el término para ello.

Con la determinación última que recayó al recurso de apelación intentado contra la determinación del Juez de Distrito, el asunto culminaba en la jurisdicción interna quedando en todos los casos firme la decisión definitiva dictada en 1993.

Por otra parte, las reglas del debido proceso legal, también fueron observadas en el juicio que interpusieron los peticionarios contra la determinación de no ejercicio de la acción penal (por falta de comprobación de los elementos del delito o de la presunta responsabilidad), a que se arribó durante la integración de la Averiguación Previa por tortura y otros ilícitos, a partir de investigación iniciada en 1995. De hecho, también se dio oportunidad a los peticionarios de expresa su conformidad o desacuerdo con la determinación de no ejercicio de la acción penal propuesta en diversas ocasiones en el ámbito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Estas consideraciones, que se explican con detalle en el apartado de hechos de la presente contestación y con el análisis de las resoluciones dictadas, permiten afirmar sin duda alguna que en el presente caso Alfonso Martín del Campo fue procesado con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por jueces y magistrados competentes, independientes e imparciales, en la sustanciación de la acusación penal formulada contra Alfonso por el homicidio de su propia hermana y cuñado. En ninguna de las etapas judiciales señaladas se vio disminuido el derecho de defensa del Alfonso Martín del Campo Dodd.[225]

II. El artículo 8.2 establece el derecho fundamental de toda persona a la presunción de inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Esta disposición expresa un principio básico de la justicia penal contemporánea que consiste en poner un dique a la arbitrariedad, de modo que la actuación de los órganos de procuración e impartición de justicia en materia penal no partan de simples sospechas o apreciaciones subjetivas carentes de todo

---

[224] Cfr. Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana, sentencia del 8 de diciembre de 1995, serie C no. 22, párrafo 66.

[225] El hecho de que un recurso no produzca el resultado deseado no implica que el recurso no sea adecuado y/o efectivo, cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, serie C, no. 4, párrafo 67, Caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, serie C, no. 5, párrafo 70 y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia del 15 de marzo de 1989, serie C no. 6, párrafo 92.

fundamento, en la imputación de la comisión de un delito contra una persona; sino que su actuación sea imparcial, seria y objetiva a efecto de proceder penalmente cuando se encuentre satisfecha la comprobación de un ilícito penal y la posible responsabilidad de quien o quienes lo hayan perpetrado, con el fin de que un órgano jurisdiccional dotado de las garantías de independencia e imparcialidad, decida en definitiva si en efecto está acreditada la existencia del delito y si procede sancionar penalmente a la persona a quien se le imputa su comisión.

La presunción de inocencia permea todo el proceso penal, de manera que una persona no sea considerada como responsable hasta en tanto un Juez o Tribunal así lo declare por sentencia firme. Otra faceta de la *presunción de inocencia* es el objeto a que están dirigidas las etapas de investigación y la etapa de proceso, en la etapa de investigación se busca en un primer momento el esclarecimiento de los hechos, con el fin de determinar si los mismos constituyen o no una conducta delictiva de conformidad con la Ley y, por otra parte, determinar al o a los posibles autores del ilícito, así como el grado y el tipo de participación en los hechos delictivos.[226]

En el presente caso, la presunción de la inocencia de Alfonso Martín del Campo Dodd se respetó desde los momentos previos a su puesta a disposición el sábado 30 de mayo de 1992, cuando arribó a la Décima Agencia Investigadora del Ministerio Público en calidad de víctima/testigo, en la cual permaneció toda la mañana y parte de la tarde de la fecha señalada, hasta el momento en que concurren, por una parte, las contradicciones en que incurre en su relato inicial de que había sufrido un asalto en la casa de su hermana y cuñado, por parte de dos individuos que decidieron secuestrarlo, para lo cual lo introdujeron en la cajuela del vehículo Thunderbird negro y lo condujeron 10 kilómetros antes de la Caseta de cobro de la caseta Cuernavaca - Ciudad de México, donde el vehículo sufrió un percance, estrellándose en el vado del camino.

No obstante el número de contradicciones en que Alfonso Martín del Campo incurrió y que lo llevaron finalmente a aceptar *motu proprio* haber cometido el delito de homicidio de su propia hermana y su cuñado, en una entrevista ante el policía Sotero Galván Gutiérrez, éste en todo momento respeto al derecho a la presunción de inocencia del indiciado. Inclusive, la puesta a disposición de Sotero Galván hace énfasis en que la persona es considerado como presunto responsable del ilícito cometido.

El Ministerio Público no determinó presentar directamente al indiciado ante el Juez, pues el principio de presunción de inocencia impide hacer esto sin contar con la comprobación suficiente del cuerpo delito y la presunta responsabilidad. Es por esto que el Ministerio Público procedió a llevar a cabo la diligencia de declaración del indiciado, al que le hizo saber los delitos que se le imputaban y los derechos que le asistían como presunto responsable; no obstante esto, las diligencias de investigación continuaron los días sábado 30 y domingo 31 de mayo, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar si en efecto Alfonso Martín del Campo estaba relacionado con éstos.

La presunción de inocencia se demuestra también en el hecho de que la mañana del lunes 1° de junio de 1992, el Ministerio Público puso al indiciado a disposición del Juez, en calidad de *presunto responsable de los homicidios.* El propio Juez llevó a cabo las diligencias previstas en la Constitución Federal, con pleno respeto a los derechos del inculpado, entre otros, de no declarar si así era su deseo o a hacerlo en presencia de un abogado.

---

[226] La inocencia se presume hasta que el juez CONDENA con pruebas suficientes, como lo es en este caso, cfr. Caso Cantoral Benavides, sentencia del 28 de agosto de 2000, serie C no. 69, párr. 120. Y la prisión preventiva no vulnera el principio de presunción de inocencia, puesto que es una medida cautelar que busca asegurar el desarrollo eficiente de las investigaciones y que el inculpado no eludirá a la justicia, Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1991, Serie C no. 35, párr. 77.

En la diligencia de declaración preparatoria, Alfonso Martín del Campo nombra un defensor particular, quien estuvo presente y participo en su desarrollo. Dentro del plazo constitucional concedido al Juez para determinar la situación jurídica del indiciado, se determinó a juicio de éste y con base en los elementos de convicción con que contaba, que existían elementos suficientes que acreditaban la existencia del delito de homicidio y también la presunta responsabilidad del Alfonso Martín del Campo en su comisión. Estas actuaciones que corresponden a la primera etapa de la instrucción, cumplen también con el requisito de la presunción de inocencia puesto que el Juez decidió que existían elementos que comprobaban por una parte el cuerpo del delito y, por la otra, la presunta responsabilidad del inculpado, por lo que satisfacían los requisito para inicia el proceso penal correspondiente en el que cual las partes presentarían las pruebas correspondientes a si en efecto la existencia del delito estaba comprobada y también a si se corroboraba o no la responsabilidad del acusado.

El hecho mismo de someter el asunto a una decisión judicial independiente e imparcial, a través de un proceso penal regulado por la Constitución y las leyes, apegado a los estándares internacionales del debido proceso, es una garantía de que la presunción de inocencia perduró hasta en tanto el Juez decidió con base en los elementos de convicción del expediente: 1) la comprobación efectiva del ilícito penal cometido y 2) la responsabilidad del procesado.

En el proceso seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, no hubo decisiones ni actuaciones judiciales que hubieran menoscabado en modo alguno su defensa o su presunción de inocencia; un aspecto adicional que confirma lo anterior es la oportunidad con que contó la defensa en igualdad de circunstancias con el órgano de la acusación (Ministerio Público), de interponer los medios de impugnación que estimaran procedentes si consideraban que algún acto o decisión se había apartado de aquello que establecen las disposiciones que rigen el procedimiento.

En efecto, como se ha señalado en diversas partes de la presente contestación, los medios de impugnación y de defensa son tanto o más importantes que los procesos mismos en los que pueden tener lugar, son el medio a través del cual se logra mantener la regularidad jurídica de las decisiones y etapas procesales. Para cada etapa procesal existen una serie de medios de impugnación (ordinarios y extraordinarios) que garantizan a alguna de las partes contar con la oportunidad de combatir ante órganos superiores o inclusive de un orden de decisión diverso (como pueden ser los órganos jurisdiccionales de amparo), los actos y decisiones procesales que considere inconstitucionales, ilegales o injustos.

En el caso específico del proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo, si éste o su defensa hubieren considerado que se les estaba dejando en completa indefensión o que no estaban satisfechos los extremos del debido proceso legal, además de los recursos ordinarios con que contaban, podían incluso interponer en el curso del proceso un juicio de amparo ante los tribunales federales, mismo que tendría por efecto detener la tramitación de la causa penal y reponer las actuaciones desde la etapa previa inmediata a que se determinó un actuar inconstitucional o ilegal.

Lo anterior tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[227] así como por la Ley de Amparo en su artículo 114,

---

[227] "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la

fracción IV, que señala la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito cuando se trate de *actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.* En estos casos, el Juez de Distrito tiene las más amplías facultades para ordenar a las autoridades de oficio y de plano suspender los actos reclamados (sin necesidad de solicitud expresa y sin mayor tramitación).[228]

Es de destacarse que la propia Ley de Amparo prevé la competencia concurrente de los órganos jurisdiccionales federales y de los locales tratándose de la violación a las garantías individuales (derechos humanos), previstas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. De éstos resultan pertinentes únicamente los dos primeros artículos.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 1992, señalaba en su parte conducente:

> ".... Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial."

El artículo 19 constitucional establecía en su parte conducente:

> "Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la presunta responsabilidad del acusado..."

Si el procesado o su defensor particular hubieran estimado violaciones a los derechos humanos con respecto a los artículos señalados, tenían la posibilidad de plantear el juicio de amparo ante un juez de Distrito en primera instancia o ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo cual habría permitido a éstos conocer y decidir sus planteamientos sobre la licitud de la detención y la actuación judicial en la primera etapa de la instrucción. Sin embargo, como se ha insistido, los peticionarios no acudieron a dicho recurso que resultaba idóneo y se encontraba a su disposición.[229]

---

autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;"

[228] El artículo 123 de la Ley de Amparo señala que la suspensión de los actos reclamados procede:

"II.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada".

[229] Cfr. Caso Bámaca Velásquez, sentencia del 25 de noviembre de 2000, serie C no. 70, párrafo 192, Caso Cantoral Benavides, *sentencia del 18 de agosto de 2000, serie C no. 69, párrafo 103, Caso Cesti Hurtado sentencia del 29 de* septiembre de 1999, serie C no. 56, párrafo 121, Caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C no. 52, párrafo 187, Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) sentencia del 8 de marzo de 1998, serie C no. 37, párrafo 164, Caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, serie C no. 36, párrafo 102, Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997, serie C no. 35, párrafo 63 y 65, Caso Castillo Páez, sentencia del 3 de noviembre de 1997, serie C no. 34, párrafo 83, Caso Neira Alegría y otros, sentencia del 19 de enero de 1995, serie C no. 20, párrafo 102 y *Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías* (artículo 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A, no. 8, párrafo 35.

Con base en los argumentos precedentes se demuestra la observancia absoluta de los órganos jurisdiccionales mexicanos, federales y locales, del principio de presunción de inocencia Alfonso Martín del Campo Dodd hasta que fue encontrado jurídicamente responsable de los delitos que se le imputaban, tal como se plasmó en las sentencias de primera y segunda instancias en las que se decidió en definitiva la acusación penal interpuesta contra dicha persona.

III. El artículo 8.2 (párrafos c, d, e, f y g) y 8.3 prevén como garantías mínimas de toda persona durante el proceso, las siguientes:

> "c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
>
> d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
>
> e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
>
> f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
>
> g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
>
> 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza."

Con el fin de precisar el sentido y alcance de los deberes del Estado en estos supuestos, el Gobierno se permite traer en este punto, sus argumentos con relación al contexto en el que el artículo 8 debe ser entendido y aplicado, que es únicamente el del proceso.

Por lo que se refiere al artículo 8.2.c, el Estado afirma de manera categórica que desde la etapa de la investigación por parte del Ministerio Público, que no forma parte del proceso penal, y durante las dos instancias de éste, así como en los sucesivos recursos, juicios y procedimientos Alfonso Martín del Campo ha gozado plenamente del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, de conformidad con la finalidad y la naturaleza de cada una de las etapas e instancias señaladas:

En la Averiguación Previa, cuya finalidad es la comprobación de la posible comisión de un delito y la identidad de su o sus probables autores, Alfonso Martín del Campo se atribuyó espontáneamente la plena autoría de los homicidios de Juana Patricia y Gerardo ante el Agente de la Policía Judicial Sotero Galván Gutiérrez, quien lo puso a disposición del Ministerio Público. En su declaración vertida ante éste en presencia del Defensor de Oficio y sin coacción o intimidación de naturaleza alguna, Alfonso Martín del Campo admite nuevamente ser quien asesinó a la joven pareja y narra la coartada que hasta ese momento había sostenido de que habrían sido dos sujetos desconocidos, con la cabeza cubierta con medias de mujer negras, uno de ellos con las manos vendadas y otro con un cuchillo, quienes dieron muerte al matrimonio y que después lo golpearon intensamente, para secuestrarlo en uno de los automóviles de la familia y, finalmente, abandonarlo en la carretera a las afueras de a ciudad debido a que el vehículo se accidentó.

Alfonso Martín del Campo reconoció y aceptó que eran de su propiedad las ropas ensangrentadas que vestía y las que fueron halladas en la escena del crimen. Asimismo, durante la reconstrucción de hechos realizada en el domicilio del matrimonio asesinado donde él también vivía, Alfonso explicó a los participantes en la diligencia la manera en que sucedieron los hechos.

Durante las menos de 46 horas que duró la integración de la Averiguación Previa, en virtud de estar Alfonso Martín del Campo en calidad de detenido, si hubiera sido el deseo de éste seguir sosteniendo su coartada, habría podido colaborar con los encargados de la investigación y proporcionar desde las primeras horas a los Policías de Caminos los datos que permitieran identificar el paradero y las características de los supuestos sujetos que habrían cometido el delito, esto es, dar los mayores detalles posibles de su fisonomía, su complexión, ropas, tono de voz, manera específica en que se dirigían a él y entre ellos mismos, palabras altisonantes que hubieren proferido, y todos los elementos que guiaran a su captura; habría podido explicar desde ese momento, por lo menos las siguientes cuestiones:

- Cómo es posible que dos sujetos desconocidos puedan entrar a un complejo de casas que cuentan con fuertes medidas de seguridad, y penetrar a una de ellas. Todo esto sin forzar una sola cerradura, ni despertar o llamar la atención de las familias que en ellas viven o de los integrantes mismos de la casa a la que penetraron (Inés Guzmán, tres niñas, Juana Patricia, Gerardo y el propio Alfonso Martín del Campo).

- Cómo se explica que dos sujetos que penetran a un domicilio en las circunstancias señaladas, ya sea con la finalidad de robar o hurtar y matar a dos de sus habitantes, no vayan armados y tomen del lugar de los utensilios de cocina dos cuchillos y un par de guantes de látex rojos. El sentido común indica que quien lleva esa finalidad específica y penetra a un domicilio, no sabe con qué se va a enfrentar y lo comprensible sería ir armado, no armarse ya estando en el propio domicilio.

- Cómo se explica que en plena oscuridad dos sujetos con la cabeza cubierta con medias negras de mujer puedan tener siquiera un mínimo grado de visibilidad que les permitan entrar y guiarse a través de una casa de tres pisos y varias habitaciones. De igual forma, cómo comprender que uno de los sujetos lleve en efecto las manos vendadas y otro no, y que en tales circunstancias pueda siquiera empuñar un cuchillo.

- De qué manera puede entenderse que dos sujetos que asesinan a un matrimonio con tanta saña, se comporten comprensivos, amables y hasta generosos con un testigo presencial de los hechos, y no sólo conversen con el por largo rato, sino que le perdonen la vida a petición suya y todavía tengan el tiempo para pedirle y esperarlo a que se vista.

- Cómo se puede explicar que una persona se enfrente a golpes con dos sujetos, uno de ellos armado con un cuchillo y no presente una sola herida de arma blanca.

- Cómo fue que un sujeto pudo con toda facilidad romper una toalla de baño para amordazar a Alfonso Martín del Campo y soltar y poner dicha mordaza cada vez que le preguntaban algo durante la charla que sostuvieron.

- De qué forma se puede entender que dos sujetos que matan de treinta y seis y veintinueve puñaladas a una pareja en su propio hogar, amordacen a un testigo de los hechos para introducirlo en la cajuela de un vehículo, pero eso sí, sin atarle las manos.

- Es racional y de sentido común, a manera de pregunta, que una persona que ha pasado por una experiencia de ese tipo, tenga la serenidad de juicio para que una vez que "logro" salir del vehículo en que la habían secuestrado, se tome la molestia de sustraer el equipo de sonido y depositarlo en la cajuela del auto, cerrar éste completamente y emprender una larga caminata, para después abordar un autobús de pasajeros y arribar a las oficinas de la Policía de Caminos.

- Cómo explicar que Alfonso Martín del Campo nunca aclaró que la cartera con dinero que se encontró en la bolsa de su hermana, que dejaron los supuestos agresores en el vehículo donde lo secuestraron, era en realidad suya y que contenía inclusive tarjetas de crédito a su nombre.

El Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez adscrito a las Agencias Décima y Trigésima Primera Investigación, fue enterado de que se encontraba detenido el Sr. Alfonso Martín del Campo Dodd por el delito de homicidio, acudiendo a la primera de las Agencias mencionadas para entrevistarse con él. En la entrevista se identificó con Alfonso Martín del Campo, a quien le señaló que si era su deseo lo asistiría; que mientras estuviera sujeto a investigación podía nombrar a una persona de su confianza o a un abogado particular, indicándole además que tenía el derecho de no declarar en su contra o abstenerse de declarar. Alfonso Martín del Campo le señaló que deseaba declarar en su presencia, por lo que el defensor procedió a tomar la aceptación y protesta del cargo conferido.[230]

En efecto, durante las diligencias de Averiguación Previa y antes de emitir su declaración ante el Ministerio Público, Alfonso Martín del Campo, estando en calidad de presentado como probable responsable de los hechos, se le hizo saber que podía nombrar defensor o persona de su confianza que lo asistiera en su declaración, el derecho de conocer los términos de la imputación que obraba en su contra, el nombre de los denunciantes, el de comunicarse inmediatamente con quien estimara conveniente, el de no declarar en su contra sí así lo deseaba, asimismo, se le hizo saber el contenido del artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el sentido de que tenía derecho a nombrar un facultativo (médico) particular a efecto de que lo examinara, manifestando el presentado que era su deseo que le fuera nombrado el defensor de oficio adscrito a la Agencia Investigadora.

En la Averiguación Previa se da constancia de dicha diligencia, en los siguientes términos: "Nombramiento, aceptación y protesta del cargo. Se toma protesta a Rolando Torres Martínez, defensor de oficio, quien acepta el nombramiento que hiciera en su favor Alfonso Martín del Campo, y promete cumplirlo fielmente mientras dure el cargo". Cabe mencionar que el Defensor de Oficio es un servidor público que no depende del Ministerio Público,[231] ni se encuentra vinculado administrativa ni jerárquicamente con éste, así que su labor de asistencia es independiente.

El defensor de oficio en la etapa de Averiguación Previa tiene sobre todo la función de estar presente en las diligencias, hacer notar alguna irregularidad en su desarrollo y atestiguar que no se lleve a cabo ningún acto que atente contra la integridad del indiciado.[232]

---

[230] Declaración de el Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez, de fecha 10 de julio de 1995, en la Averiguación Previa por delitos diversos, incluyendo tortura SC/3839/95-03.

[231] La actuación de dichos servidores estaba regulada por la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 1987.

[232] La entonces vigente Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, disponía en su artículo 18, entre otras cosas, que los Defensores de Oficio en el área de Averiguaciones Previas tendrían entre sus funciones: "I.- Atender las solicitudes de Defensoría de Oficio, que le sean requeridas por el indiciado o infractor, Agente del Ministerio

Por lo que se refiere propiamente al proceso penal, el artículo 8.2.c fue satisfecho a cabalidad, puesto que el inculpado contó con representación jurídica privada a cargo del Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández. Durante cerca de un año y cuatro meses que duró la tramitación del proceso penal contra Alfonso Martín del Campo Dodd, en sus dos instancias, tuvo el tiempo y los medios suficientes para preparar adecuadamente su defensa y ante la retractación que hizo de su declaración ministerial en la diligencia de declaración preparatoria, tuvo una amplia oportunidad de probar su versión exculpatoria de los hechos, los puntos ya señalados párrafos arriba y la existencia misma de los supuestos agresores que habrían victimado a cuchilladas sólo a su hermana y cuñado.

Alfonso Martín del Campo tardó tres años para denunciar ante el Ministerio Público la supuesta tortura de que alega fue objeto el día 30 de mayo de 1992, por parte de elementos de la Policía Judicial.

Alfonso Martín del Campo tardó cuatro años antes de interponer el recurso extraordinario de nulidad (amparo - casación) contra la sentencia de segunda instancia que le fue adversa y contó con asesoría jurídica de tipo privado.

Alfonso Martín del Campo decidió interponer el incidente de reconocimiento de inocencia, cerca de seis años después de dictada la sentencia condenatoria de segunda instancia y también en esta etapa contó con asesoría jurídica de tipo privado. Alrededor de dos años más tarde, interpuso un amparo indirecto para impugnar la decisión que declaró infundado el reconocimiento de inocencia, esto es, ocho años después de dictada la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso penal en el cual fue encontrado culpable.

Los párrafos anteriores, corroborados y relacionados con el apartado de hechos de la presente contestación, son una muestra clara de que el artículo 8.2.c no fue transgredido por el Gobierno mexicano.

El Estado procede a exponer ante la Honorable Corte la satisfacción de los párrafos d, e, y f, del artículo 8 de la Convención Americana, relativos a los derechos del inculpado en el proceso penal.

> d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
>
> e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
>
> f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

Las dos primeros párrafos se refieren a dos aspectos del mismo tema, inspirados en la finalidad última de que toda persona procesada penalmente no quede sin defensa contra las acusaciones en su contra.

Público o Juez Calificador; II.- Estar presente en el momento en que su defendido rinda su declaración ante la autoridad correspondiente; III.- Entrevistarse con el indiciado o infractor para conocer de viva voz la versión personal de los hechos y los argumentos que pueda ofrecer a su favor, para hacerlos valer ante la autoridad del conocimiento; IV.- Asesorar y auxiliar a su defenso en cualquier otra diligencia que sea requerido por la autoridad correspondiente; VII.- Vigilar que se respeten las garantías individuales de su representación".

Así, se establece, por una parte, el derecho incontestable del inculpado de proveer su propia defensa o de elegir a quien habrá de defenderlo (con quien debe permitírsele comunicarse de manera libre y privada) y, por la otra, en caso de que el inculpado no ejerza tales derechos o no los ejerza en tiempo, el Estado le provea un defensor.

Sólo por lo que se refiere al proceso penal (1ª y 2ª etapa de la instrucción, que conforman la primera instancia y contemplando por supuesto la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal)[233] y los medios de impugnación que se han interpuesto ante los órganos judiciales locales y federales,[234] Alfonso Martín del Campo Dodd se ha defendido por sí mismo, con la colaboración de sus familiares y ha contado con la representación en juicio y la asistencia jurídica privada de numerosos abogados particulares; los siguientes son los licenciados en derecho[235] a los que los peticionarios han hecho referencia explícita:

- Licenciado en Derecho José Faustino Mejía Hernández.

- Licenciado en Derecho Elías Cruz Delgadillo.

- Licenciado en Derecho Raúl Gil Letechipia.

- Licenciado en Derecho Joel Amparo Lara.

- Licenciado en Derecho Alberto Díaz Munguieta.

- Licenciado en Derecho Francisco Javier Ortega del Bosque.

- Licenciado en Derecho Raúl Marroquín Rosales.

- Licenciado en Derecho Juan Antonio Vega Báez.

- Licenciado en Derecho Arturo Requesens Galnares.

- Licenciada en Derecho Patricia Marín Fagoada.

El Gobierno de México ante esta evidencia, sostiene firmemente que no fue transgredido el artículo 8.2 de la Convención, en sus párrafos "d" y "e", como infundadamente lo afirman la Comisión y los peticionarios. Alfonso Martín del Campo tuvo acceso a asistencia letrada y le fue posible defenderse en "igualdad de circunstancias".[236]

---

[233] Durante la tramitación de la segunda instancia del proceso penal contra Alfonso Martín del Campo, fueron designados los Licenciados en Derecho: Mariano Albor Salcedo, Juan Ramón de Caso González y Jorge Rangel Rivas.

[234] Se hace la aclaración, puesto que en los procesos civiles y del orden familiar que han tramitado los peticionarios, han contado con un amplio número de abogados particulares.

[235] A mayor abundamiento, en el apartado correspondiente a los hechos en el presente documento, se precisan los documentos en los que constan los nombramientos señalados de estos profesionistas y la etapa en la cual fueron designados.

[236] cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, sentencia del 21 de junio de 2002, serie C no. 94 párrafos 146 y 149 y *El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías al debido proceso legal,* Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, serie A no. 16, párrafos 117 y 119. Ver también Caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C número 52, párr. 141.

Por lo que se refiere al artículo 8.2.f, ésta disposición señala la oportunidad que debe tener el inculpado o su defensor de *interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.*[237]

Por lo que se refiere a la causa penal instruida contra Alfonso Martín del Campo, donde se decidió en definitiva la existencia del delito y la responsabilidad y participación del inculpado en los hechos del caso, su defensa, mediante escrito de fecha 25 de junio de 1992, ofreció como elementos de prueba, los siguientes: La ampliación de declaración de su cliente Alfonso Martín del Campo;[238] la ampliación de la declaración de los siguientes testigos: Inés Guzmán Sánchez, Nora María Violeta Garibay Martínez, Gerardo García Chavarría, Raúl García Chavarría, Miguel Angel Gutiérrez Lara; la implicación del informes presentados por Sotero Galván Gutiérrez y por Víctor Ramón Zetina Vargas y Carlos Alberto García Urquiza; la pericial en materia criminalística a cargo de Juventino Montiel Sosa; la pericial en materia de mecánica automotriz a cargo de Mauro Zaragoza Vázquez; los careos que se llegaren a practicar; la presunción legal y humana que derive de las anteriores.

El agente del Ministerio Público a cargo de sostener la acusación en el proceso, mediante escrito de fecha 25 de junio de 1992, ofreció como evidencias y medios de convicción los siguientes: ampliación de declaración del procesado Alfonso Martín del Campo Dodd; ratificación de informe y ampliación de declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara; ratificación de informe y ampliación de declaración de Sotero Galván Gutiérrez; ratificación de informe y ampliación de declaración de Víctor Ramón Zetina Vargas, Manuel Guillermo Hernández Ortega y Carlos García Urquiza; ampliación de declaración de Gerardo García Chavarría, Raúl García Chavarría, Nora María Violeta Garibay Martínez, Inés Guzmán Sánchez; testimonial de Claudia Rosales Pamani, Sergio Sierra Fuentes, Antonio Arreola Díez y peritaje a cargo de Genaro García Guerrero.

El juez, mediante proveído de esa misma fecha, certificó el ofrecimiento de pruebas de las partes en el proceso, haciendo las precisiones legales correspondientes respecto de ellas, y fijó el día 14 de julio de 1992 para la celebración de la Audiencia inicial de desahogo o de práctica de dichas pruebas.

Con motivo del desahogo de todas la pruebas ofrecidas por las partes, fueron celebradas un total de 7 audiencias en las siguientes fechas: 14 de julio, 20 de agosto, 24 de agosto, 9 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre, siendo la última de ellas la del 14 de diciembre de 1992.

En todas y cada una de las audiencias de desahogo de prueba, las partes estuvieron presentes y se les dio la debida oportunidad de intervenir en ellas, observándose además las disposiciones procesales del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y la garantía de audiencia (debido proceso legal).[239] El día 1° de abril de 1993, el Juez 55° Penal declaró cerrada la etapa de instrucción.

En la etapa de tramitación de la apelación, la defensa del inculpado solicitó que el órgano de apelación restara o, en su caso, anulara el valor de las siguientes pruebas que obran en el proceso: las declaraciones de Roberto Zamudio Aldaba y María del Carmen Aldaba Corral; las declaraciones de Gerardo García Chavarría y Raúl García Chavarría; la declaración de Inés Guzmán Sánchez; la declaración de María Violeta Garibay Martínez; las declaraciones de Bessie Dodd de Martín del

---

[237] Tales supuestos se cumplieron en este caso, tal y como obra en el expediente anexo, cfr. Con lo expresado por la Corte en el Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C número 52, párr. 154

[238] La declaración que sería ampliada es la que fue rendida ante el juez el 1° de junio de 1999.

[239] Ver informe del Juez 55° Penal rendido ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 1° de abril de 1993.

Campo, José María Rosano Moreno, Roberto Chávez Reséndiz, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Oscar Moreno Espinosa; la declaración de Sergio Sierra Fuentes; la declaración de Antonio Arreola Díez; la declaración de Miguel Angel Gutiérrez Lara; la declaración de Víctor Ramón Zetina Vargas; la declaración de Carlos Alberto García Urquiza y Claudia Rosales Pamanes; y la declaración de Sotero Galván Gutiérrez.

Como puede apreciarse, la defensa del sentenciado ofreció las pruebas, testigos y peritos que consideró pertinentes, así como hizo valer los argumentos a favor de Alfonso Martín del Campo Dodd. La misma libertad y oportunidad tuvo el sentenciado en la tramitación de los medios de impugnación extraordinario y excepcional que tramitó con posterioridad, considerando que en el amparo únicamente se plantearon consideraciones sobre la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones y resoluciones procesales.

Por lo que se refiere al planteamiento de la supuesta inocencia del sentenciado, los peticionarios lo pretendieron acreditar con los siguientes elementos:

1) La negación de haber contado con asistencia jurídica de su predilección, en la etapa de Averiguación Previa, en la que emitió su confesión ministerial. Refiere que el defensor de oficio que le fue asignado, no era un abogado profesional. Por tal motivo, señala que su confesión carece de toda validez.

2) La resolución administrativa por la cual se sanciona a Sotero Galván Gutiérrez por infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así como la diligencia judicial de careo, como único elemento en que se apoyó dicha resolución.

3) Que tanto la información sobre el defensor de oficio, como la responsabilidad administrativa fincada a Sotero Galván el 14 de octubre de 1994, esto es, cerca de 5 años atrás, no las conocían. No obstante que los peticionarios manifestaron esto bajo protesta de decir verdad, el 26 de abril de 1996 Alfonso Martín del Campo expresó en una diligencia ante el Ministerio Público que estaba enterado de ello, incluso tiempo atrás.

Con relación a este mismo punto, cabe destacar que el 25 de marzo de 1994, la Embajada Americana dirigió un escrito al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que refirió que la Sra. Bessie Dodd Burke, proporcionó a dicha misión diplomática una copia del oficio SGDH/949/94 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y solicitaba información sobre los alegatos de presuntas violaciones a los derechos humanos contra Alfonso Martín del Campo. A esta comunicación se dio respuesta el 5 de abril de 1994 por parte de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esto confirma de manera indubitable que los peticionarios sí estaban al tanto del procedimiento administrativo seguido ante la Contraloría, pero no lo hicieron valer ante los tribunales de amparo de manera oportuna.

A partir de esto, la defensa colegiada de Alfonso Martín del Campo señaló: "Por lo que, considero que estos elementos probatorios, invalidan la prueba confesional en que se sustenta la sentencia pronunciada en mi contra".

Es importante recordar que los peticionarios extrañamente omitieron señalar las determinaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 29 de enero de 1999, que basada en elementos de prueba y análisis minuciosos, incluyendo las propias declaraciones y manifestaciones de Alfonso Martín del Campo, contradicen de manera sustantiva y frontal el sentido y alcance que han pretendido

dar los peticionarios a la decisión administrativa de la Contraloría contra el agente Sotero Galván Gutiérrez, además de que desvirtúa la mecánica y el supuesto origen de las lesiones del sentenciado.

Con base en estas consideraciones a manera de una muestra de que los peticionarios contaron incluso con oportunidades más amplias todavía que las de únicamente *interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.* En tal sentido, el Estado cumplió con lo dispuesto por el artículo 8.2.f de la Convención Americana.

Otros de los derechos del inculpado durante el proceso penal, consisten en *no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable* y que la validez de la confesión del inculpado se cumple si ésta es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Con respecto a estos derechos, el Estado afirma que durante el proceso penal no se produjo confesión alguna del inculpado, por lo que no resulta aplicable la disposición del artículo 8.2.g y 8.3 en el presente caso; existió una retractación de la declaración autoinculpatoria rendida ante el Ministerio Público en una etapa previa al proceso penal, por lo que únicamente resultaría aplicable el artículo 138 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, respecto del valor en juicio que se puede dar a la confesión extrajudicial, rendida espontáneamente y con las debidas garantías.

El artículo 138 del ordenamiento ya citado expresa que "para todos los efectos legales, la confesión extrajudicial se valorizará de acuerdo con las reglas que este código establece". Esto significa que sólo se dará valor a la confesión rendida en una etapa distinta del proceso penal, si la misma cumplió con determinados requisitos, como son: que esté plenamente comprobada la existencia del delito, que sea hecha por persona no menor de 18 años, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia física o moral, que sea hecha en presencia del defensor ante el Ministerio Público, que el indiciado esté plenamente enterado del procedimiento y que no vaya acompañada de otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil.[240] Todos estos requisitos fueron debidamente satisfechos en el caso 12.228.

El Gobierno de México solicita a la Honorable Corte que los elementos y argumentos aquí presentados, se consideren de manera complementaria con relación a los ya señalados respecto a la inexistencia de violaciones al artículo 5° de la Convención Americana y a los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana sobre tortura, desarrollados en esta misma contestación.

Con base en los elementos aquí presentados resulta procedente y fundado concluir que el Estado mexicano respetó lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso 12.228.

La Honorable Corte a través de su jurisprudencia ha puesto de manifiesto la estrecha vinculación entre los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y toda vez que se imputa al Gobierno de México la violación al artículo 25.1 de dicha Convención, es necesario referirse a la inexistencia de dicha violación, así haya quedado implícitamente demostrado por los argumentos y elementos ya presentados.

---

[240] Ver artículo 249 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Cabe recordar que el artículo 25.1 de la Convención señala textualmente: :

"Artículo 25. Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

El artículo 25 es el fundamento interamericano del deber de los Estados de proveer instrumentos de garantía de carácter jurisdiccional para la protección de los derechos fundamentales. Los recursos judiciales provistos por el ordenamiento jurídico de los Estados deben además satisfacer las reglas del debido proceso legal. De esta manera, se cumple también la obligación general prevista en el artículo 1.1 de la Convención Americana que dispone el deber de todo Estado parte en ésta de *respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.*

El Estado no discute ni controvierte que el incidente de reconocimiento de inocencia sea un recurso idóneo y efectivo, en los casos en que satisfacen los requisitos de procedencia jurídica, que por tratarse de un recurso excepcional son de carácter limitado y estricto, por lo que se trata de comprobar es precisamente la inocencia de una persona que ya ha sido condenada por sentencia firme.

Los peticionarios acudieron a dicho recursos seis años después de haber sido dictada la sentencia definitiva en el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd, no obstante que podían haberlo interpuesto inmediatamente después de haber sido emitida aquella.

En el presente caso, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, después de analizar los argumentos y elementos que proporcionaron los peticionarios no *rechazó* el recurso, como erróneamente afirma la Comisión, sino que lo declaró infundado, esto es, que en efecto estudió y valoró la solicitud. Con el fin de esclarecer este punto, a continuación se reproduce lo ya señalado en el apartado de hechos de la presente contestación.

Los peticionarios interpusieron el 6 de abril de 1999 ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, un incidente de reconocimiento de inocencia, respecto del cual cabe hacer los siguientes comentarios:

a) Alfonso Martín del Campo, nuevamente cambia de abogados particulares para que se encarguen de su defensa: en esta ocasión nombra cuatro Licenciados en Derecho: Raúl Marroquín Rosales, Juan Antonio Vega Báez, Arturo Requesens Galnares y Patricia Marín Fagoada.

b) En el escrito de interposición del reconocimiento de inocencia, la defensa colegiada de Alfonso Martín del Campo, reproduce en los puntos I a VIII lo que esencialmente había planteado ya en otras etapas en los órganos de impartición de justicia, mismos que ya se habían pronunciado sobre tales aspectos y decidido en definitiva sobre los mismos.

c) En el punto número IX del escrito, en el capítulo de hechos, se señala: "... el proceso en primera instancia se siguió en el Juzgado 55° de lo Penal del Distrito Federal, correspondiéndole el número de expediente el citado al rubro del presente expediente (sic). Se emitió sentencia el 28 de mayo de 1993, encontrándome penalmente responsable por la comisión del delito de

homicidio en agravio de Gerardo Zamudio Aldaba y Juana Patricia Martín del Campo de Zamudio, imponiéndome una pena de 50 años de prisión."

d) En el punto número X del mismo escrito, en el capítulo de hechos, se señala: "La sentencia fue apelada por mi abogado, radicándose en la octava sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondiéndole el Toca número 454/93, resolviendo el recurso interpuesto al confirmar la sentencia de 1ª instancia el día 17 de agosto de 1993"

e) En el punto número XI del citado escrito, en el capítulo también de hechos, se menciona "En junio de 1997 presenté demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva emitida por la Octava Sala, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el Distrito Federal, correspondiéndole el número 2004/97-475. Con fecha 2 de diciembre de 1997, el Tribunal de Amparo resolvió que la justicia de la unión no me amparaba ni protegía contra la resolución emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."

El planteamiento de la supuesta inocencia del sentenciado, lo pretendieron acreditar con los siguientes elementos:

1) La negación de haber contado con asistencia jurídica de su predilección, en la etapa de Averiguación Previa, en la que emitió su confesión ministerial. Refieren que el defensor de oficio que le fue asignado, no era un abogado profesional. Por tal motivo, señala que su confesión carece de toda validez.

2) La resolución administrativa por la cual se sanciona a Sotero Galván Gutiérrez por infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así como la diligencia judicial de careo, como único elemento en que se apoyó dicha resolución.

3) Que tanto la información sobre el defensor de oficio, como la responsabilidad administrativa fincada a Sotero Galván el 14 de octubre de 1994, esto es, cerca de 5 años atrás, no las conocían. No obstante que los peticionarios manifestaron esto bajo protesta de decir verdad, el 26 de abril de 1996 Alfonso Martín del Campo expresó en una diligencia ante el Ministerio Público que estaba enterado de ello, incluso tiempo atrás.

Con relación a este mismo punto, cabe destacar que el 25 de marzo de 1994, la Embajada Americana dirigió un escrito al Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que refirió que la Sra. Bessie Dodd Burke, proporcionó a dicha misión diplomática una copia del oficio SGDH/949/94 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y solicitaba información sobre los alegatos de presuntas violaciones a los derechos humanos contra Alfonso Martín del Campo. A esta comunicación se dio respuesta el 5 de abril de 1994 por parte de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esto confirma de manera indubitable que los peticionarios sí estaban al tanto del procedimiento administrativo seguido ante la Contraloría, pero no lo hicieron valer ante los tribunales de amparo de manera oportuna.

A partir de esto, la defensa colegiada de Alfonso Martín del Campo señaló: "Por lo que, considero que estos elementos probatorios, invalidan la prueba confesional en que se sustenta la sentencia pronunciada en mi contra".

Como fundamento jurídico los peticionarios invocaron la parte primera de la fracción II, del artículo 614 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señala que el reconocimiento de inocencia procede: "Cuando después de la sentencia aparecieren documentos que invaliden la

prueba en que descanse aquella o las presentadas al jurado y que sirvieron de base a la acusación y al veredicto".

Los solicitantes extrañamente omitieron señalar las determinaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 29 de enero de 1999, que basada en elementos de prueba y análisis minuciosos, incluyendo las propias declaraciones y manifestaciones de Alfonso Martín del Campo, contradicen de manera sustantiva y frontal el sentido y alcance que han pretendido dar los peticionarios a la decisión administrativa de la Contraloría contra el agente Sotero Galván Gutiérrez, además de que desvirtúa la mecánica y el supuesto origen de las lesiones del sentenciado.

Luego de allegarse las constancias ofrecidas por los solicitantes, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió su decisión el 29 de abril de 1999. De la cual se puede deducir los razonamientos y fundamentos de derecho siguientes:

a) Tanto la defensa particular, como el agente del Ministerio Público expusieron por escrito sus respectivos alegatos, opinando éste último que los planteamientos de la defensa eran infundados.

b) El 22 de abril se efectuó la audiencia de vista, en los que la defensa y el Ministerio Público ratificaron sus manifestaciones.

c) La resolución administrativa por la cual se sanciona a Sotero Galván Gutiérrez por infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no acredita que dicho agente haya aceptado la imputación que se le hacía, pues no sólo la negó, sino que en careo al que fue enfrentado con el sentenciado, después de la frase en que éste afirma que el policía aceptó haberlo golpeado, Sotero Galván le reitera a su careado procesado que miente. Dicho documento no invalida las pruebas en que descansa la sentencia condenatoria.

d) Dicha resolución, según los abogados de Alfonso Martín del Campo, invalida la prueba confesional en que se sustentó la sentencia dictada en su contra, sin embargo el Tribunal manifiesta que esto es incorrecto, porque dicha resolución no se sustentó únicamente en la declaración ministerial del sentenciado, sino en el resto de las pruebas que adminiculadas llevaron a la convicción plena de los magistrados, con fundamento en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Los elementos de prueba corroboraron la declaración del entonces indiciado y la tornaron verosímil.

e) Las lesiones que presentó el indiciado, son congruentes con las que refirió se habría auto infligido para encubrir su responsabilidad, con las que sufrió al victimar los occisos y aquellas producidas al estrellarse el vehículo en que viajaba.

f) El dictamen del perito criminalista tercero en discordia, Gregorio Ávila Olguín confirma la participación de un único agresor.

g) El nombramiento de Rolando Torres Martínez como defensor de oficio no invalida las pruebas en que se sustentó la sentencia, puesto que éste fue quien aceptó el cargo que le confirió en su favor Alfonso Martín del Campo Dodd, el cual manifestó su deseo que le fuera nombrado como tal el defensor de oficio adscrito a la agencia del Ministerio Público. Esto tampoco invalida las pruebas en que se sustentó la sentencia.

h) Lo descrito en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, no invalida tampoco las pruebas que sirvieron de base a la sentencia dictada contra Alfonso Martín del Campo Dodd. Tampoco lo hacen las notas periodísticas y recortes ofrecidos por la defensa colegiada del sentenciado.

i) Las documentales que ofrece la defensa del sentenciado, ni individual, ni conjuntamente invalidan o demeritan de manera alguna el conjunto de elementos de prueba que sirvieron para sustentar la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada contra Alfonso Martín del Campo Dodd.

Tal como se señaló, los Magistrados de la Décima Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resolvieron el 29 de abril de 1999, por unanimidad, declarar infundada la solicitud de reconocimiento de inocencia del sentenciado.

Cabe señalar que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, los peticionarios tenían 15 días hábiles, luego de que les fue notificada la sentencia recaída al reconocimiento de inocencia, para interponer un Juicio de Amparo indirecto a efecto de combatir las violaciones constitucionales y legales que dicha resolución *per se* les producía en su opinión. Por último, contra la resolución que recayera al amparo interpuesto, además, cabía la interposición de un recurso de revisión (apelación), ante los Tribunales Colegiados de Circuito o ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los peticionarios dejaron pasar la oportunidad de impugnar la decisión del reconocimiento de inocencia, al no interponer en tiempo el amparo señalado. De haber interpuesto en tiempo y forma dicho amparo, podrían haber hecho valer sus argumentos y, si le hubiera sido favorable la decisión de éste, podría haber sido revocada la sentencia que declaró infundados los planteamientos de la defensa colectiva de Alfonso Martín del Campo; se hubiera ordenado al Tribunal Superior de Justicia emitir una nueva resolución subsanando las infracciones que se hubieren cometido o, en su caso, reponer el procedimiento, atento a lo cual existían posibilidades de que dicha resolución fuera favorable a los intereses de los peticionarios.[241]

El 19 de marzo de 2001, con cerca de dos años de extemporaneidad imputable a los peticionarios, se presentó ante el Juez de Distrito en Turno un amparo directo (sic) contra la resolución del reconocimiento de inocencia dictada por los Magistrados de la Décima Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 29 de abril de 1999. El juicio de amparo se tramitó ante el Sexto Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal, correspondiéndole el número de expediente 484/2001 y siendo resuelto el 16 de abril de 2001, en el sentido de sobreseer el juicio de amparo al considerar que éste fue presentado de manera extemporánea.

El 3 de mayo de 2001 los peticionarios interpusieron un recurso de revisión en contra de la sentencia de sobreseimiento del Juzgado de Distrito. La revisión fue tramitada ante el 5° Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en el Distrito Federal bajo el expediente 945/2001. El órgano jurisdiccional que conoció y resolvió el recurso interpuesto, decidió confirmar la decisión impugnada el 3 de septiembre de 2001, por haber sido tramitado extemporáneamente el juicio de amparo ya comentado.

El Estado se permite llamar la atención de la honorable Corte respecto a que la Comisión confunde la idoneidad y eficacia de los recursos, con la fundamentación de las pretensiones de los peticionarios y

---

[241] Cfr. Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, serie C no. 30, párrafo 89 y Caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, serie C no. 36, párr. 104

los méritos del caso concreto. Si bien en este caso los tribunales federales de amparo no conocieron del fondo del asunto, esto no es imputable a dichos órganos jurisdiccionales, sino a los propios peticionarios que acudieron a los mismos con más de dos años de extemporaneidad, cuando tenía para ello únicamente 15 días hábiles. El Estado se permite remitir a los argumentos que presentó sobre excepciones preliminares, en lo concerniente a la audiencia de octubre de 2000 ante la CIDH y a sus comunicaciones posteriores sobre el particular.[242]

Los órganos jurisdiccionales que han conocido de los medios de impugnación, extraordinarios y excepcionales, para combatir la sentencia definitiva condenatoria contra Alfonso Martín del Campo Dodd, no han confirmado el valor de ninguna confesión arrancada por tortura, puesto que la existencia de ésta no ha sido demostrada, pese a que ya fue motivo de investigación por el Ministerio Público, a partir de que fue denunciada ante éste en 1995, esto es, tres años después de sucedidos los hechos. El Gobierno de México se opone a que sea calificada como tortura, hechos respecto de los cuales: 1) órganos especializados y técnicos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, determinaron la inexistencia de violaciones a los derechos humanos, 2) órganos de investigación del delito han confirmado en diversas ocasiones que no se reúnen los elementos que integran la conducta de tortura y 3) un órgano jurisdiccional federal ha dejado firme ésta última decisión, sin que a su vez su sentencia haya sido combatida, por lo cual ha causado estado.

La configuración de presuntas violaciones al artículo 25, así como al resto de los preceptos de la Convención y de la Convención Interamericana sobre tortura, no se actualizan, si los peticionarios no han acudido en tiempo y forma a agotar los recursos que el ordenamiento mexicano tiene previsto, y que estuvieron en todo momento a su alcance, como son:

1. El amparo-habeas corpus para combatir la supuesta detención arbitraria y prolongada de que habría sido objeto Alfonso Martín del Campo Dodd, por parte de la policía judicial y el Ministerio Público, en la etapa de averiguación previa.

2. El recurso de apelación, para combatir la legalidad del auto de formal prisión dictado contra Alfonso Martín del Campo Dodd, contra la decisión recaída a éste procedía también el amparo.

3. El amparo-habeas corpus para combatir el mismo auto de formal prisión dictado por el Juez 55° Penal, en defecto de la apelación, que tampoco fue interpuesto.

4. El juicio de amparo indirecto durante la tramitación de la primera instancia del proceso penal, en caso de considerar que se habían cometido violaciones irreparables en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd.

5. El recurso de revisión (apelación) contra la sentencia del juez de Distrito en amparo, que declaró el sobreseimiento por actualizarse causales de improcedencia, interpuesto contra la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por el Ministerio Público, respecto de la denuncia de tortura y otros delitos.

- Es importante también conocer los recursos que fueron interpuestos de forma extemporánea:

---

[242] La ley establece plazos perentorios, dentro de los cuales se llevó la tramitación del amparo en un plazo razonable, considerando los criterios que esta misma Corte ha fijado en el caso Genie Lacayo (sentencia del 29 de enero de 1997, serie C no. 30 párrafos 77, 78, 79, 80 y 81), complejidad del asunto, actuación de las partes y carga de trabajo de los tribunales, cfr. Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Rosa, Rey Terry Revoredo Marsano vs. Perú) sentencia del 31 de enero de 2001, serie C no. 71, párrafo 93.

6. La denuncia penal por tortura, presentada en 1995, con el fin de que el Ministerio Público estuviera en aptitud de investigar los hechos, calificarlos jurídicamente y acusar penalmente de resultar procedente.

7. El juicio de Amparo indirecto, contra la determinación que declaró por unanimidad infundadas las pretensiones de reconocimiento de inocencia del inculpado (dos años después de ésta) y, por lo tanto, también el recurso de revisión contra la sentencia del juez de Distrito.

En virtud de lo anterior, es procedente concluir que el Estado mexicano no es responsable de la violación al artículo 25.1, y que cumplió cabalmente con su obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales de Alfonso Martín del Campo Dodd.

VI. Argumentos del Gobierno de México con relación a las pretensiones de reparación.

El Gobierno de México ha demostrado en el presente caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indebidamente conoció, admitió, trasmitió y resolvió la queja presentada por los peticionarios en el caso 12.228, y que las actuaciones de las autoridades mexicanas que conocieron del caso ha estado conforme con los estándares internacionales fijados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la honorable Corte. Asimismo, se han evidenciado motivos manifiestos que hacen aplicables las excepciones preliminares opuestas por el Estado mexicano.

De conformidad con lo anterior, no procede reparación alguna en el presente caso a cargo del Gobierno mexicano.

No obstante lo anterior, de haber decidido la honorable Corte que tendría competencia para conocer del presente asunto o sólo respecto a ciertos hechos precisos del mismo, en caso de que hubiere decidido declarar la responsabilidad del Gobierno de México, solicita atentamente, tomar en cuenta los argumentos y evidencias siguientes, con relación a las pretensiones de reparación de la Comisión y de los peticionarios, sobre las bases siguientes.

1) De resultar procedente algún motivo de reparación, ésta debe limitarse a la acreditación y los alcances precisos de la responsabilidad estatal. La actuación de las autoridades, especialmente teniendo como referencia un proceso judicial, no se desenvuelve en forma unilateral, los peticionarios también participaron en la tramitación, desenvolvimiento y resultado de los procesos y medios de impugnación que plantearon.

   En tal sentido, sus desaciertos, ya sean actos u omisiones procedimentales, deberán también ser tomados en cuenta para efectos de fijar la responsabilidad que corresponde al Estado y el grado de ésta.

2) Como complemento a lo anterior, por lo que se refiere a las pretensiones monetarias de los peticionarios, debe precisarse con todo escrúpulo aquellos conceptos que requieren una comprobación fehaciente e indubitable, ya que de otro modo el procedimiento contencioso ante la

honorable Corte estaría desvirtuando su naturaleza, para convertirse en un litigio utilizado para satisfacer pretensiones poco genuinas y más bien *mercantilistas.*[243]

3) Los mismos parámetros deberán aplicarse a las organizaciones que no aparecen en la petición inicial del caso de fecha 13 de julio de 1998, y que sólo se sumaron a éste más de un año después, al ver una posible oportunidad para figurar e intentar justificar sus propias agendas. Si dichas organizaciones comparten el fin último del Estado, de que en el presente caso se haga verdadera justicia, sus supuestas erogaciones, en caso de ser acreditadas y justificadas, habrán tenido un buen fin, aún cuando la razón no esté de su lado.

   Asimismo, cabe traer a esta parte lo que se mencionó en el apartado II de la presente contestación, en el sentido de que la Comisión Interamericana en su demanda solicita a la honorable Corte que ordene reparar las violaciones contra Alfonso Martín del Campo Dodd y que sea indemnizado éste y se cubran los gastos y costas en que hayan incurrido tanto Alfonso en calidad de víctima, como sus familiares, respecto a los gastos y costas en que hubieren incurrido por sus actuaciones en la tramitación del caso en México y ante la CIDH, así como las que se originen ante la honorable Corte.[244] Es evidente que la Comisión no consideró que las organizaciones y las personas ajenos a los ya señalados, que figuraron en la tramitación del caso ante las instancias internas e internacionales, debieran ser resarcidos en los gastos y costas en que hubieran incurrido y menos aún indemnizados, por lo que deberá estarse a esta clara limitación, en caso de que proceda decisión judicial alguna sobre el particular.

4) Otro aspecto debe ser la distinción entre aquello derivado de manera indefectible de la violación que llegare a acreditarse, por los actos u omisiones que se llegaran a atribuir fundadamente al Estado, y lo que deriva del involucramiento voluntario, consentido o incluso involuntario de personas distintas del sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd. En efecto, toda persona debe ser responsable de sus decisiones conscientes y de prever razonablemente las consecuencias de éstas, de manera que si una persona se sitúa a sí misma en una situación de vulnerabilidad y genera o le han inculcado expectativas no acordes con la realidad, es dicha persona o quien la influyó o situó en dicha posición, la o los únicos responsables del dolor y las aflicciones que hubieren producido.

   En este mismo supuesto se encuentran aquellos que sin poder manifestar su propio consentimiento, han sido puestos por terceras personas en una situación, que podría generar a futuro alguna aflicción emocional.

5) La permanencia en prisión de una persona que ha sido encontrada culpable de un delito grave, como lo es el homicidio de integrantes indefensos de su propia familia, por supuesto es causa de indignación para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y aprecio por la vida humana. No debe perderse de vista que en este caso las víctimas primigenias de los hechos cometidos por Alfonso Martín del Campo han sido Tamara, María Fernanda y Brenda, tres pequeñas niñas que en

---

[243] La honorable Corte ha señalado a este respecto que "La reparación comprende, pues, las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado tanto en el plano material como en el moral. La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para la víctima o sus sucesores". (cfr. Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 32, párr. 43; Caso Castillo Páez, Reparaciones, supra 31, párr. 53 y caso del ferrocarril de la bahía de Delagoa, LA FONTAINE, Pasicrisie internationale, Berne, 1902, p. 406; Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999, Serie C No. 48, p. 34).

[244] Párrafo 8.b de la demanda de la CIDH.

ese entonces contaban con 2, 4, y 6 años, respectivamente.[245] La propia decisión de la honorable Corte, aún cuando decida exclusivamente sobre los méritos del caso y la compatibilidad de actos u omisiones estatales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, definitivamente interesa a las menores, aún cuando lo que más deseen en la vida es superar el trauma que les ha ocasionado perder sus padres de manera cruel[246] y, lo que es más lamentable, haber sido testigos presénciales de ello.

6) Toda violación a los derechos humanos produce efectos, por lo menos anímicos, los cuales, como toda vivencia o experiencia humanas son asimilables por las personas de manera distinta. Debe esta manera, habrá que hacer una cuidadosa distinción entre el impacto real y objetivo derivado de una violación a los derechos humanos imputable al Estado, y aquello que es generado por la propia persona fuera de límites razonables y comprensibles.

   De igual manera, en caso de decidirse sobre la existencia de responsabilidad por parte del Estado, ésta no puede decretarse ni hacia el pasado ni tampoco al futura *ad infinitum*, por lo que deberá ser precisada atendiendo a la incidencia de los hechos, a la competencia *ratione temporis* de la honorable Corte, o a partir del último acto generador *per se* de responsabilidad estatal, lo cual permitirá con toda claridad fijar los parámetros cuantitativos y temporales de la reparación.[247]

En los párrafos siguientes se mostrará un panorama sobre el tema de la reparación de conformidad con los estándares y criterios vigentes en el sistema interamericano, los cuáles deberán ser el parámetro y límite de una eventual decisión sobre el particular.

1. Por lo que se refiere a la inclusión de personas distintas a Alfonso Martín del Campo Dodd.

La Honorable Corte desde los primeros casos que decidió (Loayza Tamayo y Castillo Páez) estableció el criterio de no aceptar *de plano* como víctimas a aquellas personas que no aparecieran como tales en

---

[245] En el caso Villagrán Morales y otros, se señaló que las circunstancias de la muerte de las víctimas, habían provocado en los familiares no sólo angustia sino un considerable temor. Caso Villagrán Morales y otros, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C, no. 63, párr. 171.

[246] *Cfr. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los "Niños de la Calle"), supra* nota 52, párr. 174, Caso Bámaca Velásquez , sentencia del 25 de noviembre de 2000, serie C, no. 70, párr. 161. En los que se afirmó que "... El sufrimiento de los familiares de las víctimas responde además, en este caso, al tratamiento que se les dio a los cadáveres ya que éstos aparecieron .... con muestras de violencia extrema..."

[247] Cfr. Corte I.D.H., Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999, Serie C No. 48, p. 21, .

21. Como la Corte ya estableció que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo relativo a la privación de libertad y muerte del señor Nicholas Blake (*supra* 20.a), se limitará a resolver sobre las reparaciones en el marco establecido en la sentencia sobre el fondo, que se refiere exclusivamente a la violación, por parte de Guatemala, de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 8.1 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Nicholas Blake.

las demandas de la Comisión[248], ni tampoco, con justa razón, las que no figuraban en los informes de fondo emitidos por ésta.[249] Posteriormente, en el caso Blake, la Corte tuvo como víctimas a los familiares de éste *ya que la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares, fue una consecuencia directa de su desaparición forzada.*[250]

Un estándar diverso al cual ha acudido la Honorable Corte para extender el carácter de víctima a otros posibles participantes, ha sido un caso de detención y desaparición forzada en Europa, del cual derivó la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes para la madre de la víctima a partir de la valoración de las circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el hecho de no contar con información oficial para esclarecer los hechos.[251] Como puede apreciarse, las circunstancias del caso deben involucrar la comprensión cabal del mismo, la comprobación de la naturaleza y alcances de la violación, y la disposición mostrada por las autoridades para encontrar la verdad histórica de los hechos.

En el caso Bámaca Velásquez, se hizo mención que para los casos de desaparición forzada había que considerar la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.[252] Es evidente que los casos anteriores tienen un vínculo común: se trata de desapariciones forzadas de persona, en los que los familiares son considerados en su momento como víctimas en virtud de la incertidumbre del paradero de la persona, y de sus múltiples intentos infructuosos por conocer su paradero.

El Gobierno de México se permite llamar la atención de la Honorable Corte sobre los criterios anteriores para hacer evidente que si bien la desaparición forzada y las conductas que se imputan al Estado mexicano en este caso, tienen únicamente en común ser consideradas violaciones a los derechos humanos en el plano interno e internacional, éstas no sólo poseen elementos denotativos diversos que las distinguen con toda precisión, sino que las circunstancias particulares del presente caso no pueden compararse y mucho menos asimilarse a las que dieron origen a los criterios ya señalados, a menos que esto se observe desde el punto de vista del sufrimiento y afectación a las menores Tamara, Brenda y

---

[248] Ver caso Loayza Tamayo, sentencia del 17 de septiembre de 1997, Serie C no. 33, párr. 65; caso Castillo Páez, sentencia del 3 de noviembre de 1997, serie C no. 34, párr. 88. En ambos casos se pretendía señalar que los abogados, al igual que sus representados, eran víctimas.

[249] Ver caso Loayza Tamayo, sentencia del 17 de septiembre de 1997, Serie C no. 33, párr. 65, en el que se señala " La Corte observa que dicha abogada no fue incluida como víctima en el informe que la Comisión remitió al Estado con fundamento en el artículo 50 de la Convención, por lo cual, esta petición no procede"; caso Castillo Páez, sentencia del 3 de noviembre de 1997, serie C, no. 34, párr. 88: ".... Además, debe tomarse en cuenta que el propio señor Zúñiga Paz no fue señalado como víctima por la Comisión. La reparación que pretende la Comisión no fue incluida por ella en las recomendaciones que formuló al Perú en su Informe 19/94 de 26 de septiembre de 1994, que es el antecedente de este asunto, pues en dicho Informe únicamente se señaló como víctima al señor Castillo Páez y sólo se pidieron reparaciones por las violaciones cometidas en su contra".

[250] Caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C, no. 36, párr. 114. En este caso la honorable Corte justificó su criterio en virtud de que la desaparición forzada de una persona en ese caso particular habría generado *sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar* la desaparición de la persona.

[251] Ver caso Villagrán Morales y otros, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C, no. 63, párr. 176.

[252] Ver caso Bámaca Velásquez , sentencia del 25 de noviembre de 2000, serie C, no. 70, párr. 163.

María Fernanda, por el asesinato de sus padres a manos de su propio tío Alfonso Martín del Campo Dodd y de la frustración, temor y angustia que han experimentado al prever, así sea de forma imaginaria, que éste podría algún día ser excarcelado.

Tanto en el Informe de Admisibilidad número 81/01, como en el Informe de Fondo 63/02 emitido por la CIDH en el caso 12.228, ésta tuvo como víctima únicamente a Alfonso Martín del Campo Dodd y a nadie más, por tal motivo, en atención a los propios criterios sostenidos por la honorable Corte en el caso Loayza Tamayo y en el caso Castillo Páez,[253] resulta improcedente la petición de incluir como víctimas a Janeth Martínez Cruz, Bessie Dodd Burke, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Diego Martín del Campo Martínez.[254]

Desde otro punto de vista, en el caso de los padres de la occisa Juana Patricia Martín del Campo Dodd, el Estado no pone en duda la aflicción que la muerte de una hija pueda producir en quienes la engendraron, lo cual es inherente a la naturaleza humana; tampoco se cuestiona la difícil situación emotiva que una persona encarcelada genera en quienes tienen o han tenido con ella un vínculo de amistad, emocional o familiar, especialmente cuando hay elementos irrefutables que confirman su culpabilidad. No obstante lo anterior, la afectación sentimental humanamente comprensible que genera el caso en su conjunto, está a una distancia abismal de constituir una trasgresión a derechos humanos imputable al Estado.

La propia Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, confirman lo anterior. La primera al señalar en su artículo 1. "No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas."

La Convención Interamericana es mucho más clara y enfática a este respecto, al señalar en su artículo 2 que "No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo".

Por lo que hace a Janeth Martínez Cruz y Diego Martín del Campo Martínez, además de resultar aplicable lo ya señalado, es menester informar a la honorable Corte que Alfonso Martín del Campo contrajo matrimonio con dicha persona recientemente, el 3 de mayo de 2002; con la que se señala que procreó un hijo de nombre Diego Martín del Campo Martínez, que habría nacido alrededor de 8 meses después de haberse casado, el 23 de enero de 2003.

El hecho de que una persona decida unir su vida a otra en matrimonio, independientemente de la situación jurídica en que se encuentre una de ellas, es algo completamente ajeno al Estado y también lo es si dicha pareja decide concebir un hijo, lo cual en cambio es muestra del trato y respeto que se ha brindado a Alfonso Martín del Campo mientras se encuentra compurgando su condena.

---

[253] Ver caso Loayza Tamayo, sentencia del 17 de septiembre de 1997, Serie C no. 33, párr. 65; caso Castillo Páez, sentencia del 3 de noviembre de 1997, serie C, no. 34, párr. 88.

[254] Tal como ha señalado la honorable Corte, ésta "... reconoce que las violaciones constatadas deben haber producido perjuicios de diversa índole en el núcleo familiar de la víctima, razón por la cual sus familiares más cercanos podrían tener derecho a recibir una indemnización siempre que ésta guarde relación con las violaciones declaradas en la sentencia sobre el fondo y en la medida en que cumpla los requisitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal." Cfr. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de31 de mayo de 2001, Serie C No. 78, párr. 40.

No deja de llamar la atención el manejo indebido que los peticionarios pretenden darle al reciente matrimonio[255] y nacimiento del hijo de Janeth Martínez Cruz, pues los hacen pasar por víctimas de diversas violaciones a derechos humanos, cuando es evidente que tanto uno como otro evento, derivaron de una decisión conjunta atingente única y exclusivamente a los interesados, y la finalidad última de su determinación sólo ellos la conocen. En todo caso, la situación en que habrían sido colocadas dichas personas no puede ser atribuida en modo alguno al Estado.

Un argumento adicional sobre este punto, es el que se refiere a que la inclusión de personas diversas a la supuesta víctima original puede considerarse como un hecho nuevo, mismo que no fue contemplado en la tramitación, admisión y decisión de la queja ante la CIDH. Esto significa que el Estado se le privó de la oportunidad de interponer en su momento debido sus argumentos y excepciones, dejándose de observar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo referente a la tramitación de peticiones individuales; al aceptar su inclusión en esta etapa del asunto en el ámbito interamericano, se estaría condenando al Estado sobre aspectos respecto de los cuales no fue *oído y vencido* oportunamente, provocando con esto una indebida desigualdad procesal que afecta a la seguridad y certeza del propio sistema interamericano.

Es de hacerse notar la necesidad de que la Comisión y ahora los peticionarios, abandonen la práctica de incluir en la etapa contenciosa ante la Honorable Corte a personas o aspectos que no fueron planteados oportunamente en la etapa de admisibilidad y de fondo de la queja ante la CIDH, puesto que dicho aspecto va más allá de un efecto o consideración jurídica sobre los mismos hechos; la calidad definitiva de *víctima* y su consiguiente legitimación con respecto a la *reparación* surgen de la tramitación y decisión de la propia petición y corre la misma suerte que ésta. Así, no es un mero resultado objetivo de los hechos, sino un hecho posiblemente generador de violaciones a los derechos que para ser calificado como tal debe plantearse y tramitarse de conformidad con las reglas previstas en el sistema interamericano para la solución de peticiones individuales.

Por otra parte, no se puede dejar de observar que el propio Alfonso Martín del Campo, sus padres y su nueva familia han sido posiblemente alentados a albergar en vano esperanzas sobre el desenlace definitivo que tendrían los acontecimientos y, de ser esto cierto, cabría hacer un llamado a la conciencia de quien o quienes de manera poco ética,[256] o tal vez incluso utilitaria, han provocado que la realidad fáctica y jurídica del caso no sea aceptada plenamente por quienes se han visto involucrados en los acontecimientos, provocando con ello la prolongación innecesaria de una situación emocional desafortunada, que hasta ahora sólo tenía como víctimas sobrevivientes y completamente involuntarias a las hijas de Juana Patricia y Gerardo, de nombres Tamara, Brenda y María Fernanda Zamudio Martín del Campo.

De acuerdo con lo planteado en este punto, el Estado solicita que se declare improcedente la pretensión de asignar el carácter de víctimas o sujetos merecedores de reparación, en cualquiera de los rubros planteados por la Comisión o los peticionarios a: Janeth Martínez Cruz, Bessie Dodd Burke, Alfonso Martín del Campo de la Peña y Diego Martín del Campo Martínez.

---

[255] Extrañamente, el régimen patrimonial por el cual contrajeron nupcias es el de separación de bienes y no el de sociedad conyugal. Por otra parte, tanto los padres como los propios contrayentes manifestaron expresamente ser de nacionalidad mexicana.

[256] En un caso como éste el fin no justifica en absoluto los medios.

2. La calidad de presunta víctima de Alfonso Martín del Campo Dodd y los parámetros sobre los cuáles, en su caso, debe emanar la reparación.

El carácter definitivo de *víctima* de Alfonso Martín del Campo Dodd, estará determinado por el sentido y alcance de la decisión final que la honorable Corte emita, de resultar procedente. Sin embargo, hay algunos aspectos que deberán ser tomados en cuenta por ésta al determinar el carácter de la reparación.

La Honorable Corte ha señalado que no le corresponde determinar si una persona es inocente o culpable de una conducta considerada como delictiva, por lo que toda manifestación, pretensión o argumento que verse sobre este aspecto deberá de ser soslayado, tal como las erogaciones hechas para demostrar "la inocencia" de la víctima. Asimismo, el Gobierno considera que una eventual decisión a favor de la víctima, no debe apartarse de esta consideración, ni derivar explícita ni implícitamente en la modificación de la responsabilidad criminal del sentenciado o en su reclusión.

En este punto deberá tenerse presente lo que señalan la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el sentido de que "No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas", y que "No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo".

Esto limita severamente cualquier pretensión con motivo de aquello que esté vinculado o sea inherente a la sanción privativa de libertad a que fue debidamente condenado Alfonso Martín del Campo Dodd, y disminuye considerablemente los alcances de las pretensiones monetarias de reparación de los peticionarios.

Por otra parte, tampoco puede ser tomado como un parámetro de reparación el ingreso que habría dejado de obtener supuestamente el sentenciado y que percibía de la persona a que dio muerte, resulta a todas luces injusto y aberrante, que se pretenda obtener un beneficio económico de alguien contra cuya vida se atentó y se privó de ésta. Tampoco deben ser incluidas en las pretensiones de reparación conceptos, títulos y bienes que no sean efectivamente propiedad del sentenciado o cuyo titular se éste.

Otro aspecto a considerar es que de los documentos del proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo y de sus propias declaraciones vertidas en éste, ha señalado que al tiempo de sucedidos los hechos laboraba como empleado de una de sus víctimas, Gerardo Zamudio Aldaba, y que percibía un salario de 3000'000.00 (tres millones de pesos mensuales, equivalente a 3000.00 nuevos pesos o pesos actuales). A efecto de calcular el monto de una indemnización que tenga como parámetro el ingreso manifestado por el sentenciado, éste deberá acreditar de manera fehaciente dicho ingreso y el concepto por el cual lo recibía; una vez demostrado lo anterior, la cantidad resultante es posible expresarla en términos de salarios mínimos como un parámetro oficial general y simplemente proceder a determinar a cuánto equivalen en la actualidad el número de salarios que se determine.[257]

---

[257] Es de tomarse en cuenta el criterio fijado por la honorable Corte, en el sentido de que "79. En cuanto a la pérdida de ingresos, los representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión coincidieron en que el Tribunal debía tomar en cuenta para su cálculo el salario mínimo para actividades no agrícolas vigente en Guatemala. El Estado, por su parte, se opuso a la utilización de dicha base alegando que las víctimas no tenían una relación laboral permanente y continua. Esta Corte considera que, a falta de información precisa sobre los ingresos reales de las víctimas, tal como lo ha hecho en otras oportunidades, debe tomar como base el salario mínimo para actividades no agrícolas en Guatemala." Cfr. Caso de los

Otro aspecto muy importante es que la indemnización que se fije deberá limitarse al periodo que llegaré a abarcar la competencia de la honorable Corte para conocer y decidir el presente caso, ya que de otro modo, si va más allá de éste parámetro, se estaría condenando al Estado por aspectos sobre los cuales no se surte dicha competencia y se estaría aplicando indebidamente en forma retroactiva el criterio de la honorable Corte.

En el mismo sentido, debe tomarse en cuenta la actividad procesal desplegada por los peticionarios, quienes tardaron cerca de cuatro años en interponer el Amparo Directo contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y alrededor de seis años para interponer el incidente de reconocimiento de inocencia del inculpado, no obstante que tenía derecho a interponer cualquiera de éstos o ambos inmediatamente después de haber sido dictada la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto en 1993. De igual manera, tratándose del amparo indirecto interpuesto contra la decisión que declaró infundado el reconocimiento de inocencia del inculpado, los peticionarios acudieron a interponerlo cerca de dos años después de emitida la resolución correspondiente. El tiempo transcurrido desde entonces no es atribuible más que a la propia negligencia y estrategia de defensa del sentenciado, ya que el proceso penal y los medios de impugnación que interpuso fueron tramitados y decididos de manera pronta y expedita dentro de los márgenes de plazo razonable.

El Gobierno manifiesta su oposición a que se incluyan conceptos que no tienen que ver directamente y exclusivamente con el presente caso, ya que no se está decidiendo la situación general de los derechos humanos en México, ni la compatibilidad general de la legislación interna con los parámetros internacionales, sino la responsabilidad internacional con respecto a un caso particular. Es importante considerar el marco normativo en vigor con respecto a los derechos de la persona ante las instancias de procuración e impartición de justicia nacionales, que antes como ahora es y ha sido compatible con los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos, tratándose de procuración e impartición de justicia.

No es posible plantear la supuesta disparidad entre lo que establece la Convención Americana y lo que señalan otro tipo de materiales normativos vigentes en el país, en primer lugar, esto significa que se desconoce completamente el procedimiento de incorporación del derecho internacional en el ámbito interno, en segundo, que se ignoran los precedentes judiciales a partir de los cuales los tratados internacionales están situados normativamente sólo por debajo de la Constitución Federal y se encuentran en una relación jerárquica de superioridad con relación al resto de las leyes y reglamentos federales y locales.

En efecto, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, una vez que los tratados internacionales son ratificados por el Gobierno Mexicano, pasan a formar parte del orden jurídico interno en su calidad de normas jurídicas exigibles y aplicables. Por lo tanto, se ha dotado a los tratados internacionales de derechos humanos en un nivel jerárquico superior y su aplicabilidad puede ser exigida por los beneficiarios de éstos frente a las autoridades.

Tal como expresó el Gobierno en el punto II de la presente contestación, el ordenamiento jurídico mexicano "cuenta son abundantes disposiciones sobre el tema, integradas por normas constitucionales, tratados internacionales ratificados, leyes específicas, disposiciones reglamentarias y criterios jurisprudenciales, que configuran un marco normativo eficaz de prevención, investigación y sanción de

---

"Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001, Serie C No. 77, párr. 79.

la tortura y de respeto a los derechos humanos en general[258]. Inclusive, el Gobierno mexicano es uno de los pocos países que ha otorgado por vía judicial a los tratados internacionales de derechos humanos una jerarquía normativa tal, que los sitúa no sólo como normas vigentes, exigibles y aplicables, sino a un escaño de las disposiciones de rango constitucional y prevalecientes sobre el resto de las normas jurídicas del ordenamiento".[259]

A mayor abundamiento, cabe señalar que la descripción de lo que constituye tortura en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, coincide plenamente con lo establecido por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Naciones Unidas, ratificada por el Gobierno de México el 23 de enero de 1986 y es compatible con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El Estado se permite solicitar a la Honorable Corte tener presentes estos elementos, en caso de resultar procedente una determinación sobre el tema de reparación, y permitir en su momento ampliar o presentar nuevas consideraciones sobre dicho aspecto, a partir de los aspectos que logren comprobar de manera fehaciente e indubitable quienes tengan derecho a dicha reparación.

VII. Objeciones del Gobierno de México sobre las pruebas ofrecidas por la Comisión y por los peticionarios.

En el presente apartado, el Estado adelantará a la honorable Corte su postura sobre las pruebas ofrecidas por la Comisión y por los peticionarios, en el entendido que solicita desde este momento que, de llegarse a la etapa de desahogo y valoración de las mismas se le dé la oportunidad de ampliar sus consideraciones o verter otras que surjan durante el desarrollo de la Audiencia que con tal motivo se lleve a cabo.

Al Estado no le son ajenos los criterios establecidos por la honorable Corte en materia de pruebas, especialmente sobre aceptación y valoración flexible y ajustada a la *ratio* del sistema de protección de los derechos humanos.

Sin embargo, son de destacarse algunos criterios específicos que permiten que los elementos de convicción y demostración que se presenten, no se aparten del caso concreto que está siendo analizado, sobre el cual debe versar la prueba que se ofrezca.

En primer término, la honorable Corte ha señalado que *quien demanda tiene la carga de la prueba*[260]. En materia de prueba rige el principio de contradictorio, en el cual se respeta el derecho de defensa de

---

[258] Remitir a anexo sobre reformas.

[259] En la actualidad, el criterio más reciente señala que los tratados en el orden jurídico mexicano están situados jerárquicamente sobre la legislación federal, de acuerdo con el criterio más reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmado en la Tesis 192,867 bajo el rubro "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Esto significa, por una parte, que en caso de contradicción con la legislación federal, prevalecen lo dispuesto por los tratados en aplicación del criterio jerárquico en de la solución de conflictos normativos y, por la otra, que ante la existencia de vacíos normativos en la legislación federal, las normas contenidas en los tratados sirven como pautas o principios útiles para interpretación e integración del ordenamiento.

[260] Ver Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, serie C no.4, párr. 123

las partes, siendo este principio uno de los fundamentos del artículo 43 del Reglamento, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba con el fin de que haya igualdad entre las partes.[261]

Por lo que se refiere a los testimonios que ofrece la Comisión y los peticionarios, el Gobierno manifiesta los siguiente.

Si bien la honorable Corte está facultada para solicitar la comparecencia de las personas que considere pertinentes, también lo es que debe tomar en cuenta en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, éste se encuentra en calidad de un reo del orden común, sentenciado por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de su propia hermana y cuñado; por esto, el Gobierno manifiesta su más absoluto rechazo a que se atienda la solicitud de que la honorable Corte llame como testigo al sentenciado, cuya credibilidad y confiabilidad se han puesto en entredicho, de conformidad con los elementos presentados por el Estado; y que si en todo caso decidiera hacerlo, se opte por la modalidad de que se entrevistado en su lugar de reclusión. El Gobierno se manifiesta que en este caso ejercerá su derecho de examinar y repreguntar al testigo, así como a hacer las manifestaciones que considere oportunas.

Por lo que se refiere a Alfonso Martín del Campo de la Peña, Bessie Dodd Burke y Silvia Janeth Martínez Cruz, el Estado ya expresó sus argumentos y objeciones sobre el carácter de víctimas, que indebidamente se atribuye a éstos, y siendo que su supuesto testimonio es ofrecido para explicar los actos de los que precisamente señalan ser víctimas, su declaración debe ser desestimada por improcedente y fuera de lugar.

Respecto de los peritos anunciados por la Comisión y los peticionarios.

El Gobierno de México se permite recordar a la honorable Corte que lo que se pretende dilucidar es, en un primer momento, son los alcances materiales y temporales de la competencia misma de ésta. Luego de fijado con precisión tal aspecto, corresponde ofrecer los elementos de convicción para apoyar las pretensiones de la Comisión y de los peticionarios vinculadas, por supuesto, directamente a los hechos del caso 12.228.

El Estado considera que esto debe quedar muy claro. Desde la tramitación del asunto frente a la Comisión se ha ido fijando y depurando una litis específica en el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd.

Por lo tanto, en virtud de ser éste el caso que se va posiblemente a tramitar ante la honorable Corte, y no la situación general de los derechos humanos en México o la función de procuración e impartición de justicia en el país, el Estado se opone a la consideración como prueba, de elementos ajenos al caso particular, y que sólo pretenden influir en el ánimo de los jueces, mostrando una versión pesimista y poco representativa de la realidad mexicana.

Por lo que hace a los peritos propuestos por la Comisión y los peticionarios, la primer objeción que interpone el Estado, se refiere a que la intervención de éstos no está relacionada directamente con alguno de los puntos de litis, cabe señalar que la función de los peritos es la ofrecer opiniones técnicas sobre puntos específicos para ilustrar a la honorable Corte, por lo que proponerlos para intervenir *sobre toda otra circunstancia relevante para el caso*, desvirtúa el objeto y fin de la prueba pericial que debe no sólo estar relacionada sino ser específica. De este modo pareciera ser que los peritos son en realidad parte de los propios peticionarios, lo cual es inadmisible.

---

[261] Ver Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá) , sentencia del 2 de febrero de 2001, serie C no. 72, párr. 68..

Por cuanto a Pilar Noriega y Fernando Coronado, éstos en principio participarían sobre los mismos puntos esencialmente, por lo que procede requerir a los peticionarios a efecto de que sólo uno de ellos intervenga. Lo mismo sucede con los peritos Miguel Sarre, Santiago Corcuera y Nigel Rodley, quienes también intervienen con relación a puntos casi idénticos.

Pilar Noriega y Fernando Coronado son ofrecidos también por los peticionarios, pero con relación a un punto adicional respecto del cual el Gobierno se permite señalar que la Recomendación a que hacen referencia los peticionarios como objeto del testimonio en su documento, no es vinculante en modo alguno y no fue aceptada por sus destinatarios debido a inconsistencias jurídicas y de hecho que la desvirtúan por completo; cabe señalar que el marco normativo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tiene reglas precisas sobre la manera de proceder acerca de Recomendaciones aceptadas y no aceptadas, y utilizar un foro internacional para discurrir sobre una Recomendación carente de sustento jurídico, que además no fue aceptada en el ámbito interno, es incompatible con el marco normativo de actuación de dicha institución.

Respecto de Juventino Montiel Sosa, cabe señalar que fungió durante el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo como perito ofrecido por la defensa, lo cual es suficiente en este caso para considerarlo como falto de objetividad e independencia; es importante señalar que el peritaje que en su momento rindió en la causa penal estaba en contradicción con el ofrecido por el Ministerio Público, por lo que el Juez 55° Penal designó un perito tercero en discordia, quien emitió el dictamen definitivo. La prueba pericial en el proceso penal no vincula al Juez, pues ésta sólo sirve para ilustrar su criterio sobre puntos técnicos o científicos; se puede afirmar en este sentido que el peritaje u opinión vertida en el proceso penal por Juventino Montiel Sosa fue valorada judicialmente, por lo que el proceso ante la Corte Interamericana no debe ser tomado como una segunda oportunidad para plantear algo ya estudiado, valorado y decidido por el Juez natural.

Con relación a la prueba pericial por parte de la psicóloga Felicitas True, el Gobierno no considera oportuno ni procedente su testimonio, en virtud de que puede apreciarse a simple vista que se tratará de una reproducción del supuestamente elaborado por miembros de ACAT, quienes carecen de toda objetividad puesto que no obstante actuar como peticionarios en el presente caso, han pretendido demostrar la existencia de tortura a partir de un supuesto dictamen psicológico.

Por lo que se refiere específicamente a Santiago Corcuera, en lo relativo a su intervención pericial sobre modificaciones legislativas que son necesarias en México, el Gobierno se permite señalar que el caso específico que se estará ventilando ante la Corte es el 12.228, relativo al sentenciado Alfonso Martín del Campo Dodd, por lo que sería deseable que las intervenciones se circunscribieran a los hechos del caso.

Con relación a la intervención de Sir Nigel Rodley, el Estado se permite insistir en que, de darse ésta, se limite y circunscriba a los hechos del caso 12.228, ya que no se está discutiendo la situación general de los derechos humanos en México, ni se trata de un mecanismo de supervisión de la atención que ha brindado éste a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en mecanismos distintos al sistema interamericano.

Además de los planteamientos aquí expresados, el Gobierno se permite solicitar a la honorable Corte que en el momento procesal oportuno le brinde la oportunidad de demostrar la falta de idoneidad, objetividad y competencia pericial de que adolecen las personas ofrecidas como peritos por parte de la Comisión y de los Peticionarios.

Con respecto al apartado probatorio del documento de la Comisión, el Gobierno objeta el "Dictamen Médico Psicológico realizado a Alfonso Martín del Campo por los peritos médicos psiquiatras Fernando Alejandro Valadez Pérez y Javier Enríquez Sam" atento a los siguiente argumentos contundentes:

> El documento fue elaborado por personas vinculadas a ACAT, una de las organizaciones que han apoyado la tramitación de este caso en calidad de peticionarios, lo cual, de inicio, crea una fuerte carga hacia su carácter prejuiciado y de ayuda a su representado: Alfonso Martín del Campo Dodd. Lo mismo aplica para los estudios o exámenes practicados a los padres y esposa del sentenciado.

Los autores del documento afirman hechos que no les constan, lo cual es una expresión de lo ya señalado, la falta de objetividad en quienes lo practicaron.

Los *hallazgos* que documentan no coinciden con exámenes practicados al sentenciado con mayor cercanía temporal a lo ocurrido, lo que significa que los supuestos síntomas son en realidad una *creación ex post facto* o de surgimiento espontáneo y deliberado.

Suponiendo sin conceder que en efecto hubieren detectado en Alfonso Martín del Campo alguno de los síntomas que señalan, cabe cuestionar cómo arriban a la conclusión meridiana que se trata de secuelas mnemotécnicas provenientes de una supuesta *tortura* y no de las consecuencias de ver frustradas sus intenciones de salir impune, no obstante el delito que cometió.

En el mismo sentido, los síntomas son sólo supuestas manifestaciones actuales que no necesariamente corresponden a las causas señaladas por los autores del dictamen; ellos mismos tendrán que separar y distinguir, con la misma exactitud con que han identificado el estrés manifestado por una supuesta *tortura;* del estrés derivado de la *culpa* experimentada por estar compurgando una sentencia de 50 años de prisión por darle muerte a su propia hermana y cuñado y existir un testigo presencial de ello; del estrés derivado de la *pesadilla* que vivió el sentenciado cuando dos sujetos con medias negras en la cabeza lo golpearon, le rompieron varias figuras de yeso en la cabeza, lo amordazaron, lo encerraron en una cajuela, lo llevaron a las afueras de la ciudad donde lo dejaron abandonado en un vehículo que ese accidentó, etc, etc; del estrés generado por haber dejado en la orfandad y con un futuro incierto a tres pequeñas niñas; del estrés que produciría tener que sostener una y otra vez una versión difícilmente creíble y poco verosímil ante sus seres queridos, ante propios y extraños, hasta involucrarlos involuntariamente en este caso.

El Protocolo de Estambul, es un esfuerzo por establecer una documento modelo o estándar para la documentación de casos de tortura, pero no deja de ser una mera propuesta particular entre varias posibles, que no cuenta con el apoyo y respaldo unánime de la comunidad científica a la que correspondería, de ser aceptado, su uso y aplicación. No obstante, no hay certeza definitiva de que dicho Protocolo haya sido aplicado de manera correcta en el presente caso.

Las razones anteriores permiten al Estado manifestar su rechazo a que se tome en cuenta en el presente caso como un elemento de prueba, un dictamen particular que adolece de las debilidades, carencias y errores señalados, mismos que se demostrarán y se harán valer de llegarse a la etapa procesal correspondiente.

Adicionalmente, el Gobierno de México solicita a la honorable Corte, que no sean admitidos como elemento de prueba en el presente asunto, los documentos marcados con los números 1, 2, 3, 4, del documento de los peticionarios páginas 94 y siguientes, puesto que no están vinculados directamente con la supuesta existencia de la violación a los derechos de Alfonso Martín del Campo.

Las opiniones vertidas en tales documentos o libros, no reflejan fielmente la realidad mexicana, ni son prueba alguna de que, tal como afirman los peticionarios, Alfonso Martín del Campo fuera privado de su libertad y detenido arbitrariamente o torturado. De esta manera, tales obras no ilustran, ni tampoco proporcionan bases ciertas, ni verídicas dignas de ser tomadas en cuenta para apoyar una determinada decisión o siquiera ilustrar un criterio.

Tampoco resultan relevantes ni aplicables en modo alguno al presente caso concreto, los resultados de Informes derivados de visitas in loco a México, puesto que, como ya se señaló en otra parte de la presente contestación,

Por lo que se refiere a las prueba documental marcada con el número 14, el Gobierno mexicano se permite señalar a la honorable Corte su desacuerdo con los planteamientos generales sobre el tema de la incidencia de la tortura en México, y su indebida aplicación en el presente caso, puesto que se trata de afirmaciones genéricas derivadas la mayor parte de ellas de organismos internacionales, en ejercicio de una facultad distinta a la tramitación de peticiones individuales.

Con relación al ofrecimiento de las pruebas documentales marcadas con los números 4 a 13, y 18 y 19 del documento de los peticionarios, en el apartado relativo a pruebas, el Gobierno solicita que las mismas sean consideradas cada una en sus propios méritos y contrastadas con el resto de las pruebas documentales oficiales ofrecidas por el Gobierno en esta contestación, esto es, se pide que no se deje fuera de contexto el contenido de los documentos señalados.

Por lo que se refiere a los documentos ofrecidos en los números 15 a 17 y 20 a 24 y 26, los cuales estarían relacionado con el tema de la supuesta reparación, el Gobierno se permite remitir a las consideraciones que sobre dicho punto ha señalado en la parte correspondiente de dicha contestación; sin dejar de observar que los aspectos que se pretenden acreditar con dichos documentos serán objeto de revisión y comprobación estrictos, de llegar el presente caso a la etapa señala.

VIII. Conclusión.

El Estado ha demostrado que no se surte la competencia de la Honorable Corte para conocer del presente asunto, en virtud de que los hechos sucedieron y se agotaron fuera del ámbito temporal de su jurisdicción, de conformidad con la aceptación con carácter irretroactivo de su competencia por parte del Gobierno mexicano el 16 de diciembre de 1998.

Asimismo, tampoco le es posible a la Honorable Corte pronunciarse sobre el fondo del presente asunto, atendiendo a que el procedimiento de tramitación de peticiones individuales previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no fue observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afectando el equilibrio procesal de las partes y dejando al Estado en situación de indefensión.

El Estado demostró que los peticionarios no agotaron numerosos recursos de jurisdicción interna idóneos y efectivos, que tuvieron plenamente a su alcance, con lo que impidieron a las autoridades nacionales decidir oportunamente acerca de sus planteamientos y pretensiones relacionados con el caso 12.228.

Por lo que se refiere a los méritos de fondo del asunto, el Gobierno mexicano ofreció un panorama completo de los hechos sucedidos antes y después de aceptada la competencia contenciosa de la Honorable Corte, que permiten afirmar de manera contundente la inexistencia de violaciones a los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como la plena compatibilidad de la actuación de las autoridades mexicanas, con respecto a los estándares vigentes en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Las presuntas violaciones a los derechos humanos imputadas al Gobierno de México no son de tipo continuado, ni resulta procedente darles ese carácter atendiendo a la naturaleza y alcances de las diversas etapas judiciales por las que ha pasado la tramitación del caso 12.228 ante los órganos de jurisdicción interna y a la conducta procesal omisa y deficiente de los propios peticionarios.

El Gobierno concluye que Alfonso Martín del Campo Dodd el día 30 de mayo de 1992, cometió el delito de homicidio calificado al haber dado muerte a su propia hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, motivo por el cual fue detenido, procesado, encontrado penalmente responsable y sentenciado por órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, con pleno respeto a su libertad e integridad personales, a la presunción de inocencia y a su derecho de defensa, observándose las reglas del debido proceso legal, que culminó con la imposición de una sentencia justa y adecuada a la gravedad de los delitos cometidos, de conformidad con el derecho vigente al momento de sucedidos los hechos.

IX. Puntos petitorios.

Atendiendo a la evidencia y a los argumentos ofrecidos por el Gobierno de México se solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sirva:

Primero.- Calificar de procedentes y fundadas las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de México y, en consecuencia, declarar su incompetencia para conocer y decidir sobre los hechos del caso 12.228.

Segundo.- En caso de declararse eventualmente la aceptación parcial o la improcedencia de las excepciones hechas valer por parte del Gobierno mexicano, se solicita que la Honorable Corte concluya y declare la inexistencia de violaciones a los derechos humanos previstos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Tercero.- En el evento remoto que se llegare a determinar la responsabilidad del Estado por alguna de las violaciones a los tratados de derechos humanos aplicables y fuese declarada procedente algún tipo de reparación, se solicita a la Honorable Corte que fije ésta atendiendo a los límites y consideraciones hechas valer por el Gobierno de México en el presente documento y en la etapa procesal correspondiente.

X. Relación de anexos pruebas ofrecidas por el Gobierno Mexicano.

1. Ampliación de Declaración de Gerardo García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992
2. Ampliación de Declaración de Raúl García, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 9 de septiembre de 1992.
3. Auto de Formal Prisión dictado por el Juez 55° Penal en el Distrito Federal, de 4 de junio de 1992.
4. Declaración de Alfonso Martín del Campo de la Peña, vertida en la Averiguación Previa 10/2160/92-05.
5. Razón de llamada telefónica encontrada en Averiguación previa 10/2160/92-05.
6. Averiguación Previa Directa 10/2160/92-05.
7. Certificado de estado físico de Alfonso Martín del Campo Dodd, expedido en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 29 de mayo de 1992 (sic), suscrito por el doctor Jesús López Sánchez.
8. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente al momento de sucedidos los hechos.
9. Comparecencia del oficial Víctor Ramón Cetina Vargas a declarar en la causa penal 57/92, el 24 de agosto de 1992.
10. Declaración de Carlos Alberto García Urquiza, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992;
11. Declaración de el Defensor de Oficio Rolando Torres Martínez, de fecha 10 de julio de 1995, en la Averiguación Previa por delitos diversos, incluyendo tortura SC/3839/95-03.
12. Declaración de Víctor Ramón Cetina Vargas, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992;
13. Declaración ministerial de Gerardo García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.
14. Declaración ministerial de Inés Guzmán Sánchez, de fecha 30 de mayo de 1992.
15. Declaración ministerial de la Mtra. en Psicología Leticia Graciela Rivera García, de 13 de marzo de 2003.
16. Declaración Ministerial de María Fernanda Zamudio Martín del Campo, de 13 de marzo de 2003.
17. Declaración ministerial de Nora María Violeta Garibay Martínez, de fecha 30 de mayo de 1992.
18. Declaración ministerial de Raúl García Chavarría, de 30 de mayo de 1992.
19. Declaración ministerial del policía preventivo Miguel Angel Gutiérrez Lara, rendida a las 8:00 del 30 de mayo de 1992.
20. Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo, de fecha 1° de junio de 1992.
21. Dictamen de necropsia elaborado el 31 de mayo de 1992.
22. Dictamen de necropsia elaborado el 31 de mayo de 1992.

23. Dictamen Médico- Coprológico, del doctor Jesús López Sánchez, Médico Legista adscrito a la Décima Agencia Investigadora en Benito Juárez.

24. Dictamen psicológico, suscrito por el Dr. Guillermo León González, perito psiquiatra adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

25. Documento de diversas organizaciones no gubernamentales de 29 de octubre de 1999.

26. Informe del Juez 55° Penal rendido ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 1° de abril de 1993.

27. Informe rendido por el agente de la Policía Judicial del Distrito Federal, Sotero Galván Gutiérrez.

28. Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de diciembre de 1987.

29. Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

30. Parte Informativo 082/92 de 30 de mayo de 1992, suscrito por Arturo González Cabrera, Víctor Ramón Cetina Vargas y Carlos García Urquiza.

31. Pliego de Consignación de la Averiguación Previa 10/2160/92-05.

32. Puesta a disposición del probable responsable ante el agente del Ministerio Público de la Décima Agencia Investigadora, foja 7 de la averiguación previa10/2160/92-05.

33. Queja presentada ante la CIDH de 13 de julio de 1998.

34. Testimonial a cargo de Sergio Sierra Fuentes, vertida en la causa penal 57/92, de fecha 20 de agosto de 1992.

35. Testimonio rendido por Claudia Rosales Pamanes, en la causa penal 57/92.

36. Testimonio vertido por Carlos Alberto García Urquiza durante el proceso 57/92, de fecha 24 de agosto de 1992.

37. Averiguación previa 10ª/2160/992-05, iniciada el 30 de mayo de 1992 ante la Décima Agencia Investigadora del Ministerio Público.

38. Diligencia de reconstrucción de hechos del 30 de mayo de 1992.

39. Acuerdo del Ministerio Público que corrobora la detención administrativa de Alfonso Martín del Campo Dodd, de 1° de junio de 1992.

40. Examen médico practicado a Alfonso Martín del Campo Dodd, el 1° de junio de 1992 en el Reclusorio Preventivo Oriente, realizado por el Médico Cirujano Dr. Héctor Arturo Guzmán Aguirre,

41. Consignación del detenido Alfonso Martín del Campo Dodd de fecha 1° de junio de 1992.

42. Declaración preparatoria de Alfonso Martín del Campo Dodd ante el Juez 55 Penal, de fecha 1° de junio de 1992.

43. Auto de Formal prisión dictado por el Juez 55 Penal de 4 de junio de 1992.

44. Audiencias de desahogo de pruebas de fechas 14 de julio, 20 de agosto, 24 de agosto, 9 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 14 de diciembre de 1992, en la causa penal 57/92.

45. Diligencia de careo entre Sotero Galván Gutiérrez y Alfonso Martín del Campo Dodd, de fecha 9 de septiembre de 1992.

46. Queja interpuesta el 6 de enero de 1993 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

47. Pliegos de conclusiones presentados por el Ministerio Público y por el defensor particular de Alfonso Martín del Campo Dodd, de 15 y 16 de abril de 1993.

48. Sentencia de fondo de primera instancia en la causa penal 57/92, instruida contra Alfonso Martín del Campo Dodd, de fecha 28 de mayo de 1993.

49. Escrito de agravios en la Apelación, de fecha 13 de julio de 1993.

50. Escrito de agravios en la Apelación, de fecha 15 de julio de 1993, del Lic. Elías Cruz Delgadillo.

51. Resolución definitiva y de fondo emitida por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha el 17 de agosto de 1993 en el proceso penal seguido contra Alfonso Martín del Campo Dodd.

52. Nombramiento de defensor privado a favor de el Licenciado en Derecho, Raúl Gil Letechipia, de 19 de agosto de 1993.

53. Resolución de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de fecha 14 de octubre de 1994.

54. Averiguación Previa SC3839/95-03 iniciada el 23 de marzo de 1995 en la Dirección General de Investigación de Delitos contra la Seguridad de las Personas, las Instituciones y la Administración de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

55. Escrito de los peticionarios de 29 de marzo de 1995, dirigido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la que denuncian diversos delitos contra servidores públicos que intervinieron en el caso contra Alfonso Martín del Campo Dodd.

56. Resolución de confirmación definitiva del no ejercicio de la acción penal de fecha 6 de junio de 2000, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

57. Sentencia de Amparo del Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F, de fecha 14 de febrero de 2002.

58. Amparo Directo interpuesto el 18 de junio de 1997 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 17 de agosto de 1993.

59. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito de fecha 2 de diciembre de 1997.

60. Recurso de revisión interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 14 de enero de 1998.

61. Resolución recaída al Recurso de revisión interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 9 de febrero de 1998.

62. Queja interpuesta ante la CIDH de fecha 13 de julio de 1998.

63. Escrito de fecha 25 de marzo de 1994, de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

64. Escrito de fecha 19 de septiembre de 1997, de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

65. Escrito de fecha 7 de enero de 1998, de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

66. Escrito de fecha 26 de julio de 2002, de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

67. Escrito de fecha 15 de agosto de 2002, de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

68. Informe de la queja presentada el 3 de noviembre de 1998 ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

69. Informe del recurso de impugnación CNDH/121/99/DF/I00051.000. concluido el 31 de agosto de 1999.

70. Averiguación Previa 10/6269/98-12 iniciada a partir de la denuncia de la Sra. Bessie Dodd Burke, de fecha 14 de diciembre de 1998.

71. Escrito de interposición del incidente de reconocimiento de inocencia interpuesto por los peticionarios el 6 de abril de 1999 ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

72. Resolución de los Magistrados de la Décima Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha 29 de abril de 1999.

73. Documento de los peticionarios de fecha 13 de abril de 1999, dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

74. Escrito de fecha 10 de mayo de 1999, de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigido a los peticionarios.

75. Documento de los peticionarios de fecha 8 de octubre de 1999 presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

76. Documento de queja trasmitido por la CIDH al Gobierno de México, de fecha 4 de noviembre de 1999.

77. Demanda de amparo interpuesta por los peticionarios de fecha 30 de junio de 2000, contra la decisión y confirmación del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público en la Averiguación Previa SC/3839/95-03.

78. Sentencia de amparo de fecha 14 de febrero de 2002, dictada por Juez de Distrito.

79. Disco compacto que contiene grabación de Audiencia de Admisibilidad celebrada ante la CIDH el 11 de octubre de 2000, para el caso 12.228.

80. Amparo interpuesto el 19 de marzo de 2001, contra la resolución del reconocimiento de inocencia dictada por los Magistrados de la Décima Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 29 de abril de 1999.

81. Resolución emitida por el Sexto Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal, de fecha el 16 de abril de 2001.

82. Recurso de revisión interpuesto el 3 de mayo de 2001 contra la resolución del Sexto Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal.

83. Resolución del 5° Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en el Distrito Federal, de 3 de septiembre de 2001.

84. Informe de Admisibilidad número 81/01 de fecha 10 de octubre de 2001, emitido por la CIDH en el caso 12.228.

85. Disco compacto que contiene grabación de Audiencia celebrada ante la CIDH el 18 de octubre de 2002 en el caso 12.228.

86. Informe de fondo 63/02 emitido por la CIDH en el caso 12.228.

87. Acuerdo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 26 de diciembre de 2002, mediante el cual se decide la reapertura de la Averiguación Previa SC/3839/95-03.

La enumeración señalada, no es exhaustiva ni limitativa de otro tipo de elementos de convicción que el Gobierno de México pudiera presentar en etapas específicas de tramitación del caso, derivados de los elementos que los propios peticionarios presenten o del desahogo de las pruebas que han ofrecido.

Los anexos diferentes a los ya señalados que se acompañan a la presente contestación para ilustrar puntos específicos de la posición del Gobierno de México, también se ofrecen como prueba en el presente caso. Entre los que se encuentran:

a) Estudio sobre el reconocimiento de inocencia del inculpado.

b) Análisis de la sanción administrativa impuesta por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al C. Sotero Galván Gutiérrez en virtud del procedimiento administrativo seguido en su contra, según consta en el expediente QC/011/FEB-94.

c) Análisis gráfico de las diversas versiones de los hechos que ha dado Alfonso Martín del Campo Dodd.

d) Panorama de las reformas constitucionales y legales de 1993-1994.

e) Estudio sobre el principio de inmediatez procesal en la jurisprudencia mexicana.